STEVEN LEVITSKY & DANIEL ZIBLATT

LA DICTADURA DE LA MINORÍA

CÓMO REVERTIR LA DERIVA AUTORITARIA
Y FORJAR UNA DEMOCRACIA PARA TODOS

Ariel

Índice

Sinopsis

Estamos atravesando una época convulsa en la que la gobernanza neoliberal, el ascenso generalizado de la extrema derecha, la política de bloques, y otras formas de autocracia se están imponiendo en diferentes latitudes del planeta. Steven Levitsky y Daniel Ziblatt ofrecen aquí un marco teórico coherente y aportan ejemplos de todo el mundo para comprender el giro autoritario generalizado y explicar cómo los partidos políticos se vuelven contra la democracia. A partir del caso estadounidense y mostrando la evolución de otros países en la consecución de mejoras y reformas para la sociedad y las libertades civiles, los aclamados profesores de Harvard proponen una serie de reformas con las que salir de una espiral de crisis y constituir lo que ellos llaman la única democracia factible. Un libro necesario, legible y convincente.

La dictadura de la minoría

Cómo revertir la deriva autoritaria y forjar una democracia para todos

Steven Levitsky y Daniel Ziblatt

Traducción de Guillem Gómez Sesé

Ariel

Dedicado a la memoria de
Jill Kneerim y David Ziblatt

De alguna manera, hemos resistido,
testigos de una nación que no está rota,
sí incompleta...

AMANDA GORMAN,
La colina que ascendemos
(trad. de Nuria Barrios,
Barcelona, Lumen, 2021)

Introducción

El 5 de enero de 2021 ocurrió un acontecimiento extraordinario en Georgia: en un estado donde la política cargó con el lastre del supremacismo blanco durante mucho tiempo, los electores acudieron a las urnas batiendo cifras récord. Ese día eligieron a su primer senador afroamericano, el reverendo Raphael Warnock, así como al primer senador estadounidense de origen judío. Desde el fin de la Reconstrucción, y antes de Warnock, solo hubo un representante negro en los estados sureños,[1]junto con el republicano Tim Scott de Carolina del Sur. Aquella noche presentó ante sus simpatizantes a su madre, que había sido aparcera, y destacó que aquella mujer, «cuyas manos de ochenta y dos años antaño recogieron algodón, crio a su hijo menor, que se convertiría en senador de Estados Unidos».[2]Para mucha gente, aquellas elecciones presagiaban un futuro más democrático y luminoso. «Este es el nacimiento de un nuevo Sur —declaró LaTosha Brown, cofundadora de Black Voters Matter (Los Votantes Negros Importan)—, más joven, más diverso, más inclusivo.»[3]Aquel era el futuro democrático por el que habían luchado varias generaciones de activistas por los derechos humanos a lo largo del tiempo.

El día siguiente, el 6 de enero, los estadounidenses fueron testigos de algo que parecía impensable: una insurrección violenta incitada por el presidente de su propio país. Cuatro años de retroceso para la democracia culminaban en un intento de golpe de Estado. El miedo, la confusión y la indignación que sintieron tantos ciudadanos al ver cómo se sucedían los acontecimientos eran un espejo de los sentimientos vividos en otros países cuyas democracias se habían desbaratado. Lo que habíamos padecido —un incremento en la violencia de signo político; amenazas contra los funcionarios electorales; tentativas de dificultar que se votara;

una campaña por parte de la presidencia que pretendía anular los resultados de las elecciones— encarnaba la erosión democrática. La República no se desmoronó entre 2016 y 2021, pero era innegable que se había vuelto menos democrática.

En el transcurso de veinticuatro horas, entre el 5 y el 6 de enero de 2021, el mundo entero fue testigo de las promesas de la democracia estadounidense en todo su esplendor, pero también de los peligros que la acechaban: el atisbo, primero, de un posible futuro democrático y multirracial, seguido de un asalto casi inconcebible al sistema constitucional.

Es difícil construir una democracia multiétnica. Apenas unas pocas sociedades[4]lo han logrado. La democracia multirracial[5]es un sistema político con elecciones regulares, libres y justas en el que los ciudadanos adultos de todos los grupos étnicos tienen derecho al voto y libertades civiles esenciales como son la libertad de expresión, de prensa, reunión y asociación. No basta con que estas garantías existan sobre el papel: por ley, personas de toda procedencia étnica deben gozar de protección equitativa para garantizar sus derechos democráticos y civiles. La *Civil Rights Act* (Ley de Derechos Civiles) de 1964 y la *Voting Rights Act* (Ley de Derecho al Voto) de 1965 sentaron finalmente las bases legales para una democracia multirracial en Estados Unidos. Sin embargo, ni siquiera hoy hemos conseguido convertirla en realidad.

Por ejemplo, el acceso a las urnas[6]sigue siendo desigual. Según un estudio llevado a cabo en 2018 por el Public Religion Research Institute (Instituto Público de Investigación sobre la Religión) (PRRI, por sus siglas en inglés), resultaba tres veces más probable para los ciudadanos afroamericanos y latinos que para los blancos que se les dijera que no disponían de la documentación correcta para votar.[7] También tienen dos veces más posibilidades de que, por error, sus nombres no consten en el padrón. Las leyes que prohíben el voto a los convictos afectan a los afroamericanos de manera desproporcionada, y los ciudadanos no blancos siguen sin estar sujetos a la misma protección jurídica. Es dos veces más probable que en algún momento la policía mate a un hombre negro que a uno blanco[8](aunque, a su vez, las víctimas mortales negras

de la policía son la mitad de propensas a ir armadas); los negros tienen más números de ser parados y cacheados por la policía que los blancos; asimismo es más probable que los arresten y los condenen —con sentencias más largas— por delitos similares.[9]Si persiste alguna duda sobre si los ciudadanos negros no gozan de los mismos derechos legales que los blancos, el caso de Kyle Rittenhouse puede servir como prueba: ¿podría acaso un joven negro atravesar tres estados con un rifle semiautomático, dirigirse a una manifestación sin que lo parara la policía, disparar contra la muchedumbre, matar a dos personas y salir impune?[10]

Pero, aunque Estados Unidos todavía no sea una democracia multirracial de verdad, está en camino de convertirse en una. Durante el medio siglo transcurrido entre la aprobación de la *Voting Rights Act* y el ascenso a la presidencia de Donald Trump, las bases fundamentales de la sociedad han cambiado. Una enorme oleada migratoria ha transformado la que había sido una sociedad predominantemente blanca y cristiana en diversa y multiétnica.[11]A la vez, el creciente poder político, económico, jurídico y cultural de los estadounidenses no blancos puso en duda —y empezó a desmantelar— unas jerarquías raciales muy arraigadas.[12]Las encuestas muestran que, por primera vez en la historia de Estados Unidos, la mayoría de la población acepta hoy la heterogeneidad étnica y la igualdad racial: los dos pilares fundamentales de una democracia multirracial.[13]En 2016, Estados Unidos se estaba acercando a una auténtica democracia multirracial; una que tal vez pudiera ser un modelo para sociedades diversas del mundo entero.

Sin embargo, justo cuando este nuevo experimento democrático se empezaba a afianzar, el país sufrió una reacción autoritaria tan feroz que sacudió los cimientos de la República y llegó a suscitar preocupación entre los aliados internacionales sobre el porvenir democrático de Estados Unidos. Cuando hay pasos significativos hacia la inclusión democrática a menudo se producen reacciones intensas; autoritarias, incluso. Pero el asalto a la democracia estadounidense fue peor que cualquier escenario que hubiéramos podido anticipar en 2017, cuando escribíamos nuestro

primer libro, *Cómo mueren las democracias*.[14]Hemos estudiado insurrecciones violentas e intentos de anular comicios en multitud de países, desde Francia y España a Ucrania y Rusia, pasando por Filipinas, Perú y Venezuela, pero aquí nunca imaginamos algo parecido. Como tampoco habríamos supuesto que uno de los dos grandes partidos estadounidenses renegaría de la democracia en el siglo XXI.

El retroceso democrático en Estados Unidos era de una magnitud sobrecogedora. Algunas de las organizaciones que toman el pulso a las democracias de todo el mundo lo tradujeron en un dato. Cada año, la organización no gubernamental Freedom House otorga a los países una puntuación que va de 0 a 100 en su Global Freedom Index (Índice de Libertad Global), donde 100 es indicativo de una mayor democracia. En 2015, Estados Unidos recibió una puntuación de 90, a la par con países como Canadá, Italia, Francia, Alemania, Japón, España o el Reino Unido. Sin embargo, con el paso del tiempo fue disminuyendo de modo constante, hasta llegar a un 83 en 2021. No era solamente una puntuación menor a la otorgada a cualquier democracia consolidada de Europa occidental, sino también a algunas con historia turbulenta como Argentina, Chequia, Lituania o Taiwán.

Se trataba de un vuelco insólito en los acontecimientos. Según casi todas las consideraciones en el campo de las ciencias sociales sobre qué es lo que hace prosperar a las democracias, Estados Unidos debería ser inmune a dicha erosión. Los investigadores han descubierto dos patrones que prácticamente constituyen una ley: nunca mueren las democracias ricas, como nunca mueren las democracias veteranas. En un conocido estudio,[15]los politólogos Adam Przeworski y Fernando Limongi constataron que ningún sistema democrático con más riqueza que el de la Argentina de 1976 —su PIB per cápita era de unos 16.000 dólares actuales— había colapsado jamás. Años más tarde, la democracia de Hungría, cuyo PIB per cápita es de unos 18.000 dólares al cambio actual, ha sufrido un proceso de erosión. El PIB per cápita estadounidense era de unos 63.000 dólares en 2020, casi *cuatro veces mayor* que el país más rico que en su día sufrió una ruptura democrática.

Del mismo modo, tampoco ha muerto ninguna democracia con más de cincuenta años de historia. Incluso situando la democratización de Estados Unidos en la aprobación de la *Voting Rights Act* de 1965 (es decir, cuando el país adoptó el sufragio pleno para los adultos), nuestra democracia ya tenía cincuenta años cuando Trump alcanzó la presidencia. De modo que tanto la misma historia como las décadas de investigación en ciencias sociales nos dicen que la democracia estadounidense debería haber estado a salvo. Sin embargo, no fue así.

Por supuesto, Estados Unidos no es el único país donde se está produciendo un incremento de la diversidad. Como tampoco el único en vivir una reacción extremista de derechas a dicho cambio demográfico. El número de residentes nacidos fuera del país ha ido en aumento en la mayor parte de los regímenes democráticos más antiguos del mundo, en particular en Europa occidental. Los inmigrantes y sus hijos constituyen una parte creciente de la población, incluso en países que habían sido históricamente homogéneos como Noruega, Suecia o Alemania. Ciudades como Ámsterdam, Berlín, París o Zúrich presentan una población casi tan diversa como la de las grandes urbes de Estados Unidos. También la crisis de los refugiados de 2015 llevó a millones de recién llegados del norte de África y Oriente Medio a Europa, lo que produjo que la inmigración y la diversidad étnica se convirtieran en cuestiones de gran relevancia política.[16]Junto con las repercusiones de la crisis financiera de 2008, estos cambios desembocaron en una reacción radical.[17]Casi en todos los países de Europa occidental, entre el 10 y el 30 por ciento del electorado —con una gran mayoría de los votantes blancos, con menor nivel educativo y que habitan regiones en declive o alejadas de los centros urbanos— se siente apelado por mensajes xenófobos. En todas partes, desde el Reino Unido, a Francia e Italia, Alemania o Suecia, estos votantes han impulsado la riqueza electoral de los partidos y movimientos de ultraderecha.[18]

Aun así, Estados Unidos destaca en dos sentidos. En primer lugar, la reacción a su creciente diversidad ha sido insólitamente *autoritaria*. Rara vez el auge de los partidos xenófobos y

antisistema en Europa occidental se ha presentado de una manera tan antidemocrática como la que hemos visto en Estados Unidos. Muchas características de los partidos de ultraderecha de Europa occidental son motivo de preocupación, incluyendo su racismo, xenofobia y desprecio por los derechos de las minorías, además de, en ciertos casos, simpatía por el presidente de Rusia, Vladímir Putin. No obstante, hasta el momento, casi todos ellos han seguido las normas de la democracia, aceptando los resultados electorales y rechazando la violencia política. Estados Unidos también difiere en otro aspecto: se llegó a ascender al poder nacional fuerzas extremistas, mientras que, en Europa, han sido relegadas en su mayoría a la oposición o, en unos pocos casos, a Gobiernos de coalición.

De modo que debemos afrontar una realidad incómoda: tanto la diversidad social, como la reacción cultural, así como los partidos de extrema derecha son omnipresentes en las democracias consolidadas de Occidente. ¿Por qué de entre todas las democracias ricas y consolidadas solo Estados Unidos se asomó al borde del abismo? Esta fue la pregunta que nos persigue a raíz de lo acontecido los días 5 y 6 de enero.

Resulta tentador considerar que hemos pasado la página de la era Trump. Al fin y al cabo, no ganó la campaña para su reelección, y su empeño por declarar nulos los resultados de los comicios fracasó. En 2022, durante las votaciones de mitad de mandato para el Congreso, en los estados pendulares también perdieron los negacionistas de los resultados más peligrosos. Parecía que habíamos logrado esquivar la bala y que, al fin y al cabo, el sistema funcionaba. Ahora que se disputa el control de Trump sobre el Partido Republicano, tal vez podamos dejar de preocuparnos tanto acerca del destino de nuestra democracia. De hecho, podría ser que esta *no se esté muriendo*.

Pensar así es comprensible. Para aquellos de nosotros que acabamos agotados de las crisis que durante la era Trump parecían no tener fin, la «teoría de la bala única» (y esquivada) puede suponer un consuelo. Por desgracia, es infundada. La amenaza a la que se enfrenta la democracia estadounidense nunca fue solo la de

un hombre fuerte seguido por una secta de fieles. Los problemas son más bien endémicos. Se encuentran, de hecho, en las raíces más profundas de nuestra política. Hasta que no abordemos los problemas subyacentes, el sistema seguirá siendo vulnerable.

Para revertir del todo el retroceso democrático de Estados Unidos —y, lo más crucial, impedir que se vuelva a producir— debemos comprender sus causas. ¿Qué motiva a un partido a descarriarse de la democracia? No es algo que suceda con frecuencia, pero cuando lo hace, es capaz de destrozar incluso un sistema político consolidado. Podemos extraer enseñanzas de lo vivido en otros países, pero también de episodios de nuestra historia, que incluye la reacción autoritaria del Partido Demócrata, en el Sur, a la Reconstrucción que siguió a la Guerra Civil.

Asimismo, tenemos que entender por qué Estados Unidos ha demostrado ser tan proclive a esta erosión democrática. Exige que estudiemos atentamente las instituciones que forman el núcleo de nuestro sistema político. Los votantes reaccionarios son minoría en Estados Unidos, como lo son en Europa. Este aspecto es importante, y a menudo se desatiende. El Partido Republicano, dirigido por Trump, así como los movimientos de la derecha radical en los países europeos, *siempre* ha representado a una minoría política. Pero a diferencia de los partidos de ultraderecha en Europa, pudo alcanzar la administración del país.

Esto nos conduce a otra inquietante realidad. Parte del problema que hoy afrontamos tiene que ver con un objeto de veneración para muchos: la Constitución. Estados Unidos posee la carta magna escrita más antigua del mundo. Como el brillante ejemplo de destreza política que es, sentó las bases para la estabilidad y la prosperidad, y durante más de dos siglos ha logrado poner freno al poder de presidentes ambiciosos y que se extralimitaron. Sin embargo, los defectos de la Constitución ponen ahora en peligro nuestra democracia.[19]

Concebida en una época predemocrática, la carta magna estadounidense permite que las minorías dentro de los partidos boicoteen a la mayoría de forma frecuente, y que a veces los *gobiernen*. Las instituciones que dan alas a esas minorías pueden

convertirse en instrumentos para el gobierno de unos pocos. Y son *especialmente* peligrosas cuando se encuentran en manos de las facciones extremistas o antidemocráticas de una organización política.

A destacados pensadores de los siglos XVIII y XIX, desde Edmund Burke a John Adams, pasando por John Stuart Mill o Alexis de Tocqueville, les inquietaba el riesgo que entrañaba la democracia si se convertía en una «tiranía de la mayoría»; el peligro de que un sistema de este tipo permitiera que la voluntad de muchos pisoteara los derechos de unos pocos. Puede convertirse en un problema real: las mayorías de Gobierno han socavado la democracia en la Venezuela y la Hungría del siglo XXI, y amenazan con hacer lo mismo en Israel.

Sin embargo, el sistema político estadounidense, siempre y sin falta, ha impuesto límites al poder de las mayorías. Hoy en día lo que aflige a la democracia de nuestro país se acerca más al problema contrario: las mayorías electorales a menudo son incapaces de llegar al poder, y en caso de lograrlo, a menudo no pueden gobernar. Así pues, la amenaza más inminente ahora mismo es el Gobierno de una minoría. Al alejar con tanto ímpetu a la República de las fauces de la Escila[20]de una tiranía de la mayoría, los fundadores de Estados Unidos la dejaron a la merced de la Caribdis de un Gobierno minoritario.

¿Por qué las amenazas contra la democracia estadounidense se manifiestan en este comienzo del siglo XXI? Al fin y al cabo, la Constitución tiene cientos de años. Entender cómo hemos llegado a este punto es el principal cometido de este libro. Más apremiante resulta, sin embargo, preguntarnos cómo saldremos de esta. Solo hay una cosa clara: las instituciones no salvarán nuestra democracia. Tendremos que ser nosotros mismos quienes lo hagamos.

1

El miedo a perder

La noche del 30 de octubre de 1983, mientras se hacía el recuento de votos de las primeras elecciones democráticas de Argentina en una década, los peronistas, reunidos en su búnker de campaña, estaban en estado de *shock*. «¿Cuándo llegan los votos del cinturón industrial?», se preguntaban nerviosos los dirigentes del partido. No obstante, ya habían llegado. Por primera vez, los peronistas —el partido de la clase obrera argentina— perdían unas elecciones libres.[1]

«No lo vimos venir», recuerda Mario Wainfeld, un joven abogado y activista peronista.[2]Los peronistas habían sido el principal partido de Argentina desde que Juan Perón, un antiguo oficial militar, ganó por primera vez la presidencia en 1946. Perón era una figura populista y de talento; construyó el estado del bienestar argentino y cuadruplicó su movimiento sindical, ganándose con ello la más profunda lealtad de la clase trabajadora. Una fidelidad que persistiría tras ser derrocado por un golpe militar en 1955, y exiliado del país durante dieciocho años. Aunque el peronismo estuvo ilegalizado durante la mayor parte de las dos décadas siguientes, el movimiento no solo sobrevivió, sino que se mantuvo como una fuerza decisiva en las urnas: logró ganar todas las elecciones nacionales a las que se le permitió presentarse. Cuando un Perón ya mayor pudo volver y postularse a la presidencia en 1973, ganó sin esfuerzos, con un 62 por ciento del voto. Sin embargo, murió un año después, y en 1976 Argentina fue presa de otro golpe que sumergió al país en una dictadura militar durante siete años.

Con todo, cuando volvió la democracia en 1983,

prácticamente todo el mundo esperaba que sería el candidato peronista, Ítalo Luder, quien ganaría.

Pero muchas cosas habían cambiado en Argentina: Perón ya no estaba, y el declive de la industria había destruido cientos de miles de trabajos fabriles, diezmando los cimientos obreros del peronismo. Al mismo tiempo, los votantes más jóvenes y los de clase media no se sentían atraídos por los líderes de la vieja guardia peronista. Además, teniendo en cuenta que Argentina acababa de salir de una dictadura militar brutal, la mayoría prefería a Raúl Alfonsín, de la rival Unión Cívica Radical: era un candidato que ponía los derechos humanos en el foco. Los líderes peronistas habían perdido el contacto con el votante argentino. No ayudaba en absoluto que algunos de sus candidatos fueran unos canallas o que estuvieran desfasados. El candidato a gobernador de la crucial provincia de Buenos Aires, Herminio Iglesias, se hizo famoso por enzarzarse en tiroteos contra facciones peronistas rivales en el transcurso de la violenta década de 1970. Durante el último mitin de campaña de los peronistas, dos días antes de la elección, Iglesias salió en directo por la televisión nacional e incineró un féretro con el símbolo de la Unión Cívica Radical, el partido de Alfonsín: un acto de violencia que la mayoría de los argentinos, que habían sufrido una década de represión aterradora, encontraron espantoso.

Con los primeros resultados de 1983, que situaban a Alfonsín a la cabeza de la carrera política, los dirigentes peronistas, desesperados por encontrar una explicación, sucumbieron a la negación. «Todavía no contaron los votos de La Matanza» (un feudo peronista en la periferia de Buenos Aires), insistió Lorenzo Miguel, el jefe del partido.[3]El candidato a la vicepresidencia peronista, Deolindo Bittel, llegó a acusar a la administración electoral de retener los resultados a los barrios de clase obrera.[4]Sin embargo, llegada la medianoche ya era evidente que aquellos votos que esperaban sencillamente no existían. Los peronistas tienen un dicho: «La única verdad es la realidad». Y la realidad era que habían perdido.

La derrota fue un trago amargo. Los dirigentes del partido,

relamiéndose las heridas,[5] la ocultaron a la prensa en un principio, pero a ninguno de ellos se le pasó por la cabeza rechazar los resultados.[6] Al día siguiente, el candidato peronista que había perdido, Luder, se unió al presidente electo Alfonsín en una rueda de prensa y lo felicitó. Cuando los periodistas preguntaron a Luder acerca de aquella derrota histórica para el peronismo, respondió: «Todos los políticos estamos acostumbrados a que los comicios puedan producir resultados imprevistos».[7]

Tras las elecciones, los peronistas se enzarzaron en un acalorado debate acerca del futuro del partido. Una nueva facción, conocida como la Renovación, exigía que los dirigentes veteranos del partido dimitieran, y consideraba que el peronismo debía adaptarse a los cambios de la sociedad argentina si aspiraba a ganar de nuevo. El partido debía ampliar sus bases y hallar un modo de acercarse a aquel electorado de clase media que había expresado repulsa ante un peronismo que en 1983 incendiaba féretros. Aunque los críticos internos los despreciaban llamándolos «peronistas de saco y corbata», finalmente los líderes de la Renovación lograron apartar a la tosca vieja guardia peronista, echar por la borda muchas de sus ideas de apariencia vetusta, y mejorar la imagen del partido para los votantes de clase media. El peronismo ganaría las dos siguientes elecciones con facilidad.

Así es como debería funcionar la democracia. En las memorables palabras del politólogo Adam Przeworski, «la democracia es un sistema en que los partidos pierden elecciones».[8] Perder duele, pero en un sistema democrático es inevitable, y cuando sucede, los partidos deben hacer lo mismo que los peronistas: aceptar la derrota, volver a casa y pensar cómo ganar una mayoría en las próximas elecciones.

En la norma de aceptar la derrota y ceder el poder está la base de la democracia moderna. El 4 de marzo de 1801, Estados Unidos se convirtió en la primera república de la historia que vivía una transferencia electoral de poder de una formación a otra.[9] Aquel día, el presidente en funciones, John Adams, un líder del partido

fundacional de Estados Unidos, el Partido Federalista, abandonó tranquilamente Washington, D. C. en su carruaje antes del alba. El presidente electo Thomas Jefferson, del rival Partido Demócrata-Republicano, el hombre que había derrotado a Adams en las elecciones de 1800, tomó posesión en la cámara del Senado estadounidense unas horas más tarde.

Esa transición resultó indispensable para la supervivencia de la nueva República.[10]Sin embargo, no fue inevitable ni tampoco fácil.[11]En 1800, la norma de aceptar la derrota y traspasar poderes a un oponente todavía no estaba consolidada. El propio hecho de que existiera un partido opositor estaba contemplado como algo ilegítimo. Para algunos políticos, incluyendo a muchos de los fundadores, era equivalente a la sedición e incluso a la traición.[12]Dado que nunca antes había tenido lugar un traspaso de poderes, era difícil suponer que la oposición fuera a actuar del mismo modo en futuras elecciones. Entregar los poderes a otro partido era entendido como «un salto a lo desconocido».[13]

La transición fue especialmente difícil para los federalistas, que adolecían de lo que podría llamarse «el dilema de los fundadores»: para que arraigue un nuevo sistema político, sus fundadores deben aceptar que no van a ser siempre ellos quienes lleven la voz cantante. Como artífices de la Constitución y herederos del legado de George Washington, dirigentes federalistas como John Adams y Alexander Hamilton se consideraban a sí mismos los legítimos administradores de la nueva República.[14]Contemplaban sus intereses personales y los de la República como una sola cosa, y les producía rechazo la idea de ceder su poder a contrincantes sin experiencia.

Así pues, el surgimiento de los demócratas-republicanos, el primer partido de la oposición de Estados Unidos,[15]puso a prueba la estabilidad de la nueva nación. Las sociedades demócratas-republicanas aparecieron por primera vez en Pensilvania y otros estados en 1793. El movimiento pronto se transformó en oposición real bajo el liderazgo de Jefferson y James Madison. Los demócratas-republicanos se distanciaron de los federalistas en muchas cuestiones de relevancia en aquel momento, incluyendo la

política económica, la deuda pública y, sobre todo lo demás, los asuntos de guerra y paz. Veían a los federalistas como casi monárquicos («monócratas»), y les preocupaba que las insinuaciones diplomáticas de Adams a Gran Bretaña constituyeran un intento encubierto de restaurar la autoridad británica sobre Estados Unidos.[16]

A su vez, a ojos de muchos federalistas, los demócratas-republicanos eran poco menos que traidores. Tenían suspicacias de que fueran simpatizantes del Gobierno revolucionario de Francia en una época en que las crecientes hostilidades entre Estados Unidos. y Francia suponían una amenaza real de guerra.[17]Los federalistas temían que los «enemigos domésticos» republicanos facilitaran una invasión francesa.[18]Las revueltas de esclavos en el Sur reforzaban ese temor.[19]Los federalistas contraatacaron diciendo que las rebeliones de esclavos —como la de Gabriel, en Virginia, durante el verano de 1800—[20]estaban inspiradas por los republicanos y su ideología, como parte de lo que la prensa federalista llamaba «el verdadero plan francés».

Al principio los federalistas trataron de acabar con sus oponentes. En 1798, el Congreso aprobó las *Alien and Sedition Acts* (Leyes de Extranjería y Sedición), utilizadas para apresar a políticos demócratas-republicanos y editores de periódicos que criticaran al Gobierno federal, actos que polarizaron aún más al país. Virginia y Kentucky las declararon leyes nulas y sin validez en sus territorios, algo que los federalistas contemplaron como sedicioso. Considerando la conducta de Virginia como una «conspiración» en pro de Francia, Hamilton animó al Gobierno de Adams a levantar una «sólida fuerza militar» que pudiera «conducirse hasta Virginia».[21]Como respuesta, la legislación de aquel estado empezó a armar su propia milicia.[22]

El espectro de la violencia —de una guerra civil, incluso— pendía sobre la joven República a las puertas de las elecciones de 1800. La desconfianza mutua, alimentada por la animosidad entre partidos, ponía en peligro las expectativas de cualquier traspaso pacífico de poder. Como expresó el historiador James Sharp, «los federalistas y los republicanos estaban deseosos de creer que sus

oponentes serían capaces de prácticamente cualquier acto, por traicionero o violento que fuera, para conseguir o retener su poder».[23]

De hecho, los líderes federalistas exploraron maneras de subvertir el proceso electoral. En el Senado aprobaron una ley para establecer un comité compuesto por seis miembros de ambas cámaras del Congreso (que estaban dominadas por los federalistas) y el presidente del Tribunal Supremo para que «decidiera qué votos contar y cuáles rechazar».[24]Hamilton instó al gobernador de Nueva York, John Kay, a que convocara una sesión parlamentaria estatal especial del Gobierno saliente (dominado por los federalistas) para que aprobara una ley que transfiriera la autoridad para nombrar electores de la asamblea legislativa entrante (dominada por los demócratas-republicanos) al gobernador Jay, federalista. En una carta cargada de inquina hacia sus rivales, Hamilton se adhirió al tipo de estrategia basada en las «tácticas duras» que, como mostramos en *Cómo mueren las democracias*, puede hundirlas. Hamilton escribió:

> En tiempos como los que vivimos pasarse de escrupuloso no es suficiente. Resulta fácil sacrificar los intereses mayores de la sociedad si se observan estrictamente las normas corrientes. Sin embargo, no deberían ser óbice para emprender acciones para que un *ateo* en lo religioso o un *fanático* en lo político tome posesión de las riendas del Estado.[25]

Los federalistas jamás llegaron a poner en marcha sus planes, pero el propio hecho de que los hubieran considerado demuestra cuán complicado le resultaba aceptar la derrota al primer partido fundado en Estados Unidos.

La contienda de 1800 también estuvo a punto de descarrilar a causa de un sistema electoral deficiente. En diciembre, después del recuento de votos, el Colegio Electoral comunicó un resultado incómodo: aunque estaba claro que Adams había perdido, los dos candidatos demócratas-republicanos, Jefferson (el teórico candidato del partido a la presidencia) y Aaron Burr (teórico candidato a vicepresidente), se encontraron con un empate

inesperado: 63 votos cada uno. Ello derivó en las elecciones a la Cámara de Representantes de la administración saliente, en la que los federalistas todavía eran mayoría.[26]

Aunque Adams aceptó la derrota a regañadientes y ya se estaba haciendo a la idea de volver a su casa de Quincy (Massachusetts), muchos federalistas detectaron la oportunidad de usar tácticas constitucionales duras para aferrarse al poder. Algunos dejaron caer la propuesta de nuevas elecciones.[27]Otros deseaban elegir a Burr, supuestamente a cambio de que los federalistas tuvieran un papel en una futura administración con él al frente.[28]Era una jugada totalmente legal, ya que los victoriosos demócratas-republicanos tenían la clara intención de que Jefferson fuera presidente y Burr vicepresidente. Aunque como pudo leerse en un periódico de la época, esta estratagema habría violado «el espíritu de la Constitución, que requiere de la voluntad del pueblo para que se cumpla».[29]Aquel diciembre surgió una idea más controvertida si cabe en los círculos federalistas: postergar el debate hasta el 4 de marzo de 1801, la fecha límite para investir a un presidente; algo que, como expresó el senador Gouverneur Morris, «dejaría al Gobierno en manos del presidente interino del Senado»,[30]un miembro de los federalistas. Una jugada así, que Jefferson repudió porque «violentaba la Constitución», habría provocado casi sin lugar a dudas una crisis constitucional.

El hecho de que los dirigentes federalistas pensaran en usar tácticas duras aumentó el temor entre los demócratas-republicanos de que los federalistas estuvieran planeando ilegalmente «usurpar» el poder.[31]Ello condujo a Jefferson y a sus aliados a contemplar, tal y como él mismo dijo, «la resistencia a través de la fuerza».[32]Los gobernadores de Pensilvania y Virginia movilizaron a sus milicias y amenazaron con la secesión si la elección de Jefferson seguía encallada.[33]

La nevada mañana del 11 de febrero de 1801, la Cámara de Representantes convocó una sesión para solventar el resultado en el Colegio Electoral. La Constitución estipulaba que a cada una de las dieciséis delegaciones estatales se le asignaba un único voto, y que se requería una mayoría de nueve para la victoria. Durante seis

penosos días, y en el transcurso de 35 votaciones, los resultados fueron los mismos: una y otra vez, ocho estados votaron a Jefferson; seis a Burr; y en dos de ellos fue imposible que sus delegaciones llegaran a un consenso, por tanto, se abstuvieron. Se necesitaba que al menos un federalista votara para salir de la parálisis. Al final, durante el sexto día, el congresista federalista James Bayard, de Delaware (el único representante del estado), anunció que retiraba su apoyo a Burr, provocando gritos en el plenario de la cámara con los que lo tildaron de «¡desertor!». Delaware, que había apoyado a Burr, pasaría a abstenerse. Pronto, Maryland y Vermont, que se habían abstenido, votarían a favor de Jefferson, dándole una sólida mayoría de 10 estados. Dos semanas después, Jefferson fue investido presidente.[34]

¿Por qué se ablandaron los federalistas? En una carta a un amigo, Bayard explicaba que cambió su voto porque temía que la alternativa a Jefferson fuera la descomposición constitucional, o incluso una guerra civil. Escribió:

> A causa de un inclemente odio hacia Jefferson, algunos de nuestros caballeros federalistas estaban dispuestos a llegar a los extremos más desesperados. Por mi total determinación a no poner en riesgo la Constitución o llegar a una guerra civil, creí que era el momento en que era necesario dar un paso en firme.[35]

De mala gana, la administración Adams supervisó el primer traspaso de poder de Estados Unidos. No fue completamente pacífico (la amenaza de violencia estuvo presente durante todo el proceso) ni inevitable, pero al aceptar la derrota y abandonar sus cargos, los federalistas dieron un gran paso para cristalizar el sistema constitucional que acabaría por convertirse en la democracia estadounidense.

Una vez los partidos aprenden a perder, el sistema democrático puede echar raíces, y una vez este arraiga, la alternancia del poder se convierte en algo tan rutinario que la gente la da por natural. En diciembre de 2021, setenta años después del restablecimiento de la democracia en Alemania tras la Segunda Guerra Mundial, la veterana canciller del país, Angela

Merkel, se retiró de su cargo. Aquel otoño, la Unión Demócrata Cristiana de Alemania había sido derrotada por la oposición, el Partido Socialdemócrata. La sencilla ceremonia de investidura del nuevo canciller socialdemócrata se parecía más a una boda civil en un ayuntamiento de provincias, ratificada por la firma de papeleo y el intercambio de documentos. A los presentes les preocupaba más contagiarse de la última variante de la covid-19 que la posibilidad de que hubiera violencia o una toma ilegal del poder. Cuando el nuevo canciller, Olaf Scholz, se encontró con su derrotado rival, el democristiano Armin Laschet, en el edificio del Reichstag, ambos se saludaron chocando el puño amistosamente.

¿Cómo llega una democracia a ser como la de la Alemania actual, donde la transferencia del poder carece de todo drama? ¿Qué permite que se naturalice una norma como la de aceptar la derrota?

Hay dos condiciones que ayudan. La primera es que resulta más probable que los partidos acepten que han perdido cuando creen que tienen posibilidades razonables de volver a ganar en un futuro.

Puede que los peronistas se sintieran anonadados tras su derrota electoral en 1983, pero seguían siendo el partido más grande de Argentina, con más miembros que el resto de los partidos juntos. Gracias a que confiaron en que podían volver a ganar, muchos peronistas de primera fila se adaptaron con rapidez. Carlos Menem, que acababa de ser elegido gobernador de la pequeña provincia de La Rioja, en el noroeste, empezó a preparar su candidatura presidencial tras la derrota de su partido en 1983. Menem alcanzaría la presidencia en 1989, y los peronistas ganarían cuatro de las cinco elecciones presidenciales posteriores.

Aunque la incertidumbre de los líderes federalistas acerca del futuro hizo que la transición estadounidense de 1801 fuera más difícil, al final muchos de ellos se mostraron confiados en que volverían a conseguir el poder: «Todavía no estamos muertos»,[36]declaró un federalista tres días después de la investidura de Jefferson. Fisher Ames aconsejó a sus colegas federalistas que se acostumbraran a verse como la nueva oposición,

porque «pronto volverían a estar en lo más alto y listos para tener de nuevo las riendas del Gobierno, y con ventaja». De manera similar, Oliver Wolcott Jr., el secretario del Tesoro de Adams, albergaba esperanzas de que «siguieran siendo un partido, y que a corto plazo volviéramos a tener influencia».[37]De hecho, un federalista de Nueva Jersey que acababa de empezar a construirse una casa declaró que detenía las obras hasta que volvieran al poder.[38](Resultaron estar equivocados.)

Una segunda condición que ayuda a que los partidos acepten su derrota es la creencia de que perder el poder no comportará una catástrofe: que un cambio de Gobierno no será una amenaza para la vida o el sustento, ni para los principios más valiosos del partido saliente y de sus constituyentes. Las elecciones a menudo parecen batallas en las que hay mucho en juego, pero si las apuestas son *demasiado* altas y las formaciones que han perdido creen que lo van a perder *todo*, serán reacias a ceder el poder. En otras palabras, es un miedo sobredimensionado a perder, lo que hace que los partidos se revuelvan contra la democracia.

Bajar las apuestas fue crítico para la transición de 1801 en Estados Unidos. En medio de aquella polarizada campaña, muchos federalistas retrataban a los republicanos como una amenaza a su existencia, y asociaban una potencial victoria de Jefferson a una revolución de estilo jacobino que condenaría a los federalistas a la pobreza y al exilio; o peor, a provocar que «vadearan en sangre»,[39]en palabras del senador federalista Uriah Tracy. Sin embargo, finalmente Hamilton y otros líderes fundadores reconocieron que Jefferson no era sino un pragmático que se valdría del marco del sistema existente.[40]Como dijo Rufus King a un amigo federalista durante la campaña: «No considero que nuestro Gobierno ni la seguridad de nuestras propiedades se verán, en ningún sentido material, afectados» por una victoria de Jefferson. Parece ser que las negociaciones entre bastidores convencieron a los federalistas más importantes de que las prioridades a las que tenían más estima —como el ejército naval, el Banco de Estados Unidos y la deuda soberana— seguirían protegidas con Jefferson en el poder.[41]Ahora bien, por lo que

pudiera pasar, los federalistas salientes decidieron ocupar los tribunales con los suyos creando dieciséis nuevas magistraturas en las que colocaron a jueces aliados.[42]Los federalistas, por ende, abandonaron el poder con la creencia de que una presidencia de Jefferson no sería una calamidad.[43]Al escuchar el conciliador discurso inaugural de Jefferson, Hamilton concluyó que «el nuevo presidente no se dejará llevar por peligrosas innovaciones, sino que en lo elemental seguirá los pasos de sus predecesores».[44]

Aceptar la derrota se complica cuando los partidos sienten miedo; un temor a no poder lograr de nuevo la victoria en un futuro o, en esencia, a que lo que van a perder no es solamente unas elecciones. Cuando a los políticos o a los constituyentes una derrota les parece una amenaza existencial, se desviven por impedirla.

Este tipo de temores surgen a menudo durante épocas en las que se producen cambios sociales de gran calado.

Los estudios de psicología política nos muestran que el estatus social —el lugar que ocupamos en relación con otras personas— puede moldear con fuerza las actitudes políticas.[45]A menudo estimamos nuestra posición social en términos de la influencia de los grupos con quienes nos identificamos. Estos pueden basarse en la clase social, la religión, la geografía, o bien la raza o etnia, y dónde se hallan dentro de la jerarquía social afecta sobremanera a nuestra sensación de valía como individuos. Un cambio económico, demográfico, cultural o político puede hacer trastabillar jerarquías sociales existentes, incrementar el estatus de algunos grupos e, inevitablemente, disminuir el estatus relativo de otros. Lo que la escritora Barbara Ehrenreich llamaba el «miedo a caer» puede ser una fuerza muy pesada.[46]Cuando un partido político representa a un grupo que percibe de sí mismo que pierde terreno, a menudo se radicaliza. Cuando el modo de vida de sus constituyentes parece estar en juego, los líderes de los partidos se sienten presionados para ganar, cueste lo que cueste. Perder deja de ser una opción aceptable.

El miedo existencial frustró el surgimiento de la democracia a principios del siglo XX en Alemania. En la antesala de la Primera

Guerra Mundial, el Imperio alemán solo era una democracia parcial dominada todavía por un pequeño círculo de aristócratas, industriales y burócratas de enorme estatus. Existían elecciones nacionales, pero el poder real se concentraba en Prusia, cuyas normas enormemente restrictivas para el sufragio favorecían sobremanera a los ricos: un sistema de voto por estratos que en efecto otorgaba a los potentados más papeletas. Antes de 1903, no existía la votación secreta; el sufragio al descubierto permitía a las élites locales y a los funcionarios vigilar de cerca a quién se votaba en sus comunidades. Incluso después de 1903, los terratenientes e industriales ejercían presión a los funcionarios del Gobierno para que manipularan las urnas.

Existía mucha demanda pública para que se reformara la política. Alemania era una economía industrial con una gran burguesía y una robusta sociedad civil. Aun así, los reformadores democráticos se enfrentaban a una élite conservadora reaccionaria, en declive, y, por lo tanto, cada vez más aterrada. Dependientes desde hacía mucho de un sistema electoral amañado, los conservadores alemanes y sus aliados entre los terratenientes llegaron a convencerse de que juguetear, del modo que fuera, con los reglamentos del voto diluiría su poder y los llevaría a la derrota. Por tanto, perder las elecciones, como creían, aceleraría la decadencia del orden aristocrático al completo. La democracia, por lo tanto, constituía una amenaza a todo lo que ellos representaban. Los grandes terratenientes temían que se desvaneciera su autoridad sobre la mano de obra barata del campo. Tenían miedo a perder las tarifas proteccionistas que sustentaban su obsoleto sistema agrícola. Los propietarios de fábricas en los polos industriales, entonces en auge, estaban asustados porque dejarían de controlar a unos trabajadores cada vez más envalentonados por el creciente movimiento obrero.

En suma, a los conservadores de Prusia les aterrorizaban muchas más cosas que perder aquellas elecciones. Temían perder su posición de dominio en la sociedad. En mayo de 1912, en el transcurso de un último intento previo a la guerra por reformar el sistema electoral prusiano, el líder conservador Ernst von

Heydebrand se dirigió al pleno del Parlamento y defendió con pasión el viejo orden, insistiendo en que el «Gobierno de las masas indiferenciadas ¡es un ataque en contra de las leyes básicas de la naturaleza!».[47]Durante la Primera Guerra Mundial, el general Erich Ludendorff, un destacado funcionario gubernamental, encarnó la forma más extrema del conservadurismo alemán. Dirigiéndose a un amigo, Ludendorff describió la democracia como «un terror sin fin». «Con la igualdad de derechos no podemos vivir», escribía: «¡Podría ser peor que perder la guerra!».[48]

De modo que los conservadores alemanes votaron en repetidas ocasiones (un total de dieciséis veces) para bloquear la reforma política. Poseídos por un miedo profundamente asentado a las clases obreras y al socialismo, se resistieron a la democratización hasta los días finales de la Primera Guerra Mundial.

Los conservadores de Alemania nunca llegaron a asumir las derrotas hasta después de la Segunda Guerra Mundial. Pero, en ocasiones, incluso los partidos democráticos consolidados olvidan la capacidad de perder. Para ver cómo y por qué, consideremos un escenario muy diferente: Tailandia en el siglo XXI. La historia política de este país ha sido escabrosa, con más de doce golpes militares desde la década de 1930. En los noventa, sin embargo, la democracia parecía estar consolidándose. Las protestas populares habían llevado al Gobierno militar a su fin, y el Partido Demócrata, con sus bases de clase media y una veterana oposición al ejército, triunfó en las elecciones de 1992.[49]Una nueva Constitución y una década de crecimiento económico de dos cifras, además de una clase media en expansión y cada vez más llena de confianza en sí misma, hicieron que Tailandia pareciera tener un porvenir brillante en democracia. Algunos observadores se atrevieron a conjeturar que Tailandia estaba en camino de unirse a otras democracias ricas del este asiático como Japón, Corea del Sur y Taiwán.[50]

Sin embargo, todo se fue al garete a principios del siglo XXI. Una serie de golpes militares acabó con la embrionaria democracia

de Tailandia y el ejército recuperó su posición de dominio. Inesperadamente, además, el Partido Demócrata, que había sido abanderado en la lucha por la democracia durante los años noventa, celebraba estos golpes. ¿Qué había sucedido?

El primer domingo de febrero de 2014 tuvo lugar un evento revelador. Era la jornada electoral. En Bangkok, una enorme ciudad de diez millones de habitantes, llegar a las urnas siempre había sido difícil. Manifestantes, procedentes en su mayoría de las clases medias educadas tailandesas, bloqueaban las calles.[51]Durante meses, quienes protestaban se habían estado reuniendo con actitud carnavalesca en las plazas más céntricas de Bangkok, en los centros comerciales y en los cruces más importantes. Los discursos políticos se acompañaban con música en directo y emisiones televisivas en grandes pantallas. Los estudiantes universitarios y los profesionales que volvían a casa de sus trabajos de oficina se juntaban en las calles con banderas tailandesas pintadas en la cara y se hacían selfis para postearlos en sus páginas de Facebook.[52]Actores, estrellas del pop y vástagos de algunas de las familias más adineradas y famosas de Tailandia se encontraban allí. En un momento de demostración *radical chic* que tuvo mucha repercusión, Chitpas Bhirombhakdi, la heredera de veintiocho años de la fortuna familiar de 2,6 billones de dólares de la cerveza Singha, se subió a una excavadora entre barricadas policiales. Cuando los cuerpos de seguridad liberaron gas lacrimógeno, empezó a subir fotos a Instagram lavando los ojos de sus compatriotas. «Gente a la que normalmente verías en las páginas del corazón estaba ahí —le dijo a un periodista de la agencia Reuters el director de la revista de moda *Thailand Tatler*, de Bangkok—. Toda esa gente de las grandes familias solían ser conocidos como la minoría silenciosa. Y, bueno, silenciosos ya no son.»

A pesar de la atmósfera festiva, aquellas reuniones tenían un propósito serio: los manifestantes pedían que la primera ministra electa, Yingluck Shinawatra, dimitiera, ya que la acusaban de corrupción. Cuando la primera ministra Yingluck llamó a las urnas, los manifestantes salieron a las calles *en contra* de las elecciones.

Muchos de los organizadores del movimiento, sorprendentemente, procedían del Partido Demócrata. Liderados por el antiguo secretario general del partido, Suthep Thaugsuban, un grupo denominado Comité de Reforma Democrática del Pueblo (PDRC) organizó una elaborada campaña para impedir que las elecciones tuvieran siquiera lugar. Los activistas del PDRC y del Partido Demócrata impidieron físicamente que los candidatos se registraran, y los líderes de las protestas llamaron a que se boicotearan los comicios.

Los demócratas,[53]al parecer coordinados con los manifestantes, decidieron a última hora no participar en las elecciones a modo de protesta, y dos días antes de poder acceder a las urnas,[54]un grupo de abogados que trabajaba para los demócratas registró una petición para que se declararan nulas. El día de los comicios, los manifestantes interfirieron con el reparto de papeletas, presionaron a los trabajadores electorales para que cerraran los lugares habilitados para el sufragio e intimidaron a los votantes.[55]El proceso electoral se interrumpió en casi una de cada cinco circunscripciones.[56]En muchos casos, los empleados de las elecciones no pudieron acudir a sus colegios electorales en medio de multitud de manifestantes. Los frustrados votantes hacían cola con las tarjetas de inscripción en la mano mientras gritaban: «¡Elecciones, elecciones! ¡Queremos votar hoy!». En cambio, los manifestantes, principalmente de la burguesía de Bangkok, renunciaron a las elecciones. Uno de sus eslóganes, propuesto por la magnate inmobiliaria Srivara Issara cuando se introdujo en el movimiento, era: «¡La rectitud moral está por encima de la democracia!».[57]

Los manifestantes consiguieron impedir las elecciones de febrero de 2014 y el Tribunal Constitucional finalmente las anuló. En mayo, la primera ministra Yingluck fue destituida como consecuencia de un mero tecnicismo. Dos semanas después, el ejército, con el visto bueno del rey, declaró la ley marcial, abolió la Constitución y formó una junta llamada «Consejo Nacional para la Paz y el Orden», así puso fin a la democracia tailandesa. Los activistas del PDRC lo celebraron repartiendo rosas entre los

soldados y agradeciéndoles su servicio. «Es un día victorioso —dijo el líder de las protestas, Samdin Lertbutr—. El ejército ha hecho su trabajo. Y nosotros hemos hecho el nuestro.»[58]Después los demócratas se unieron al Gobierno conformado por el ejército, lo que supuso un apoyo implícito al golpe.[59]

¿Cómo pudo ser que un partido del sistema como el de los demócratas tailandeses, considerado durante largo tiempo como abanderado de la democracia, llegara a rechazar las elecciones y aceptara un golpe militar?

Los demócratas eran un partido formado por profesionales, estudiantes universitarios y votantes de la clase media urbana; del tipo que frecuentaba las protestas del PDRC. Sus bases se concentraban en Bangkok y en partes del sur de Tailandia. Pero Bangkok no es más que una pequeña isla en un país de setenta millones de habitantes, y los demócratas jamás se esforzaron en atraer a los pobres agricultores del arroz, a los conductores de taxi, a los pequeños tenderos y a otros votantes rurales o de ciudades menores que poblaban el interior del país, al norte de Bangkok. Durante muchos años apenas tuvo importancia que los ignorasen. Los millones de votantes de las provincias tailandesas no tenían afinidades estables dentro de la panoplia de partidos nacionales de la lejana Bangkok, y sus votos a menudo eran objeto de compra por parte de políticos locales que hacían de intermediarios.[60]Esta fragmentación permitió a los demócratas seguir siendo competitivos, a pesar de estar mayoritariamente consignados a Bangkok y el sur. Pero todo eso cambió en los años noventa. La crisis financiera asiática de 1997 dañó el apoyo popular a los partidos convencionales, en especial a los demócratas, lo que permitió que el magnate Thaksin Shinawatra y su recién formado partido Thai Rak Thai (Los Tailandeses Aman a los Tailandeses) arrasaran con su victoria en las elecciones de 2001.

Thaksin fue un primer ministro polémico, cuyo Gobierno se enfrentó a numerosas acusaciones de corrupción.[61]Pero también era un político de mucha astucia, que comprendió que aprobar medidas dirigidas a las regiones más pobres y rurales del norte le recompensaría en las urnas. En 2001, Thaksin hizo campaña por

un nuevo «contrato social» que incluía una moratoria de tres años sobre la deuda de los agricultores, ayudas económicas para que algunos pueblos diversificaran sus economías más allá del cultivo de arroz y un ambicioso programa de sanidad universal.[62] Y lo cumplió. Su Gobierno gastó miles de millones de dólares en políticas públicas dirigidas a los votantes más pobres, convirtiendo a Tailandia en uno de los primeros países de renta media con sanidad universal en el mundo.[63] Los niveles de pobreza descendieron de forma radical, especialmente en el ámbito rural, y por primera vez en décadas bajaron los niveles de desigualdad.[64]

Las políticas sociales de Thaksin se vieron recompensadas en las urnas. En las elecciones de 2005, su Thai Rak Thai logró un sensacional 60 por ciento del voto, casi triplicando la posición de los demócratas, que quedaron en un lejano segundo puesto. De repente, los demócratas dejaban de estar en situación de competir. Cuando Thaksin, acechado por las críticas a sus transacciones financieras, llamó a nuevas elecciones parlamentarias en 2006, el compromiso de los demócratas con el sistema democrático empezó a hacer aguas. Llamaron a un boicot de los comicios (Thaksin volvió a ganar de forma apabullante) y, poco después, las elecciones serían invalidadas por el Tribunal Constitucional. Unos cuantos meses más tarde, el ejército asumió el poder mediante un golpe de Estado que forzó a Thaksin a exiliarse para evitar su detención. Aunque el ejército programó una nueva jornada electoral para 2007, ilegalizó el partido de Thaksin, el Thai Rak Thai.

Sin embargo, su prohibición no surtió efecto. En las elecciones de 2007 ganó el Partido del Poder Popular, una nueva formación que suplía la ausencia del Thai Rak Thai y del exiliado Thaksin. Cuando este partido también fue disuelto, los seguidores de Thaksin se reagruparon en un tercer partido, Pheu Tai. Bajo el liderazgo de la hermana de Thaksin, Yingluck Shinawatra, ganaron las elecciones parlamentarias de 2011, consiguiendo casi el doble de escaños que los demócratas.

Por entonces los demócratas parecían incapaces de ganar unas elecciones libres y justas. A pesar de ser cercanos a la monarquía y

el respaldo del *establishment* de Tailandia, perdieron cinco veces seguidas desde 2001 a 2011.

Aunque no solo era la irrelevancia electoral de los demócratas lo que llevó a sus votantes formados, profesionales y de clase media a las calles en 2013 y 2014. Como tampoco fue meramente la furia de sus electores ante la supuesta corrupción de la administración Yingluck, o una propuesta de ley de amnistía que permitiría al exiliado Thaksin a volver a Tailandia. Aquella ira tenía raíces más profundas: la élite de Bangkok cada vez se resentía más del cambiante equilibrio de poder, riqueza y estatus en la sociedad tailandesa. Llevaba mucho tiempo situada en lo más alto de las jerarquías políticas, económicas y culturales de Tailandia. Las universidades más prestigiosas estaban en Bangkok. La gente acomodada de la capital mandaba a sus hijos a facultades de Gran Bretaña o Estados Unidos. Estas instituciones de élite eran, a su vez, el principal método de incorporación a puestos del sector privado y del Gobierno. Aunque los gobiernos iban y venían con notoria frecuencia en el siglo XX, el círculo de las élites poseedoras de un estatus elevado permanecía estable y cerrado.

Aquello empezó a cambiar con Thaksin. A partir de 2001,[65]la parte de la renta nacional correspondiente a los pobres había ido en aumento, lo que redujo la desigualdad pero exprimió a las clases medias urbanas. Thaksin y Yingluck movilizaron a los pobres en el medio rural como nadie lo había hecho antes, despreciando al consentido sector del Bangkok céntrico que había dominado la política tailandesa durante décadas. Aunque Thaksin tenía su reputación manchada por las acusaciones de corrupción, evasión de impuestos y abuso de poder, el continuo éxito electoral de su movimiento no dejaba lugar a dudas acerca de que su atractivo popular era duradero.[66]

En ese momento, lo que en realidad sacudió a la élite social y política de Bangkok por encima de las victorias de Thaksin fue *quién* estaba ganando en el otro extremo. La heredera de la cerveza Singha, Chitpas Bhirombhakdi, convertida en una glamurosa militar de a pie durante las protestas de 2014, plasmó este sentimiento al declarar, en una entrevista para *The Japan Times*,

que los tailandeses no contaban con una «auténtica comprensión» de la democracia, «especialmente en las zonas rurales».[67]Otro manifestante de enorme repercusión, Petch Osathanugrah, conocida personalidad cultural, además de ser director general de una empresa de bebidas energéticas tailandesa, dijo a un periodista: «En realidad no estoy a favor de la democracia. No creo que estemos preparados para ella. Necesitamos un Gobierno fuerte como el de China o Singapur: casi como una dictadura, pero por el bien del país».[68]La mayoría de los manifestantes compartían ese punto de vista. En una encuesta de 2014, se preguntó a 350 manifestantes si estaban de acuerdo con la frase «los tailandeses no están listos para el derecho igualitario al voto». Solo el 30 por ciento de los encuestados dijo que aquella proposición «ofendía seriamente a los principios de la democracia», mientras que el 70 por ciento estuvieron de acuerdo con ella, o dijeron: «Debemos aceptar cómo es».[69]

Para muchos tailandeses con estatus elevado, aquella reticencia a la democracia tenía que ver con su miedo a verse desplazados. Mientras que en su día las clases medias urbanas habían sido las protectoras de la normalidad democrática en Tailandia, hacia la primera década del siglo XXI, como observaba el escritor Marc Saxer:

> Sentían que ellos mismos eran algo parecido a la minoría. Movilizados por astutos emprendedores políticos, ahora era la periferia la que ganaba todas las elecciones con comodidad. Ignorando el ascenso de una clase media rural que exige una participación plena en la vida política y social, la clase media del centro interpretó las demandas de igualdad de derechos y bienes públicos como «pobres que se vuelven codiciosos».[70]

Ese era el sentimiento que avivaba las manifestaciones de 2013 y 2014. Su principal objetivo, según el politólogo Duncan McCargo, era volver «a una imaginada era pre-Thaksin en la que el entramado dirigente y sus apoyos todavía podían llevar la batuta, y en la que los votantes provinciales podían ser marginados».[71]

Muchos de los grupos de clase media que habían impulsado la democracia en los noventa empezaban a tener miedo de sus

consecuencias. Por eso, cuando la primera ministra Yingluck trató de aplacar las protestas con unas nuevas elecciones en 2014, los demócratas repudiaron su convocatoria y las boicotearon. De hecho, no había nada a lo que los manifestantes y sus aliados de los demócratas tailandeses tuvieran más miedo que a unas elecciones libres y justas. Por eso los demócratas, que en su día se habían opuesto a los golpes y al poder absolutista de la realeza, pasaron a apoyar con discreción el golpe de 2014 y luego se unieron al Gobierno dominado por los militares.[72]Cuando la democracia dio paso a un movimiento que ponía en jaque la hegemonía social, cultural y política de la élite de Bangkok, los demócratas se revolvieron contra la democracia.

El miedo es con frecuencia lo que anima los giros hacia el autoritarismo. El temor a perder el poder político y, tal vez más importante, el miedo a perder el estatus dominante en la sociedad. Pero si el miedo puede conducir a partidos convencionales a desviarse de la democracia, ¿hacia dónde los lleva en su lugar? En Tailandia, quienes asaltaban la democracia eran fáciles de identificar: por duodécima vez en la historia del país, la cúpula militar tomó el poder. Sin embargo, en democracias más consolidadas, es más difícil detectar los métodos, e incluso más, detenerlo.

2

La banalidad del autoritarismo

A finales de enero de 1934, los parisinos estaban nerviosos. Hacía algo más de una década que Francia había salido victoriosa de la Primera Guerra Mundial. La mayoría de los ciudadanos se habían acostumbrado a pensar que su país, la democracia más antigua de Europa, era un modelo para el resto del continente. Hacia 1934, sin embargo, el mundo parecía haberse trastornado. La Gran Depresión, una sucesión de notorios escándalos de corrupción, la creciente agitación en las calles y un período de inestabilidad gubernamental —trece primeros ministros en cinco años— provocaron que una parte cada vez mayor de la ciudadanía se sintiera furiosa y desafecta.

La tarde del 6 de febrero de 1934, decenas de cientos de jóvenes airados, en su mayoría miembros de asociaciones de veteranos y milicias (o «ligas» de derechas), con nombres como Jeunesses Patriotes (Juventudes Patrióticas), Action Française (Acción Francesa) o la Croix de Feu (Cruz de Fuego), se reunieron en la célebre Place de la Concorde, al otro lado del río, enfrente del edificio del Parlamento Nacional. Aunque los grupos divergían en cuanto a sus ideologías y objetivos, lo que les unía era la hostilidad que sentían hacia la democracia parlamentaria. Algunos de ellos eran cuasifascistas y emulaban a los «camisas negras» de Mussolini.[1]Las Jeunesses Patriotes, por ejemplo, admiraban el fascismo italiano y a menudo marchaban por las calles con boinas y chaquetas azules.[2]Algunos grupos pretendían abolir el Parlamento y reemplazarlo por un «Ministerio de Seguridad Pública», o incluso un Gobierno bonapartista restaurado.[3]Otros, sencillamente, tenían la intención de impedir el recuento oficial de

votos en la sede parlamentaria con la esperanza de establecer un Gobierno de derechas.[4]No obstante, todos los grupos se veían a ellos mismos como patriotas, y adoptaban eslóganes como «Francia para los franceses», mientras que tachaban a sus rivales liberales y socialistas de ser unos débiles o incluso traidores.[5]

Aquella misma noche, los acontecimientos dieron un terrible giro. Una muchedumbre enardecida se encaminó hacia el Parlamento para ir a por sus ocupantes.[6]Incendiaron un autobús. Decenas de miles de alborotadores lanzaron sillas, rejas de metal y piedras. Armados con largos postes con cuchillas en los extremos, profirieron gritos y marcharon a través de la plaza hacia la sede del Parlamento. La policía montada llegó frenando su avance. Los sublevados usaron los largos palos que llevaban para acuchillar las patas de los caballos. Desde el interior del Parlamento se oían los tiros del exterior. «¡Están disparando!», gritó uno de los miembros. Desde dentro, eran asediados por cánticos como «¡Los diputados a la horca!»,[7]que ya llevaban días escuchando frente al edificio. Algunos se pusieron a cubierto mientras un diputado exclamaba: «¡Están asaltando las puertas de las cámaras!».[8]Los periodistas que había en el edificio se retiraron a la sala de prensa, en cuya puerta colgaron un cartel escrito a mano en el que se leía: «Nota a los manifestantes: ¡aquí no hay diputados!».[9]Un periodista de *The Guardian*, de Manchester, atrincherado en esta habitación, telefoneó a sus editores para entregar su crónica al tiempo que se sucedían los acontecimientos. Sus agitadas palabras aparecieron en la portada de *The Guardian* al día siguiente:

> Llamo desde una fortaleza asediada. Nadie puede abandonar la Cámara de los Diputados. El distrito entero, al sur del río, ha sido acordonado por la policía, y mientras les hablo miles de amotinados tratan de atravesar la barricada de furgones policiales para entrar en el edificio.[10]

Llegaron más agentes. Por la noche, hacia las diez y media, la policía ya había desistido de intentar atravesar las puertas del Parlamento. Para entonces ya habían muerto varias personas y había cientos de heridos. Los parlamentarios tuvieron que

escabullirse por la puerta trasera temiendo por sus vidas. Un ministro intentó escapar, pero los asaltantes lo descubrieron y lo arrastraron hacia el río al grito de «¡tiradlo al Sena!». (Fue rescatado por agentes policiales que en aquel momento estaban cerca.)[11]

La democracia francesa sobrevivió al asalto del 6 de febrero de 1934, aunque sufrió un gran debilitamiento. El primer ministro Édouard Daladier dimitió de inmediato. Fue sustituido por Gaston Doumergue, un político derechista al que las ligas consideraron aceptable.[12]El objetivo de algunos de los insurrectos se había logrado: el Gobierno Daladier, de centroizquierda, había sido derribado por la presión de la calle. Los extremistas de derechas se sintieron incentivados a movilizarse.

Muchos políticos franceses respondieron a aquellos momentos convulsos con indignación. El presidente Albert Lebrun, un conservador moderado, denunció la sublevación como un «asalto a las instituciones republicanas».[13]

Los partidos de izquierda (socialistas y comunistas), así como el centro liberal (los radicales) condenaron el ataque a la par.[14]Aunque antes del 6 de febrero habían estado fuertemente divididos en torno a una gran variedad de consideraciones, ahora establecían un acercamiento, inquietos por si la insurrección era un presagio de la llegada del fascismo. Incluso la ultraizquierda comunista, de la que una parte había marchado contra la República aquel 6 de febrero, cerraba filas en torno a los socialistas y liberales.

Con todo, el partido conservador mayoritario de Francia, la Federación Republicana, mantuvo una postura de notable tolerancia hacia los grupos extremistas. Fundada en 1903, la Federación fue presidida durante muchos años por Louis Marin, un hombre con firmes credenciales democráticas.[15]Sin embargo, a principios de los años treinta la agrupación se fue inclinando hacia la derecha, aunque primero flirteó con las Jeunesses Patriotes, a las que acabó acogiendo en su seno. Tradicionalmente considerada de las élites, la Federación dependía cada vez más de las Juventudes y otras ligas de ultraderecha como fuente de empuje y activismo. Ya

que las mismas personas aparecían como miembros de ambos grupos, la linde entre el partido «oficial» y los activistas violentos de las ligas se volvió difícil de distinguir.

Por lo menos treinta y cinco parlamentarios pertenecían a las Jeunesses Patriotes, y tres de sus líderes también formaban parte de la cúpula del grupo parlamentario federalista.[16]Las Jeunesses Patriotes, con su indumentaria militar, se encargaban de la seguridad durante los mítines de la Federación Republicana y ayudaban a repartir votos durante las jornadas electorales. Philippe Henriot, un destacado parlamentario (quien más tarde se convertiría en ministro de propaganda del Gobierno de Vichy, aliado de los nazis), describió a las Jeunesses Patriotes como las «tropas de asalto» de su partido.[17]

La irrupción violenta del 6 de febrero de 1934 no se tradujo en un despertar entre la mayoría de los conservadores franceses. Al contrario, los dirigentes de la Federación, impelidos por su odio a la izquierda, redoblaron su apoyo a las ligas.

La simpatía de los conservadores convencionales por los extremistas antidemócratas constituyó un factor importante en el asalto de aquel 6 de febrero. Más adelante los testimonios del ataque contaron que los insurrectos tenían cómplices dentro del propio Parlamento, que incluían a la Federación y a otros políticos de derechas.[18]El 6 de febrero, el epicentro de la acción fue el Ayuntamiento de París, el Hôtel de Ville, que el historiador Serge Berstein describe como «una especie de cuartel general político de los acontecimientos de aquel día».[19]La mañana del asalto, un grupo de políticos conservadores de apariencia respetable que incluía a concejales y parlamentarios se reunió en el Hôtel de Ville, conscientes de lo que iba a suceder. Algunos de ellos se manifestarían junto a los insurrectos esa misma tarde. Aquel grupo firmó pasquines con sus propios nombres que serían repartidos y pegados en las paredes de la ciudad con antelación para animar a que se actuara en las calles: «Estamos en un momento decisivo: toda Francia espera que la capital hable; ¡París debe hacerse oír!».[20]

Inmediatamente después del asalto, otros conservadores de

renombre quitaron importancia al asunto e incluso lo intentaron justificar. Relatar el «sentido del 6 de febrero» se convirtió en una batalla política de alto riesgo.[21]Algunos periódicos y políticos conservadores desestimaron la importancia del asalto, denominándolo una manifestación legítima por parte de veteranos apolíticos y negando que existiese una conjura para derrocar el Gobierno.[22]

No obstante, la mayoría de los políticos y de la prensa conservadora ofrecían otra versión totalmente distinta. Los insurrectos, aseguraban, eran unos heroicos patriotas que habían intentado salvar la República de la corrupción, el comunismo y la disfunción política.[23]Era la policía la que debía ser condenada por su brutalidad.[24]Un vicepresidente de la Federación Republicana describió a los sublevados como «mártires que nunca podrán ser lo bastante alabados u honrados, que pagaron con sus vidas. La sangre que brotó el 6 de febrero de 1934 será la semilla de un gran despertar nacional».[25]El concejal Charles des Isnards, descrito como «el cerebro tras el 6 de febrero»,[26]más adelante respondería a preguntas acerca de su apoyo a una tentativa violenta de cambiar el Gobierno diciendo: «Hay momentos en que la insurrección es el más sagrado de los deberes».[27]

Tras ayudar al asalto del 6 de febrero y defenderlo en público después, los conservadores franceses trataron de poner trabas a una investigación oficial del suceso. Justo después del ataque, un comité parlamentario de investigación (la *commission d’enquête*) compuesto por cuarenta y cuatro miembros presentó miles de páginas con pruebas basadas en entrevistas, archivos policiales y demás documentos. Debido a que el comité tenía la intención de representar la diversidad de partidos que componía el Parlamento, incluyó a miembros de la derecha.

Según la mayoría de las versiones, el presidente del comité, Laurent Bonnevay, centrista, intentó liderar un enfoque imparcial. En cambio, desde el principio algunos de sus miembros de derechas se dedicaron a boicotearlo desde dentro. Informados de rumores y acusaciones por la prensa, una y otra vez trataron de socavar la recopilación de datos. Buscaron utilizar un lenguaje en

el informe que dejara en buen lugar a los insurrectos, tildándolos de víctimas, mientras que el peso de la culpa se lo llevaban el Parlamento y la policía.[28]Con el intento de forzar un consenso, el comité extrajo una serie de conclusiones descafeinadas que sobre todo se centraban en la respuesta policial.[29]

Incluso una reacción tan moderada como aquella pareció ir demasiado lejos para los miembros derechistas de la comisión. De modo que cuando su presidente presentó el dictamen, un destacado miembro tanto de aquel comité como de la Federación decidió torpedearlo rechazando sus conclusiones, a la vez que proponía un relato alternativo de lo acontecido. Según este, los insurrectos eran «nobles», el Gobierno y la policía eran los culpables y detener a quienes trataron de irrumpir en el Parlamento fue una acción injustificada. Finalmente, los representantes de la Federación Republicana salieron del comité.[30]

El informe resultante acabó siendo inservible. Sin poder atribuir responsabilidades por los sucesos del 6 de febrero, la democracia francesa empezó a flaquear gravemente. En seis años habría muerto.

El 6 de febrero de 1934 fue un día de consecuencias relevantes para la democracia francesa, aunque lo importante de los acontecimientos de aquel día no fue tanto lo que hicieron los sublevados en las calles como la reacción de los políticos de la derecha convencional. Con el tiempo, su respuesta jugaría un papel sutil a la par que decisivo en el asesinato de la democracia.

Los políticos comprometidos con este sistema, o a quienes el politólogo Juan José Linz llama «demócratas leales»,[31]siempre deben cumplir tres premisas fundamentales. En primer lugar, respetar el resultado de unas elecciones libres y justas, ganen o pierdan.[32]Ello significa aceptar la derrota de manera consistente y sin vacilar. En segundo, los demócratas deben rechazar sin ambigüedades la violencia (o la amenaza de la misma) como medio para lograr fines políticos. Los políticos que apoyan intervenciones militares, organizan golpes de Estado, incitan a la

insurrección, a poner bombas, a asesinar, a cometer otros actos terroristas, o que se valen de milicias o matones para apalear a sus oponentes o intimidar al electorado no son demócratas. En efecto, cualquier partido o persona que viole *una o ambas reglas básicas* debería ser considerado una amenaza para la democracia.

También existe un tercer gesto, más sutil, que se exige de los demócratas leales: romper siempre con las fuerzas antidemocráticas. Los asesinos de la democracia siempre tienen cómplices: gente inmersa en la política, que aparentemente acata las reglas del sistema, pero que a la vez abusa de ellas sin hacer ruido. Estos son los que Linz denomina «demócratas *semileales*».[33]

De lejos puede que los demócratas semileales aparenten ser leales. Son políticos normales, a menudo de los de traje y corbata, que en apariencia siguen las normas, puesto que logran medrar con ellas. Nunca se les verá actuar de forma antidemocrática. De modo que, cuando mueren las democracias, sus huellas dactilares rara vez se encuentran en el arma del crimen. En cualquier caso, ello no debe inducirnos al error: los políticos semileales juegan un papel crucial, si bien oculto, en el colapso del sistema político.[34]

Mientras que los demócratas leales rechazan clara y consistentemente las conductas antidemocráticas, los semileales actúan con más ambigüedad. Lo suyo es nadar y guardar la ropa: airean su apoyo a la democracia mientras que hacen la vista gorda con la violencia o el extremismo antidemocrático. Esta hipocresía es lo que los convierte en gente peligrosa. A los personajes abiertamente autoritarios —como pueden ser quienes conspiran para un golpe, o los insurrectos armados— se los ve llegar de lejos; a menudo carecen de apoyos o de una legitimidad que les baste para destruir una democracia. Sin embargo, cuando los semileales —que disimulan entre las bambalinas del poder— les echan una mano, las fuerzas declaradas autoritarias se convierten en un peligro mucho mayor. Las democracias se meten en un embrollo cuando los partidos convencionales toleran, consienten o protegen a extremistas autoritarios; cuando estos se convierten en sus facilitadores. De hecho, a lo largo de la historia, la cooperación entre autoritarios y demócratas semileales de aspecto respetable ha

constituido una receta para el colapso del sistema.[35]

¿Cómo se puede distinguir un demócrata leal de uno semileal? Tenemos una prueba de fuego en la respuesta de los políticos a procederes violentos o antidemocráticos *en sus propias filas*. Oponerse a los autoritarios del otro lado del espectro político es fácil. A los progresistas les cuesta poco denunciar y oponerse a los fascistas. Asimismo, podemos confiar en que los conservadores denunciarán y se opondrán a los izquierdistas radicales. Ahora bien, ¿qué pasa con los elementos antidemocráticos que surgen en el seno del propio partido? ¿En un ala juvenil radical, una facción emergente, un recién llegado a la política, o bien un grupo aliado al que muchos dirigentes pertenecen o con el que simpatizan? O, quizás, ¿un nuevo movimiento político que entusiasma a buena parte de las bases del partido?

Al confrontarlos a estas pruebas, los demócratas leales deben seguir cuatro normas básicas. Lo primero que tienen que hacer es *expulsar a los extremistas antidemocráticos de sus propias filas*, aunque eso les suponga la oposición de los militantes. En los años treinta, por ejemplo, el mayor partido conservador sueco echó a los cuarenta mil miembros de sus juventudes, la Organización Juvenil Nacional de Suecia, que se había adherido al fascismo y a Hitler.[36]Por el contrario, los semileales toleran e incluso encuentran un hueco para los extremistas antidemócratas. Aunque en privado puede que no estén de acuerdo con ellos, permanecen callados por pura conveniencia política: les asusta dividir el partido y, en última instancia, perder votos.

En segundo lugar, los demócratas leales *cortan todo vínculo —público o privado— con grupos aliados que incurran en conductas antidemocráticas*. No solo evitan estas alianzas, sino que se niegan a ser refrendados por ellos, evitan las apariciones públicas conjuntas y se abstienen de conversaciones secretas o a puerta cerrada. Los demócratas semileales, por contra, cooperan con extremistas. Pueden formar alianzas políticas, como los republicanos españoles de centroizquierda que formaron una coalición con izquierdistas que habían participado en una insurrección armada en 1934.[37]Sin embargo, lo más habitual es que la cooperación sea imprecisa y no

oficial. Puede que mantengan distancias con los extremistas en público, pero que se alíen con ellos en secreto o acepten su apoyo.

Por último, los demócratas leales *condenan sin ambigüedades la violencia política, así como otras conductas antidemocráticas*, aunque las cometan aliados o grupos emparentados políticamente. Durante períodos de extrema polarización o de crisis, las posturas antidemocráticas pueden llegar a gozar de un apoyo considerable por parte de las bases. Incluso entonces, los demócratas leales resisten la tentación de consentir, justificar o amoldarse a dichos posicionamientos. Lo que hacen es condenarlos de manera pública e inequívoca. Cuando los fieles al candidato presidencial Jair Bolsonaro, que había perdido, asaltaron el Congreso el 23 de enero de 2023, buscando invalidar el resultado de las recientes elecciones, el propio líder del partido de Bolsonaro condenó sus actos de manera contundente e inmediata. Cuando los aliados ideológicos son responsables de acciones violentas o antidemocráticas, los demócratas leales toman la iniciativa para que sean juzgados ante la ley.

Por el contrario, los demócratas semileales niegan o relativizan los actos violentos o antidemocráticos. A veces culpan de las agresiones a operaciones de «falsa bandera».[38]Puede que minimicen la importancia del proceder antidemocrático, que se salgan por la tangente cuando los critican, acusando de conductas similares (o peores) al bando opuesto, o que en cualquier caso justifiquen o consientan estas conductas. Con frecuencia, los semileales quieren tenerlo todo: manifiestan su desacuerdo con la manera de proceder de los autores de los hechos mientras que simpatizan con sus fines. O, simplemente, permanecen en silencio ante ataques violentos contra la democracia.

Por último, cuando es necesario, *los demócratas leales unen fuerzas con partidos rivales y prodemocráticos para aislar y derrotar a los extremistas antidemocráticos*.[39]No es sencillo. Formar coaliciones amplias para defender la democracia a menudo requiere que los demócratas leales dejen temporalmente a un lado principios y objetivos que les son preciados para poder trabajar con políticos del lado opuesto del espectro ideológico, con quienes derrotar a

grupos que les pueden ser más cercanos en ideología. Los demócratas semileales, al contrario, se niegan a cooperar con sus rivales incluso cuando la democracia está en horas bajas.

Estos principios de la política democrática leal pueden parecer simples y concisos, pero no lo son. Cuando buena parte de las bases de un partido simpatiza con extremistas antidemocráticos, los líderes que denuncien o rompan filas con los radicales a menudo corren riesgos políticos sustanciales. Los demócratas leales lo hacen de todos modos, y así ayudan a preservar la democracia.

Un buen ejemplo de respuesta democrática y leal a un asalto autoritario lo ofrece la España de principios de los años ochenta. La primera democracia española (1931-1936) había colapsado víctima de la polarización y la Guerra Civil. La conducta semileal, tanto por parte de los principales partidos de centroderecha como de los de centroizquierda, contribuyó a aquel colapso. En 1934, los socialistas y comunistas —por temor al fascismo— iniciaron una insurrección armada para impedir que los conservadores entraran en el Gobierno. No obstante, los políticos del centroizquierda establecido los toleraron y luego formaron una alianza electoral con ellos.[40]De un modo parecido, cuando oficiales del ejército —por temor al comunismo— conspiraron para acabar con el Gobierno republicano, la mayoría de los políticos conservadores los apoyaron, decisión que sumió a España en una guerra civil y una dictadura.[41]

Finalmente, la democracia española fue restaurada en 1976, tras cuatro décadas de autoritarismo bajo el mando de Francisco Franco. En la etapa inicial de la Transición, el crecimiento económico iba lento, la inflación causaba estragos y el país sufría una ola de ataques terroristas por parte de los separatistas vascos.[42]Adolfo Suárez, presidente del Gobierno, fue perdiendo popularidad.[43]Suárez ya había molestado a sus antiguos aliados de la derecha franquista cuando legalizó el Partido Comunista en 1977.[44]Al parecer, esta decisión le había hecho perder el favor del rey Juan Carlos, que todavía poseía una enorme influencia, entre el ejército en particular.[45]Los socialistas, una de las bestias negras de

la derecha desde hacía tiempo, tenían la determinación de ganar las siguientes elecciones.

En enero de 1981, Suárez anunció su dimisión. El 23 de febrero el Parlamento iba a votar a su sucesor, el centrista Leopoldo Calvo-Sotelo. Pero a las 18.23 horas, mientras se realizaba el escrutinio, doscientos guardias civiles, dirigidos por el teniente coronel Antonio Tejero, asaltaron el Congreso con pistolas y fusiles semiautomáticos. Asegurando falsamente que actuaban bajo órdenes del rey, los guardias tomaron el control del edificio parlamentario.[46]Los conspiradores trataban de impedir la elección de Calvo-Sotelo y obligar a las Cortes Generales a elegir al general Alfonso Armada como presidente del Gobierno.[47]El general Armada era un veterano ayudante del rey Juan Carlos que aspiraba a ser el De Gaulle español.[48]Su cercanía a Juan Carlos llevó a creer a los golpistas que el rey los apoyaría.[49]

El teniente coronel Tejero se subió al atril del presidente del Parlamento blandiendo la pistola al grito de «¡al suelo todo el mundo!». Los guardias civiles dispararon al techo mientras los diputados, presos del pánico, se agachaban bajo sus escaños. Solo tres hombres se negaron a esconderse:[50]el presidente Suárez, el vicepresidente Manuel Gutiérrez Mellado, un general franquista que, indignado, se enfrentó a Tejero y lo tuvieron que detener, y Santiago Carrillo,[51]un viejo comunista que había pasado su vida combatiendo a los franquistas y que se quedó tranquilamente sentado mientras fumaba un cigarrillo. Tanto Gutiérrez Mellado, que en los años treinta había participado en el golpe de Franco, como Carrillo, un revolucionario vitalicio, eran recién llegados a la democracia, pero ambos pusieron el cuerpo para defenderla.[52]

El presidente del Gobierno y otros 350 parlamentarios fueron tomados como rehenes aquella noche. Los tanques marcharon por las calles de Valencia.[53]Los soldados ocuparon la televisión estatal y las emisoras de radio. En la radio nacional sonaba música militar.[54]En el exterior del Congreso de los Diputados, derechistas que apoyaban el golpe cantaban el himno fascista español, el *Cara al sol*.[55]

Al final el golpe fracasó porque el rey se negó a participar en

él. Poco después de medianoche, hizo una aparición televisiva —vestido con indumentaria militar— y dio un discurso en el que defendía el orden democrático.

Casi igual de importante fue la reacción de los políticos españoles. El espectro de partidos al completo, desde los comunistas en la izquierda hasta los exfranquistas, denunciaron el golpe. Dentro del Congreso, Manuel Fraga, quien había sido un destacado miembro del Gobierno de Franco y por entonces dirigente de la derechista Alianza Popular, dio un respingo y exclamó: «Este es un ataque contra la democracia», a lo que sus aliados parlamentarios respondieron gritando: «¡Viva España! ¡Viva la democracia!». Cuatro días después, más de un millón de personas marcharon por las calles de Madrid en la que el periódico *El País* llamó la «mayor manifestación de la historia de España».[56] A la cabeza, los líderes de todos los partidos —el comunista Carrillo, el derechista Fraga, el dirigente socialista Felipe González y líderes de la saliente Unión de Centro Democrático— caminaron unos junto a los otros.[57] Políticamente aislados, los golpistas fueron arrestados, juzgados y sentenciados a treinta años de prisión. Tras aquello, los golpes de Estado se convirtieron en algo impensable en España, y su democracia se afianzó.[58]

Así se defiende la democracia. En España, la efeméride del 23 de febrero se celebra públicamente como un momento de triunfo. En 2006, en el veinticinco aniversario de aquel suceso, el Parlamento emitió un comunicado suscrito por todos los partidos que describía el golpe como «el intento más grave de violar las libertades a la fuerza y abortar el proceso democrático de España». Nadie excusó el intento de golpe. Nadie le restó la importancia que tuvo.

Una conducta semileal a menudo aparenta ser benigna. Al fin y al cabo, con frecuencia la llevan a cabo políticos respetables que no han participado de forma directa en asaltos violentos contra la democracia. Pero esta es una percepción profundamente engañosa.

La historia nos enseña que cuando los políticos tradicionales persiguen la senda oportunista de la semilealtad, tolerando o consintiendo a extremistas antidemocráticos, estos últimos suelen salir reforzados, y lo que parecía ser un sistema firme puede llegar a implosionar.

Por un lado, la semilealtad protege a las fuerzas antidemocráticas. Cuando los extremistas violentos disfrutan del apoyo tácito de un partido convencional tienen más posibilidades de estar protegidos ante la persecución legal o de ser expulsados de un cargo público. Consideremos de nuevo lo vivido en Francia. Muchos de los conservadores normales y corrientes que dieron alas a los insurrectos del 6 de febrero tendrían más adelante carreras de éxito. El día en que tuvieron lugar los asaltos, el parlamentario Pierre Laval habló por teléfono con el teniente coronel François de La Rocque, miembro de la Croix de Feu (Cruz de Fuego), y lo aconsejó en cuanto a tácticas.[59]Nunca se le responsabilizó por su papel en el asalto, y el ambicioso Laval prosiguió su veloz ascenso en la política. Terminó siendo vicepresidente y luego jefe de Gobierno del régimen de Vichy, que se formó en 1940 como un Estado aliado con los nazis.

No solamente se protegió a miembros preeminentes de la élite política. Después del asalto, algunos manifestantes de derechas que habían resultado heridos formaron un grupo que llamaron Association des Blessés et Victimes du 6 Février (Asociación de Heridos y Víctimas del 6 de Febrero). Lejos de ser procesados, expulsados de la vida pública o de que se les impidiera ocupar cargos en un futuro, las «víctimas» fueron tratadas como héroes en círculos conservadores influyentes. Louis Darquier de Pellepoix, un infame antisemita, se convirtió en su presidente. Según su biógrafo, la euforia de la violencia y la herida que sufrió aquel día le otorgaron una nueva misión vital. Darquier sentía que «le había tocado la lotería».[60]Después de la invasión alemana de 1940, él y muchas de las «víctimas» del conflicto se unieron con entusiasmo al régimen de Vichy. Se convirtió en el comisario francés de Asuntos Judíos como supervisor de la deportación de los judíos a los campos de concentración. Además, un miembro del grupo fue

nombrado presidente del Consejo Municipal de París y otro participante del 6 de febrero —el infame poeta y escritor nacionalista Philippe Henriot— se convirtió en el principal locutor radiofónico del Gobierno de Vichy. Según escribe el historiador Robert Paxton, los veteranos del 6 de febrero «eran una especie de fraternidad, y se podían encontrar candidatos a empleos recomendados como "buenos hombres del 6 de febrero"».[61]

Además de proteger a extremistas antidemocráticos, las conductas semileales legitiman sus ideas. En una democracia sana, los radicales que están en contra del sistema democrático son tratados como parias y rechazados por los medios. Los políticos, gente de negocios y otros miembros de la clase dominante evitan todo contacto con ellos porque temen por sus reputaciones. Pero un apoyo tácito por parte de políticos importantes puede cambiarlo todo, normalizando el extremismo. Los medios de comunicación convencionales empiezan a tratarlos como a cualquier otro político, y los invitan a entrevistas y debates. Puede que algunos empresarios relevantes decidan contribuir económicamente a sus campañas. Los consultores políticos que antes los habían evitado empiezan a devolverles las llamadas, y puede que muchos políticos y activistas que, en privado, simpatizaban con ellos pero no se atrevían a expresar su apoyo en público crean que ahora es seguro hacerlo.

De nuevo, el caso francés resulta ilustrativo. En 1934, la agenda de las Jeunesses Patriotes tenía como objetivo una idea que había sido un completo anatema para la mayor parte del *establishment* político: incluso para el de la democracia de la Tercera República francesa. Mientras que un número cada vez mayor de conservadores empezaba a ver la democracia como corrupta, disfuncional e infiltrada por comunistas y judíos, la «contrarreforma» autoritaria se convirtió en un planteamiento normalizado entre las derechas. Las fuerzas de la derecha radicalizada hablaban del Gobierno reformista del Frente Popular —que accedió al poder en 1936 y estaba liderado por Léon Blum, un socialista judío— en términos apocalípticos, describiéndolo como «estalinista».[62]El eslogan ANTES HITLER QUE BLUM se popularizó

entre la derecha.[63]Los conservadores franceses tradicionalmente se definían como nacionalistas, y muchos de ellos sentían repudio hacia Alemania. Sin embargo, en 1940, su miedo al comunismo, a la infiltración soviética y al cambio social en el país los llevó a subordinarse a los nazis.[64]

Cuando los políticos de todo el espectro ideológico repudian comportamientos violentos o antidemocráticos, a menudo consiguen aislar a los extremistas; así logran desacreditarlos y consiguen disuadir a los demás. En los Estados Unidos de los años cincuenta, el extremista y anticomunista Joseph McCarthy se convirtió en un paria tras ser reprendido por el Senado en una votación de ambos partidos en 1954. Otros senadores «se ausentaban del pleno» en el momento en que tomaba la palabra, y nadie movía un dedo cuando convocaba una rueda de prensa.[65]Sin embargo, cuando los partidos principales toleran, consienten o dan apoyo implícito a extremistas antidemocráticos, su actitud se traduce en un poderoso mensaje: el precio a pagar cuando se actúa en contra de la democracia no es tan alto. El efecto disuasorio se evapora. La semilealtad no se limita a normalizar a las fuerzas antidemocráticas: les da aliento y puede que incluso las radicalice.

Esta es la banalidad del autoritarismo.[66]Muchos de los políticos a la cabeza del colapso de una democracia son poco más que arribistas insaciables que intentan aferrarse a su cargo o conseguir uno mejor. No se oponen al sistema por principios con los que se identifiquen, sino que este les resulta indiferente. Toleran o consienten el extremismo antidemocrático porque es la vía de menor resistencia. Estos políticos a menudo se dicen a sí mismos que están haciendo lo que hace falta para salir adelante. Pero en última instancia, se convierten en socios indispensables para el hundimiento de la democracia.

Los políticos convencionales pueden matar a la democracia cuando dan alas al extremismo antidemocrático, aunque también la pueden socavar de otras maneras. Una de ellas es a través de las tácticas constitucionales duras;[67]conducta que, a grandes rasgos y

según la teoría, es conforme a lo que dicta la ley, pero que al mismo tiempo y de forma deliberada mina su espíritu. No hablamos de la política a puñetazo limpio, cosa que existe en toda democracia, sino más bien del uso de la legislación como arma. Cualquier Constitución, por muy bien concebida que esté, puede ser utilizada para fracturar la democracia; en modos que son técnicamente legales. De hecho, eso es justo lo que convierte a las tácticas duras en algo tan peligroso: los políticos no violan abiertamente la ley, es decir, seguirán teniendo las manos limpias.[68]

Por ende, resulta de vital importancia que los ciudadanos sepan reconocer las tácticas constitucionales duras cuando las tengan ante sus ojos. Incluso las constituciones y las leyes bien diseñadas contienen, inevitablemente, ambigüedades y vacíos jurídicos, y se encuentran abiertas a múltiples interpretaciones, además de poder ser aplicadas de modos diferentes (y en distinto grado). Los políticos pueden explotar esas ambigüedades de formas que distorsionen o subviertan el mismísimo propósito para el que un día se redactaron. Hay cuatro maneras en las que esto se puede llevar a cabo.

1. Abusar de los vacíos legales

No existe ninguna norma o conjunto de ellas con la capacidad de tener en cuenta todas las contingencias. Siempre habrá circunstancias que no estén incluidas de forma explícita en la legislación y sus procedimientos. Si una conducta no está expresamente prohibida, su proceder —sin tener en cuenta si resulta apropiado o no— a menudo se convierte en permisible. Lo vemos en nuestra vida cotidiana: por ejemplo, cuando los hijos recuerdan a sus padres que nunca les «habían dicho que no podían» hacer algo que, en la mente de los adultos, evidentemente estaba fuera de lugar. Cuando las leyes no especifican que algo no se debe hacer de un modo concreto, aparecen oportunidades para abusar de ellas. Las sociedades a menudo fomentan actos que no

están contemplados por un requisito jurídico (dar propinas o cubrirse la boca al toser) mientras que afean acciones que no están legalmente prohibidas (abusar de la ventaja entre equipos de fútbol infantiles que no tienen el mismo nivel, o bien ocupar dos asientos en un autobús o un tren atestado). Las normas sociales, sin embargo, no se pueden reflejar en la legislación, mientras que infringirlas puede acarrearnos críticas, que nos demuestren el reproche sacándonos el dedo índice, o incluso que nos lleven al ostracismo; las personas dispuestas a soportar tales costes las transgreden con impunidad.

Los políticos abusan con frecuencia de los vacíos legales, a menudo perjudicando la democracia. Un ejemplo es la negativa por parte del Senado estadounidense, en 2016, tras la muerte del juez Antonin Scalia, a permitir que Barack Obama nombrara a un nuevo juez del Tribunal Supremo. Según la Constitución, los candidatos a la presidencia de la Corte Suprema deben contar con la aprobación del Senado. Históricamente, este ha utilizado su poder de «asesorar y consentir» con indulgencia. La mayoría de los candidatos cualificados se han aprobado con celeridad, incluso cuando no era el partido del presidente el que controlaba el Senado.[69]De hecho, en los ciento cincuenta años transcurridos entre 1866 y 2016, la Cámara Alta no impidió ni una sola vez que un presidente electo ocupara una vacante en el Tribunal Supremo.[70]A todos los presidentes que han tratado de hacerlo antes de la elección de un sucesor se les ha permitido (aunque no siempre a la primera). En marzo de 2016, sin embargo, cuando el presidente Obama nominó a Merrick Garland —un candidato a juez moderado y muy competente—, los republicanos del Senado se negaron a celebrar vistas, aduciendo que aquel era año de elecciones. Negar la autoridad del presidente para cubrir un puesto en el Tribunal Supremo iba claramente en contra del espíritu de la Constitución. Su decisión permitió a los republicanos del Senado adjudicarse un cargo en el Tribunal Supremo (Donald Trump colocó a Neil Gorsuch en ese puesto en 2017), pero como la Constitución no especifica *cuándo* debe el Senado asumir las candidaturas, aquel hurto fue del todo legal.

2. USO EXCESIVO O INDEBIDO DE LA LEY

Algunas reglas están diseñadas para aplicarse con cautela, o únicamente si se dan circunstancias de excepción. Son normas que requieren templanza o contención en el ejercicio de las prerrogativas legales. Por ejemplo, en el caso de los indultos presidenciales. Si se permitiera que los presidentes de Estados Unidos emplearan toda su potestad a la hora de otorgar perdones, no solo podrían indultar a sus amigos, parientes y donantes, sino también a asesores políticos y aliados que hayan cometido delitos en su nombre, a sabiendas de que si los pillaban, serían perdonados. Las consecuencias equivaldrían a una burla al Estado de derecho.

Por otro lado, consideremos el *impeachment* o impugnación. En las democracias presidenciales, las constituciones normalmente permiten a las legislaturas que revoquen a los presidentes electos, dando por hecho que tales medidas solo deben ser utilizadas en *circunstancias excepcionales*. Impugnar a un presidente implica anular la voluntad de los votantes, un acontecimiento de mucha trascendencia para cualquier democracia. De modo que la impugnación debería darse en casos especiales, es decir, solo sería aplicable cuando los presidentes abusen de su poder de forma cruel o peligrosa. Este ha sido el caso en las dos democracias presidenciales más antiguas del mundo: Estados Unidos y Costa Rica. Estados Unidos tuvo una media de un *impeachment* presidencial por siglo en sus primeros doscientos treinta años. En los setenta y cuatro años de historia democrática de Costa Rica nunca se ha echado a un presidente antes de terminar su mandato.

Sin embargo, la potestad para apartar a los presidentes puede aplicarse en exceso. Tomemos Perú como ejemplo. Según el artículo 113 de la Constitución peruana, la presidencia debe aceptar la «vacancia» en caso de muerte del presidente, si dimite, o si dos tercios del Congreso considera que se encuentra en un estado de «incapacidad física o moral permanente». La Constitución no define «incapacidad moral». En los últimos años, sin embargo, en el contexto de un conflicto creciente entre los presidentes y el

Congreso, los legisladores peruanos empezaron a referirse como «incapacidad moral» a cualquier cosa que les pareciera «éticamente censurable».[71]De repente, dos tercios del Congreso podía apartar al presidente bajo prácticamente cualquier pretexto, dando por inaugurada lo que un periodista llamó «temporada de caza presidencial».[72]En 2018, el presidente Pedro Pablo Kuczynski dimitió ante una inminente votación del Congreso que buscaba echarlo. En noviembre de 2020, el Parlamento votó para cubrir la vacante al sucesor de Kuczynski, Martín Vizcarra, de nuevo por motivos de «incapacidad moral». Los peruanos eligieron como presidente a Pedro Castillo en 2021, pero apenas accedió al cargo, sus opositores intentaron casi de inmediato echarlo del puesto. Lo lograron en diciembre de 2022, después de que Castillo tratara ilegalmente de disolver el Congreso. De modo que el Parlamento «despidió» a tres presidentes en un período de cuatro años. Como afirmó el periodista Diego Salazar, se ha llegado al punto en que cada vez que la oposición puede hacer acopio de votos para eliminar al presidente, lo hace. Es, sencillamente, «una cuestión de aritmética».[73]

Otro ejemplo flagrante de uso indebido de la ley, en este caso con el objeto de apartar a un líder electo, lo encontramos en Tailandia, donde el primer ministro, Samak Sundaravej, afín al ex primer ministro exiliado Thaksin Shinawatra, fue cesado de sus funciones por una cuestión técnica en 2008. Muy conocido por su pasión gastronómica, Samak había presentado durante ocho años un programa de cocina de mucho éxito llamado *Saborear, refunfuñar*, que dejó poco antes de acceder al cargo. En él preparaba sus platos predilectos, como el arroz frito a la Samak o la pata de cerdo con Coca-Cola. Recibía cerca de quinientos dólares por episodio que, según insistía, servían para costear los ingredientes y la logística.[74]Sin embargo, en un país así de polarizado, en el que miles de manifestantes en contra del Gobierno habían ocupado los terrenos de su residencia oficial, el Tribunal Constitucional declaró que Samak había infringido el artículo 267 de la Constitución, que prohíbe a los ministros de un Gobierno dedicarse a negocios externos durante el tiempo que

ocupan sus cargos. Obligaron a Samak a dimitir, y su Gobierno pro-Thaksin se vino abajo poco después.[75]

El uso indebido de las disposiciones constitucionales puede matar a una democracia. La mayoría de las constituciones democráticas, por ejemplo, permiten a los Gobiernos declarar el estado de emergencia, durante el que se suspenden derechos básicos. En las democracias sanas, las cláusulas de este tipo deben regirse por normas de templanza: los políticos se comprometen colectivamente a no aplicarlas excepto en las más extraordinarias de las circunstancias, como una guerra o desastres a gran escala que afecten a todo el país. Acuerdan romper el cristal de emergencia solamente si de verdad es necesario. Si este no fuera el caso y los Gobiernos declararan estados de emergencia de manera habitual, privando a los ciudadanos de sus derechos, la democracia se encontraría en un serio aprieto.

No obstante, los líderes de tinte autocrático sienten a veces la tentación de abusar de los poderes de emergencia que les otorga la Constitución. La primera ministra india Indira Gandhi lo hizo en 1975. El Partido del Congreso, el de Gandhi, había sido la punta de lanza de la independencia de la India. Su padre, el héroe independentista Jawaharlal Nehru, se convirtió en el primer ministro del país en 1947. El Partido del Congreso había ganado todas las elecciones parlamentarias hasta ese momento.

Aun así, la década de los setenta fue muy complicada. Tras arrasar en su reelección de 1971, Gandhi empezó a enfrentarse a un creciente descontento popular que trajo una oleada de protestas. Jayaprakash Narayan, una personalidad muy respetada, volvió de su retiro y se convirtió en la voz de la oposición.[76]Llegado el año 1975, la lucha contra la corrupción de Narayan había escalado hasta convertirse en un movimiento de masas.[77]Los problemas de Gandhi se acrecentaron al verse acompañados de amenazas por parte de la justicia. En 1971, un opositor político la había acusado de usar recursos públicos para impulsar su elección (parece ser que un funcionario del Gobierno trabajó seis días para su campaña, y que utilizaron vehículos oficiales).[78]El Tribunal Supremo de Allahabad falló a favor de su

oponente, inhabilitándola para el ejercicio de cargos públicos durante seis años, aunque también le concedió una suspensión, lo que le permitió recurrir la sentencia. Lo que no esperaba la primera ministra es tener que luchar por mantener a flote su carrera política.[79]Narayan organizó una serie de concentraciones multitudinarias que exigían que dimitiera.[80]

Gandhi y sus asesores llevaban meses contemplando la posibilidad de tomar el poder, pero no estaban seguros de cómo hacerlo.[81]Convocados a la residencia de la primera ministra el 24 de junio, el asesor de confianza de Gandhi, Siddhartha Shankar Ray, pidió un ejemplar de la Constitución india a la Biblioteca del Parlamento y pasó la noche «estudiándola con rigor hermenéutico».[82]Ray se decidió por el artículo 352, que permite a los Gobiernos declarar el estado de emergencia y, por tanto, suspender los derechos básicos de la Constitución en caso de que la India esté amenazada por una «guerra, agresión externa o disturbios internos».[83]Heredada del dominio colonial, la cláusula había permanecido en estado de hibernación desde la independencia.[84]Aunque se habían declarado emergencias nacionales durante las guerras de 1962 y 1971, haría falta lo que los historiadores Jaffrelot y Anil llaman «una interpretación enmarañada del derecho» para declarar una «emergencia interna»; en efecto, el artículo 352 jamás había sido utilizado para tal propósito.[85]

Sin embargo, la noche del 25 de junio de 1975, Gandhi convenció al presidente ceremonial de la India, Fakhruddin Ali Ahmed, de firmar una declaración de emergencia para suprimir los derechos constitucionales. En cuestión de horas, la policía llamó a las puertas de los líderes de la oposición y los arrestó.[86]Por la mañana, 676 políticos —incluyendo a Narayan y a los altos cargos de los grandes partidos opositores— estaban entre rejas.[87]Tras quitarle el polvo a normativas como la Ley de Mantenimiento de la Seguridad Interior, que se había usado para regular el contrabando, el Gobierno arrestó a más de 110.000 críticos entre 1975 y 1976.[88]También impuso una censura estricta de los medios.[89]A golpe de bolígrafo, la primera ministra Gandhi apagó

tres décadas de democracia y armó una autocracia «ataviada con toga constitucional».[90]

3. Aplicación selectiva

Los Gobiernos poseen la capacidad de castigar a sus rivales no solo eludiendo la ley, sino también a través de su *aplicación*.[91]Cuando no aplicarla resulta lo habitual —cuando por norma se falsea la renta; las empresas burlan las normativas de salud, seguridad y medio ambiente; o los funcionarios de cierto estatus utilizan su influencia con asiduidad para hacer favores a amigos y parientes—, hacerlo puede suponer una táctica constitucional dura. Los Gobiernos pueden actuar con legalidad (en efecto, hablamos de *aplicar la ley*), a la vez que, de manera injusta, la instrumentalización de la norma va en contra de los opositores políticos. Dicho de otro modo, la legislación se emplea como un arma. Como el dictador peruano Óscar Benavides (1933-1939) supuestamente dijo: «Para mis amigos, todo. Para mis enemigos, la ley».

Vladímir Putin es un maestro en servirse de las leyes de manera selectiva. Cuando llegó al poder el año 2000, los empresarios rusos u «oligarcas» llevaban una década enriqueciéndose mediante la absorción de activos de grandes sectores de la economía que el Gobierno había privatizado, además de embolsarse dinero en efectivo a espuertas, después de que la recién inaugurada economía de mercado echara a andar sin regulaciones ni supervisión efectivas. El cohecho, el fraude y la evasión de impuestos y de la legislación constaban entre las prácticas habituales de las empresas rusas, lo que significaba que prácticamente todo oligarca había infringido la ley en su camino a la riqueza.[92]Con el presidente Borís Yeltsin, el Gobierno miraba casi siempre hacia otro lado ante el incumplimiento de la ley, se tratara de amigos o de enemigos.[93]Putin era de otra madera. En julio de 2000, apenas dos meses después de acceder a la presidencia, convocó a veintiuno de los principales oligarcas a una

reunión en el Kremlin.[94] Les dijo que, si se mantenían alejados de la política, no pensaba cuestionar el modo en que habían amasado sus fortunas. Quedaba implícita, por supuesto, la amenaza de que la legislación sí se aplicaría contra aquellos que siguieran activos en política. La mayoría de los oligarcas captaron el mensaje. Los que no lo hicieron, como Borís Berezovsky, cuyo canal de televisión emitía noticias críticas con el Gobierno, sufrieron el castigo. Berezovsky fue despojado de sus acciones en los medios de comunicación y se vio obligado a exiliarse para que no lo condenaran por fraude y desfalco. Cuando Mijaíl Jodorskovsky, propietario de la empresa petrolera Yukos y el hombre más rico de Rusia, siguió criticando a Putin y a los partidos de la oposición, lo detuvieron y acusaron de evasión de impuestos, fraude, malversación, blanqueo de capitales y otros delitos. Pasó una década en la cárcel.[95] Berezovsky y Jodorkovsky poco tenían de inocentes; estaba prácticamente claro que habían infringido la ley. Ahora bien, a diferencia de los muchos oligarcas que habían quebrantado normas parecidas pero cooperaron con Putin, a ellos sí se los penalizó.[96]

4. *LAWFARE*[97]

Para acabar, está en manos de los políticos diseñar *nuevas* leyes que, a pesar de su pátina de imparcialidad, se redacten pensando en la oposición: una variedad de lo que a menudo se conoce como *lawfare*.[98] En Zambia se recurrió con asiduidad al *lawfare* después de su transición a la democracia en 1991. El curtido autócrata Kenneth Kaunda perdió unas elecciones multipartidistas en favor de Frederick Chiluba, del Movement for Multiparty Democracy (Movimiento de la Democracia Pluripartidista) (MMD, por sus siglas en inglés), pero cuando Chiluba se preparó para ser reelegido cinco años después, le preocupaban la oposición de Kaunda y del antiguo partido dirigente, el Partido Unido de la Independencia Nacional.[99] Por ello, seis meses después de las elecciones de 1996, el recién elegido MMD aprobó una enmienda a la Constitución que

instauraba nuevos requisitos para presentar una candidatura a la presidencia. No solo los candidatos debían ser nacidos en Zambia, sino que sus *padres* también. Y tampoco podían ser jefes tribales. ¿A qué venían esos nuevos requisitos? Uno de los padres de Kaunda había nacido en Malaui, y su candidato a presidente era jefe de una tribu. Para Human Rights Watch, la reforma constitucional fue «hecha a medida para impedir que algunos opositores concretos se presentaran a la presidencia».[100]Por si quedara alguna duda, los representantes del MMD corearon «Kaunda yamana!» («¡Kaunda está acabado!»), tras ratificar la ley.[101]

La mayoría de las autocracias del siglo XXI se establecen a partir de tácticas constitucionales duras. La erosión de la democracia se produce de manera gradual a través de una sucesión de medidas que parecen justas; nuevas leyes que en apariencia garantizan elecciones limpias, combaten la corrupción o crean un poder judicial más eficaz; resoluciones en los tribunales que reinterpretan leyes existentes; legislaciones que llevaban tiempo hibernando y que un día se redescubren a conveniencia. Dado que las medidas vienen revestidas de legalidad, pueden producir la ilusión de que ha cambiado poca cosa. No ha llegado la sangre al río. Nadie ha sido arrestado ni ha tenido que exiliarse. El Parlamento sigue funcionando. De este modo, las críticas a estas medidas se tachan de alarmismo o de lamentaciones partidistas. Sin embargo, gradualmente, y a veces de manera casi imperceptible, se va ganando terreno de juego. El efecto cumulativo de medidas que parecen inocuas sirve para que quienes se oponen al liderazgo lo tengan más difícil para competir con él; y de este modo se reafirma el poder del Gobierno titular.

El modelo sobre el que construir una autocracia a través de tácticas constitucionales duras es la Hungría de Viktor Orbán. Cuando subió al poder en 2010, Orbán ya había sido primer ministro una vez, de 1998 a 2002. Dirigente estudiantil del movimiento anticomunista, se vendía primero como «liberal», y más adelante como democristiano, durante la sacudida que siguió

a la caída del Muro, en los años noventa. Orbán gobernó de manera democrática durante su primera legislatura y su partido, Fidesz, se presentaba entonces con los colores del centroderecha convencional. Sin embargo, tras perder las elecciones en 2002, Fidesz tomó una senda profundamente conservadora y etnonacionalista. Orbán, que había estudiado en la Universidad de Oxford con una beca pagada por el liberal húngaro-estadounidense George Soros, se estaba reinventando. Siempre se había dicho de él que era un político de ambición inusual, incluso implacable, si bien a pocos se les habría pasado por la cabeza que socavaría la democracia húngara con el retorno de Fidesz al poder en 2010.[102]

Sin embargo, como dijo una vez el propio Orbán: «En política, todo es posible».[103]Fue un escándalo de su rival, el Partido Socialista Húngaro, lo que posibilitó que Fidesz asaltara la democracia. Un primer ministro socialista fue grabado admitiendo que había engañado a sus votantes acerca del estado de la economía. El derrumbe del partido tras aquella revelación permitió a Fidesz lograr una victoria arrolladora en 2010. La proporción de su triunfo se vio acrecentada por el sistema electoral húngaro, de mayorías simples por circunscripción (lo que en inglés se conoce como *first past the post*), que tradujo el 53 por ciento del voto en una representación de dos tercios del Parlamento. Según la ley húngara, aquello bastaba para que Fidesz reescribiera la Constitución en solitario: cosa que hizo, casi de inmediato.

Orbán utilizó la mayoría cualificada de su partido en el Parlamento para crear de manera artificial una enorme e injusta ventaja respecto a sus oponentes.[104]Una de sus primeras decisiones fue purgar y reemplazar a los jueces. Antes de 2010, los magistrados del Tribunal Constitucional eran seleccionados por una comisión parlamentaria compuesta por representantes de todos los partidos políticos.[105]La nueva Constitución reemplazaba este mecanismo multipartidista con un procedimiento que permitía a Fidesz usar la mayoría cualificada para nombrar jueces de manera unilateral.[106]Otra enmienda constitucional aumentó el Tribunal Constitucional de once a quince miembros, con lo que se generaron cuatro puestos vacantes en los que Fidesz colocaría a sus

aliados.[107]Luego, Orbán apartó al presidente del Tribunal Supremo, András Baka —de talante imparcial—, mediante una ley que exigía a los presidentes del Tribunal Supremo un mínimo de cinco años de experiencia judicial en Hungría. Se trataba de ejemplo claro de *lawfare*: la nueva ley evidentemente interpelaba a Baka, un juez de prestigio que llevaba diecisiete años en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, pero que no contaba con cinco años de trabajo en Hungría. Baka tuvo que dar un paso atrás.[108]Con aquello, sin embargo, no bastaba. El Parlamento también aprobó una ley que bajaba la edad de jubilación para los jueces —de los setenta a los sesenta y dos años—, y que obligaba a todos los magistrados que superaran esa edad a retirarse de inmediato. Se forzó a jubilarse a un total de 274 jueces.[109]Aunque más tarde la ley fue revocada por las presiones de la Unión Europea, muchos de los jueces retirados contra su voluntad ya no volverían a sus puestos.[110]En 2013, el poder judicial se encontraba secuestrado, y se había transformado en una «marioneta del Gobierno».[111]Un antiguo magistrado del Tribunal Constitucional llamó a la jugada de Orbán «un golpe inconstitucional disfrazado de constitucionalidad, empleando fórmulas constitucionales».[112]

Orbán también utilizó recursos «legales» para apropiarse de los medios de comunicación. En la mayoría de las democracias europeas, la televisión pública es una fuente importante —e independiente— de noticias (pensemos en la BBC, por ejemplo). Este era el espíritu de las leyes en la Hungría anterior a 2010, aunque su televisión pública nunca fue tan independiente como la británica.[113]Con Orbán, sin embargo, la televisión pública se convirtió en el brazo propagandístico del Gobierno.[114]Como parte de su proceso de «reestructuración», los funcionarios de Fidesz despidieron a más de mil empleados de los medios públicos, entre los que figuraban decenas de respetados periodistas y editores. Sus empleos los ocuparon fieles a la política (oficial) y la cobertura mediática pública se volvió descaradamente partidista.[115]

Orbán también secuestró los *medios privados* de manera legal. El Gobierno de Fidesz trabajaba entre bambalinas para que los empresarios amigos de Orbán compraran grandes medios o

adquirieran acciones para controlar a las compañías a las que pertenecían los medios independientes; después el empresariado *orbanófilo* se dedicó a presionarlos para que se autocensurasen o, en algunos casos, sencillamente los cerró.[116]En 2016, el periódico *Népszabadság*, el más importante afín a la oposición, dejó de circular de la noche a la mañana: no a causa del Gobierno, sino porque era propiedad de las corporaciones.[117]

Se apuntó con varios métodos a los escasos medios independientes que quedaban. Una ley de 2010 prohibía el periodismo «imparcial», «insultante» o contrario a la «moralidad pública».[118]Quienes infringieran esta ley deberían afrontar multas de hasta 900.000 dólares. Se creó un Consejo Mediático repleto de partidarios de Fidesz para que se cumpliera la legislación.[119]Aunque existen normas comparables en otros países, los Gobiernos democráticos apenas las ponen en práctica; se contienen. Pero el Gobierno de Orbán optó por jugar con tácticas duras gracias a su nueva ley. A decenas de organizaciones de medios les cayeron centenares de miles de dólares en multas.[120]El Consejo Mediático tampoco otorgaba licencias a entes independientes por motivos técnicos cogidos por los pelos. En 2020, por ejemplo, se negó a renovar la licencia de Klubrádió, una emisora liberal-progresista con más de 500.000 oyentes diarios, apelando a «faltas en las regulaciones».[121]Según el director de Klubrádió, András Arató, las infracciones incluían no haber rellenado un formulario correctamente o informar de que uno de sus programas duraba cuarenta y cinco minutos cuando, en realidad, eran cincuenta.[122]

Dichas tácticas duras alteraron dramáticamente el panorama de los medios de comunicación. Un estudio demostró que en 2017 el 90 por ciento de los medios húngaros estaba en manos del Gobierno de Orbán o de aliados del sector privado.[123]Un 80 por ciento de los televidentes y oyentes radiofónicos en Hungría solo recibían información procedente del Gobierno o de sus fieles.[124]

Por último, el Gobierno de Orbán utilizó tácticas constitucionales duras para poner el juego a su favor. Primero nombró a funcionarios afines para los puestos de la Comisión

Electoral, que hasta 2010 eran nombrados vía consenso multipartidista. Cinco de los diez escaños solían ser para delegados de los cinco grandes partidos del Parlamento, mientras que los otros cinco se repartían —previo acuerdo— entre el Gobierno y la oposición. Esto aseguraba que ningún partido pudiera controlar el proceso electoral sin contar con nadie más.[125]Fidesz abandonó esta práctica y ocupó los cinco escaños que no pertenecían a los delegados con sus partidarios, regalándose una mayoría de control en la Comisión Electoral.[126]

Después, la politizada Comisión redefinió descaradamente a su favor las circunscripciones electorales para el Parlamento. Con ello se sobrerrepresentaban los feudos rurales de Fidesz y se minimizaba la influencia de los baluartes urbanos de la oposición.[127]Un *think tank*[128]calculó que la oposición necesitaría ganar 300.000 votos más que Fidesz para asegurarse una mayoría parlamentaria.[129]El ex primer ministro Gordon Bajnai se quejó de que el nuevo reglamento daba a Fidesz «una clara ventaja de treinta metros en una carrera de cien».[130]

Aplicando de nuevo el *lawfare*, el Gobierno prohibió la inclusión de anuncios de campaña en los medios comerciales. Presuntamente la ley afectaba de la misma forma a todos los partidos, pero como tanto los medios públicos como los privados estaban sesgados a favor de Fidesz, la prohibición de utilizar anuncios electorales limitaba de manera severa la capacidad de la oposición para llegar a los votantes.[131]De modo que el sistema electoral no era «ni justo ni libre».[132]

Todos esos esfuerzos salieron a cuenta. En las elecciones de 2014, Fidesz recibió 600.000 votos menos que en 2010.[133]Su proporción del voto popular cayó del 53 al 45 por ciento. Sin embargo, consiguió el mismo número de escaños que en 2010, manteniendo el control de dos tercios del Parlamento a pesar de no haber conseguido la mayoría en votos. Fidesz repitió la jugada en 2018 con menos de la mitad del voto.[134]En 2022, el partido gobernante venció a una gran coalición opositora, y así reforzó la idea popular según la cual a Orbán «no se le puede derrotar en las circunstancias "normales"».[135]

Viktor Orbán logró una hazaña extraordinaria: no solamente hundió una democracia plena, sino que lo hizo de modo casi completamente legal. No hubo un baño de sangre, ni detenciones masivas, ni presos políticos o exiliados. Todavía así, como expresó Bajnai, «la columna vertebral de la democracia húngara se ha ido rompiendo sistemáticamente, vértebra por vértebra».[136]

Aunque algunos de los métodos de Orbán parecían novedosos, en realidad solo seguía un guion de siglos de antigüedad. De hecho, la aplicación de tácticas constitucionales duras llegó a perfeccionarse en una de las repúblicas más antiguas del mundo: Estados Unidos. Y, ahí, sus efectos fueron igual de devastadores.

3

Aquí ya ha pasado

Wilmington, en Carolina del Norte, vivía un momento de auge al final de la década de 1890. Fundada en el borde costero de la economía esclavista del siglo XVIII, esta ciudad portuaria acogió un innovador sistema industrial de producción algodonera durante los años que siguieron a la Guerra Civil.[1]Las nuevas líneas de ferrocarril traían la materia prima desde las regiones del interior, donde se cultivaba, hasta los almacenes portuarios de ladrillo, en los que modernos compresores fabricaban balas de algodón con la mayor eficacia jamás vista.[2]La empresa más grande de la ciudad, Alexander Sprunt & Son, se había convertido en el exportador algodonero más importante de Estados Unidos,[3]y en sus depósitos, muelles y almacenes madereros, obreros tanto blancos como negros trabajaban mano a mano como cargadores, transportistas y estibadores.[4]

Además de ser la ciudad más grande de Carolina del Norte, en Wilmington la mayoría de la población era negra, y junto con la expansión de su economía durante la posguerra civil, surgieron numerosos negocios regentados por afroamericanos: barberías, tiendas de comestibles, restaurantes, carnicerías y, pronto, consultorios médicos o un bufete de abogados.[5]La población negra de Wilmington prosperó, dando lugar a una efervescente comunidad civil de sociedades literarias, bibliotecas públicas, ligas de béisbol y un periódico propio.[6]La comunidad tenía varias iglesias como su epicentro, entre ellas la Africana Metodista Episcopal de Saint Stephen, que agrupaba a una gran congregación, y la Iglesia Episcopal de Saint Mark, a la que acudían las familias negras más adineradas.[7]

El proyecto del Gobierno federal para la Reconstrucción del Sur tras la Guerra Civil, a finales de la década de 1870, estaba llegando a su fin, y el Partido Demócrata —autoproclamado defensor del supremacismo blanco— había utilizado la violencia y el fraude electoral para recuperar la mayoría de los Gobiernos estatales y municipales de todo el Sur. Aun así, la mayoría de los negros seguían acudiendo a las urnas con valentía. Así, en la última década del siglo XIX, con sus votos, surgió una nueva política en Wilmington, que después se replicó en toda Carolina del Norte.

El detonante fue el surgimiento del Partido Populista, que apelaba a los arrendatarios y aparceros blancos y pobres, quienes se sentían olvidados por la rica clase mercantil que dominaba el Partido Demócrata.[8]En 1893, al sucumbir el país a la depresión económica, los populistas de Carolina del Norte forjaron una alianza con el Partido Republicano, que seguía teniendo un considerable apoyo por parte de los afroamericanos. «The Fusion» (La Fusión), como era conocida aquella alianza, aunó a votantes negros y blancos del medio rural en una ambiciosa coalición birracial. Se proponía expandir la educación pública, regular los poderosos monopolios y apuntalar el derecho al voto, que había sido maltratado desde la caída de la Reconstrucción.[9]

Aquella improbable coalición puso patas arriba la política de Carolina del Norte y sembró el terror entre las altas esferas del Partido Demócrata. El programa de The Fusion ganó por mayoría arrolladora en la legislatura estatal de Carolina del Norte en 1894, y en 1896 conquistó el Gobierno y eligió para la Cámara de Representantes a Henry White, el único congresista afroamericano de Estados Unidos. La legislatura estatal, dominada por la Fusión, reinstauró las elecciones directas para los cargos municipales y adoptó lo que se ha definido como «probablemente la ley electoral más justa y democrática en el Sur desde la Reconstrucción».[10]

Como resultado, los republicanos negros y los populistas blancos lograron cargos públicos a lo largo y ancho del estado. En el Ayuntamiento de Wilmington se eligió a tres concejales negros. Diez de cada veintiún policías y cuatro ayudantes del *sheriff* eran

negros. Entraron magistrados negros en los palacios de justicia. En su condado, el tesorero, el carcelero y el juez de instrucción también lo eran. Había inspectores sanitarios, registradores de la propiedad y un superintendente negro. Los empleados de correos entregaban su correspondencia por igual a hogares de blancos y de negros. El funcionario mejor pagado del estado, John Dancy, jefe en la aduana federal de Wilmington, era afromericano.

Por un instante, fue posible vislumbrar en Wilmington los primeros pasos de una democracia multirracial. Aunque tanto la profunda aversión por la raza como las desigualdades persistían, los ciudadanos negros podían votar, y a los políticos les hacían falta si querían ganar las elecciones. Parecía abrirse la puerta a una democracia más inclusiva, que coincidía con la entrada de Estados Unidos al nuevo siglo.[11]

No obstante, aquel momento de promesas democráticas resultó ser fugaz. El alumbramiento de una política multirracial fomentó una reacción feroz. Para muchos blancos, empapados de pautas de pensamiento supremacista, aquellos cambios resultaban intolerables, y así, la plana mayor del Partido Demócrata, que dominaba la política del estado desde el final de la Reconstrucción, puso en marcha una contrarrevolución.[12]En 1898, un conjunto de importantes demócratas, que incluían al presidente del partido en el estado, Furnifold Simmons, el aspirante a la gobernación Charles Brantley Aycock y el director del periódico *The News & Observer* de Raleigh, Josephus Daniels, iniciaron lo que acabaría como una violenta cruzada para restaurar un Gobierno de los blancos. Las elecciones legislativas del noviembre siguiente determinarían la composición de la legislatura estatal, en manos de los fusionistas. Estas personalidades destacadas de la política de Carolina del Norte conspiraban mediante una incansable campaña de mentiras y odio llevada a cabo por *The News & Observer*, mientras que los políticos demócratas blancos azuzaban el miedo de los blancos a una «dominación negra». Alfred Moore Waddell, un carismático veterano de la Guerra Civil que contribuyó a liderar un movimiento violento contra los cambios políticos de Wilmington, declaró que «los blancos que fundaron este país deben gobernarlo

solos».[13]

Con el apoyo del Partido Demócrata, se establecieron en Carolina del Norte más de ochocientos clubes de la White Government Union (Unión por un Gobierno Blanco).[14]Debido a que, en Wilmington, más del 56 por ciento de la población era negra y que los ciudadanos negros votaban una y otra vez a los republicanos, estaba meridianamente claro que un «Gobierno blanco» no se repondría por medios democráticos.[15]Como reconoció en un mitin un líder de los demócratas: «No podemos superar en número a los negros. De modo que debemos hacerlo con trampas, recuentos falsos o disparos».[16]

Y así lo hicieron. Los ciudadanos blancos de Wilmington empezaron a hacer acopio de armas, lo que un periodista de Washington, D. C. describió como si la ciudad «se estuviera preparando para un asedio y no para unos comicios».[17]Los blancos formaron milicias llamadas «Red Shirts» («camisas rojas»), que controlaban las calles con rifles Winchester y apaleaban, golpeaban con látigos o intimidaban a los ciudadanos negros, además de advertirles de que no votaran.[18]La ciudad, a orillas del río Cape Fear,[19]se convirtió en escenario del terror. Las milicias tenían el respaldo del Partido Demócrata (que les proveía «camisas rojas», comida y bebida) y recibían halagos de *The News & Observer*. Los políticos demócratas incitaban a los blancos a un frenesí de violencia.[20]Durante un mitin preelectoral en octubre de 1898 que contaba con «sesenta de los ciudadanos más destacados de Wilmington» sobre la tarima junto a Waddell, este declaró:

> ¿Debemos rendirnos ante una andrajosa chusma de negros? ¡Mil veces no! No dejaremos pasar de nuevo las intolerables condiciones en que vivimos. Nuestra decisión es cambiarlas, incluso si para ello hace falta que los cadáveres no dejen fluir el río Cape Fear.[21]

Con la proximidad de la jornada electoral, una atmósfera de intimidación y violencia se cernía sobre la ciudad.[22]Los «camisas rojas» sembraban el terror por los barrios negros y amenazaban a los funcionarios locales, mientras que los demócratas de

Wilmington exigían a los fusionistas que cancelaran todas sus candidaturas al condado. Por temor a la violencia, el gobernador Daniel Lindsay Russell accedió a sus demandas y se retiró la lista de candidatos republicanos al completo.[23]En vísperas de las elecciones, Waddell dijo a una multitud de «camisas rojas»:

> Debéis cumplir con vuestro deber. Ciudad, condado y estado deben librarse de la dominación de los negros de una vez por todas. Sois hijos de una noble estirpe. Sois anglosajones. Id mañana a las urnas y si encontráis a un negro votando, decidle que se vaya y, si se niega, ¡matadlo! Dejadlo seco de un tiro. Mañana ganaremos aunque tengamos que hacerlo con las armas.[24]

Durante la jornada electoral, las White Government Unions repartieron «observadores» por los centros de votación, los periódicos locales aconsejaban a los negros no votar y los «camisas rojas» patrullaban las calles a caballo. Pocos negros se atrevían a salir, y a muchos de los que lo hicieron los amenazaron a punta de rifle.[25]En circunscripciones de mayoría negra, después del cierre de los comicios, había matones demócratas que entraban en los locales de votación, amenazaban a los funcionarios electorales y, directamente, llenaban las urnas con sus papeletas. A nadie le extrañó que los demócratas se hicieran con una victoria aplastante: 98 de 118 escaños de la legislatura estatal.[26]

No obstante, como en el caso de los políticos municipales la reelección no tendría lugar hasta 1899, y por ende quedaban negros en cargos locales, los demócratas no se contentaron con haber robado las elecciones. El 10 de noviembre iniciaron un golpe violento. En uno de los ataques terroristas más brutales de la historia de Estados Unidos, una turba de al menos quinientos supremacistas blancos, armados y uniformados con sus camisas paramilitares rojas, desfilaron por las calles de Wilmington, dispararon a los transeúntes, atacaron iglesias negras y redujeron a cenizas la sede del único periódico afroamericano de la ciudad. Como de manera gráfica lo describe David Zucchino en su libro, *Wilmington's Lie* [La mentira de Wilmington], las personas negras fueron acribilladas por la calle y en sus hogares.[27]Asesinaron al

menos a veintidós (tal vez incluso sesenta) vecinos negros, y más de dos mil tuvieron que huir de la ciudad.[28]La turba entró en el Ayuntamiento de Wilmington, y a mano armada obligó a dimitir a todos los miembros del Gobierno birracial de la ciudad, incluyendo al alcalde, al jefe de la policía y a ocho concejales electos.[29]Todos ellos, además de otros políticos fusionistas y muchos de los ciudadanos negros más influyentes de Wilmington, fueron conducidos a punta de pistola hasta los límites del pueblo y se los desterró para siempre.[30]Waddell, el cabecilla del golpe, se convirtió en el nuevo alcalde.[31]

Algunos días antes, George Henry White, congresista afroamericano por Carolina del Norte, visitó en la Casa Blanca al presidente William McKinley, republicano como él, para advertirle del inminente golpe e implorarle que enviara a alguaciles federales para proteger el Ayuntamiento de Wilmington. McKinley tomó la decisión de no intervenir.[32]

Después de lograr que su poder alcanzara todo el estado de Carolina del Norte, los demócratas enmendaron rápidamente la Constitución del estado para imponer una serie de restricciones al sufragio que incluían un impuesto electoral, pruebas de alfabetización y el requisito de ser propietario.[33]El censo de votantes negros inscritos en el estado se desplomó de 126.000 el año 1896, a solo 6.100 en 1902. Además, la participación afroamericana cayó de un 87 por ciento en las elecciones gubernamentales de 1896 a casi cero en 1904.[34]En Wilmington, después de que tres concejales negros hubieran tenido que dimitir a la fuerza en 1898, ningún afroamericano volvería a ocupar jamás un cargo en el ayuntamiento hasta 1972.[35]

El golpe de Wilmington tuvo lugar durante el ocaso de un proyecto ambicioso pero con un resultado fallido para democratizar el Sur. El final de la Guerra Civil había propiciado una serie de reformas constitucionales y legislativas que transformaron el sistema político de Estados Unidos.[36]El historiador Eric Foner describe la época de la Reconstrucción como una «segunda fundación» de América: un

momento en que el orden constitucional se quebrantó para luego reconstituirse, lo que condujo a un «experimento impactante y sin precedentes para la democracia interracial». Ni la igualdad de derechos ni el derecho a votar —dos componentes esenciales de la democracia moderna— se encontraban recogidos en la Constitución original. Al fijar esos derechos y proveer al Gobierno federal de la autoridad para asegurarse de que se cumplieran, la segunda fundación representó un paso enorme en pos de la democratización de Estados Unidos, al menos en teoría.[37]

Los cimientos legales de la democracia interracial se conformaron durante la década transcurrida entre 1865 y 1875. Fue conseguida, principalmente, a través de tres enmiendas constitucionales. La Decimotercera Enmienda (1865) abolía la esclavitud. La Decimocuarta (1868) introdujo el derecho a la ciudadanía por nacimiento y la igualdad formal ante la ley, que originarían la manera en la que hoy en día entendemos dichos principios y la protección igualitaria.[38]La Decimoquinta (1870) prohibía las restricciones sobre el derecho a votar con base en la raza. En un festejo por la aprobación de la Decimoquinta Enmienda, Frederick Douglass declaró: «Jamás existió una revolución más completa».[39]

Las *Reconstruction Amendments* (Enmiendas de la Reconstrucción) fueron acompañadas de las *Reconstruction Acts* (Leyes de la Reconstrucción) de 1867, que ponían al Sur bajo poder militar federal, a la vez que condicionaban su readmisión a que aprobase la Decimocuarta Enmienda y redactara una nueva constitución de los estados que garantizara el sufragio para los negros. Las autoridades federales iniciaron una gran campaña para registrar de nuevo a los votantes negros.[40]

Más tarde, la *Civil Rights Act* (Ley de Derechos Civiles) de 1875 extendió la garantía de trato igualitario prevista en la Decimocuarta Enmienda a los ámbitos «públicos» cotidianos como pueden ser tranvías, restaurantes, teatros y hoteles. El preámbulo a la ley reconocía «la igualdad de todos los hombres ante la ley» y declaraba que era «deber del Gobierno, en todo trato con el pueblo, imponer justicia igualitaria y justa a todo el mundo, sea

cual sea su lugar de nacimiento, raza, color o creencia».[41]

Las reformas de la Reconstrucción fueron obra de un solo partido: los republicanos. Los demócratas se opusieron a la Decimotercera Enmienda al infringir los derechos sobre la propiedad. (Como expresó un demócrata de Kentucky: «Si renunciamos a nuestro derecho a disponer de la esclavitud, ¿cuáles nos quedan a salvo?».)[42]Se oponían a la Decimocuarta Enmienda porque insistían en que el Gobierno de Estados Unidos fue «creado para los hombres blancos» y que la ciudadanía debía reservarse a la «raza caucásica».[43]También se oponían a la Decimoquinta Enmienda, ya que en esencia consideraban inferiores a los negros.[44]En el Congreso de Estados Unidos no hubo ningún demócrata —del Norte o del Sur— que diera su voto a la Decimocuarta o a la Decimoquinta Enmienda, como tampoco a las posteriores legislaciones sobre el sufragio y los derechos civiles durante la época de la Reconstrucción. Todas se aprobaron exclusivamente gracias a los votos republicanos. La democratización posterior a la Guerra Civil de Estados Unidos fue, en sentido estricto, un asunto de partido.[45]

Aunque el Partido Republicano, en su práctica totalidad, dio su apoyo a los inicios de la Reconstrucción, el coraje —como también la idea de una democracia multirracial— vino de una facción llamada Partido Republicano Radical.[46]Los dos radicales más destacados eran el senador Charles Sumner de Massachusetts y el congresista Thaddeus Stevens, de Pensilvania.[47]Stevens y Sumner eran genuinos partidarios, según sabía todo el mundo, de la igualdad racial.[48]De hecho, ese era precisamente el motivo por el que sus rivales los llamaban «radicales». Su visión de la democracia, en la que los derechos civiles y de voto se extendían a todos los hombres (y en algunas de sus aspiraciones, a todas las *mujeres*), sin considerar la raza, reflejaba sus firmes convicciones morales, ancladas en el renacimiento religioso del Gran Despertar, antes de la Guerra Civil.[49]En su apasionado discurso en el Senado, Sumner explicó del siguiente modo su apoyo a la Decimocuarta Enmienda:

> Mostradme a cualquier criatura con el semblante erguido y los ojos dirigidos al cielo, creada a imagen de Dios, y os mostraré que todo hombre, de cualquier raza o país, oscurecido por el sol ecuatorial o emblanquecido por el frío del norte, que se encuentre entre vosotros, es hijo del Padre celestial, y le pertenece por igual la naturaleza humana. No se puede negar este derecho sin pecar de impiedad.[50]

Sumner insistía en la igualdad de derechos políticos para todas las personas, fueran (en la chirriante terminología de la época) «caucásicos, mongólicos, malayos, africanos o estadounidenses», porque estaban todos «hechos a imagen de Dios».[51]

Sin embargo, los republicanos radicales no inventaron las ideas en que se sustentaba el primer experimento estadounidense con la democracia multirracial. Más bien era herencia de una tradición fraguada por una generación de activistas y escritores negros de la era previa a la Guerra Civil. Ya desde la década de 1820, los abolicionistas negros —en su mayoría procedentes de Boston y sus alrededores— empezaron a utilizar, como escribe Sandra Gustafson, «una retórica profética que promovía un ideal *multirracial* de la nueva República», basada en los plenos derechos como ciudadanos y la igualdad ante la ley.[52]

Entre los líderes de este movimiento se encontraban escritores como David Walker, un negro nacido libre, que habitaba en Boston pero que era originario de Wilmington, o Maria Stewart, la primera mujer estadounidense —de cualquier raza— en dar un discurso político ante un público conformado por hombres y mujeres.[53]La obra de Walker, *Appeal to Colored Citizens of the World* [Una llamada a los ciudadanos de color del mundo], escrita en 1829, se centraba en la hipocresía de una república «cristiana» exclusivamente blanca. Walker, Stewart y otros activistas formaban parte de la pequeña pero dinámica comunidad de negros libres que surgió en tiempos coloniales en las estrechas callejuelas del vecindario de Beacon Hill, en Boston, y donde se emplazaba la iglesia African Meeting House. En los años veinte y treinta del siglo XIX no solo debatían contra la esclavitud sino acerca de un

nuevo concepto: el «ciudadano de color».[54]Rechazaban las propuestas —que sí aprobaban muchos opositores importantes de la esclavitud— para que los esclavos libertos retornaran a África. En su lugar, iniciaron una nueva senda exigiendo plenos derechos para la ciudadanía de Estados Unidos, inspirados por la promesa de igualdad que contenía «la más sagrada de las escrituras políticas estadounidenses», la Declaración de Independencia.[55]Al destacado abolicionista William Lloyd Garrison le influyeron las ideas de Walker, y su periódico antiesclavista, *The Liberator*, publicó escritos de Stewart. Luego, en la década de 1840, un joven Charles Sumner, a quien se veía a menudo involucrado en conversaciones con bostonianos negros, empezó a trabajar con la comunidad negra de Beacon Hill, defendiendo como abogado el fin de la segregación en las escuelas públicas de Massachusetts.[56]

Una democracia multirracial real, como bien sabían Walker y sus compañeros activistas, requería protecciones legales universales. Esto ponía el listón muy alto, incluso entre algunos republicanos. Por ejemplo, durante el debate sobre la Decimoquinta Enmienda estuvo sobre la mesa una proposición que garantizaba que *todos* los hombres adultos pudieran votar, pero incluso para algunos republicanos del Norte era pasarse de la raya.[57]Aunque casi todos apoyaban protecciones para el sufragio de los negros en el Sur, muchos de ellos no veían con los mismos buenos ojos garantizar protecciones similares a los inmigrantes en sus propios estados: para los irlandeses católicos expatriados, en el caso de los republicanos del Noreste, o para los chinos, según los del Oeste. El senador de Oregón Henry W. Corbett opinaba que incluir en el derecho al voto a los hombres negros «contaba con la bendición» del «Gran Gobernante del universo», pero que aquello no era aplicable a los inmigrantes de China. En síntesis, quienes defendían una democracia auténticamente multirracial estaban en situación de precariedad.[58]

A la larga, los derechos universales al sufragio perdieron contra una propuesta más modesta que prohibía las restricciones basadas en la raza o en la «servitud previa». Su objeto era claramente proteger a los votantes negros del Sur. Otras formas de

exclusión siguieron siendo legales incluso en el Norte. Este vacío jurídico resultaba crítico, ya que posibilitaba restringir el sufragio basándose en cuestiones que no fueran raciales, como la alfabetización o la posesión de propiedades. Los impuestos electorales, las tasas de inscripción al censo y las «pruebas» para descartar a los votantes no deseados también formaban parte de las reglas del juego. Así pues, que no se cumpliera la Decimoquinta Enmienda no solo se debió a las reticencias del Sur, sino también a la ambivalencia que los republicanos del Norte sentían hacia los hombres que no eran blancos y protestantes.

Con sus limitaciones, la Reconstrucción transformó la política en el Sur. En un año, el porcentaje de hombres negros en Estados Unidos convocados a las urnas creció del 0,5 por ciento al 80,5 por ciento. La responsable de aquel incremento era la antigua Confederación.[59]En 1867, el 85 por ciento de los hombres afroamericanos, como mínimo, estaban inscritos para votar en Alabama, Florida, Georgia, Luisiana, Misisipi y las Carolinas del Norte y del Sur.[60]

El sufragio negro anticipaba consecuencias de largo alcance. Los afroamericanos constituían la mayoría de la población de Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur; casi la mayoría en Alabama, Florida y Georgia; y representaban cerca del 40 por ciento de la población en Carolina del Norte y Virginia.[61]Hacia el año 1867, los votantes negros inscritos en buena parte del Sur profundo representaban mayor número que los blancos. Los afroamericanos empezaron a ascender a cargos públicos por todo el Sur. En algunos sitios, en grandes cantidades.[62]Los delegados negros eran mayoría en las convenciones constitucionales de Luisiana y Carolina del Sur durante la Reconstrucción.[63]Los afroamericanos ganaron la mayor parte de escaños en la legislatura de Carolina del Sur y casi logran el mismo resultado en Luisiana; las legislaturas estatales de Misisipi y Carolina del Sur eligieron a presidentes negros para sus cámaras bajas,[64]así como tenientes gobernadores en Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur.[65]A lo largo y ancho del Sur profundo, los afroamericanos ocupaban cargos importantes, como jueces de paz, supervisores de condados, comisionados escolares,

inspectores de elecciones, e incluso *sheriffs*.[66]

Más de mil trescientos afroamericanos ostentaron un cargo público durante la era de la Reconstrucción.[67]Dieciséis estadounidenses negros fueron elegidos para la Cámara de Representantes y el Senado, y más de seiscientos ocuparon cargos en las legislaturas de los estados.[68]James Pike, un periodista del Norte que visitaba Carolina del Sur a finales de la década de 1860, declaró, muy crítico: «Este órgano es casi literalmente un Parlamento negro: el presidente de la cámara es negro, el secretario es negro, los porteros son negros, los pequeños mensajeros son negros, el presidente de la Comisión de Medios y Arbitrios es negro, y el capellán es negro como el carbón». La sociedad, según concluía Pike, estaba «patas arriba».[69]

Habiendo pasado menos de dos años desde el final de la era esclavista, las comunidades blancas del Sur estaban acostumbradas a una rígida jerarquía racial. La supremacía blanca como norma era casi universal. Ahora, sin embargo, la igualdad racial y el sufragio negro —cuyo cumplimiento aseguraban las tropas federales— habían pasado a ser una realidad.

Por varios motivos, el posible desarrollo de una democracia multirracial parecía una amenaza a los sureños blancos. En el plano económico, la antigua élite, que tenía esclavos, temía perder su control ilimitado sobre el trabajo de los negros. En el terreno político, el sufragio negro cuestionaba el poder del Partido Demócrata, especialmente en los estados donde los afroamericanos eran por entonces la mayoría o casi la mayoría del electorado.

Por último, y tal vez más importante, la democracia prometía tambalear unas jerarquías sociales y raciales arraigadas de antiguo. En plena campaña supremacista blanca de 1898, Josephus Daniels, editor de *The News & Observer* de Raleigh, escribió que la vida durante la Reconstrucción «no podía ser peor. Había *sheriffs* negros, secretarios negros, un senador negro en el estado; los negros tenían control absoluto sobre todo, hasta que se volvió intolerable».[70]Muchos blancos llegaron a tener miedo al «dominio negro»;[71]temores sembrados por políticos demócratas y directores de periódicos que usaban editoriales, viñetas racistas y reportajes

sensacionalistas para construir un pérfido relato sobre lo violentos y políticamente corruptos que eran los negros.[72]En particular, la idea de que pudieran darse *relaciones sociales* democratizadas —mujeres blancas que trataban con hombres negros libremente— desencadenó toda una «histeria» de acusaciones infundadas sobre violaciones de «negros a blancas».[73]Según la historiadora Glenda Gilmore, la difusión del mito del peligro sexual que representaban los negros era la encarnación más clara del miedo injustificado que les producía revocar el orden social al completo.[74]

Así pues, muchos blancos del Sur veían tanto la Reconstrucción como la democracia multirracial como amenazas a su existencia. Como Ben Tillman, gobernador y senador supremacista blanco de Carolina del Sur, recordó en un discurso en el pleno del Senado:

> Sentíamos que los mismísimos cimientos de nuestra civilización se desmoronaban bajo nuestros pies, estábamos seguros de ser sepultados por la avalancha negra de bárbaros que nos rodeaba y que nos había impuesto el ejército con las *Reconstruction Acts*.[75]

Para el congresista Hernando Money, de Misisipi, vivir bajo «la ofensiva teoría del Gobierno de la mayoría» era como «colocar el cuello bajo los pies de un salvaje pintarrajeado».[76]

La respuesta de los reaccionarios blancos al surgimiento de la democracia multirracial consistió en organizar una campaña terrorista sin precedentes en la historia de Estados Unidos.[77]Ya que los negros eran mayoría o casi lo eran en prácticamente todos los estados del Sur, el retorno al poder de los supremacistas blancos iba a requerir, en palabras de W. E. B. Du Bois, de la «fuerza bruta».[78]Respaldados por el Partido Demócrata, los supremacistas blancos organizaron grupos paramilitares con nombres como los Whitecaps (Gorras Blancas), la White Brotherhood (Hermandad Blanca), Jayhawkers (en referencia al pájaro que simboliza Kansas), Pale Faces (Rostros Pálidos) y los Knights of the White Camellia (Caballeros de la Camelia Blanca).[79]El más destacado, el Ku Klux Klan, apareció en Tennessee a principios de 1866 y

rápidamente se esparció por todo el Sur. El Klan trajo consigo una oleada de terror en que asaltó un sinnúmero de hogares, negocios, iglesias y escuelas de negros; asesinó a miles de afroamericanos; además de someterlos a palizas, latigazos y violaciones, con lo que se vieron obligados a huir.[80]Atacaron a políticos republicanos —tanto negros como blancos— y llegaron a asesinarlos.[81]

El horror del Klan paralizó las organizaciones republicanas e impidió a los negros ejercer su derecho al voto, desvirtuando las elecciones y permitiendo así que los demócratas se hicieran con el poder de forma inconstitucional a lo largo y ancho del Sur: un proceso para el que utilizaron el eufemismo «Redención».[82]En Luisiana, una «guerra civil de asesinatos en secreto e intimidación y matanzas a la luz del día» dejó un mínimo de quinientos muertos afroamericanos.[83]En Georgia, el terror del Klan diezmó de tal manera la participación en las elecciones a la presidencia de 1868 que 11 condados de mayoría negra no contabilizaron un solo voto para los republicanos.[84]En el año 1871, la presión ejercida por el Klan permitió a los demócratas volver a controlar la legislatura y obligar al gobernador republicano, Rufus Bullock, a dimitir y ser desterrado del estado.[85]En Carolina del Norte, la violencia del Klan debilitó a los republicanos y permitió que los demócratas ganaran una mayoría a golpe de veto durante la legislatura estatal, que emplearon para inhabilitar y apartar al gobernador republicano.[86]

Como respuesta a esta oleada de terrorismo, el presidente Ulysses S. Grant, con ayuda de un Congreso dominado por los republicanos, aprobó una serie de *Enforcement Acts* (Leyes de Cumplimiento), que otorgaban al Gobierno federal poderes para fiscalizar las elecciones locales y combatir la violencia política.[87]Estas incluían una ley de 1870 que autorizaba al presidente a nombrar supervisores electorales federales con la potestad de presentar cargos federales contra cualquier implicado en fraude electoral, intimidación o supresión del voto por motivos raciales. A esta se sumaba la *Ku Klux Klan Act*, la ley de 1871 sobre el Ku Klux Klan que posibilitaba una acusación federal o incluso la intervención militar para combatir sus intentos de negar a los ciudadanos sus derechos. Estas leyes no tenían precedente, en

tanto que autorizaron al Gobierno federal a intervenir en los estados para proteger los derechos fundamentales, civiles y al voto: piezas esenciales de la democracia multirracial.[88]

Al principio, estos mecanismos de cumplimiento obtuvieron resultado. Con la ayuda de las tropas federales, se arrestó a cientos de miembros del Klan que fueron enjuiciados en 1871 y 1872, especialmente en Florida, Misisipi y Carolina del Sur.[89]Hacia 1872, las autoridades federales ya le habían «roto el espinazo a la organización, y habían logrado una drástica reducción de la violencia en todo el Sur».[90]Según el historiador James McPherson, las de 1872 fueron «las elecciones más justas y democráticas en el Sur hasta 1968».[91]

Con todo, la Reconstrucción resultó ser de difícil mantenimiento político. Con el tiempo, el Partido Republicano se escindió. Una facción conocida como los «republicanos liberales» empezó a criticar los costes de las *Enforcement Acts*. Los liberales tenían otras prioridades, como el libre comercio o la reforma de la función pública, a la vez que eran escépticos respecto al sufragio negro; empezaron a cuestionar que el proyecto de la Reconstrucción fuera sensato, de modo que prefirieron adoptar una política más pasiva en lo que al Sur se refería dejando que «cada uno fuera a lo suyo».[92]

Entonces se asestó otro golpe a la coalición democrática multirracial: la Depresión de 1873, que en 1874 provocó una irrupción arrolladora del Partido Demócrata en la Cámara de Representantes.[93]La opinión pública se puso en contra de la intervención en el Sur, y el activismo por los derechos civiles se desvaneció hasta tal extremo que *The New York Times* declaró que la «era de la política moral» había terminado.[94]Con este nuevo clima político, las tropas federales se fueron retirando.

El rechazo de la protección federal facilitó una segunda oleada de la Redención. En 1875, los demócratas de Misisipi montaron una campaña violenta —conocida como el Plan Misisipi — para recuperar el control del estado. Como señala Foner, se «cometieron actos de terrorismo a plena luz del día por parte de hombres que no se escondían»,[95]lo que hizo que en las elecciones

de 1875 descendiera el voto de los negros de manera radical y, por tanto, se otorgara a los demócratas el control de la legislatura. También destituyeron al teniente gobernador, que era afroamericano, y obligaron al gobernador republicano, Adelbert Ames, a dimitir y huir del estado.[96]En Carolina del Sur, los comicios de 1876 se truncaron a causa del terror provocado por los «camisas rojas» y un fraude descarado.[97]Asimismo, en lo que un observador describió como «una de las mayores farsas jamás vistas», el demócrata Wade Hampton, antiguo oficial confederado, reclamó el puesto de gobernador.[98]

El final de la Reconstrucción llegó cuando el sucesor de Grant, Rutherford B. Hayes, retiró las tropas federales que vigilaban el Sur en 1877 como parte del acuerdo negociado tras las discutidas elecciones presidenciales de 1876.[99]Los demócratas se habían hecho con el poder en todos los estados sureños excepto en Florida y Luisiana.[100]En total, casi doscientos mil afroamericanos fueron exterminados en actos terroríficos durante los diez años que siguieron al final de la Guerra Civil: un índice de asesinatos prácticamente equivalente al del Chile de Pinochet en los años setenta.[101]

A pesar de aquello, la posibilidad de una democracia multirracial todavía no estaba extinta del todo.[102]Al fin y al cabo, buena parte de las bases legales de la Reconstrucción —incluyendo la Decimocuarta y la Decimoquinta Enmiendas y, en la mayoría de los estados del Sur, las constituciones del período— permanecían intactas,[103]además los afroamericanos siguieron votando (aunque en menor número) y formando grupos durante las jornadas electorales para dinamitar los ataques violentos. En realidad, la participación negra se mantuvo extraordinariamente alta en la mayor parte del Sur durante el principio de la década de 1880. Según cálculos, más de dos tercios de los hombres negros adultos votaron en las presidenciales de 1880.[104]

La continuidad del voto negro impidió que los demócratas se atrincheraran en el poder. En paralelo a la depresión agrícola de las décadas de 1880 y 1890, fuerzas políticas minoritarias como los independientes Greenbackers (Dólares Verdes), los Readjusters

(Reajustadores) o la Farmers' Alliance (Alianza de Granjeros) y, desde el año 1892, el Partido Populista, ganaron apoyos entre los agricultores blancos desafectos y, a menudo conjuntamente con los republicanos, formaron coaliciones birraciales con las que enfrentarse al Gobierno de partido único de los demócratas.[105]Una candidatura birracial de los Readjusters llegó al Gobierno de Virginia en 1881. Las listas populistas o fusionistas —con el apoyo de muchos votantes negros— casi consiguieron el puesto de gobernador en Alabama en 1892, en Virginia en 1893, en Georgia en 1894, y Luisiana y Tennessee en 1896.[106]Como ya hemos visto, una candidatura fusionista, populista y republicana fue la que se impuso en el Gobierno de Carolina del Norte en 1896.[107]

Estas coaliciones birraciales volvieron a generar sensaciones de amenaza entre el *establishment* supremacista blanco de los demócratas.[108]De nuevo, el espectro de la «dominación negra» se convirtió en una de las cantinelas habituales de los demócratas.[109]En Luisiana, el periódico prodemócrata *Daily Advocate*, de Baton Rouge, advertía de que un Gobierno republicano conduciría a la «africanización del estado» y tildaba a los fusionistas de «grave amenaza contra nuestra civilización».[110]Incluso en Carolina del Sur, donde la tristemente famosa *Eight Box Law* (Ley de las Ocho Urnas) —un sistema en que los votantes debían depositar papeletas en diferentes urnas para elegir cada cargo y en que todos los votos mal introducidos se invalidaban, lo cual dificultaba el sufragio a los analfabetos— ya servía para restringir las elecciones, los demócratas siguieron preocupados. En palabras del gobernador John P. Richardson: «Ahora tenemos un Gobierno sustentado por una minoría de 400.000 blancos sobre una mayoría de 600.000 negros. Lo único que se interpone hoy entre ellos y que nos gobiernen es un dudoso estatuto: la *Eight Box Law*».[111]

Así pues, las tácticas terroríficas y fraudulentas que llevaron a cabo los demócratas en el poder durante la década de 1870 no serían soluciones permanentes, y a los líderes demócratas les preocupaba que actuar con esa violencia flagrante pudiera atraer la atención nacional y conducirles a una nueva situación de control y

a la obligación del cumplimiento de las leyes por parte del Gobierno federal.[112]De modo que desde finales de la década de 1880, la reacción contraria a la democracia multirracial tomó un nuevo rumbo: los demócratas de todo el Sur empezaron a socavarla mediante cauces *legales*. Entre 1888 y 1908, reescribieron las constituciones de los estados y las leyes electorales para impedir el sufragio de los afroamericanos.[113]Los demócratas no podían eliminar la Decimocuarta ni la Decimoquinta Enmiendas, pero como se pudo leer en un periódico del Sur: «Nuestra intención es convertirlas en letra muerta del código legal».[114]Y así lo hicieron, mediante el desarrollo de lo que el congresista republicano Jonathan Dolliver describió como «una maquinaria legal que, utilizando modales refinados, ha abolido por completo la manera republicana de gobernar».[115]

Tales maniobras «caballerosas» eran puras tácticas constitucionales duras. Los demócratas del Sur empezaron a buscar modos de abusar de los vacíos legales para restringir el acceso al voto. Como hemos visto, la Decimoquinta Enmienda adolecía de una grave vulnerabilidad: solo prohibía a los estados negar el derecho al sufragio «por raza, color o una situación previa de servidumbre». Al intentar dificultar a los negros su participación en las elecciones y siendo conscientes de que infringir de manera obvia la Decimoquinta Enmienda comportaba el riesgo de una intervención federal, los blancos del Sur «fueron cautelosos a la hora de contravenir abiertamente la enmienda», según el historiador del derecho Michael Klarman, en su lugar buscaron «eludir y frustrar su propósito confeso».[116]

Fue precisamente lo que hicieron los demócratas sureños estado por estado: elaboraron «ingeniosas estratagemas» o nuevas restricciones que la Constitución no prohibía de manera explícita, como las tasas para el sufragio, las pruebas de alfabetización y el requisito de ser propietario o residente.[117]Estas restricciones, si se aplicaban con contundencia, impedirían a la mayoría de los afroamericanos inscribirse y votar. Las leyes violaban claramente el espíritu de la Decimoquinta Enmienda —y el de la democracia— porque fijaban como objetivo a los afroamericanos, quienes tenían

más probabilidades de ser analfabetos y era menos probable que se pudieran costear una tasa para ejercer el voto. Otra prueba de alfabetización *de facto* llegó con la introducción de la táctica dura del voto «australiano» (o secreto), que requería a los ciudadanos que votaran con papeletas fabricadas por el Gobierno y a solas en una cabina electoral, donde no pudieran ser acompañados por un amigo (alfabetizado).[118]Una norma muy atractiva para los demócratas, porque efectivamente imposibilitaba votar a los analfabetos: el voto secreto iba dirigido a los electores negros, que sin ayuda no comprendían las papeletas. Una variación de este se adoptó en Tennessee en 1889, como también en varios estados sureños más. Aunque estas formas de votación se justificaban por motivos aparentemente loables, como eliminar la «corrupción» y el fraude electoral, la intencionalidad estaba clara.[119]Según la opinión del representante del secretario de Estado de Arkansas, el voto secreto:

> Funciona como la seda: sin hacer ruido, satisfactorio, bello, y ruego a Dios que todo estado sureño pronto disponga de uno como este. Neutraliza en gran medida la maldición de la Decimoquinta Enmienda, el crimen más negro del siglo XIX.[120]

Mientras los demócratas de las legislaturas estatales del Sur urdían sus planes, también aprendían entre ellos (y de muchos estados del Norte, como Connecticut o Massachusetts, donde ya hacían pruebas de alfabetización contra los inmigrantes irlandeses).[121]Misisipi fue uno de los modelos iniciales: una Convención Constitucional de 1890 aplicó un impuesto electoral, el voto secreto y una prueba de alfabetización.[122]Durante la década posterior, esas «ingeniosas estratagemas» serían adoptadas por la mayor parte de los estados del Sur.[123]Como explicó el legislador estatal de Alabama Anthony Sayre, las leyes «eliminarán al negro de la política, y de un modo perfectamente legal».[124]

Pero dichas estrategias «legales» presentaban un problema intrínseco: también impedían votar a blancos pobres y analfabetos, muchos de los cuales eran fieles seguidores del Partido Demócrata en el Sur. Para burlar este obstáculo, los demócratas a menudo

utilizaban la ley de manera selectiva. Por ejemplo, el registro civil local, donde se realizaban las pruebas de alfabetización y que empleaba casi siempre a demócratas (blancos), era mucho más severo con los analfabetos negros.[125]La aplicación selectiva iba acompañada de «cláusulas de comprensión», con las que los funcionarios determinaban si un aspirante a votante que no supiera leer demostraba «comprender» la Constitución, basándose en fragmentos de la carta magna leídos en voz alta. Las leyes estaban diseñadas para dejar en manos de los registros civiles que se les exigiera más a los ciudadanos negros que a los blancos. Finalmente, las legislaturas de Luisiana, Carolina del Norte, Alabama y Georgia adoptaron «cláusulas de los abuelos», que permitían a los (blancos) analfabetos o desprovistos de propiedades registrarse si habían votado antes de 1867 o si eran descendientes de votantes previos a 1867. Por neutrales que pudieran parecer, tales cláusulas eran discriminatorias para los afroamericanos, a quienes no se les permitía votar antes de ese año.[126]

Hacia 1908, todos los estados de la antigua Confederación habían aplicado impuestos electorales y siete utilizaban pruebas de alfabetización.[127]Según proclamó, triunfal, el diario prodemócrata *Memphis Appeal*, después de la aplicación de la tasa al sufragio, las nuevas leyes proporcionaban «una solución práctica, constitucional y feliz al problema racial».[128]En uno de los raros casos de impedimento del voto a gran escala en la historia, los demócratas sureños hicieron descarrilar la transición estadounidense para convertirla en una democracia multirracial.[129]

Quedaba una última protección contra el proceso «legal» de privación del voto: la judicatura federal. El Tribunal Supremo de Estados Unidos podría haber ejercido de escudo judicial bloqueando los ataques por parte de los estados contra el derecho al sufragio.[130]Al fin y al cabo, las leyes estatales que intencionalmente restringían este derecho de los negros entraban en conflicto con la prohibición de la Decimoquinta Enmienda sobre la discriminación racial.

En la década de 1890, los grupos de derechos civiles empezaron a interponer demandas judiciales contra Gobiernos de estados y condados para protestar contra la profusión de leyes dirigidas contra los negros. Entre 1895 y 1905, el Tribunal Supremo revisó seis impugnaciones de intentos de inhabilitación del voto.[131]El caso más decisivo fue el de Giles contra Harris (1893), que el académico de derecho constitucional Richard Pildes describió como «uno de los fallos más trascendentes de la historia del Tribunal Supremo de Estados Unidos».[132]

El caso Giles consistió en una demanda judicial que denunciaba la falta de derechos electorales y que fue interpuesta contra la Junta de Registradores de Montgomery, en Alabama, por Jackson Giles, antiguo esclavo y bedel de profesión que se había convertido en diácono de una iglesia congregacional, activista republicano y presidente de la Alabama's Colored Men's Suffrage Association (Asociación por el Sufragio de Hombres de Color de Alabama). Presentada en nombre de Giles y de otros 5.000 ciudadanos negros del condado de Montgomery, el caso venía motivado por la Constitución de 1901 de Alabama, que prácticamente imposibilitaba a los negros inscribirse en el padrón electoral.[133]Tras aprobarse la Constitución, solo 3.000 de los más de 180.000 hombres negros adultos de Alabama eran aptos para el voto.[134]El gran artífice de la nueva carta magna había sido franco acerca de sus intenciones: «¿Qué es lo que queremos hacer? Se enmarca en los límites que impone la Constitución federal establecer la supremacía blanca en este estado».[135]

El dictamen mayoritario del Tribunal Supremo fue a cargo de Oliver Wendell Holmes Jr., un hombre criado en una familia antiesclavista de Massachusetts y que resultó herido tres veces cuando era policía de la Unión durante la Guerra Civil. Había sido propuesto para la corte por Henry Cabot Lodge, senador republicano de Massachusetts y uno de los principales proponentes de la legislación sobre derecho al voto de 1890. No obstante, los horrores de la experiencia bélica de Holmes lo habían convertido en un pragmático que veía las ideas transformadoras con cínico escepticismo.[136]Este recelo —junto con una carencia, en el fondo,

de apego a la idea del sufragio negro— lo llevó a acatar una jurisprudencia cada vez más conservadora. Esa fue la cuestión que se planteó en los casos de derechos civiles de 1883, que sostenían que el Congreso no poseía autoridad constitucional para proteger a los ciudadanos negros frente a la discriminación en hoteles y teatros, en trenes o en otros espacios públicos.[137]

Un historiador del derecho denominó el dictamen escrito por Holmes «el análisis más falso» en la historia del Tribunal Supremo.[138]Holmes argumentaba que, ya que en la denuncia se alegaba que el sistema de inscripción electoral de Alabama era fraudulento, si se le daba la razón a Giles y se añadía a otro votante a los censos, el tribunal sería cómplice del fraude de Alabama. Más aún, decía Holmes, la corte no debería intervenir porque ningún mandato podría ser ejecutable debido a la ausencia de tropas federales o supervisores electorales que lo hicieran cumplir. Holmes, como buen patricio de Nueva Inglaterra, sencillamente pensó que más le valía al tribunal no ensuciarse las manos. Así pues, la sala se negó a eliminar las restricciones raciales para el voto en Alabama, y en su lugar optó por quedarse de brazos cruzados mientras la privación del sufragio seguía adelante.[139]

El fallo de Giles contra Harris, en 1903, asestó el golpe de gracia al primer experimento de democracia multirracial de Estados Unidos. Después de que los demócratas obtuvieran la presidencia y el liderazgo de ambas cámaras del Congreso en 1892, revocaron artículos cruciales de las *Enforcement Acts* del período de la Reconstrucción, que obligaban a respetar los derechos electorales.[140]Hacia el final de su vida, el gran abolicionista y activista por los derechos civiles, Frederick Douglass, se lamentaba de que «los principios que todos creíamos que se habían asentado firme y permanentemente han sido ultrajados con descaro y echados por la borda».[141]

No tenía por qué haber ocurrido de esa manera. Existió una breve oportunidad política, hacia el final de la década de 1880, durante la que se presentó una senda alternativa; una que, de haberla

escogido, podría haber impelido al país en pos de una ruta distinta.

En 1888, Benjamin Harrison, exsenador de Indiana y activo defensor de leyes más firmes para el derecho al voto, fue elegido presidente, y los republicanos se hicieron de nuevo con ambas cámaras del Congreso. Es más, el sufragio de los negros y la obligación federal de cumplir las leyes electorales prosiguieron en el programa del partido,[142]que llamaba a una «legislación efectiva para afianzar la integridad y la pureza de las elecciones».[143]

Dos influyentes líderes republicanos, el senador George Frisbie Hoar y el miembro del Congreso Henry Cabot Lodge (más adelante senador de Estados Unidos) empezaron a elaborar un plan nacional para la protección del derecho al sufragio. Hoar y Lodge eran ambos de Massachusetts, y se habían empapado del «sentir abolicionista y radical» de su estado.[144]Los legisladores redactaron un proyecto de ley de setenta y cinco páginas que protegía el sufragio en el Sur, supervisaba los comicios en el Norte y extendía la inspección federal *a todos* los distritos electorales.[145]La propuesta atribuía poderes a supervisores federales independientes (nombrados por un tribunal) para el escrutinio de todas las fases del proceso electoral. También permitía a los ciudadanos de cualquier circunscripción del país solicitar que se supervisaran las elecciones en su distrito. Se trataba del proyecto de ley electoral más ambicioso de la historia del país, superando incluso la *Voting Rights Act* de 1865 en su dimensión geográfica, y alteró de manera esencial la celebración de las elecciones en Estados Unidos.[146]

El verano de 1890, amplias mayorías republicanas en ambas cámaras del Congreso parecían dispuestas a aprobar la *Lodge Bill* (ley Lodge): el presidente Harrison estaba a punto de rubricarla. El proyecto fue aprobado por la Cámara de Representantes en julio de 1890 con el apoyo de todos los republicanos excepto dos.[147]

Pero entonces las cosas empezaron a torcerse.

William Stewart, senador republicano por Nevada y dueño acaudalado de minas de plata, empezó a actuar en la sombra junto a demócratas del Sur y un puñado de senadores republicanos de estados del Oeste escasamente poblados, con el fin de sabotear lo que los sureños ya llamaban la *Force Bill* (Ley de la Fuerza). El día

en que el proyecto de ley fue aprobado en la cámara, el senador Stewart recibió una visita en su habitación del hotel Shoreham, en Washington D. C., del congresista de Tennessee Benton McMillin, simpatizante de la Confederación durante la Guerra Civil. En sus memorias, Stewart cuenta:

> McMillin me preguntó qué opinaba acerca de la medida y si creía que sería aprobada en el Senado. Le dije que me oponía sobremanera a la ley, pero que solamente había una posibilidad de detenerla en el Senado, y era retrasándola.[148]

En septiembre de 1890, dos senadores republicanos de Pensilvania sugirieron aplazar el voto del Senado a la *Lodge Bill* con el fin de poner en marcha una ley sobre impuestos. La *Lodge Bill* se postergó hasta pasadas las elecciones de mitad de mandato de 1890, pero la derrota aplastante de los republicanos en dichos comicios —los demócratas pasaron a controlar la cámara— restó posibilidades a esta ley de salir adelante. Con perseverancia, el senador Hoar volvió a debatirla en el hemiciclo del Senado. El senador Stewart, sin embargo, escandalizó a sus colegas republicanos al presionar para que la retrasaran de nuevo, al insistir en que votaran otra medida: abandonar el patrón oro en pro de una divisa de plata. Se empezó a sospechar que los republicanos «de la plata» (aquellos, como Stewart, que poseían intereses ligados a las minas de plata y que sacarían tajada de la ley de moneda) tenían la esperanza de aplazar el proyecto electoral en beneficio de los demócratas del Sur.[149]Es decir, a cambio del apoyo demócrata a la reforma monetaria. En efecto, ocho republicanos «de la plata» votaron con los demócratas para aparcar la cuestión electoral en favor de la ley de la plata.[150]

Cuando finalmente se sometió la *Lodge Bill* a debate en el Senado, en enero de 1891, la minoría demócrata acudió a su último recurso de obstrucción, el filibusterismo del Senado de Estados Unidos: pronunciar discursos hasta bien entrada la noche, plantear propuestas de enmienda inaplicables, prolongar el debate y pasearse por los pasillos en torno al salón central para impedir un cuórum.[151]En un último y desesperado intento por aprobar la

ley, los líderes republicanos propusieron un cambio en las normas del Senado para poner fin al obstruccionismo mediante un voto de mayoría simple, permitiendo así al Senado votar a favor de la *Lodge Bill*.[152]Sin embargo, la medida recibió el bloqueo de una coalición de demócratas y republicanos del Oeste relacionados con «la plata» y que habían votado a favor de la reforma monetaria. De este modo, la ley, que podría haber garantizado las elecciones justas para todo el país, murió víctima de los impedimentos.[153]

Sin protección federal para el derecho al voto, todo Gobierno en el Sur de apariencia democrática pronto se iba a extinguir. El número de votantes negros cayó en picado, de un 61 por ciento en 1880 a un impensable 2 por ciento en 1912.[154]En Luisiana, Misisipi y Carolina del Sur, estados cuya *mayoría ciudadana era afroamericana*, solamente el 1 o el 2 por ciento de los ciudadanos negros podía votar.[155]Tiempo atrás, en 1876, Robert Toombs, un célebre político de Georgia, ya había declarado: «Dadnos un acuerdo y lo arreglaré para que el "pueblo" gobierne y que al negro jamás se le vuelva a escuchar».[156]Al cabo de una generación, sus deseos —compartidos por los supremacistas blancos de todo el Sur— se habrían hecho realidad.

El Sur sucumbió a casi cien años de autoritarismo.[157]La privación de sufragio a los negros minó la competición política y fijó el dominio de un solo partido en el Sur entero. En todo estado posconfederado, exceptuando Tennessee, el Partido Demócrata mantuvo un poder ininterrumpido durante más de setenta años. En cinco estados, los demócratas estuvieron continuamente en el poder durante *más de un siglo*.[158]Como dijo W. E. B. Du Bois: «La democracia murió, salvo en el pueblo negro y sus corazones».[159]

4

Por qué el Partido Republicano abandonó la democracia

En noviembre de 1963, casi un siglo después del fin de la Reconstrucción, el presidente Lyndon Johnson compareció en una sesión conjunta en el Congreso y declaró: «Ya hemos hablado bastante de igualdad de derechos en este país. Hace cien años o más que lo discutimos. Ha llegado la hora de ocuparnos del próximo capítulo y que quede escrito en los libros de leyes».[1]

En lo que resultaba un giro histórico, el Partido Demócrata de Johnson, cuya ala liberal superaba por entonces en influencia a su homóloga en el Sur —la facción conservadora—, se estaba convirtiendo en paladín de los derechos civiles en Estados Unidos. Si la Reconstrucción supuso la «segunda fundación» del país, los fallos de los tribunales y las reformas que culminaron en la *Civil Rights Act* (1964) y la *Voting Rights Act* (1965) lo refundaron por tercera vez. Al mismo tiempo, establecían un marco legal más sólido con el que desplegar una democracia multirracial. En esta «tercera fundación», las reformas contaban con el respaldo de ambos partidos y, en efecto, tuvo que ser así, ya que en el seno del Partido Demócrata de Johnson existía una facción que todavía defendía las leyes Jim Crow, y que se oponía con vehemencia a los derechos civiles. Por lo tanto, estas leyes nunca se habrían podido aprobar sin contar con un apoyo importante de los republicanos.

Un personaje decisivo en este proceso fue un congresista republicano por Ohio, William McCulloch: un conservador del Medio Oeste y el miembro con mayor rango de la Comisión Judicial de la Cámara de Representantes. Descendiente de

abolicionistas de Ohio, McCulloch fue copatrocinador de la *Civil Rights Act* de 1964. Con él al mando, un 80 por ciento de los republicanos de la Cámara Baja votaron a favor de la ley (junto con el 61 por ciento de los demócratas de la cámara).[2]De modo parecido, en el Senado, donde hacía tiempo que la legislación en materia de derechos civiles nunca se aprobaba —debido al filibusterismo—, el líder de la minoría republicana, Everett Dirksen de Illinois, animó a los republicanos para que dieran su apoyo a la *Civil Rights Act*.

Finalmente, más de un 80 por ciento de los senadores republicanos se posicionaron a favor de la ley, además de un 69 por ciento de los demócratas.[3]Según su biógrafo, Dirksen pensaba que este fue el más significativo de sus logros. La *Voting Rights Act* de 1965 también recibió un respaldo mayoritario de ambos partidos. Los republicanos en el Senado votaron a favor en una proporción de treinta contra uno. Así pues, durante un momento crítico a mitad del siglo XX, el Partido Republicano jugó un papel esencial en la aprobación de reformas en los derechos civiles y el sufragio, contribuyendo a que Estados Unidos transitara hacia un sistema más democrático.[4]

Sesenta años más tarde, el Partido Republicano resulta irreconocible. La misma organización política que un día llegó a ser crucial para que se aprobara la *Voting Rights Act* de 1965, rechazaba por unanimidad en 2021 la legislación federal que reafirmaba su validez. No obstante, el Partido Republicano no solo se limita a desentenderse de las garantías electorales,[5]tal y como expresa la prudente publicación británica *The Economist*, su enfoque ha consistido en «apartarse de la democracia».[6]

Sin ir más lejos, un mes antes de que Donald Trump intentara impugnar el resultado de las presidenciales de 2020, uno de los senadores republicanos de mayor peso, Mike Lee, ya había cuestionado la propia razón de ser de la democracia, ni más ni menos. «La democracia no es el objetivo: lo son la libertad, la paz y la prosperidad», tuiteó el senador Lee. «Lo que queremos es el esplendor de la condición humana. Una democracia vetusta puede echarlo todo a perder.»[7]

Durante décadas, los republicanos habían sido un partido de centroderecha al uso, como el Partido Conservador británico, los conservadores de Canadá o los democristianos alemanes. La mayoría de sus líderes tenían en común un amplio compromiso democrático. Hoy en día ya no es el caso.

El instituto V-Dem (Varieties of Democracy), que realiza un seguimiento de las democracias globales, asigna a los principales partidos políticos del mundo una puntuación según su «intolerancia democrática». En esta clasificación se mide el incumplimiento de las normas democráticas. Estas incluyen el pluralismo y los derechos civiles, la tolerancia de la oposición o el rechazo a la violencia política.[8]La mayoría de los partidos conservadores de Europa occidental reciben una puntuación muy baja, lo que significa un fuerte compromiso para con la democracia. Este solía ser el caso del Partido Republicano de Estados Unidos hasta finales de los años noventa. Sin embargo, fue en el siglo XXI que su intolerancia se disparó. El V-Dem concluyó en 2020 que, en términos de responsabilidad democrática, el Partido Republicano hoy en día «se parece más a partidos que lideran autocracias, como el AKP turco o el Fidesz de Hungría, que a los partidos de Gobierno de centroderecha».[9]

¿Por qué el Partido Republicano ha descarrilado? ¿Y qué implica para la democracia de Estados Unidos?[10]

Paradójicamente, las raíces de este viraje se encuentran en una reacción contraria al proyecto de levantar una democracia multirracial; un propósito para el que el propio partido fue un día esencial. Una transformación así no tuvo lugar de la noche a la mañana. Durante la primera mitad del siglo XX, los republicanos eran un partido proempresa y de la clase acomodada, con facciones que buscaban satisfacer, respectivamente, los intereses fabriles del Noreste, los del campo en el Medio Oeste, o también el voto conservador de las ciudades pequeñas y el de los blancos protestantes de las regiones ajenas al Sur.[11]Esta coalición les permitió dominar la política a escala nacional entre finales del

siglo XIX y principios del XX; de 1890 a 1930, el Partido Republicano tuvo el control sobre la presidencia durante treinta de aquellas cuatro décadas. También dominó el Senado durante treinta y dos años. Sin embargo, en la década de los años treinta todo cambió debido a la Gran Depresión y a la transformación que supuso el New Deal para la política estadounidense. Millones de votantes urbanos de clase obrera —tanto negros como blancos— rechazaron a los republicanos, consolidando a los demócratas del New Deal como la nueva formación mayoritaria.[12]Estos ganarían cinco elecciones presidenciales consecutivas entre 1932 y 1948. Los republicanos se acercaban al peligro de convertirse en una «minoría permanente».[13]

El partido conservador del país se enfrentaba entonces al mismo «dilema del conservadurismo» que han experimentado las formaciones pertenecientes a esta tendencia ideológica durante toda su historia. ¿Cómo puede el mismo partido que representa a las élites económicas atraer a un mayor electorado? ¿Y cómo hacerlo sin perder de vista su posicionamiento respecto al poder, los intereses y sus principios morales de siempre?[14]

Para hacerse con la mayoría, afín al New Deal de los demócratas, el Partido Republicano intentó hacer lo que, en un sistema democrático, se espera de los partidos cuando pierden: salir a captar un nuevo electorado. Después de la Segunda Guerra Mundial, los dirigentes republicanos se fijaron en el Sur,[15]ya que precisamente su partido había liderado la Reconstrucción, pero a mediados de siglo los republicanos apenas tenían presencia en el Sur, donde seguían vigentes las leyes Jim Crow. En la región, como apuntaron dos historiadores del Sur, la palabra «republicano» todavía se utilizaba como un insulto.[16]

No obstante, los cambios que se estaban desarrollando en el seno del Partido Demócrata propiciaron una nueva estrategia. A finales de los años treinta, el ala liberal de los demócratas forjó una alianza con la National Association for the Advancement of Colored People (Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color) (NAACP, por sus siglas en inglés) y el Congress of Industrial Organizations (Congreso de Organizaciones Industriales)

(CIO, por sus siglas en inglés).[17]Lo hizo con el propósito de impulsar los derechos civiles, promover leyes contra los linchamientos, la abolición del impuesto electoral y legislación en pro de la justicia laboral. La coalición favorable a los derechos civiles se impuso de manera gradual entre los demócratas.[18]Si bien Franklin Roosevelt, por lo general, había evitado ocuparse de cuestiones civiles, Harry Truman se convirtió en el primer presidente demócrata que las defendía, y por vez primera los demócratas incorporaron un plan sólido de derechos civiles a su campaña de 1948. Entre los blancos del Sur ese cambio no sentó bien; a principios de la Segunda Guerra Mundial, un 98 por ciento todavía estaba a favor de la segregación.[19]

En 1938, en una ocasión en que se utilizó el obstruccionismo para impedir que se legislara en contra de los linchamientos, el senador segregacionista Josiah Bailey, de Carolina del Norte, advirtió a sus compañeros demócratas que su apoyo a los derechos civiles sería la ruina del partido en el Sur. Bailey les recordó que cuando los republicanos del siglo XIX trataron de imponer la Reconstrucción en la región lo expresaron de la siguiente manera: «Sentimos resentimiento y hemos odiamos a ese partido durante generaciones; lo odiamos sin medida».[20]Los demócratas no podrían seguir apoyando durante mucho tiempo los derechos civiles *a la vez que* a los blancos del Sur.

En 1948 se formaron grietas en la coalición demócrata. Cuando el gobernador segregacionista de Carolina del Sur, Strom Thurmond, salió por patas ante la deriva pro derechos civiles del partido, este organizó una campaña presidencial con una tercera candidatura, el recién formado States' Rights Party o Dixiecrat Party (Partido de los Derechos de los Estados).[21]La revuelta de la facción Dixiecrat dejó claro a los demócratas que su sólido bloque del Sur ya no era tan monolítico. Los líderes republicanos vieron que ahí tenían la ocasión de obtener una mayoría inaudita. Durante 1950 y 1951 el presidente del Comité Nacional Republicano (RNC, por sus siglas en inglés), Guy Gabrielson, hizo una gira por el Sur. Durante uno de sus discursos en Little Rock observó que la furia de los blancos sureños convertía la región en

un «gran coto de caza».[22]Al principio, los dirigentes republicanos exhibían diferencias en cuanto al mejor modo de abrirse paso en el Sur. Mientras que algunos conservadores como Gabrielson buscaban alinearse con los dixiecrats, el presidente Dwight Eisenhower decidió poner en marcha su operación Dixie: una campaña de impulso para aquellas organizaciones que compartían una determinada visión: el Partido Republicano como hogar común de los sureños moderados de las ciudades y suburbios.[23]

Los conservadores finalmente se hicieron con la victoria. Acontecimientos de mucha repercusión como el fallo judicial del caso Brown contra la Junta de Educación en 1954, el boicot a los autobuses de Montgomery en 1955 y 1956, o el despliegue de tropas federales en 1957 para obligar a integrar el alumnado del instituto Central High School de Little Rock[24]generaban mucha oposición entre los blancos del Sur.[25]A principios de 1960, el periodista Robert Novak expresó que muchos de sus líderes más a la derecha «auguraban que habría una oportunidad de oro en la crisis racial si se convertían en el White Man's Party (Partido del Hombre Blanco)».[26]Así debe comprenderse la *Long Southern Strategy* (Larga Estrategia Sureña): el empeño de atraer durante décadas a aquellos «sureños blancos que se sentían desplazados, enfadados y resentidos por culpa de políticas que aseguraban la igualdad y que pretendían nivelar las condiciones para grupos minoritarios.»[27]

Esta maniobra se inició propiamente en 1964, el año en que se aprobó la *Civil Rights Act*. Aunque la mayoría de los republicanos en el Congreso votó a favor de esta legislación, había fuerzas importantes que ejercían presión en el sentido opuesto.[28]La más relevante era la del Senador Barry Goldwater, el candidato presidencial republicano en 1964. Siguiendo una táctica que describiría como «ir de caza donde hay patos», Goldwater salió en búsqueda del voto blanco.[29]Votó contra la *Civil Rights Act*, abogó por los «derechos de los estados» e hizo campaña a lo largo y ancho del Sur, con el apoyo entusiasta del segregacionista Strom Thurmond.[30]Si bien Goldwater sufrió una derrota aplastante en 1964, no le costó, en cambio, ganarse al Sur profundo.

La revolución por los derechos civiles sacudió el sistema partidista de Estados Unidos.[31]Después de 1964, los demócratas empezaron a consolidarse como el partido de los derechos civiles y atrajeron a la mayor parte de los votantes negros. Los republicanos, gradualmente y a la inversa, se posicionaron como el partido del conservadurismo racial, y comenzaron a hacerse con los votantes que rechazaban el desmantelamiento de las jerarquías raciales tradicionales. Con el tiempo, los republicanos se convertirían en lo que su antiguo estratega Stuart Stevens denomina el «*de facto*, partido blanco» de Estados Unidos.[32]En efecto, el Partido Republicano ha sido el que recibe la mayor parte del voto blanco en *todas las elecciones presidenciales desde 1964*.

El conservadurismo racial se tradujo en numerosos dividendos electorales. En los años sesenta, casi el 90 por ciento de los ciudadanos estadounidenses eran blancos y las encuestas mostraban una considerable angustia entre este sector de la población —tanto en el Norte como en el Sur— a propósito de los derechos civiles.[33]Aunque había descendido el apoyo a las modalidades formales de segregación, la mayoría de los blancos de *ambos* partidos se oponían a las políticas del Gobierno dirigidas a combatirla, como podían ser la integración escolar o la discriminación positiva.[34]La reacción de los blancos se exacerbó tras los disturbios urbanos de 1965 a 1968.[35]En torno a 1966, las encuestas mostraban que «el desorden social» había reemplazado los derechos civiles como el principal problema según la opinión de los votantes y, en un sondeo realizado hacia finales de 1966, el 85 por ciento de los blancos aseveró que los negros avanzaban «demasiado rápido» hacia la igualdad racial.[36]

Un resentimiento de los blancos cada vez mayor hacia los derechos civiles iba a ocasionar lo que el estratega Kevin Phillips llamaría «la mayoría republicana emergente».[37]Ante una sociedad tan dividida en cuanto a la cuestión de la raza —a pesar de que la población todavía fuera blanca en su mayoría—, Phillips opinaba que el Partido Republicano recuperaría su estatus mayoritario «si lograba encasillar a los demócratas como "el partido de los negros", al tiempo que los republicanos podrían consolidarse como

los defensores de la tradición racial sureña».[38]

La clave de la nueva mayoría republicana la tenían los blancos del Sur. A pesar de su arraigado vínculo con el Partido Demócrata, Phillips era del parecer de que estos «desertarían en tropel en el mismo instante en que se convirtiera en un partido negro».[39]Aunque ya no se consideraba aceptable hacer bandera de motivaciones abiertamente racistas, los políticos republicanos sí podían atraer a blancos conservadores y racistas a través de un lenguaje implícito o en clave. Hacían hincapié en «la ley y el orden», así como en la oposición a la integración de los alumnos en las escuelas y demás medidas de segregación.[40]Esa era la esencia de la estrategia sureña de Richard Nixon. Y funcionó: en 1968, cuatro quintas partes de los sureños blancos votaron a Nixon o al candidato del tercer partido, George Wallace, un segregacionista de toda la vida.[41]Cuatro años más tarde, Nixon ganaría tres cuartos del voto junto con Wallace, y más tarde sería reelegido con una mayoría arrolladora.[42]

Ronald Reagan siguió utilizando la estrategia sureña. En los años sesenta, se mostró contrario a la *Civil Rights Act* y a la *Voting Rights Act*, y hasta los ochenta defendió «los derechos de los estados».[43]Durante un acto cargado de un simbolismo que no daba lugar a equívocos, Reagan inició su campaña presidencial de 1980 en la Feria del Condado de Neshoba, en la ciudad de Filadelfia, Misisipi, lugar donde tres activistas por los derechos civiles habían sido brutalmente asesinados en 1965.[44]Sin embargo, Reagan introdujo además una nueva dimensión a su estrategia: esta sería blanca y *cristiana*.[45]

Antes de 1980, los evangélicos blancos —que se concentraban en el Sur— no solían estar vinculados a ningún partido.[46]En 1976, estos votaron tanto a Jimmy Carter como a Gerald Ford. A finales de los años setenta, no obstante, la plana mayor evangélica, dirigida por el reverendo Jerry Falwell, fundó Moral Majority (Mayoría Moral).[47]Las cuestiones que llevaron a los líderes del evangelismo a entrar en política eran diversas. Entre ellas, su oposición a los derechos de los homosexuales, a la *Equal Rights Amendment* (Enmienda de Igualdad de Derechos) (ERA, por sus

siglas en inglés) y al caso de 1973 Roe contra Wade, que facilitaba el acceso al aborto.[48]Sin embargo, como reconoció más adelante el activista de la derecha cristiana Paul Weyrich, un catalizador importante fue la insistencia de la administración Carter en eliminar la segregación de las escuelas cristianas, ya que a aquellas que lo hacían se les denegaban las exenciones de impuestos.[49]Bajo la dirección de Falwell, la Mayoría Moral se decantaría por el Partido Republicano y realizaría una gran campaña a favor de Reagan en 1980.[50]Por su parte, el propio Reagan dio apoyo a los intereses políticos evangélicos e incorporó buena parte de sus preocupaciones a la campaña republicana.[51]Con ello, logró conducir a los votantes blancos sureños y a los evangélicos al redil republicano,[52]y en 1984, sería reelegido con un 72 por ciento del voto blanco del Sur y un 80 por ciento del de los evangélicos blancos.[53]

El *Great White Switch* (Gran Giro Blanco) ayudó a convertir en realidad la nueva mayoría republicana que Phillips había pronosticado.[54]Así, se convirtieron en el primer partido de Estados Unidos y ganaron todos los comicios presidenciales entre 1968 y 1988, si exceptuamos las elecciones posteriores al caso Watergate, en 1976. En el año 1994, los republicanos se hicieron con la Cámara de Representantes por primera vez desde 1955. Ese mismo año ya tenían el control sobre la Cámara Baja, el Senado y treinta Gobiernos estatales.[55]

Ahora bien, si bien el *Great White Switch* produjo una nueva mayoría republicana, también creó un monstruo. Hacia finales de siglo, se demostró en las encuestas que la mayoría de los republicanos blancos obtenían una puntuación elevada en lo que los politólogos denominan «resentimiento racial».[56]La puntuación se calcula teniendo en cuenta el grado en que un individuo dice estar de acuerdo o en desacuerdo con las cuatro afirmaciones que incluye el *American National Election Study* (Estudio Electoral Nacional Estadounidense):[57]

1. Los irlandeses, italianos, judíos y muchas otras

minorías han logrado abrirse camino con su trabajo a pesar de los prejuicios. Los negros deberían hacer lo mismo sin otorgarles favores especiales.
2. Generaciones de esclavitud y discriminación han generado condiciones que dificultan que los negros puedan salir de la clase baja con su propio esfuerzo.
3. Durante los últimos años, los negros han recibido menos de lo que merecen.
4. La cuestión de fondo es que hay quien no se esfuerza lo bastante; solo con dedicar mayores sacrificios podrían estar en igualdad con los blancos.

El éxito del Partido Republicano a la hora de ganarse a los sureños y al resto de los blancos con el pretexto de un elevado resentimiento racial condujo a un problema. Como es común en formaciones políticas de las élites conservadoras de todo el mundo, cuando deben ajustarse a una nueva y fuerte base electoral, se presenta el siguiente problema: la vulnerabilidad del partido frente a las ambiciones particulares. En el caso del Partido Republicano, este terminó siendo presa de su base *racialmente conservadora*. No fue algo exento de consecuencias: mientras que los republicanos del siglo XXI todavía eran blancos y cristianos en su inmensa mayoría, Estados Unidos había cambiado.[58]

La sociedad estadounidense se diversificó sobremanera durante el paso del siglo XX al XXI. La *Immigration and National Nationality Act* (Ley de Inmigración y Nacionalidad) de 1965, que fue aprobada con gran apoyo de ambos partidos, abrió la puerta a una larga oleada inmigratoria procedente de Latinoamérica y Asia en particular.[59]El porcentaje de estadounidenses blancos no hispanos decreció del 88 por ciento en 1950 a un 69 por ciento en el año 2000, y menguó hasta un mero 58 por ciento en 2020.[60]Los afroamericanos, los hispanos, los asiáticos-estadounidenses y los nativos americanos representaban ahora un 40 por ciento del país,

y constituyen la mayoría entre los estadounidenses de menos de dieciocho años.[61] A lo largo del país, los barrios y las escuelas se volvieron más integradores.[62] Según el censo de Estados Unidos, el porcentaje de blancos que viven en barrios predominantemente blancos ha descendido del 78 por ciento que había en el año 1990 hasta un 44 por ciento en 2020.[63] El índice de matrimonios mixtos ha ido en gran aumento, del mismo modo que la fracción de estadounidenses que se identifica como multirracial.[64] La diversidad religiosa también ha crecido, y Estados Unidos es un país menos marcadamente cristiano. Mientras que más del 80 por ciento de los estadounidenses se identificaba como blanco y cristiano (protestante o católico) en 1976, esta definición solamente representaba a un 43 por ciento en 2016.[65]

Estas transformaciones le han cambiado el rostro a la política estadounidense. Durante las últimas cuatro décadas, la cantidad de miembros del Congreso no blancos se ha multiplicado por más de cuatro.[66] El número de afroamericanos en la Cámara Baja y el Senado se ha incrementado de los diecisiete de 1980 a sesenta y uno en 2021. Durante este mismo período, los congresistas hispanos o latinos dejaron de ser seis para convertirse en cuarenta y seis, el número de asiáticos-estadounidenses subió de seis a diecisiete y el de nativos americanos ha pasado de cero a cinco.[67] El Tribunal Supremo también tiene un aspecto muy distinto hoy en día: mientras que en 1966 los nueve magistrados eran hombres blancos, en 2022 se convertían en minoría (cuatro de nueve).

Una creciente diversidad étnica y el avance hacia la igualdad racial han resultado en lo que Jennifer Hochschild, Vesla Weaver y Traci Burch llaman un nuevo «orden racial».[68] A diferencia de estructuras anteriores, caracterizadas por delimitaciones claras entre grupos étnicos y jerarquías raciales consolidadas en las que los blancos ocupaban la cúspide, los cambios de finales del siglo XX e inicios del XXI han ido diluyendo fronteras étnicas y raciales, y han debilitado las categorías de raza. Dichos cambios se manifiestan de modos diferentes, entre los que se encuentra una representación cada vez mayor de familias no blancas o mixtas en la televisión y en el cine; un cuestionamiento creciente, sea en las

aulas o en las redacciones de prensa, de los relatos históricos establecidos en los que se minimizaba o se ignoraba el pasado racista de Estados Unidos. Por otro lado, cada vez existe una menor tolerancia social hacia las conductas racistas.

Asimismo, a comienzos del siglo XXI, los estadounidenses tienen cada vez más asimilados los principios centrales de la democracia multirracial. El apoyo público a la inmigración y a la diversidad ha ido en constante aumento.[69]Según el Pew Research Center, en 2018 un 60 por ciento de los ciudadanos estaban de acuerdo con que «un mayor número de recién llegados fortalece la sociedad» y que la diversidad étnica hace que Estados Unidos sea «un lugar mejor en que vivir». Los estadounidenses también demuestran más compromiso con la igualdad racial.[70]En 1973, solamente un 35 por ciento daba apoyo a leyes para prohibir la exclusión en la compraventa inmobiliaria, mientras que el 65 por ciento prefería que fueran los propietarios quienes decidieran. Para 2015, el 79 por ciento defendía ilegalizar la discriminación inmobiliaria.[71]Además, según la consultoría Gallup, el porcentaje que cree que son necesarias nuevas leyes de derechos civiles para reducir la discriminación contra los negros ha crecido de un 26 por ciento en 2003 al 60 por ciento de 2020.[72]

Las actitudes cambiantes en cuanto a la diversidad y la igualdad racial son más pronunciadas entre los más jóvenes; hay menos que sean blancos y entre ellos menos cristianos que en generaciones anteriores. Según un sondeo del Public Religion Research Institute de 2015, solo un 29 por ciento de los encuestados entre los dieciocho y veintinueve años se identificaban como blancos y cristianos, en contraste con el 67 por ciento de los mayores de sesenta y cinco.[73]Las generaciones más jóvenes también son considerablemente menos conservadoras en cuestiones de raza e inmigración (además de identidad sexual y de género).[74]En 2018, el Pew Research Center concluyó que un 52 por ciento de los *millennials* estaban de acuerdo en que la discriminación sería el «motivo principal por el que los negros no logran salir adelante hoy en día», en contraste con un 36 por ciento entre los *boomers* y un 28 por ciento de los pertenecientes a la

llamada generación silenciosa.[75]

Resulta obvio que las desigualdades en materia jurídica, las situaciones de discriminación racial y otros abusos de los derechos civiles se siguen produciendo en nuestro siglo. En cambio, cada vez se castigan más, tanto política como legalmente, las infracciones contra estos derechos.[76]Debido a una opinión pública en constante evolución, además de la eficacia de organizaciones como la NAACP, o Mexican American Legal Defense and Educational Fund (Fondo Educativo y de Defensa Legal México-Estadounidense) (MALDEF, por sus siglas en inglés) o movimientos sociales como Black Lives Matter (Las Vidas Negras Importan), hoy se suele reaccionar con indignación pública ante actos de racismo y discriminación. A todo ello se une el hecho de que ahora se dedique un considerable esfuerzo a juzgar a los infractores, aunque no siempre con éxito.[77]

El advenimiento de una democracia multirracial hizo de Estados Unidos otro país. Aunque también empezó a suponer una amenaza electoral para el Partido Republicano a finales del siglo XX, que aún era mayoritariamente blanco y cristiano. En 2012, cuatro de cada cinco votantes republicanos eran blancos y cristianos (es decir, protestantes o católicos),[78]pero estos estaban pasando a ocupar una proporción decreciente entre los electores del país: de constituir tres cuartas partes del electorado en 1990 a apenas la mitad en la década de 2010.[79]

La elección de Barack Obama en 2008, así como su reelección en 2012, pusieron de manifiesto las limitaciones de la estrategia para el Sur de los republicanos.[80]En 1980, Ronald Reagan consiguió el 55 por ciento del voto blanco que se tradujo en una victoria por goleada en 44 estados. Treinta y dos años más tarde, Mitt Romney se hizo con un incluso más apabullante 59 por ciento del voto blanco pero, incluso así, *perdió las elecciones*.

La creciente diversidad de Estados Unidos no suponía necesariamente un cataclismo para el Partido Republicano. La demografía poco tiene que ver con el destino político. Las identidades sociales y políticas evolucionan sin cesar; a menudo de forma imprevisible, influenciadas tanto por las circunstancias como por las estrategias que toman los partidos. Estos pueden adaptarse

y encontrar maneras nuevas de atraer a bases más amplias, y a menudo lo logran, pero las formaciones que no se adaptan al cambio social y demográfico se arriesgan a una debacle electoral.

Tomemos como ejemplo el Partido Republicano de California. Las oleadas de inmigración incidieron muy pronto en la región: un estado que en los años cincuenta estaba formado por más de un 80 por ciento de blancos se transformó en mayoritariamente diverso hacia el cierre del siglo. Durante el siglo XX, California tenía afinidades republicanas: trece de diecisiete gobernadores pertenecieron al partido. Sin embargo, a principios de los noventa y con la recesión económica, el gobernador republicano Pete Wilson, aspirante a la reelección en 1994, se vio muy perjudicado en los sondeos.[81]

Para recobrar su posición, Wilson apeló al cada vez mayor resentimiento de la mayoría blanca de California, comunidad que menguaba. Debido a que los blancos seguían representando un 80 por ciento del electorado estatal por aquel entonces, muy por encima del voto latino (el 8 por ciento del electorado), adoptar posturas antimigratorias parecía una buena apuesta política, de modo que Wilson giró considerablemente a la derecha.[82]Defendió la proposición 187, una polémica iniciativa electoral que restringiría el acceso a la educación y a los servicios de salud a los inmigrantes indocumentados, y que, de aprobarse, obligaría a los profesores, médicos y sanitarios a informar a las autoridades acerca de cualquier persona sospechosa de no tener documentación. También pedía una moratoria temporal de la inmigración *legal* y el fin del derecho a obtener la ciudadanía al nacer.[83]Wilson fue reelegido gracias a un avasallador 62 por ciento del voto blanco.[84]La proposición 187 también salió adelante con un 63 por ciento del voto blanco, aunque más de tres cuartas partes de los latinos y la mayoría de los votantes negros y asiáticos se opusieron a ella.[85]Asimismo, los republicanos promovieron otras iniciativas en las urnas durante los noventa para prohibir la discriminación positiva y restringir la educación bilingüe en las escuelas públicas.[86]

Aunque en inicio la estrategia antimigratoria del Partido

Republicano de California le fue beneficiosa en las urnas, al final resultó contraproducente. El estado no solamente se estaba volviendo cada vez más diverso, sino que los inmigrantes de primera y segunda generación también empezaban a acceder al voto. Hacia el año 2000, la mayoría de los californianos no eran blancos y, para 2021, un 60 por ciento de los *votantes* ya no lo eran.[87]

Como habían echado a perder a esta mayoría emergente en aras del cortoplacismo electoral, los republicanos sufrieron un colapso político de proporciones históricas. Perdieron el control de la legislatura californiana en 1996 y nunca más lo volvieron a recuperar. Asimismo, tampoco consiguieron ventaja en ninguna de las elecciones del Senado estadounidense celebradas desde 1992 y —con la excepción de Arnold Schwarzenegger, un moderado ajeno a la política que se convirtió en gobernador tras un referéndum revocatorio en 2003—, los republicanos no han vuelto a presidir la región. La afiliación del Partido Republicano cayó en picado de tal manera que en 2016 se convirtió en la tercera fuerza del estado, detrás de los demócratas y los «otros».[88]

La suerte que corrieron los republicanos en California no era algo inevitable. Convertirse en representantes de una mayoría blanca cristiana en decadencia había sido una *decisión política*. Y es que este tipo de estrategias resultan tentadoras: a corto plazo ofrecen considerables recompensas. Ahora bien, como demuestra este caso, pueden desembocar en el desastre.

Los dirigentes republicanos a nivel nacional ya estaban del todo concienciados de esta clase de riesgos a principios del siglo XXI. Reince Priebus, quien presidía el Comité Nacional Republicano (RNC) en 2011, tenía un gráfico en su despacho de la sede en el que se veía el aumento de la población hispana en contraposición al nivel de apoyo blanco que le haría falta a un candidato republicano para ganar la presidencia en un futuro.[89]La línea crecía sin parar a lo largo de 2012, 2016 y años posteriores. Según el periodista Jeremy Peters: «La conclusión parecía innegable. No había modo en que el Partido Republicano pudiera sobrevivir con la estrategia de ganar cada vez a más blancos en las

elecciones».[90]Lindsey Graham, senador republicano por Carolina del Sur, lo expresó con más contundencia si cabe en 2012, cuando dijo: «No estamos generando suficientes blancos cabreados para mantener el negocio a largo plazo».[91]

Para algunos líderes republicanos nacionales, la solución era evidente: si su partido no podía obtener mayorías nacionales atrayendo al votante blanco y conservador cristiano, debería ir en busca de nuevas bases, especialmente entre votantes no blancos. Así se evitaría el error que cometieron los republicanos de California. En 2005, el presidente del RNC, Ken Mehlman, reconoció que el Partido Republicano se había servido en el pasado de la cuestión racial, y renunció públicamente a aquella práctica: «Aquí estoy, como presidente del Comité Republicano, para deciros que nos equivocamos».[92]Michael Steele, que se convirtió en el primer presidente afroamericano del RNC en 2009, puso fin a la estrategia sureña y creó un «Departamento de Coaliciones» para desarrollar estrategias de expansión de sus bases.[93]

Con todo, el proyecto de mayor envergadura para ampliar el electorado republicano llegó con la reelección de Barack Obama en 2012, cuando el presidente del RNC, Reince Priebus, puso en marcha lo que denominó «la más exhaustiva revisión electoral» jamás llevada a cabo tras la derrota de un partido.[94]El informe resultante, conocido como «la "autopsia" del RNC», criticaba a fondo el enfoque de los republicanos en los ciudadanos blancos y advertía de que la organización se estaba «automarginando» al «no ir más allá de sus votantes fundamentales».[95]Al admitir que hoy día Estados Unidos «tiene otro aspecto»,[96]la autopsia animaba a que los republicanos fueran más «acogedores e inclusivos» con los potenciales electores no blancos. Preocupaba que muchos votantes hispanos percibían que el Partido Republicano «no los quiere en Estados Unidos».[97]Si el partido no dejaba de «hablar solo consigo mismo» —advertía el informe— sería «cada vez más difícil que ganaran nuevas elecciones en un futuro próximo».[98]Incluida entre las principales recomendaciones del documento estaba que dieran apoyo a la reforma electoral, que ofrecía una vía a la ciudadanía para inmigrantes indocumentados.[99]

El análisis de 2013 fue un ejemplo más de lo que debería hacer en democracia un partido al perder: adaptarse a los cambios de los ciudadanos. Inquietos ante la creciente vulnerabilidad electoral de los republicanos y con una sociedad en transformación, líderes nacionales como Mehlman, Steel y Priebus intentaron desviar al partido de la senda racista que empezó a tomar en los años sesenta. Sin embargo, buena parte del electorado republicano —los dirigentes locales, activistas y votantes fieles que dominaban la organización de base del partido— se estaba radicalizando y conducían al partido en otra dirección.

De hecho, mientras los líderes del RNC daban conferencias de prensa para explicar sus planes de atraer a los estadounidenses no blancos, los republicanos de diferentes estados —con el apoyo de la propia dirección del RNC— se ocupaban de dificultar el voto a esos mismos ciudadanos.[100]La afluencia en las urnas de negros, latinos, asiáticos-estadounidenses y electores jóvenes, a quienes Ronald Brownstein llamó la «coalición de los ascendientes», se incrementó notablemente en 2008 y 2012.[101]En 2012, la participación electoral negra superó a la blanca por primera vez en la historia de Estados Unidos. Mientras que la mayoría de los partidos *cambia* de estrategia para responder a su derrota electoral, la respuesta del Partido Republicano en muchos estados fue la de modificar —limitar, en efecto— al electorado.[102]

Tras la victoria de los republicanos en las legislativas de mitad de mandato de 2010, en las que obtuvieron el control sobre los Gobiernos de 11 estados y llegaron a establecer mayorías cualificadas en varios otros, el Partido Republicano llevó a cabo una serie de reformas defensivas que se proponían restringir el acceso a las urnas. Muchas de estas propuestas eran «leyes de identificación del votante» que, para ejercer el voto, requerían poseer documentación con una foto emitida por el Gobierno.[103]Antes de 2005 ningún estado había hecho de la identificación fotográfica un requisito para votar y, antes de 2011, solo la pedían Georgia e Indiana.[104]Sin embargo, entre 2011 y 2016, 13 estados —todos con Gobierno republicano— aprobaron leyes estrictas respecto a la identificación con fotografía.[105]Se

ratificaron con una motivación en apariencia razonable: combatir la suplantación de identidad durante el sufragio. Sin embargo, había dos objeciones: la primera es que este tipo de fraude es prácticamente inexistente en Estados Unidos.[106]Durante la presidencia de George W. Bush, el Departamento de Justicia inició una cruzada sin precedentes para detectar y penalizar la suplantación del voto. Apenas se encontraron casos.[107]De entre cientos de millones de papeletas, solamente treinta y cinco personas fueron acusadas de fraude electoral entre 2002 y 2005. La mayoría no eran más que simples errores o infracciones en la inscripción en el censo. Ninguno de los casos se habría impedido con una ley de identificación para el voto.

Así pues, estas normas eran una solución a un problema inexistente, lo que significa que —sin lugar a dudas— su objeto *no* era el de combatir el fraude. Su intención, más bien, era la de complicar el sufragio a ciertos estadounidenses: en particular a los ciudadanos negros, latinos y pobres. Esta es la segunda objeción a las leyes de identificación electoral: son tendenciosas. Hacer de la documentación un requisito para votar no es intrínsecamente antidemocrático. La mayoría de las democracias lo hacen. Pero, a diferencia de otros países, Estados Unidos no tiene un sistema nacional de carnés de identidad, y muchos ciudadanos no disponen de la identificación fotográfica que les pedían. Según un estudio del Brennan Center for Justice (Centro Brennan para la Justicia), más de un 10 por ciento de ciudadanos en edad de votar carecían, en 2012, de un carné con fotografía emitido por el Gobierno.[108]La cifra se incrementaba entre los votantes pobres y los pertenecientes a minorías.[109]Por ejemplo, cuando Texas aprobó su ley de identificación electoral en 2011, las personas negras inscritas tenían más del doble de posibilidades que las blancas de no disponer de la documentación necesaria, y era tres veces más probable que los latinos inscritos carecieran de un carné válido en comparación con los blancos.[110]

La supresión del voto se producía a una escala particularmente grave en ciertos estados. En el caso de Florida, los republicanos redujeron el período de votación anticipada de dos

semanas a ocho días, y el domingo anterior a los comicios —día en que es tradición que muchos afroamericanos voten— fue excluido.[111]Aquella decisión tuvo un impacto desproporcionado entre los electores negros: mientras que los afroamericanos constituían apenas un 13 por ciento del censo de Florida, eran un tercio de los que votaban con antelación.[112]La nueva legislación añadía nuevos y complicados requisitos para la inscripción en el registro electoral. Por ejemplo, debían rellenar informes al completo en cuarenta y ocho horas o bien arriesgarse a multas sustanciales.[113]La ley era tan extrema que incluso llevó a la League of Women Voters (Liga de Mujeres Votantes) a detener sus campañas para inscribir a electores al censo.[114]Finalmente, en 2011, el gobernador Rick Scott restauró la —recientemente derogada— ley de privación del voto para los delincuentes, convirtiendo a Florida en uno de los tres únicos estados (con Kentucky y Virginia) que impedía votar ni una sola vez a los delincuentes, incluso tras haber cumplido su sentencia.[115]Aquella jugada afectaba de manera desproporcionada a los afroamericanos. Después de que Scott volvió a introducir aquella ley, se negaba el derecho a sufragio a un impactante 21 por ciento de los adultos afroamericanos del estado.[116]

En Carolina del Norte, las leyes que permitían el voto anticipado y la inscripción el mismo día de los comicios, adoptadas en los primeros años del siglo XXI, habían logrado producir un incremento sustancial en la participación: en términos de afluencia de votantes, el estado pasó de ocupar el trigésimo séptimo puesto en el país al undécimo el año 2012.[117]La participación de los negros se incrementó en un 65 por ciento entre 2000 y 2012 y superó a la de la población blanca en 2008 y 2012.[118]Sin embargo, después de nombrar a un gobernador de su partido en la legislatura estatal de 2012, el Partido Republicano aprobó una radical ley de sufragio. Esta eliminaba la posibilidad de inscribirse en el censo el mismo día, reducía el período de voto anticipado, impedía a los condados extender sus horarios de votación en caso de producirse colas muy largas e imponía una de las leyes de identificación fotográfica más estrictas y racialmente sesgadas del

país.[119]Según un análisis, los republicanos «recopilaron datos sobre qué tipos de carnés tenían o no los negros, y luego elaboraron un listado a medida de identificaciones válidas para favorecer a los blancos». Cuando la ley finalmente fue revocada por un tribunal federal, la corte observó que esta se había elaborado contra los afroamericanos «casi con precisión de cirujano».[120]

Se trataba de un caso de *lawfare*: leyes que simulaban combatir el fraude, pero que en realidad habían sido diseñadas para frenar el acceso a las urnas entre los votantes de rentas bajas, minorías y jóvenes. Como reconoce el antiguo estratega republicano Stuart Stevens, en su partido «no están a la par del resto del país. Y lo saben, por lo que buscan modificar cómo vota la gente. Es una mera variación del impuesto electoral y de la prueba de alfabetización».[121]Un exasistente legislativo de Wisconsin comentó en una reunión del Partido Republicano en 2015 que sus senadores «sentían vértigo ante las complejidades» que prometía una nueva ley de identificación electoral, y que muchos de ellos recalcaban sus «posibilidades de acallar a minorías y a votantes universitarios».[122]De los 11 estados con mayor participación afroamericana en 2008, siete adoptaron nuevas restricciones al voto después de 2010 y, de entre los 12 estados cuya población hispana había crecido más entre 2000 y 2010, nueve aprobaron leyes electorales restrictivas durante el mismo período.[123]

Algunos estudios demuestran que, a día de hoy, las leyes de identificación para el voto solo han tenido un efecto moderado. Eso no significa, empero, que no sean dañinas.[124]Cuando en 2009, el campeón de peso wélter Antonio Margarito se enfrentó a Shane Mosley usando relleno en los guantes, este fue suspendido del boxeo profesional, aun habiendo perdido el combate.[125]Que una conducta antidemocrática no sea eficiente no la convierte en aceptable. Además, los efectos marginales son importantes. En las presidenciales de 2000, 537 votos del estado de Florida fueron decisivos, y en las de 2020 resultaron determinantes 40.000 papeletas de tres estados. Los cambios más modestos en la participación electoral pueden llegar a distorsionar el resultado de

unas elecciones.

Puede que a principios del siglo XXI los políticos republicanos hayan temido no ganar las elecciones, pero a muchos de los votantes del partido les asustaba perder algo mucho más grande: su país; o mejor dicho, el lugar que ocupaban en él.[126]En el transcurso de la historia estadounidense, los protestantes blancos se han encontrado en la cima de una jerarquía racial que parecía inamovible. Desde la fundación del país hasta la década de los sesenta, las posiciones de poder y prestigio estuvieron ocupadas, casi sin excepción, por hombres blancos protestantes.[127]Hasta finales de los ochenta, incluso, todo presidente de Estados Unidos, vicepresidente, presidente del Congreso, jefe de la mayoría en el Senado, presidente del Tribunal Supremo, de la Reserva Federal o jefe del Estado Mayor Conjunto había sido un hombre blanco. Todos y cada uno de los gobernadores de Estados Unidos habían sido blancos hasta 1989. Los consejeros delegados de la Fortune 500 también lo fueron hasta 1987.[128]Los estadounidenses que no se identificaban como blancos a lo largo de este período fueron considerados de un estatus inferior. Esta jerarquía racial garantizaba a los estadounidenses caucásicos una cierta posición mínima en la sociedad: un «suelo de cristal bajo los pies que el ciudadano blanco veía, pero del que no podía caer».[129]W. E. B. Du Bois lo llamaba el «salario psicológico» de la blancura.[130]Durante casi doscientos años, esta jerarquía racial se dio por sentada.

Todo ello cambió de forma dramática en el siglo XXI. No solo porque Estados Unidos ya no era un país predominantemente blanco, sino porque unas jerarquías raciales que habían estado muy enquistadas se empezaban a desdibujar.[131]La puesta en duda del longevo dominio social de los blancos estadounidenses hizo que muchos se sintieran desplazados, alienados y despojados.[132]Un estudio del PRRI en 2015 preguntaba a los ciudadanos si creían que la cultura y el modo de vida de su país había cambiado «en general para mejor» o «para peor» desde los años cincuenta. Mientras que una enorme mayoría de los afroamericanos, hispanos y ciudadanos

sin afiliación religiosa opinaba que todo había mejorado desde aquella década, el 57 por ciento de los blancos y el 72 por ciento de los cristianos evangélicos blancos decían que las cosas habían empeorado.[133]

La reacción, no obstante, trascendía la nostalgia. Haber limado las arraigadas jerarquías sociales generaba una sensación de injusticia entre muchos blancos.[134]Cuando alguien crece con una cierta posición social garantizada, la pérdida de ese estatus especial puede parecerle improcedente.[135]De hecho, muchos blancos en Estados Unidos empezaron a sentirse víctimas.[136]Las encuestas revelaban que su percepción de la existencia de un «sesgo antiblanco» había ido creciendo desde los años sesenta. A principios del siglo XXI, una mayoría de los blancos estadounidenses creía que la discriminación contra ellos se había convertido en un problema por lo menos tan grave como la discriminación contra los negros.[137]

Con la presidencia de Obama se multiplicaron sobremanera los sentimientos de este tipo.[138]Aunque el presidente era moderado en lo político, investigaciones llevadas a cabo por el politólogo Michael Tesler muestran que su victoria tuvo un efecto de profunda radicalización sobre las actitudes políticas de los estadounidenses.[139]La presidencia de Obama hizo que la transición a una democracia multirracial estuviera a la vista de todos. La mera presencia de una familia afroamericana en la Casa Blanca, y que apareciera en televisión día tras día, provocaba que las nuevas realidades demográficas y políticas fueran imposibles de ignorar. Muchos estadounidenses blancos temían que el país en que se habían criado les estaba siendo arrebatado.[140]

Buena parte de esta resistencia a una democracia multirracial tomó la forma del nacionalismo cristiano blanco.[141]El sociólogo Philip Gorski lo describe como la creencia en que «los Estados Unidos fueron fundados por cristianos (blancos), y que estos están en peligro de convertirse en una minoría (nacional) perseguida».[142]Los «cristianos blancos» empezaron a ser menos un grupo religioso, y más un grupo étnico y político.[143]Aunque los evangélicos blancos eran los más proclives a sostener dichas

creencias, un número creciente de católicos conservadores blancos y nacionalistas blancos seculares veían las cosas de igual manera. De modo que, si bien habían sido los protestantes blancos quienes solían ocupar la cúspide de la jerarquía social estadounidense, y que eran los protestantes evangélicos quienes habían acudido en masa al Partido Republicano a finales del siglo XX, los «cristianos blancos» que empezaron a dominarlo a principios del XXI eran un grupo diverso en cuanto a lo religioso.[144]Eran estadounidenses a quienes unía su deseo de hacer que «la cristiandad blanca» fuera «culturalmente dominante de nuevo».[145]

El nacionalismo cristiano blanco contribuyó a dar alas al movimiento Tea Party, surgido en febrero de 2009, apenas un mes después de que Obama ocupara su cargo.[146]Después de manifestarse por todo el país el 15 de abril de 2009, el Tea Party empezó a proliferar hasta alcanzar dimensiones de un movimiento de masas, con cientos de organizaciones locales, casi medio millón de miembros y unos cuarenta y cinco millones de simpatizantes.[147]Se trataba del clásico movimiento reaccionario, constituido por una mayoría desproporcionada de estadounidenses evangélicos blancos y mayores que estaban dispuestos a «recuperar su país».[148]El perfil general que ofrecen de sus miembros los sondeos los muestran como opuestos a la inmigración, al islam y reacios a la diversidad étnica y cultural.[149]Según los politólogos Christopher Parker y Matt Barreto, el Tea Party tiene la percepción de «perder el país ante grupos que no pueden reconocer como estadounidenses "de verdad"».[150]

Así que, mientras que los líderes del RNC debatían sus estrategias tras la derrota de 2012, muchos afiliados republicanos se sentían como si afrontaran una pérdida de cariz más existencial. Los tertulianos en medios populares de la derecha alimentaban su desesperación. La noche de las elecciones de 2012, el presentador de Fox News Bill O'Reilly declaró que «la clase dominante blanca es ahora la minoría. Estos ya no son los Estados Unidos tradicionales».[151]El día siguiente, Rush Limbaugh dijo a sus oyentes: «Me fui a dormir anoche pensando que nos sobrepasan en número. Me fui a dormir... pensando que hemos perdido el

país».[152]

No solamente se radicalizó la base blanca y cristiana de los republicanos ante lo que percibían como una amenaza existencial, sino que, en efecto, esta parte de la militancia tomó las riendas del partido. ¿Cómo llegó a ocurrir?

Durante buena parte del siglo XX, el resentimiento racial no fue cuestión de partidos. *Ambos grupos* incluían a conservadores en cuanto a la cuestión de la raza —defensores de las jerarquías raciales tradicionales— entre sus fieles. De hecho, muchos blancos conservadores del Sur todavía eran partidarios de los demócratas durante los noventa. Pero los políticos republicanos pasaron cuatro décadas reclutando a blancos sureños, conservadores y evangélicos en una única plataforma política, y así convirtieron al Partido Republicano en una indiscutible morada de los cristianos blancos que temían al cambio cultural y demográfico.[153]Según el politólogo Alan Abramowitz, la proporción de republicanos blancos que puntuaban muy arriba en el índice de «resentimiento racial» de las encuestas aumentó del 44 por ciento de los años ochenta a un 64 por ciento en la era de Obama.[154]

El Partido Republicano no era, por supuesto, un ente monolítico. Tampoco lo eran todos los votantes republicanos conservadores en materia racial. Sin embargo, en la era de Obama, esta facción se había convertido en una mayoría tangible en el partido.

Ello implicaba diversas consecuencias: los votantes republicanos en proceso de radicalización ejercían su influencia a través de las primarias, en las que los contendientes extremistas —muchos de ellos con el apoyo del Tea Party— o bien derrotaban a los republicanos moderados, o bien los llevaban más hacia la derecha. Este proceso fue facilitado por el desmembramiento de la élite del Partido Republicano.[155]El ascenso de grupos externos y bien financiados (patrocinados por los hermanos Koch y otros multimillonarios), así como medios de derechas influyentes como Fox News, dejaron al partido especialmente vulnerable ante quienes pretendían capturarlo.[156]

Frente a una base de activistas y votantes de las primarias a

quienes un encuestador republicano describió como «enfadados por todo», a los líderes del partido les costaba apartarse de la senda política del agravio de los blancos.[157]Los republicanos del Congreso trataron de dar apoyo a la reforma migratoria, según recomendaba el informe de «la autopsia» de 2013.[158]Quien parecía encaminado a ser el presidente de la cámara, el representante Paul Ryan, debía defender ante personalidades mediáticas derechistas una proposición de ley para ofrecer a inmigrantes indocumentados la posibilidad de obtener la ciudadanía. A todo esto, en plena llamada en directo con el presentador Rush Limbaugh, Ryan fue despreciado. Limbaugh «lo cortó de inmediato» diciéndole: «Paul, ya entiendo a dónde quieres ir a parar. Pero eso, al fin y al cabo, no es lo que mis oyentes quieren oír».[159]Precisamente, las encuestas demostraban que la mayoría de los republicanos estaban en contra de una legislación que ofrecía vías para conseguir la nacionalidad. Después de que Eric Cantor, líder de la mayoría, perdiera unas primarias contra un activista del Tea Party que hacía campaña contra la inmigración, los republicanos de la Cámara de Representantes cedieron en su empeño de apoyar la reforma.[160]

Las primarias de 2016 ofrecían una nueva oportunidad para que los republicanos volvieran a una senda más inclusiva. El candidato inicial, Jeb Bush (que hablaba un español fluido y estaba casado con una ciudadana mexicana), aceptó el análisis que se hizo en 2013. De hecho, Sally Bradshaw, una de sus principales asistentes, colaboró en la redacción de dicho informe. Según Bradshaw, la campaña de Bush trataba de «animar al partido a adaptarse a la cambiante demografía».[161]Bush dijo a sus asistentes: «No soy un candidato del agravio. No voy a llevar a cabo una campaña en esos términos».[162]

Donald Trump adoptó otro enfoque. Se juntaba con las masas, a menudo al son de sus peores pulsiones. Con frecuencia ponía ideas a prueba durante los mítines de campaña: «El público te dice hacia dónde hay que ir»,[163]decía. Rápidamente aprendió que el Tea Party, con su mantra de corte racista, «recuperar nuestro país», era la clave para ganarse a quienes tenían ideas étnicas conservadoras; es decir, a quienes dominaban el electorado de las primarias

republicanas.[164]Mientras que sus rivales republicanos eran reacios a utilizar eslóganes abiertamente racistas, nativistas o demagógicos, Trump no tardó en traspasar esa línea. Su particular disposición a decir y a hacer cosas que otros miembros del partido rechazaban por su intolerancia, racismo y crueldad le permitió dominar el mercado del voto del agravio blanco. Según el análisis de la politóloga Ashley Jardina, la campaña de Trump señaló a los electores blancos que tenía la intención de «hacer bandera de la jerarquía racial».[165]Sin ir más lejos, los estudios demuestran que los objetivos más probables de Trump en las primarias eran los republicanos blancos convencidos de que su estatus como grupo estaba amenazado.[166]En la correcta expresión de Ezra Klein: «Trump no secuestró al Partido Republicano. Supo comprenderlo».[167]

La presidencia de Trump aceleró la radicalización del partido. Su éxito demostraba que las políticas identitarias blancas se traducían en una fórmula ganadora para la agrupación, lo que provocaba que muchos políticos republicanos —tanto nuevos como veteranos— emularan su estilo y posturas. A su vez, muchos de los miembros del partido que se negaron a subirse al carro de Trump se retiraron o bien fueron derrotados en las primarias. Hacia 2020 no quedaba en el Partido Republicano una sola facción anti-Trump que tuviera cierta entidad, así se extinguió la práctica totalidad de la oposición conservadora al extremismo de Trump.[168]

La presidencia de Trump dejó al Partido Republicano profundamente inmerso en las políticas del resentimiento blanco. Un estudio de 2021 mostraba que el 84 por ciento de los votantes de Trump estaban preocupados porque la «discriminación contra los blancos aumentará sin freno en los próximos años».[169]Muchos de sus defensores también creían en la «teoría del gran reemplazo», según la cual una conspiración de las élites instrumentaliza la inmigración para sustituir a la población blanca «nativa» de Estados Unidos. Promovida originalmente en Europa por supremacistas blancos marginales, esta teoría se popularizó en Estados Unidos después de 2016. Durante la concentración de supremacistas blancos llamada «Unite the Right» (Unir a la

Derecha) en Charlottesville, Virginia, los manifestantes coreaban: «¡No nos van a reemplazar!» y «¡Los judíos no nos van a reemplazar!».[170]Los supremacistas blancos que asesinaron en masa a latinos en El Paso, en Texas, en 2019, y a afroamericanos en Buffalo, Nueva York, en 2022 habían escrito manifiestos en los que se adherían a la «teoría del gran reemplazo».[171]

Las personalidades mediáticas de la derecha les dieron alas. Laura Ingraham dijo a su público: «Los demócratas os quieren reemplazar a vosotros, a los votantes estadounidenses, por ciudadanos acabados de amnistiar y por un número cada vez mayor de inmigrantes en cadena».[172][173]El promotor más influyente de la «teoría del gran reemplazo» fue Tucker Carlson, presentador del noticiero por cable más visto en la televisión estadounidense. Según una investigación del *New York Times*, Carlson o sus invitados repitieron más de cuatrocientas veces entre 2017 y 2021 que las élites utilizaban a la inmigración para forzar un cambio demográfico.[174]El presentador dijo a sus televidentes que los demócratas estaban intentando

> cambiar la composición racial del país. Esa es la razón. Reducir el poder político de la gente cuyos ancestros vivieron aquí y aumentar dramáticamente la proporción de estadounidenses acabados de llegar del tercer mundo. Es horripilante… En términos políticos, esta estrategia se llama «el gran reemplazo»: el reemplazo de los estadounidenses con raíces por gentes más obedientes de países lejanos.[175]

Así pues, al llegar la presidencia de Trump a su fin, el miedo y el resentimiento habían llevado a una cantidad sorprendentemente grande de republicanos al extremismo. Una encuesta de 2021, auspiciada por el American Enterprise Institute (Instituto Estadounidense de la Empresa), reveló que un 56 por ciento de los republicanos estaba de acuerdo con la afirmación de que «el modo de vida tradicional estadounidense desaparece tan deprisa que tal vez debamos usar la fuerza para salvarlo».[176]El terreno estaba preparado para un asalto a la democracia.

Hemos enumerado con anterioridad tres principios básicos que los partidos democráticos deben seguir: aceptar siempre los resultados de las elecciones justas, ganen o pierdan; rechazar sin ambages el uso de la violencia para conseguir poder o aferrarse a él, y romper con los extremistas antidemocráticos. ¿En qué punto se encuentra el Partido Republicano?

Empecemos por el de «aceptar los resultados de las elecciones». Pocos principios resultan tan esenciales para la democracia como admitir la derrota. Cuando los partidos pierden, deben saber reconocer la victoria de sus oponentes, reagruparse y trabajar para reconstruir sus mayorías perdidas. El Partido Republicano ya no posee esta capacidad.

Donald Trump tiene un largo historial con lo que respecta a negarse a aceptar su derrota. Durante la carrera presidencial de 2016, repitió incontables veces a sus partidarios que las elecciones estaban amañadas en su contra, y aseveró en varias ocasiones —en el último debate presidencial incluido— que tal vez no aceptaría los resultados en caso de una derrota.[177]Tras perder el voto popular de 2016, Trump rechazó los resultados, insistiendo: «He ganado el voto popular si ignoramos a los millones de personas que han votado ilegalmente».[178]También aseguró que se cometió fraude cuando los demócratas ganaron las elecciones de medio mandato en 2018.[179]

Así pues, no debería sorprender a nadie que el presidente Trump renegara de los resultados de los comicios de 2020. En su discurso en la Convención Nacional Republicana de 2020, Trump declaró: «El único modo en que pueden lograr robarnos las elecciones es amañándolas».[180]Lo repitió durante la campaña de aquel otoño.[181]

En noviembre de 2020, por primera vez en la historia de Estados Unidos, un presidente en funciones se negaba a aceptar la derrota. Bien entrada la noche electoral, al tiempo que el escrutinio empezaba a favorecer a Joe Biden, el presidente Trump anunció que aquellos comicios eran «un fraude a la población estadounidense. Nos estábamos preparando para ganar estas elecciones. Es un grave fraude a nuestra nación».[182]A pesar de las

súplicas de sus asesores, Trump nunca aceptó en público el resultado de las elecciones ni admitió la derrota.[183]En su lugar, dedicó una campaña de dos meses a impugnar el resultado, además de presionar a decenas de gobernadores, funcionarios electorales y líderes legislativos estatales para falsificar o enmendar el recuento.[184]Incitó al secretario de Estado de Georgia, Brad Raffensperger, a cometer un engaño a la vieja usanza afirmando que solo quería «encontrar 11.780 votos».[185]Es decir, solo uno por encima de la ventaja de Biden en ese estado. También llegó a proponer la idea de desplegar a la Guardia Nacional para incautar los dispositivos de votación de todo el país, con lo que consiguió que la aterrada directora de la CIA, Gina Haspel, le dijera al jefe del Estado Mayor Conjunto, el general Mark Milley: «Nos encaminamos hacia un golpe de derechas».[186]Finalmente, el círculo de confianza de Trump ideó un plan para bloquear la victoria de Biden, y así entorpeció la certificación del voto del Colegio Electoral.[187]Como parte de esa estrategia, sus aliados en seis estados donde había ganado Biden elaboraron actas falsas en las que se declaraba que Trump era el vencedor.[188]A continuación, Trump presionó (sin éxito) al vicepresidente Mike Pence, que dirigía la sesión conjunta de recuento de votos en el Congreso, para que declarase que las elecciones en dichos estados eran «cuestionables» y se negase a su escrutinio, dándole una mayoría de los votos restantes.[189]

Sin embargo, Trump no fue el único en negarse a aceptar la derrota: el grueso del Partido Republicano hizo lo mismo. Durante las semanas que siguieron a las elecciones, la mayoría de los políticos del partido se negaron a reconocer públicamente la victoria de Biden. Para el 16 de diciembre de 2021, solo veinticinco miembros republicanos del Congreso la habían admitido.[190]El proyecto de Rendición de Cuentas Republicano evaluó las declaraciones públicas de los 261 miembros republicanos del Congreso, preguntando si habían manifestado dudas sobre la legitimidad de los comicios. De ellos, una cantidad impactante —224 de esos 261 (un 86 por ciento)— respondió que sí.[191]Luego, el 6 de enero, casi dos terceras partes de los

republicanos en la Cámara Baja votaron en contra de certificar el resultado.[192]

Muchos de los principales líderes republicanos ayudaron a Trump en su intento por revocar las elecciones. El senador de Carolina del Sur, Lindsey Graham, telefoneó al secretario de Estado de Georgia, Raffensperger, para que invalidara todos los votos por correo en condados con un alto índice de firmas no coincidentes, lo que podría haber dado un vuelco a las elecciones en ese estado.[193]El senador de Utah, Mike Lee, mandó un mensaje al jefe de gabinete de la Casa Blanca, Mark Meadows, en el que se leía que «si un puñado de estados tuvieran que nombrar listas alternativas de candidatos al Colegio Electoral, podría existir una vía» para anular las elecciones.[194]Más tarde le dijo a Meadows que ocupaba «catorce horas al día» en persuadir a las legislaturas estatales para que mandaran nuevas listas de votantes al Colegio Electoral. Ted Cruz, senador de Texas, propuso la creación de un «comité electoral» *ad hoc* que llevara a cabo una «auditoría de emergencia de los comicios durante diez días» para que las legislaturas de los estados pendulares pudieran mandar listas de electores rivales.[195]

A ello contribuyeron los republicanos de distintos estados. Diecisiete fiscales generales estatales del partido interpusieron una demanda en el Tribunal Supremo para invalidar los resultados de Georgia, Pensilvania, Míchigan y Wisconsin. En un estudio sobre los legisladores estatales republicanos en los nueve estados donde la disputa de 2020 fue más reñida, *The New York Times* descubrió que el 44 por ciento de los legisladores de dicho partido habían promulgado medidas para «desacreditar o invalidar» los resultados de las elecciones.[196]En Arizona, Pensilvania y Wisconsin las habían promulgado la mayoría de ellos.[197]

Así pues, desde la cúspide hasta las bases, el grueso del Partido Republicano se negó a aceptar en público los resultados de las elecciones de 2020. «La gran mentira», como se la conocía, se convirtió en una religión entre los activistas republicanos, y prácticamente en un test de tornasol[198]entre los candidatos a las primarias republicanas.[199]

Además de negarse a aceptar la derrota, los republicanos infringieron el segundo principio de la política en democracia: el inequívoco rechazo de la violencia. Tras 2016, pero especialmente después de 2020, un número de políticos republicanos cada vez mayor se sirvió de retórica violenta y consintió la agresividad.[200]Un puñado de congresistas del partido, que incluyen a Lauren Boebert, Matt Gaetz, Paul Gosar o Marjorie Taylor Greene, mantuvo vínculos con grupos paramilitares como los Proud Boys (Chicos Orgullosos) y los Oath Keepers (Guardas de los Juramentos), y lanzó mensajes de ira, incluso la sugerencia de asesinar a sus rivales en el Congreso.[201]

En abril de 2020, manifestantes armados vinculados al Partido Republicano de Míchigan bloquearon el tráfico y se reunieron en torno a la cámara de la capital estatal, Lansing, para protestar contra las restricciones por la covid-19 de la gobernadora Gretchen Whitmer.[202]El presidente Trump los aplaudió con un tuit en que decía: «¡Liberad Míchigan!».[203]Dos semanas después, asaltaron el Capitolio de ese mismo estado.[204]

Durante el verano de 2020, varios miembros republicanos del Congreso incitaron a la violencia contra manifestantes del movimiento Black Lives Matter. El diputado Matt Gaetz escribió en Twitter:[205]«Ahora que ya hemos visto claramente que los antifa son terroristas, ¿podemos darles caza como a los de Oriente Medio?».[206]Los líderes republicanos se pusieron de parte de Kyle Rittenhouse, un joven de diecisiete años que cruzó varios estados con un rifle y asesinó a dos manifestantes en Kenosha (Wisconsin).[207]Trump recibió a Rittenhouse en su residencia de Mar-a-Lago, mientras que Marjorie Taylor Greene propuso que se le concediera una medalla de oro del Congreso.[208]Los republicanos también dieron apoyo a Mark y Patricia McCloskey, una pareja de Saint Louis que apuntó contra manifestantes desarmados del Black Lives Matter. En la Convención Republicana de 2020 los McCloskey fueron seleccionados como ponentes invitados.[209]

Esta retórica violenta fue en aumento tras las elecciones de 2020. Después de los comicios, funcionarios electorales de Arizona, Georgia, Míchigan, Pensilvania, Wisconsin y otros estados

pendulares recibieron amenazas de muerte de partidarios de Trump.[210]Una encuesta a los funcionarios electorales reveló que uno de cada seis había sufrido amenazas durante el desempeño de su trabajo y que un 30 por ciento conocía a alguien que había abandonado su puesto en parte por miedo.[211]En Wisconsin, las páginas webs de ciertos condados republicanos decían a sus votantes que «se preparasen para la guerra».[212]

Finalmente, el presidente Trump animó a una insurrección violenta con la intención de bloquear la transferencia pacífica de poderes. La mañana del 6 de enero incitó a sus partidarios a marchar ante el Capitolio con la intención de impedir el visto bueno del Colegio Electoral. Al inicio del asalto, se negó a intervenir para detenerlo. Por el contrario, se negó, durante más de tres horas, a autorizar las peticiones de mandar a la Guardia Nacional.[213]A las seis de la tarde, mientras se vaciaba el Capitolio, Trump les dijo a sus seguidores que «recordaran por siempre aquel día».[214]Trump nunca llegó a denunciar el asalto. En cambio, lo justificó ante un reportero diciendo: «Alguna gente decía que era como en 1776. Si está amañada, si es un robo, ¿por qué no acusar al Capitolio?».[215]Más adelante describió aquella insurrección como «el mayor movimiento en la historia de nuestro país para "hacer a América grande de nuevo"».[216]

Los principales líderes republicanos se vieron obligados a denunciar el ataque al Capitolio, aunque varios políticos del partido respondieron de modo más ambiguo. El representante Andrew Clyde lo comparó con una «visita turística como otra»,[217]mientras que el senador Ron Johnson —que coincidía de manera inquietante con la opinión de los conservadores franceses tras los disturbios del 6 de febrero de 1934— dijo que «en ningún momento se sintió amenazado» por los insurgentes, porque eran «gente que ama a su país».[218]La representante Marjorie Taylor Greene declaró con posterioridad que la insurrección del 6 de enero habría salido bien si hubiera estado ella misma al frente, y añadió que, bajo su liderazgo, los insurrectos «habrían ido armados».[219]Cuando la Cámara de Representantes creó una comisión para indagar sobre el asalto al Capitolio, el RNC acusó al

organismo legislativo de perseguir a «ciudadanos comunes comprometidos con un discurso político legítimo».[220]

El coqueteo con la violencia de los republicanos prosiguió tras el 6 de enero.[221]Durante las primarias de 2022, *The New York Times* reveló que había más de cien anuncios televisivos del Partido Republicano en que los candidatos blandían armas o disparaban.[222]No se nos ocurre ningún otro partido importante de cualquier otra democracia occidental contemporánea en que los candidatos hayan abrazado la violencia de forma tan abierta.

No obstante, tanta importancia tiene el autoritarismo sin ambages de líderes como Trump o Marjorie Taylor Greene como que el Partido Republicano le haya dado cuerda. Las fuerzas autoritarias solo consiguen llegar a buen puerto si son toleradas y protegidas por políticos corrientes. Cuando observan conductas antidemocráticas en su propio bando, los demócratas leales las denuncian, cortan todo vínculo con personas o grupos responsables de tales comportamientos y, si hace falta, se unen a rivales de otro partido para aislar a los extremistas antidemocráticos, además de exigirles responsabilidades. Y, lo que es más crucial, los demócratas de verdad lo harán incluso si va en contra de sus intereses políticos. Romper con los extremistas antidemocráticos es el tercer principio de una actitud democrática.

Liz Cheney siguió siendo una demócrata leal tras las elecciones de 2020. Aunque pertenecía al ala dura del conservadurismo y era una rival encarnizada del Partido Demócrata, no solamente reconoció la victoria de Biden, sino que denunció los intentos por parte del presidente Trump de invalidar los resultados; movimientos que tildó de «cruzada para socavar la democracia».[223]Cheney rompió con Trump después de la insurrección del 6 de enero, y declaró que «el presidente de Estados Unidos ha convocado a esa turba, la ha reunido y ha prendido la llama de este asalto».[224]El 13 de enero de 2021 formó parte de los diez miembros republicanos de la cámara que votaron para impugnar a Trump. Por último, se unió a rivales del partido para exigir responsabilidades al presidente en funciones junto a siete demócratas en el Comité Selecto de la Cámara de

Representantes para la Investigación del Asalto del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos, del que fue vicepresidenta.

Pedir cuentas a Trump por los hechos del 6 de enero no obedecía a los intereses a corto plazo de Cheney. Después de votar para que impugnaran a Trump, recibió cientos de amenazas de muerte y fue apartada de entre los líderes republicanos de la cámara, expulsada del Partido Republicano de Wyoming, censurada por el Comité Nacional Republicano y derrotada en las primarias por un rival trumpista.[225]La lealtad a la democracia hizo saltar por los aires su carrera política.

Otros nueve representantes republicanos votaron a favor de impugnar a Trump, mientras que el voto de siete senadores del mismo partido fue para sentenciarlo; requirieron de mucho coraje para llevar a cabo esta decisión. Lo cierto es que la mayoría de los 17 republicanos que votaron para la impugnación o la condena de Trump acabaron apartados o derrotados en las primarias antes de las elecciones de 2022.

Por desgracia, aquellos diecisiete fieles a la democracia suponían una minúscula minoría. La mayor parte de los dirigentes republicanos se comportaron como demócratas semileales. Declaraban seguir las normas de la democracia, cuando en realidad promovían conductas autoritarias. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, y el de la minoría en la cámara, Kevin McCarthy, siguieron a rajatabla el manual del semileal. Durante la presidencia de Trump se amoldaron a él, se resignaron a su talante antidemocrático y lo protegieron para que no fuera impugnado o destituido.[226]Tanto McConnell como McCarthy sabían que el ganador de las elecciones de 2020 había sido Biden, y les inquietaba que Trump se negara a aceptar su derrota.[227]Ambos se sentían consternados por la insurrección del 6 de enero, culparon a Trump y, en privado, sugirieron a sus compañeros de partido que tocaba echarlo a un lado.[228]McConnell llamó al asalto al Capitolio un acto de «terrorismo» realizado por gente a quien les había «cebado a base de mentiras el hombre más poderoso de la tierra».[229]McCarthy responsabilizó a Trump del ataque y afirmó ante otros miembros de la cámara que debía dimitir.[230]Tanto

McCarthy como McConnell consideraban la Vigesimoquinta Enmienda un medio factible para apartar a Trump, además, en un principio, McConnell estuvo a favor de su impugnación y declaró: «Si esto no es motivo de impugnación, ¿qué debe serlo?».[231]

Cuando empezó a quedar claro que la mayoría de los votantes republicanos seguía siendo fiel a Trump, los líderes del partido volvieron a contemporizar con él. McCarthy dio «un giro, como si le hubieran pegado una colleja», abandonó todas las críticas a la conducta antidemocrática de Trump y no tardó en ir a visitarlo a Mar-a-Lago.[232]Al final, McCarthy se encontró entre los 197 republicanos en la cámara que votaron contra la impugnación, y McConnell pasaría a formar parte de los 43 de los 50 representantes del partido que votaron su absolución. Liderados por McConnell, los senadores impidieron que se creara una comisión independiente para investigar la insurrección del 6 de enero. Es decir, se produjo una semilealtad de manual.

Sin embargo, los republicanos no se contentaron con protegerlo, sino que siguieron defendiéndolo. Antes de abandonar la Casa Blanca, Trump supuestamente le dijo a la presidenta del RNC, Ronna McDaniel, que pensaba salir del Partido Republicano y crear su propia formación. Cualquier partido devoto de la democracia habría dejado de apoyar a un dirigente que acababa de intentar un golpe de Estado. Pero el RNC, desesperado por mantener a Trump, amenazó con dejar de costearle los abogados y retener su lista de correos de campaña a menos que permaneciera en el partido.[233]Además, casi toda la plana mayor republicana, incluyendo a McConnell y McCarthy, dijo que lo apoyaría si se convertía en su próximo candidato.[234]

Los líderes republicanos ejemplificaban a la perfección lo que antes hemos denominado como la «banalidad del autoritarismo». McCarthy y McConnell no intentaban de manera activa socavar la democracia: simplemente preferían dar prioridad a sus propios objetivos profesionales antes que defenderla. Ambos líderes calcularon que sería más beneficioso para sus intereses políticos dar manga ancha al autoritarismo de Trump que enfrentarse a él. McConnell creía que un comité independiente sobre el 6 de enero

dañaría las posibilidades del Partido Republicano de ganar una mayoría en el Senado en 2022,[235]y McCarthy pretendía, ante todo, convertirse en presidente de la cámara. Había muchos aliados de Trump en el grupo republicano de la Cámara de Representantes. De haber apoyado McCarthy la impugnación o la creación del comité sobre el asalto, tal vez habría perdido su respaldo y hubiese echado por la borda su anhelada presidencia.[236]Durante una entrevista realizada entre los muchos monumentos del National Mall, el periodista Jonathan Karl preguntó a McCarthy por qué no, por principios, había exigido responsabilidades a Trump sobre el 6 de enero. «¿Quién sabe? —dijo Karl—. Si hubieras hecho lo correcto tal vez te pondrían una estatua aquí algún día.»[237]McCarthy rio y replicó: «¿Dónde está la estatua de Jeff Flake?», en referencia al exsenador por Arizona que se enfrentó a Trump y al que se obligó a abandonar la política antes de tiempo. Así fue como McCarthy entró a formar parte de la larga lista de políticos semileales —de la Europa de entreguerras, de Latinoamérica durante la Guerra Fría y las Hungría, Tailandia y Venezuela contemporáneas— y deseosos de sacrificar la democracia en el altar del oportunismo político.

¿Deberíamos esperar de los políticos que realmente den un paso al frente y defiendan la democracia? En otro país, Argentina, se demostró que es posible. En 1987, Argentina era una democracia frágil.[238]El país había sufrido *seis* golpes militares en el período de 1930 a 1976. Los dos partidos principales —los peronistas y la Unión Cívica Radical— habían sido semileales en el pasado al apoyar golpes contra sus rivales y condenar así al país a medio siglo de inestabilidad y fracaso como democracia. Argentina, tal y como hemos mencionado, volvió al sistema democrático en 1983, después de una brutal dictadura militar. La transición no resultó fácil. Los peronistas ya no estaban en el poder, y el nuevo presidente, Raúl Alfonsín, de la Unión Cívica Radical, tuvo que afrontar una inflación por las nubes y un descontento laboral generalizado. Como resultado, su apoyo entre la población cayó en picado. En abril de 1987, durante la Semana Santa, un grupo de militares conocidos como los «carapintadas»

(por sus caras cubiertas de pintura de camuflaje) se rebeló ocupando el Campo de Mayo, una base militar cercana a Buenos Aires. Muchos de los «carapintadas» habían luchado heroicamente en la guerra que Argentina perdió contra Gran Bretaña por las islas Malvinas. Sentían hostilidad hacia Alfonsín porque defendía juzgar por lesa humanidad a militares que habían estado involucrados en la infame represión de la dictadura.[239]

Para los peronistas, en la oposición, aquella rebelión suponía un dilema. Los «carapintadas» compartían una ideología nacionalista con el peronismo, y varios de entre ellos, como el líder golpista Aldo Rico, simpatizaban abiertamente con el movimiento.[240]Algunos peronistas de derechas estaban vinculados a este grupo.[241]Aunque no dieron apoyo de manera inmediata al levantamiento, simpatizaban con los rebeldes, a quienes veían como «héroes de las Malvinas, tipos mal pagados, victimizados».[242]Pero incluso los peronistas que no veían con buenos ojos a los insurrectos tenían en mente la menguante popularidad de Alfonsín y sentían la tentación de distanciarse de él. Decididos a recobrar la presidencia, se preguntaban: «¿Y por qué deberíamos apoyarlo?».[243]

No obstante, Antonio Cafiero, presidente del partido, lo veía de otro modo. Cafiero era un demócrata leal. Consideraba al presidente Alfonsín como un adversario y no un enemigo.[244]Con el apoyo de sus aliados en la ascendente facción de la Renovación, Cafiero decidió visitar la Casa Rosada como muestra pública de respaldo al Gobierno. Las imágenes del presidente Alfonsín y del líder de la oposición, juntos en el balcón del palacio —que vieron por televisión miles de argentinos—, tuvieron mucha fuerza. Si los líderes peronistas hubieran respondido al intento de golpe de Estado con su silencio o la ambigüedad, o si lo hubieran justificado o tolerado sutilmente, los «carapintadas» podrían haber logrado algo de fuerza, se podrían haber envalentonado. En realidad, se vieron aislados y marchitos, y Argentina no volvió jamás a sucumbir a un golpe.

El gesto de Cafiero requirió de valor. Aspiraba a ser presidente, y se habría enfrentado a unas primarias competitivas

para ser nominado por su partido. De hecho, su rival a la nominación, Carlos Menem, respondió de modo muy distinto ante el levantamiento. Cuando un oficial del partido lo llamó para insistirle en que se uniera a Cafiero en la Casa Rosada, Menem —que se encontraba a cuatro horas en coche— lo rechazó aludiendo a que no podría llegar a tiempo. A Menem no le corría prisa aparecer en público junto a un presidente impopular y de un partido rival.[245]Aunque no daba apoyo al golpe, tampoco «quería complicar su candidatura a la presidencia».[246]

En términos estrictamente políticos, Carlos Menem tenía un instinto de lo más agudo. En medio de una grave crisis económica, la caída en picado del presidente Alfonsín en las encuestas se aceleró, hasta el punto de que cualquier persona que se asociara a su figura veía desvanecerse su lustre político. Estaba claro que la defensa en público del presidente por parte de Cafiero le resultó un lastre.[247]Fue Menem, por contra, quien se llevó la victoria en las primarias. Como expresó un periodista, Cafiero se había posicionado a favor de «un presidente que iba a fracasar»; un gesto valiente que «no le hizo ningún bien a su carrera política».[248]Sin embargo, según observó el líder peronista José Luis Manzano, Cafiero «no quería ser presidente a toda costa».[249]Tanto él como otros líderes peronistas actuaron como demócratas leales y rompieron con el pasado semileal del partido. Además, si bien Cafiero pagó un precio político al posicionarse con un rival impopular, Manzano recordaba que «lo que recibimos a cambio tenía un valor incalculable. Conservamos la democracia».[250]

Con todo, ¿es justo caracterizar al Partido Republicano en bloque como antidemocrático? Sin duda, muchos de sus políticos son demócratas leales. El proyecto de Rendición de Cuentas Republicano lo examinó y otorgó una «puntuación democrática» a todos los miembros republicanos del Congreso en 2021 basándose en seis criterios:[251]

1. ¿Fueron firmantes de la *amicus curiae* que acompañó al proceso de Texas en el Tribunal Supremo que buscaba

anular los votos emitidos en Míchigan, Wisconsin, Pensilvania y Georgia?

2. ¿Se opusieron a la certificación del voto del Colegio Electoral el 6 de enero de 2021?
3. ¿Hicieron declaraciones públicas para suscitar dudas con respecto a la legitimidad de las elecciones de 2020?
4. ¿Solicitaron que el presidente Trump rindiera cuentas por el asalto votando su impugnación o condena?
5. ¿Votaron a favor de crear una comisión independiente para investigar la insurrección del 6 de enero?
6. ¿Votaron para acusar a Steve Bannon de desacato en el Congreso por negarse a comparecer para testificar ante el Comité Selecto de la Cámara Baja que investigó el golpe?

Estos seis criterios se traducen, según nuestro punto de vista, en un indicador razonable del compromiso con la democracia de los congresistas republicanos. Los tres primeros interpelan directamente al principio de aceptar los resultados de unas elecciones, y los tres últimos tratan sobre la voluntad de tolerar la violencia extremista.

Las puntuaciones son reveladoras. Más de un 60 por ciento de los miembros republicanos del Congreso (161 de 121) adoptaron posturas antidemocráticas al menos en cinco de las seis preguntas, por tanto, se les calificó con una F, es decir, suspendieron.[252]Otros cincuenta y cuatro se posicionaron contra la democracia por lo menos en cuatro de las preguntas. Solo dieciséis defendieron actitudes democráticas y lograron una puntuación de A, sobresaliente. Así pues, con estos criterios en mano, una amplia mayoría de los republicanos en el Congreso habían adoptado *posturas consistentemente antidemocráticas* tras las elecciones de 2020 y el 6 de enero, y más del 80 por ciento estaban a favor de actitudes antidemocráticas. Solo un 6 por ciento de los republicanos tuvieron una conducta coherente con la democrática

y la mayoría habían dejado la política o perdido las primarias allá por el año 2022.

Entre noviembre de 2020 y enero de 2021, en suma, el Partido Republicano se negó a aceptar la derrota electoral y trató de revocar el resultado de unas elecciones. Toleró una insurrección violenta; de hecho, sus líderes la alentaron. Tampoco rompió con los extremistas antidemocráticos. Donald Trump, el líder de la formación, no se contentó con mantener una buena posición dentro del partido, sino que la mayoría de los líderes republicanos dijeron que le darían su apoyo si se presentara como candidato a las presidenciales de 2024. Dicho de otro modo, el Partido Republicano *infringió los tres principios básicos del proceder democrático*.

Nos podría consolar que esta agrupación política, mientras ha sido dirigida por Trump, nunca ha representado a la mayoría de los estadounidenses. Trump nunca se hizo con el voto popular, y la mayoría de los ciudadanos lo rechazaron durante cada día de su presidencia. De hecho, cuando tuvieron la ocasión de hacerlo, castigaron al trumpismo en las urnas: en 2018, 2020 y 2022. Después de las elecciones de 2020, los demócratas pasaron a controlar la presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado. Las salvaguardas de la democracia parecían funcionar: el extremismo republicano solo atraía a una minoría de estadounidenses y, por supuesto, en una democracia los partidos deben valerse de *mayorías* si quieren gobernar.

O eso es lo que cabría pensar.

5

Mayorías encadenadas

El 17 de julio de 2020 moría a la edad de ochenta años John Lewis, icono de la lucha por los derechos civiles y congresista por Georgia. Era el primer político negro que yacía en el Capitolio. Cuando era un joven líder del movimiento pro derechos civiles, Lewis contribuyó a hacer realidad la histórica *Voting Rights Act* de 1965 (VRA, por sus siglas en inglés).[1]El 7 de marzo de 1965, con veinticinco años, Lewis encabezó una marcha pacífica que cruzaba el puente Edmund Pettus, en la ciudad de Selma, Alabama. Los manifestantes fueron agredidos con brutalidad por la policía estatal, quienes apalearon a Lewis hasta dejarlo en el suelo con el cráneo fracturado. La horrible violencia del Domingo Sangriento, televisada por la cadena ABC News, sobrecogió a todo un país y propició que el Congreso se pusiera manos a la obra. Cinco meses después, se ratificaba la VRA.

Esta ley afianzó la democracia estadounidense al autorizar al Gobierno federal que evaluara —y, potencialmente, bloqueara— las leyes restrictivas del sufragio en partes del país que tenían un grave historial de discriminación racial en el acceso al voto.[2]La VRA fue aprobada con el firme apoyo de ambos partidos. En 1982, el Senado la renovó con una aprobación de 85 contra 8.[3]Incluso un antiguo líder republicano como el segregacionista Strom Thurmond votó a su favor. En 2006, el texto se actualizó durante un plazo de veinticinco años a partir de ese momento, gracias al voto de 330 contra 33 en la Cámara de Representantes y de 98 contra 0 en el Senado.[4]Durante una intervención en el hemiciclo del Senado, el jefe de la mayoría republicana, Mitch McConnell, describió la VRA como «un antes y un después para todos los estadounidenses, sean

afroamericanos o blancos».[5]

En 2013, sin embargo, la mayoría conservadora del Tribunal Supremo ignoró el consenso de ambos partidos —además de la opinión mayoritaria de los ciudadanos, según las encuestas,[6]de que la VRA seguía siendo necesaria— y derogó una parte importante de la misma: la fórmula de cobertura, que se encuentra en el artículo cuarto. Según el Tribunal Supremo, el criterio que determinaba qué territorios debían informar al Departamento Federal de Justicia de sus nuevos procedimientos electorales antes de entrar en vigor (una norma conocida como *preclearance* o 'verificación previa') era inconstitucional. Como escribió el presidente del Tribunal Supremo, John Roberts, a la mayoría conservadora implicada en el caso del condado de Shelby contra Holder, «los "actuales lastres" de un estatuto deben quedar justificados por las "necesidades del presente"». A ello agregó: «La fórmula de cobertura cumplía dicho requisito en 1965, pero ya no es así».[7]Para Roberts, que la VRA permaneciera como garantía ya no era necesario. En su escrito para la minoría, la juez Ruth Bader Ginsburg advirtió que «deshacerse de la verificación previa, cuando ha funcionado y funciona para acabar con cambios legislativos discriminatorios, es como deshacerse del paraguas en medio de una tormenta porque tú no eres quien se moja».[8]

Ginsburg resultó clarividente con su analogía. Tras el fallo, los estados y los condados que antes quedaban sujetos a la supervisión federal empezaron a purgar sus padrones electorales con toda su furia, a la vez que cerraban cientos de centros electorales, en particular en barrios negros.[9]En los ocho años que siguieron a la sentencia del caso Shelby, 26 estados —diez de los cuales habían requerido la mencionada autorización previa del Gobierno federal — aprobaron leyes electorales restrictivas, muchas de las cuales afectaban a los votantes no blancos.[10]

John Lewis, que describió el fallo del condado de Shelby como «una daga en el corazón de la *Voting Rights Act*», imploró al Congreso que aprobara leyes con las que recuperar las protecciones que el tribunal había desmantelado.[11]Con el tiempo, los demócratas lo hicieron. La representante Terri Sewell, cuya

circunscripción en Alabama incluía Selma, propuso la *Voting Rights Advancement Act* (Ley de Fomento del Derecho al Voto), que recuperaba buena parte de la VRA original. La propuesta fue aprobada por la cámara en diciembre de 2019, con un enfermo John Lewis ocupando la presidencia y sellando con el mazo el voto final. Antes de su votación, la representante Sewell hizo un homenaje al compromiso vitalicio de Lewis con el derecho al voto y declaró: «Darle las gracias parece insuficiente».[12]Sin embargo, aquel avance legislativo se detuvo en seco. Los republicanos tenían el control del Senado, y el líder de la mayoría, McConnell, se negó a celebrar una votación e incluso a permitir que se debatiera la *Voting Rights Advancement Act* en el hemiciclo.[13]

Siete meses más tarde, Lewis falleció. McConnell se dirigió al pleno del Senado para elogiarle como una «figura monumental» que hizo «enormes sacrificios personales para que nuestra nación dejase atrás el pecado del racismo».[14]Sin embargo, el Senado continuaba negándose a asumir el proyecto de ley. Durante el funeral de Lewis, el expresidente Barack Obama se subió al histórico atril de Martin Luther King en la iglesia bautista Ebenezer de Atlanta ante una sala llena de dignatarios, y elogió a Lewis, a quien llamó «padre fundador» de unos «Estados Unidos mejores, más justos y plenos». Luego declaró: «¿Queréis honrar a John? Para homenajearlo, revitalicemos la ley por la que estuvo dispuesto a morir. Y, de paso, llamémosla *John Lewis Voting Rights Act* (Ley John Lewis de Derecho al Voto): ese sería un espléndido homenaje».[15]

Los astros parecían alineados para que aquella dedicatoria se hiciese realidad en 2021. Las elecciones de 2020 otorgaron a los demócratas el control de la presidencia, la Cámara de Representantes y el Senado. Un nuevo proyecto legislativo, esta vez bajo el nombre de *John R. Lewis Voting Rights Advancement Act* (Ley John R. Lewis de Fomento del Derecho al Voto), fue ratificado por la cámara en agosto de 2021. Aunque gozaba de apoyo mayoritario en el Senado (cincuenta demócratas y un republicano votaron para que se debatiera en el pleno), fue bloqueada en noviembre de 2021 mediante el recurso del obstruccionismo. Según la normativa del

Senado, se requería una mayoría cualificada de 60 votos para parar el filibusterismo y proceder a votar la ley.[16]

Dos meses después, los demócratas lo volvieron a intentar; esta vez, integrando la *John R. Lewis Voting Rights Advancement Act* en una fórmula más amplia, llamada *Freedom to Vote Act* (Ley de Libertad para Votar). Esta crearía un estándar para todas las leyes electorales del país, lo que daría marcha atrás a muchas de las medidas restrictivas llevadas a cabo por los estados en el año 2021.[17]También asentaba la posibilidad de inscribirse al padrón el mismo día, ampliaba la votación anticipada, restauraba el derecho al voto para los criminales convictos que ya habían cumplido su condena y limitaba la manipulación de distritos electorales (*gerrymandering*) con motivos partidistas. En enero de 2022, una encuesta mostró que un 63 por ciento de los estadounidenses estaban a favor de la ley.[18]Según otro sondeo, una mayoría significativa apoyaba la opción de extender el período de voto anticipado y por correo, ampliar el acceso a la inscripción durante las elecciones y limitar la manipulación de circunscripciones electorales.[19]No obstante, la mayoría democrática tampoco pudo hacerse con los 60 votos que requería para imponerse a las tácticas dilatorias del filibusterismo.[20]Cuando los demócratas, frustrados, trataron de cambiar el reglamento del obstruccionismo con el objetivo de que se pudieran aprobar leyes de derecho al voto con mayoría simple, dos senadores demócratas —Joe Manchin de Virginia Occidental y Kyrsten Sinema de Arizona— rehusaron.

Mucho tiempo antes, en 1890, una legislación crítica para el derecho al sufragio, diseñada para afianzar elecciones libres y justas (*Lodge Bill*), ya había sido aprobada por la Cámara de Representantes y, aunque gozó de apoyo mayoritario en el Senado, murió a manos obstruccionistas. De este modo se afianzó uno de los principales obstáculos de las leyes Jim Crow en el Sur, paralizadas por un solo partido. Ciento treinta años más tarde, resultaba difícil ignorar el paralelismo.

El desmantelamiento de la *Voting Rights Act* ilustra una realidad muy simple: muchas de las veneradas instituciones políticas de Estados Unidos no son muy democráticas. De hecho,

no fueron creadas para ese fin.[21]Cinco jueces no electos del Tribunal Supremo acabaron con una ley inequívocamente democratizadora, la VRA, que se había aprobado y renovado en varias ocasiones por mayorías legislativas bipartidistas. En 2019, cuando los intentos por recuperar esta ley se toparon con el bloqueo de los republicanos en el Senado, esa mayoría representaba siete millones menos de votantes que la minoría demócrata del Senado que la propugnaba.[22]En enero de 2002, cuando ambas cámaras del Congreso —y más del 60 por ciento de los estadounidenses— estaban a favor de la legislación por el derecho al voto, esta acabó bloqueada por una minoría del Senado. ¿Cómo hemos llegado a un punto en que una minoría partidista pueda llegar a ostentar semejante poder?

Parte de la respuesta es que la democracia *requiere* de normas que limiten el poder de las mayorías. La democracia moderna no es simplemente un sistema otorgado por una mayoría; combina el Gobierno de la mayoría y los derechos minoritarios. Los más antiguos defensores de un Gobierno limitado temían a las excesivas concentraciones de poder; no solamente en manos de un rey, sino de mayorías populares. Por ello, la forma de democracia surgida en Occidente entre finales del siglo XVIII y el XX, que conocemos hoy en día bajo el apelativo de «liberal», se basa en dos pilares: el autogobierno colectivo (el de la mayoría) y las libertades civiles (los derechos de las minorías). Aunque la democracia liberal no puede existir sin elecciones libres y justas, tampoco puede —ni debe— ser que nos lo juguemos todo en unas elecciones.[23]Según las palabras de Robert H. Jackson, antiguo juez del Tribunal Supremo, ciertos dominios de la vida social y política deberían situarse «fuera del alcance de las mayorías».[24]Este es el papel de lo que los politólogos denominan «instituciones contramayoritarias».

Hay dos dominios, en particular, que deben ser protegidos de las mayorías. El primero es el de las libertades civiles. Estas incluyen los derechos individuales básicos que son esenciales para cualquier democracia, como la libertad de expresión, de prensa,

asociación y reunión. Pero también incluyen otros ámbitos en los que nuestras decisiones vitales como individuos deben permanecer libres de intromisión por parte de Gobiernos electos o de mayorías legislativas. Un Gobierno elegido, por ejemplo, no debería ostentar el poder para decidir a quiénes debemos rendir culto; no debería poder decidir qué libros podemos leer, qué películas podemos ver o qué deben enseñar en las universidades. Tampoco deberían decidir si podemos casarnos con una persona de cierta raza o género. Aunque la gama de derechos que hay que proteger siempre será objeto de cierta disputa (además de que estos seguramente irán cambiando con el tiempo), resulta evidente que existe un amplio abanico de libertades individuales que, en palabras del juez Jackson, «no deben ser sometidas a votación; no pueden depender del resultado de ningunas elecciones».[25]

La *Bill of Rights* (Declaración de Derechos) de Estados Unidos consagra las libertades individuales. Las sitúa, de hecho, más allá del capricho de unas mayorías temporales. Sin embargo, estos derechos siguieron siendo mal definidos y protegidos de modo desigual durante buena parte de la historia del país. Ello queda ilustrado por uno de los casos más famosos presentados ante el Tribunal Supremo. En 1935, en la pequeña y mayoritariamente católica población de Minersville (Pensilvania), un chico de diez años, William Gobitis, se negó a rendir homenaje a la bandera durante el juramento de lealtad con el que se inicia la jornada escolar. Según un testigo: «La maestra intentó obligarle a subir el brazo, pero William no paraba de agarrarse el bolsillo y logró resistirse».[26]Al día siguiente, la hermana mayor del muchacho hizo lo mismo. Se daba el caso de que sus padres eran testigos de Jehová, quienes creían —y enseñaban a sus hijos— que saludar a la bandera era una forma de idolatría; no hacerlo, por tanto, era una cuestión de conciencia religiosa. Como explicó a su profesora la hermana de William: «Señorita Shofstal, no puedo seguir haciendo el saludo a la bandera. La Biblia dice en el Éxodo, capítulo 20, que no podemos tener otra divinidad más que Jehová, nuestro Dios».[27]El gesto de ambos niños fue motivo de indignación en el pueblo. Boicotearon la tienda de alimentos de su familia y la

masa amenazó con agredirlos. El distrito escolar aprobó una ordenanza local que convertía el juramento en obligatorio y expulsaron a ambos niños de la escuela.

El caso terminó en el Tribunal Supremo, que en 1940 dio la razón al municipio de Minersville e hizo del juramento un requisito universal. Dicho de otro modo: se otorgó prioridad a las preferencias de la mayoría de la ciudadanía frente a la libertad individual de conciencia. El fallo del tribunal sentó un terrible precedente: muchos pueblos en todo Estados Unidos aprobaron leyes que obligaban a asistir al saludo a la bandera, y que vinieron acompañadas de un brote de violencia contra los testigos de Jehová. En un incidente particular, una turba de dos mil quinientas personas en Kennebunk (Maine) redujo a cenizas un salón del reino de los testigos. Las mayorías pueden ser abusivas y peligrosas.[28]

No obstante, en 1943, el Tribunal Supremo dio marcha atrás en su resolución del caso de Minersville, lo que contribuyó a sentar las bases para la protección de los derechos individuales en Estados Unidos. Como argumentó el influyente juez Jackson, cuya opinión era respaldada por muchos, ciertos «tiranos elegidos por el pueblo» pueden cometer un asalto contra los derechos en nombre de una mayoría.[29]De modo que las salvaguardias constitucionales, como la *Bill of Rights* o los tribunales supremos independientes con poder de revisión judicial, ofrecen protecciones fundamentales a personas y minorías frente al abuso de las mayorías.[30]Sin mecanismos fuertes que garanticen los derechos individuales como los que pedían los testigos de Jehová, los estadounidenses de origen japonés durante la Segunda Guerra Mundial o los afroamericanos y miembros de otras minorías religiosas, étnicas, políticas o sexuales, la democracia tal y como la conocemos no puede existir.

Las mayorías, además, deben ser refrendadas en un segundo ámbito: las propias normas de la democracia. Ningún Gobierno electo debe poder utilizar sus triunfos temporales para atrincherarse en el poder, cambiando las reglas del juego de modos que debiliten a sus adversarios o mermen la competencia leal. Esta práctica recibe el nombre de «tiranía de mayoría»: la posibilidad de que un Gobierno utilice su mayoría popular o parlamentaria para

decretar que la oposición —y la democracia— dejen de existir.

Pongamos como ejemplo Tanzania, un país que se liberó del dominio colonial europeo a principios de la década de los sesenta, dando paso a un período de gran esperanza e idealismo. El movimiento independentista de Tanzania estaba liderado por Julius Nyerere, de la Tanganyika African National Union (Unión Nacional Africana de Tanganica) (TANU, por sus siglas en inglés). Como a George Washington, veneraban a Nyerere como a un héroe nacional y contaba con un apoyo generalizado. Durante las elecciones parlamentarias, un año antes de la independencia de diciembre de 1961, el TANU consiguió 60 de los 71 escaños de la cámara. En 1962, Nyerere ganó las presidenciales fundacionales de Tanzania con un 98 por ciento del voto, comparado con el 1,9 por ciento que obtuvo el segundo finalista, Zuberi Mtemvu. Nyerere y el TANU, por tanto, disponían de una indudable mayoría popular. Más tarde se sirvieron de dicha ventaja para borrar del mapa a la oposición. Primero el Parlamento aprobó la Ley de Detención Preventiva, que permitía al Gobierno encarcelar a sus contrarios. Luego reescribió la Constitución para ilegalizarla en su totalidad y establecer un régimen unipartidista. El partido de Nyerere sigue hoy en día en el poder.

El derecho de la oposición a competir en un terreno igualitario se incluye entre los derechos esenciales de las minorías. Las democracias deben producir mecanismos que protejan la democracia de mayorías que la puedan subvertir.[31]Por ese motivo, el proceso de enmienda constitucional debería ser dificultoso, para que las reglas del juego creadas para favorecer al Gobierno de turno no puedan reinventarse con facilidad. Un modo de conseguirlo es a través de normativas que impidan que las mayorías simples enmienden la Constitución.[32]Gran parte de las democracias requieren de mayorías cualificadas (o, por lo menos, de dos terceras partes del voto de los miembros de la legislatura) para enmendar o reescribir la carta magna.[33]Otras añaden un factor de demora intencional a estos mecanismos contramayoritarios, requiriendo la aprobación de dos parlamentos electos sucesivos. Los organismos judiciales independientes con

poder de revisión del orden constitucional —es decir, que tienen la autoridad de anular leyes anticonstitucionales— son otro sistema de freno ante la tiranía de una mayoría. El federalismo y las elecciones escalonadas (en que se votan en diferentes comicios los distintos cargos) también ayudan a contenerlas, porque dispersan el poder y reducen la posibilidad de que un partido en solitario controle todos los órganos y niveles del Gobierno.

La amenaza de la tiranía mayoritaria sigue siendo una realidad hoy en día. En Hungría hemos visto cómo el Gobierno de Viktor Orbán utilizó su fuerza parlamentaria para imponer reformas constitucionales y electorales que hicieron añicos la responsabilidad ante la justicia del poder del presidente, y dejaron a la oposición en desventaja. Asimismo, en 2023, el Gobierno israelí del primer ministro Benjamin Netanyahu presionó para intentar que se aprobaran reformas dirigidas a dañar el poder judicial. Una de las leyes que propuso permitiría a una mayoría parlamentaria simple anular los fallos del Tribunal Supremo que deroguen leyes, eliminando con ello la revisión judicial.[34]Según el ex primer ministro Ehud Barak, estas reformas sitúan a la democracia de Israel ante un «peligro inminente de colapso».[35]

Tanto en Hungría como en Israel, a las mayorías simples les ha resultado excesivamente sencillo modificar las normas de la democracia. En Hungría tan solo se requieren dos tercios de una única cámara del Parlamento para reescribir la Constitución, y el reglamento de la mayoría simple para acceder a un cargo ha permitido al partido de Orbán, el Fidesz, hacerse con dos tercios del Congreso, a pesar de conseguir apenas un 53 por ciento del voto. Israel, por otro lado, no dispone de una Constitución redactada, de modo que muchas reglas democráticas se pueden cambiar mediante mayoría parlamentaria simple: un umbral demasiado bajo.

Un gran número de demócratas considera que las libertades individuales y el derecho de la oposición a una competencia justa no deben estar a disposición de las mayorías. Todas las democracias, por ende, tienen que moderarse mediante mecanismos contramayoritarios.[36]Sin embargo, los sistemas

democráticos también deben otorgar poder a las opiniones predominantes. Ciertamente, un sistema político que *no* garantice a la mayoría una voz predominante no puede considerarse una democracia. Este es el peligro que subyace en las medidas contramayoritarias: las normas pensadas para limitar el poder de los ganadores pueden ocasionar que ciertas minorías partidistas *entorpezcan sistemáticamente* o que incluso *sometan* a las mayorías.[37]Tal y como advirtió el eminente teórico de la democracia Robert Dahl, el miedo a una «tiranía de la mayoría» puede eclipsar un fenómeno igual de peligroso: una tiranía de la minoría.[38]Del mismo modo que resulta esencial que algunos ámbitos se hallen a salvo del pensamiento general, también lo es que otros permanezcan *al alcance de las mayorías*. La democracia es algo más que el Gobierno de la mayoría, pero sin él no hay democracia.

Hay dos procesos que siempre deben permanecer susceptibles a la voluntad mayoritaria: las elecciones y la toma de decisiones legislativas. En primer lugar, quienes obtienen más votos deben tener preeminencia sobre quienes consiguen menos a la hora de establecer quién ejercerá el mandato político.[39]No hay ninguna teoría de la democracia liberal que justifique otro resultado.[40]Cuando los candidatos o los partidos pueden obtener el poder en contra de la voluntad de la mayoría, la democracia pierde su sentido.

En segundo lugar, quienes ganan las elecciones gobiernan. Las mayorías legislativas también deben poder aprobar leyes regulares; siempre y cuando, claro está, no pasen por encima de las libertades civiles ni socaven el proceso democrático. Desde el punto de vista de la democracia, es difícil defender ciertas normas que dependen de una mayoría cualificada y permiten a la minoría de un Parlamento impedir permanentemente la aprobación de leyes regulares y lícitas. Ciertas reglas de mayoría cualificada, como el filibusterismo del Senado estadounidense, a menudo se retratan como guardarraíles esenciales para los derechos de las minorías. A menudo, también se presentan como métodos de construcción de compromiso y consenso. Sin embargo, dichas normativas otorgan a

las minorías partidistas un arma poderosa: el poder de veto. Cuando los vetos se extienden más allá de la protección de los derechos civiles o del mismo proceso democrático, permiten también a las minorías legislativas imponer sus preferencias por encima de la mayoría.

La politóloga Melissa Schwartzberg añade una puntualización importante: mientras que, en teoría, las normativas de mayoría cualificada pueden servir para proteger los derechos de las minorías, a menudo en la *práctica* se terminan usando para fomentar los intereses de otros grupos minoritarios que cuentan con más privilegios.[41]En Estados Unidos, las instituciones contramayoritarias a menudo se utilizaron para el beneficio de los esclavistas del Sur y de los intereses de las grandes empresas agrícolas y otras élites adineradas, en lugar de proteger a minorías vulnerables como los afroamericanos en la época de las leyes Jim Crow o a los estadounidenses de origen japonés durante los años cuarenta.

De hecho, tendemos a asociar las instituciones contramayoritarias que obstaculizan a las mayorías electorales o legislativas con el autoritarismo, y no con la democracia liberal. Por ejemplo, los líderes militares de Tailandia llevan mucho tiempo sirviéndose de mecanismos contramayoritarios para conseguir el poder sin tener que ganar elecciones.[42]Tras desmantelar la democracia con el golpe de 2014, el ejército tailandés, con su nuevo dirigente, el general Prayuth Chan-ocha, intentó volver a un régimen constitucional *sin realmente abandonar el poder*. Así pues, el ejército creó un sistema parlamentario bicameral con una Cámara Baja de quinientos diputados electos y un Senado que cuenta con doscientos cincuenta miembros designados por los militares. El primer ministro debe ser elegido por mayoría simple en una sesión conjunta de ambas cámaras. Como el ejército designó a todos los 250 senadores, los partidos promilitares solamente necesitaban conseguir 126 de los 500 escaños de la cámara para lograr que el general Prayuth fuera elegido como primer ministro. Aunque fue el partido de la oposición el que ganó más votos en las elecciones de la Cámara

Baja en 2019, Prayuth salió electo sin esfuerzo.

En un caso comparable, la democratización de Chile en 1989 se llevó a cabo con una Constitución altamente contramayoritaria impuesta por el dictador Augusto Pinochet.[43]La Constitución de 1980 estipulaba, por ejemplo, que nueve de los cuarenta y cinco senadores debían ser designados por las fuerzas armadas y por otros miembros de la dictadura saliente. Cuando llegaron las elecciones democráticas, en el año 1989, la coalición opositora Concertación obtuvo un 55 por ciento de los votos y 22 de 38 escaños del Senado. Sin embargo, gracias a los nueve senadores que impuso el ejército, los conservadores aliados de Pinochet obtuvieron una mayoría en la Cámara Alta, dinamitando muchos de los intentos de reforma del nuevo Gobierno democrático.

Como vemos, no todas las instituciones contramayoritarias refuerzan la democracia. Debemos distinguir con claridad entre aquellas que protegen a las minorías, y que con ello preservan el sistema democrático, de aquellas que las privilegian al otorgarles una ventaja injusta, subvirtiendo con ello la democracia. En un partido de fútbol profesional, el reglamento que vela por la competición justa o que protege a los jugadores al prohibir conductas peligrosas o injustas resulta esencial. Sin embargo, una norma que permitiera que un partido empiece con un gol de ventaja para un equipo, o que le otorgara la victoria a uno que marcase menos goles sería considerada patentemente injusta.

Las herramientas contramayoritarias contienen asimismo una dimensión temporal. Las mayorías de hoy pueden ser refrenadas por decisiones tomadas en el pasado; un pasado lejano, en ocasiones. Esto puede ocurrir de dos maneras. La primera es que las constituciones pueden seguir en pie durante décadas o incluso siglos; inevitablemente una sola generación atará de pies y manos a las que vengan después. Los teóricos del derecho lo conocen como «el problema de la mano muerta».[44]Cuanto más difícil resulta cambiar una constitución, más firme aprieta la mano.

En el siglo XVIII, radicales como Jefferson y Thomas Paine eran escépticos respecto a la idea de que una generación fundacional tuviera derecho a coartar a las venideras. Acerca de

esta cuestión, volvían al pensamiento de John Locke, quien se preguntaba: «¿Deben tener los padres el derecho a ligar a sus hijos a compromisos futuros?».[45]Jefferson debatió esta cuestión largo y tendido con James Madison, y preguntó a su amigo si «una generación de hombres tiene el derecho de tener amarrada a otra».[46]Él mismo respondía que no. «Los muertos», le escribió a Madison, «no deberían gobernar a los vivos».[47]Jefferson llegó a proponer una «fecha de caducidad» para las constituciones, sugiriendo que fueran reescritas cada diecinueve años; es decir, una vez por generación.[48]Aunque Madison lo rechazó, este principio jeffersoniano llegó a incorporarse a la Constitución revolucionaria de 1793 en Francia, que declaraba de forma explícita: «Un pueblo siempre tendrá el derecho de revisar, enmendar y cambiar su Constitución. Una generación no puede subyugar con sus leyes a las generaciones futuras».[49](Aquella Constitución fue desechada a los pocos meses, y otra la sustituyó en menos de dos años.)

Madison, como otros, reconocía la utilidad de fijar las constituciones.[50]Precisamente, el sentido de una ley fundamental democrática es el de establecer una serie de derechos para aquellos a quienes protege del capricho de mayorías que vienen y van. Cuando hablamos del derecho al voto, la libertad de expresión u otras garantías básicas, *deberíamos* preservar lo establecido por las generaciones pasadas. Madison también supo ver, con gran clarividencia, que heredar una constitución estable y operante posee más ventajas que tener que escribir de nuevo el reglamento cada veinte años. Bolivia y Ecuador han cambiado sus constituciones al ritmo de una vez cada diez años desde sus independencias en la década de 1820. Jamás han preservado democracias estables, con lo que han demostrado el coste de no hacerse con una serie de normas ampliamente aceptadas que trascienden lo político. El modelo jeffersoniano no ha logrado hacer surgir una democracia funcional en ningún lado.

Sin embargo, sí debe reconocerse algo a la visión de Jefferson. Las cartas magnas son extraordinariamente contramayoritarias; mantienen atadas a generaciones de mayorías. El problema es que

los redactores constitucionales son falibles. Como expresó el federalista Noah Webster, dar por hecho que los fundadores de Estados Unidos tenían «todo el conocimiento posible» con el que «prever todas las circunstancias posibles» y «disponer de mejor juicio para generaciones futuras que para ellos mismos» sería «el *summum* de la arrogancia».[51]Los propios fundadores ya lo reconocían. Durante la Convención de Filadelfia, el delegado por Virginia, George Mason, advirtió que la nueva Constitución «sin duda va a resultar defectuosa».[52]

De modo que las constituciones, efectivamente, deberían mantener sujetas a las generaciones venideras, aunque no demasiado. Si los obstáculos para el cambio representan un engorro, las mayorías del presente se arriesgan a verse atrapadas en una «jaula metálica» de normas que no reflejan las necesidades ni los valores imperantes en la sociedad.[53]Cuando esto sucede, el *contramayoritarismo intergeneracional* se convierte en un problema grave.

El poder judicial es susceptible a otra variante del problema, en especial cuando los jueces son designados para ocupar cargos de peso y sin fecha límite para el desempeño de su función: ni término a su mandato ni edad de jubilación. El control jurisdiccional da poder a los jueces —algunos de ellos nombrados décadas antes— para anular leyes o políticas de mayorías del momento presente. Este fue el problema que produjo el plan de Franklin Roosevelt para «llenar los tribunales» en 1937.[54]Roosevelt no solo había salido electo con un abrumador 61 por ciento del voto popular, sino que se enfrentaba a una tarea que no conocía precedentes: la Gran Depresión, que había suscitado una reconsideración del papel del Gobierno en la economía. El New Deal de Roosevelt, que era un reflejo de esta nueva mentalidad, se vio en un principio frustrado por un Tribunal Supremo dominado por los conservadores y compuesto por jueces que tenían más de setenta años y que se habían formado en el derecho del siglo XIX. El control jurisdiccional, decíamos, puede ser legítimo y positivo para la democracia. Sin embargo, si los magistrados que lo llevan a cabo permanecen durante décadas en la judicatura, y hasta mucho

después de que abandonen sus cargos quienes los habían nombrado, las políticas públicas se pueden apartar cada vez más del alcance de las mayorías del presente.

Los regímenes democráticos no pueden sobrevivir sin algunas instituciones esenciales y contramayoritarias, pero tampoco pueden subsistir —en tanto que democracias, por lo menos— si sus organismos son excesivamente contramayoritarios. Este es el punto en que se encuentra hoy Estados Unidos.

El sistema constitucional de Estados Unidos contiene una cantidad inusual de instituciones y mecanismos contramayoritarios:

- La *Bill of Rights*, anexada a la Constitución en 1791, poco después de la Convención Constitucional de Filadelfia.
- Un Tribunal Supremo con mandatos vitalicios para los magistrados y con poder de control jurisdiccional: es decir, la autoridad de revocar leyes aprobadas por mayorías en el Congreso si son consideradas anticonstitucionales.
- El federalismo, que delega considerable poder de legislar a los Gobiernos locales y de los estados, y que es ajeno a la competencia de las mayorías nacionales.
- Un Congreso dividido en dos cámaras, que presupone la necesidad de dos mayorías legislativas para aprobar leyes.
- Un Senado severamente desigual, en que todos los estados reciben idéntica representación, sin tener en cuenta sus habitantes.
- El filibusterismo u obstruccionismo: un reglamento de mayorías cualificadas en el Senado (pero no en la Constitución) que permite que una minoría partidista bloquee permanentemente una ley respaldada por la mayoría.
- El Colegio Electoral: un sistema indirecto de elección presidencial que privilegia a los estados pequeños y que permite a candidatos que hayan perdido el voto popular el acceso a la presidencia.

- Normas extremas de mayoría cualificada para modificar la Constitución: requieren de dos tercios de cada cámara del Congreso, además de ser aprobadas por tres cuartas partes de todos los estados.

De todas ellas, la *Bill of Rights* es la más útil para proteger la democracia. Las otras son armas de doble filo. Un Tribunal Supremo independiente que ejerce control judicial puede resultar crucial para defender los derechos de las minorías, si bien la permanencia vitalicia en el cargo tiene como riesgo potencial que haya magistrados que tumben la voluntad de las mayorías durante múltiples generaciones. Por otra parte, un amplio poder de revisión judicial puede servir para derogar leyes respaldadas ampliamente que no amenazan a la democracia o a los derechos fundamentales.[55]El federalismo a menudo es contemplado como un baluarte frente a mayorías peligrosas de ámbito nacional, si bien durante buena parte de la historia estadounidense ha facilitado que los estados y las autoridades locales quebranten los derechos civiles y democráticos básicos de manera flagrante.[56]Las mayorías cualificadas que se requieren para modificar la Constitución pueden ser necesarias para salvaguardar la democracia, pero la carta magna de Estados Unidos es extraordinariamente compleja de modificar, y los estudios comparativos sugieren que los países más democráticos del mundo son menos reacios a obstaculizar sus reformas.[57]

Además, existen una serie de instituciones contramayoritarias que son claramente antidemocráticas, puesto que confieren poderes a minorías partidistas en detrimento de mayorías electorales y legislativas. El Colegio Electoral se encuentra en esta categoría, al permitir la victoria presidencial a un candidato que ha recibido menos votos. El Senado es otra de ellas, en tanto que sobrerrepresenta a los ciudadanos de estados con menos habitantes (como Wyoming o Vermont) a expensas de los más poblados (California o Texas), y que permite a minorías de partido servirse del filibusterismo para bloquear permanentemente legislación que cuenta con el apoyo de grandes mayorías.

Estados Unidos siempre ha sido demasiado contramayoritario. De hecho, se trata de una característica incorporada a fondo en la Constitución. ¿A qué se debe?

Uno de los motivos es el momento histórico. Estados Unidos tiene la Constitución escrita más antigua del mundo. Se trata de un documento del siglo XVIII: producto de una era predemocrática. Apelaba a la igualdad de derechos y al sufragio universal, características de una democracia moderna que no existía en ninguna parte del mundo en el momento de su aprobación. Las ideas de los fundadores acerca de la soberanía popular eran entonces bastante radicales.[58]El orden constitucional que crearon —una república y no una monarquía, sin el requisito de poseer una propiedad para ostentar cargos públicos, elecciones con contrincantes para la presidencia, la Cámara de Representantes y, al cabo de pocas décadas, sufragio para la mayoría de los hombres blancos— era más democrático que cualquiera de los que había en Europa en aquel momento. Aun así, los artífices del documento no aspiraban a forjar lo que hoy en día llamaríamos «democracia». Muchos de ellos la rechazaban abiertamente.[59]El delegado de Massachusetts, Elbridge Gerry, la llamaba «el peor de entre todos los males políticos».[60]Ni el derecho a votar ni las libertades civiles —dos de los elementos esenciales de las democracias modernas— estaban incluidos en la Constitución original. Sin contar que, llevados por un miedo exagerado a las mayorías populares, los fundadores no tardaron en adoptar instituciones para mantenerlas a raya o restringirlas.[61]

Sin embargo, el problema no se encuentra tanto en *cuándo* se redactó la Constitución sino en *cómo* fue escrita. Muchos estadounidenses veneran la carta magna como un documento prácticamente irrefutable. Consideran a las instituciones contramayoritarias como el Senado y el Colegio Electoral parte de un sistema de controles y contrapesos calibrado con minuciosidad que diseñaron líderes de una clarividencia extraordinaria. No es más que un mito. Sus artífices eran un grupo de hombres con talento que fraguaron la Constitución más duradera del mundo. No obstante, las instituciones contramayoritarias *no* formaban parte de

su meditado plan maestro. En verdad, dos de los artífices más notables del Estado estadounidense, Hamilton y Madison, *se oponían* a varias de ellas.

Puede que los fundadores se inspirasen en los autores clásicos griegos y romanos, pero la mayoría eran políticos con experiencia y pragmatismo que perseguían, sobre todo lo demás, lograr una unión perdurable de 13 estados independientes.[62]Había mucho en juego. La primera Constitución estadounidense, los Artículos de la Confederación (*Articles of Confederation*) de 1781, había resultado inviable, y los delegados de la Convención Constitucional de 1787 temían que el país se encontrara al borde de una guerra civil.[63]Si la asamblea no conseguía sus objetivos y se descomponía, Estados Unidos corría el riesgo de hundirse en la inestabilidad y la violencia. No solamente se vería amenazada la incipiente economía, sino que se encontraría en una situación vulnerable ante las ambiciones geopolíticas e intervenciones militares de Gran Bretaña, Francia y España. Bajo una intensa presión para alcanzar un acuerdo, los cincuenta y cinco delegados de la convención hicieron lo que suelen hacer los dirigentes cuando les toca manejarse en contextos de transición: improvisar y hacer concesiones.[64]

Los fundadores de un nuevo orden constitucional a menudo se enfrentan a un inmenso desafío: lograr la cooperación de grupos variopintos, algunos de los cuales pueden ostentar el poder suficiente para «poner el tablero patas arriba» —y finalizar abruptamente la partida— si no se satisfacen sus demandas.[65]Cuando grupos pequeños, pero de gran influencia, suponen una amenaza verosímil durante una transición complicada, los fundadores suelen llegar a la conclusión de que no les queda otra que concederles amplios privilegios. Durante la transición del comunismo en la Polonia de 1989, la oposición anticomunista llegó a un acuerdo que garantizaba al partido saliente un 65 por ciento de los escaños en el primer Parlamento electo. El dictador chileno Augusto Pinochet solamente aceptó dejar el poder cuando le prometieron que seguiría a cargo del ejército, que las fuerzas armadas mantendrían una autoridad

considerable, que no se contemplarían juicios por vulneración de los derechos humanos y que nueve de los cuarenta y siete senadores del país serían nombrados por el Gobierno autoritario saliente.[66]En Sudáfrica, el Gobierno del Partido Nacional acordó desmantelar el *apartheid* una vez se hubieran concedido una serie de protecciones a la minoría blanca, que incluían representación en el Gabinete y una vicepresidencia en la primera administración electa.[67]En todos estos casos, el contramayoritarismo no es producto de nobles intentos de equilibrar el Gobierno de la mayoría y los derechos de las minorías, sino más bien un listado de concesiones particulares que pretenden aplacar a unos pocos poderosos que amenazan con sabotear la transición.

La fundación de Estados Unidos sufrió tensiones parecidas. Cuando se reunieron en Filadelfia durante el verano de 1787, dos cuestiones explosivas parecían decididas a cargarse los planes de los redactores de la Constitución de lograr un consenso: el papel de los estados más pequeños de la Unión y la institución de la esclavitud.

Los representantes de los estados más pequeños, como Delaware, temían que sus intereses se volvieran irrelevantes ante estados mayores como Virginia y Pensilvania. Estos últimos habían existido en forma de entes semindependientes desde la guerra de Independencia; habían desarrollado identidades e intereses fuertes, casi nacionales, y eran muy recelosos. Así pues, muchos de los diputados exigían que sus estados tuvieran igual representación en el nuevo sistema político. En otras palabras: la categoría de estado, en lugar de atenerse al número de habitantes, sería la base principal de la representación.

Las exigencias de los cinco estados esclavistas del Sur se centraban en proteger la esclavitud como institución.[68]Esta era una cuestión innegociable para los sureños. Los representantes desconfiaban de la creación de cualquier mecanismo en la nueva constitución que pudiera poner sus prácticas en peligro.[69]Sin embargo, tanto en la convención como en Estados Unidos, los propietarios de esclavos eran una minoría.[70]En conjunto, la cantidad de población de ocho estados del Norte se correspondía a

grandes rasgos con la de los cinco del Sur. Sin embargo, como el 40 por ciento de los ciudadanos sureños eran personas esclavizadas sin derecho a voto y los estados del Sur eran más restrictivos en cuanto al sufragio, el Norte poseía un número de electores mucho mayor, y era previsible que se antepusiera en cualquier elección nacional.[71]Por tanto, los representantes de estos estados del Sur incidieron en las salvaguardas contramayoritarias, y en que estuvieran «tan acorazadas como fuera posible» para asegurar la pervivencia de la esclavitud durante la nueva república.[72]

Madison supo ver que un cisma sobre esta cuestión podría echar por tierra la embrionaria Unión. Tras siete semanas de convención, observó que la principal línea divisoria no era entre estados grandes y pequeños, sino entre los del Norte y los del Sur.[73]Los representantes de los esclavistas sureños otorgaban a la protección de la servidumbre una importancia existencial. Su principal exigencia era, como indica el historiador Sean Wilentz, «hacer que esta quedara fuera del control del Gobierno» o, en cualquier caso, «imposibilitar que este aprobara cualquier medida en torno a esta práctica sin el consentimiento de los estados esclavistas».[74]De no cumplir con dicha demanda, amenazaban con abandonar la convención.[75]Aunque muchos delegados del Norte estaban en contra de la esclavitud, y la mayoría de ellos, dirigidos por Madison, insistían en no reconocerla explícitamente como una forma de propiedad en la Constitución,[76]pocos entre ellos (si es que había alguno) se comprometían a crear una carta magna antiesclavista.[77]

Para alcanzar un acuerdo, se debía apaciguar tanto a los representantes de los estados pequeños como a los que se sustentaban con una economía esclavista. De este modo, se realizaron varias concesiones. La nueva Constitución no solo permitía el sometimiento, sino que lo amparaba, a la vez que, tal y como expresa Wilentz, «fortalecía la presión de los esclavistas sobre la política nacional».[78]Entre estas medidas de protección el Congreso incluyó: la prohibición de abolir el comercio esclavista durante veinte años, una cláusula que obligaba a los siervos fugados a volver con sus amos y otra que daba poderes al Gobierno

federal para acallar rebeliones domésticas (de manera implícita, se incluyeron las revueltas de esclavos). No obstante, la mayor victoria para los estados del Sur fue la infame «cláusula de los tres quintos», que les permitía contar a la población esclavizada como parte de los habitantes del estado (cinco esclavos equivalían a tres personas libres) a efectos de aventajar el reparto legislativo, por más que la servidumbre no poseyera derechos. Esto expandía la representación de los estados esclavistas en la Cámara de Representantes, a la vez que incrementaba su influencia en el Colegio Electoral. De esta manera, la minoría propietaria de esclavos en el Sur vio cumplidas sus demandas de lo que el delegado de Carolina del Sur, Charles Pinckney, llamaba «algo parecido a la paridad».[79]Por ejemplo, en 1790 la población con derecho a voto de Massachusetts era mucho mayor que la de Virginia, pero como en Virginia había 300.000 esclavos, se le adjudicaban cinco representantes más en el Congreso que a Massachusetts. De modo similar, Carolina del Sur tenía un número parecido de ciudadanos libres, pero al tener 100.000 esclavos, le eran asignados dos escaños más que a Nuevo Hampshire.[80]En suma, la cláusula de los tres quintos incrementó la representación del Sur en la Cámara de Representantes en un 25 por ciento.[81]Esto otorgó a los estados sureños el control de casi la mitad de la cámara, suficiente para «desbaratar cualquier legislación referida a la esclavitud que no contara con su apoyo».[82]

De este modo, la cuestión de la esclavitud —y la *protección* de la misma— tuvo un papel importante a la hora de formular la Constitución de Estados Unidos. La palabra «esclavitud» no aparecía en el documento definitivo, pero su legado institucional tenía un amplísimo alcance.[83]Jamás un silencio ha sido tan elocuente.

Aunque la cláusula de los tres quintos se volvió cuestionable tras la Guerra Civil, otros compromisos contramayoritarios sobrevivieron. El principal entre ellos era la estructura del Senado estadounidense. Los delegados de los estados pequeños insistían en que todas las regiones debían tener una representación idéntica en el sistema político: una distribución muy opuesta a las mayorías

que otorgaba a Delaware y a sus 59.000 residentes, la misma representación política que Massachusetts, Virginia y Pensilvania, estados que tenían entre cinco y siete veces su número de habitantes. Muchos de los fundadores, incluyendo a Hamilton y a Madison, se oponían con dureza a esta idea.[84]Como argumentó Hamilton durante la convención, la población y no los territorios debía justificar la representación en el Congreso:

> Ya que los estados son un conjunto de hombres individuales, ¿qué deberíamos respetar ante todo lo demás? ¿Los derechos de aquellos que los componen o los entes artificiales que emanan de su composición? Nada podría ser más risible o absurdo que sacrificar los primeros en nombre de los segundos.[85]

Hamilton, al criticar los Artículos de la Confederación, consideraba que la representación igual para los estados «contradice aquella máxima fundamental del Gobierno republicano que dicta que el juicio de la mayoría debe prevalecer».[86]«Se puede dar el caso», tal y como escribió en el ensayo número veintidós de la colección *The Federalist Papers* [Los papeles del federalista], de que una «mayoría de estados sea una parte pequeña del pueblo estadounidense».[87]De modo similar, Madison describió la idéntica representación en el Senado como «evidentemente injusta» y previno de que permitiría a los estados pequeños «extorsionar a la cámara para conseguir medidas repugnantes ajustadas a los deseos e intereses de la mayoría».[88]James Wilson, de Pensilvania, también rechazaba aquel sistema de representación, preguntándose, como Hamilton: «¿Cómo podemos olvidar para quiénes formamos un Gobierno? ¿Es para los *hombres*, o para las entidades imaginarias conocidas como estados?».[89]Wilson respaldó el llamado Plan Virginia de Madison que presentó durante la primera jornada deliberativa.[90]Según su propuesta, la representación, tanto en la cámara como en el Senado, sería proporcional a la población de cada estado. Entonces, los pequeños, Connecticut, Delaware y Nueva Jersey en particular, se negaron rotundamente a aceptar una constitución que no les proporcionase una representación igualitaria, aunque fuera en una sola cámara del Congreso.[91]

La convención estuvo a punto de acabar sin resultado concluyente cuando el delegado de Delaware, Gunning Bedford, amenazó con que saldrían de la Unión si no se otorgaba idéntica representación a los estados, a lo que añadió la inquietante advertencia de que «los estados pequeños encontrarán alguna alianza extranjera más honrosa y de buena fe que los lleve de la mano y les haga justicia».[92]

Benjamin Franklin, conciliador e ilustre estadista que había permanecido callado durante casi todo aquel enconado debate, intervino en un momento de *impasse* y sugirió que rezaran juntos.[93]Un grupo de delegados concluyó que si querían preservar la Unión debían hacer esa concesión a los estados pequeños. Se llegó a un acuerdo. Según las condiciones del llamado Compromiso de Connecticut, la Cámara de Representantes sería elegida mediante un principio mayoritario, con una representación proporcional a la población (basada, por supuesto, en la nueva cláusula de los tres quintos), pero el Senado estaría compuesto de dos senadores por cada estado, sin tener en cuenta sus dimensiones. El acuerdo no formaba parte de un plan bien concebido. Era una «segunda mejor» solución a un estancamiento irresoluble que amenazaba con acabar con la convención y que tal vez destruiría la nación. (El propio Madison se opuso al Compromiso de Connecticut y votó en contra.)[94]

De modo parecido, el Colegio Electoral no se estableció gracias a una teoría constitucional propicia ni por la perspicacia de su diseño. Más bien se instituyó a falta de un sistema mejor, después de que se rechazaran las demás alternativas.[95]

La pregunta sobre cómo elegir al presidente de la nueva república era la «más difícil» a la que los fundadores se tuvieron que enfrentar durante la convención, según el delegado por Pensilvania, James Wilson.[96]En aquel momento, la mayoría de las naciones independientes eran monarquías; los artífices de la Constitución disponían de escasos modelos a seguir, y la mayoría eran antiguos. Tuvieron que diseñar un poder ejecutivo no monárquico «desde cero».[97]

¿Cómo escoger al primer magistrado? El anteproyecto inicial,

respaldado por Madison e incluido en el Plan Virginia, proponía que el Congreso seleccionara al presidente; un sistema no muy distinto al modelo de democracia parlamentaria que aparecería durante el siglo XIX en Europa.[98]El parlamentarismo acabó por convertirse en una tipología común de democracia, pero en esa época muchos delegados temían que el presidente estuviera en excesiva deuda con el Congreso, de modo que el sistema fue rechazado.[99]James Wilson estaba a favor de una elección popular de la representación.[100]Así es como todas las demás democracias presidenciales y semipresidenciales —de Argentina a Francia, pasando por Corea del Sur— eligen a sus ejecutivos hoy en día. Sin embargo, en aquel momento, no había democracias presidenciales, y en la Filadelfia de 1787 la mayoría de los delegados sentían demasiado recelo hacia «el pueblo» como para aceptar las elecciones directas; la proposición fue rechazada dos veces durante la convención.[101]Los delegados del Sur, en particular, se oponían a las elecciones presidenciales directas.[102]Como reconoció Madison, las fuertes restricciones al sufragio del Sur, que incluían la prohibición del voto a la población esclavizada, hacían que existieran pocos votantes en comparación con el Norte.[103]Ya que el Sur esclavista parecía abocado a perder cualquier voto popular nacional, como explica el académico constitucional Akhil Reed Amar, las elecciones directas constituían para ellos «motivo de ruptura».[104]

De nuevo, la convención se encontraba ante un callejón sin salida, incapaz de acordar un método para elegir al presidente. Los delegados debatieron la cuestión durante veintiún días y realizaron treinta votaciones diferentes: más que para cualquier otra cuestión.[105]Se rechazaron todas las alternativas propuestas.[106]Finalmente, como la convención estaba llegando a su fin a finales de agosto, el asunto fue a parar al Comité de Temas No Resueltos.[107]Este propuso un modelo que antaño había sido empleado para «elegir» a los monarcas y emperadores en tiempos del Sacro Imperio Romano, una confederación de más de un millar de territorios y señoríos semisoberanos en Europa central. Cuando moría un emperador, los príncipes y arzobispos de la zona se

reunían en un Consejo de Electores (*Kurfürstenrat*), por lo general en la ciudad alemana de Fráncfort, donde se votaba a un nuevo emperador.[108]Es un método parecido al que todavía se usa para elegir nuevos papas desde la Edad Media. Incluso hoy en día, al fallecer un papa, el Colegio Cardenalicio se concentra en Roma para «elegir a un sucesor».[109]Los redactores de la Constitución de Estados Unidos utilizaron una variante de esta «reliquia medieval» en un contexto no monárquico, que recibió el nombre de Colegio Electoral.[110]

El historiador Alexander Keyssar denomina al Colegio Electoral «una segunda opción consensuada», adoptada por una convención que no se ponía de acuerdo en ninguna alternativa más.[111]Madison veía las elecciones directas como el método «más adecuado» para elegir a un presidente, pero en última instancia reconoció que el Colegio Electoral era el que generaba «menos objeciones», principalmente porque ofrecía ventajas adicionales; tanto para los esclavistas sureños como para los estados pequeños.[112]El número de votos electorales asignados a cada estado sería idéntico a su delegación en la cámara más sus dos senadores. Esta decisión resultó satisfactoria para los estados del Sur, ya que los representantes serían electos mediante la cláusula de los tres quintos y, además, satisfacía a los estados pequeños porque el Senado se basaba en una representación estatal igualitaria.[113]De este modo, ambos conjuntos de estados tenían más peso en la selección presidencial de la que habrían gozado en un sistema de elección popular directa.

El Colegio Electoral jamás se dedicó a aquello para lo que fue constituido.[114]Hamilton preveía que estuviera compuesto de eminencias de gran renombre, o bien por élites importantes elegidas por las legislaturas estatales, que actuarían de forma independiente.[115]Demostró ser una promesa ilusoria. El Colegio Electoral se convirtió de inmediato en un ámbito de competición partidista. Ya en 1796 los electores actuaban como representantes estrictamente de un partido.

Otros dos mecanismos contramayoritarios relevantes —el control judicial y el filibusterismo en el Senado— no reciben

mención en la carta magna. Surgieron durante los primeros años de la república. La Constitución (en su artículo tercero) requería que el Congreso creara un Tribunal Supremo, lo cual se cumplió en el Primer Congreso de 1789. La ley fundamental también decía explícitamente que los jueces federales podrían gozar de un cargo vitalicio (a condición de su «buena conducta»), una idea surgida en Inglaterra como respuesta a la excesiva dependencia judicial respecto a la Corona.[116]La decisión de los autores constitucionales de no imponer límites al cargo ni una edad obligatoria de jubilación no debería sorprender. La expectativa de vida era mucho más corta cuando se fundó el país y, de modo relevante, el cargo de juez del Tribunal Supremo no poseía ni el estatus ni el atractivo que tienen hoy día. La Corte Suprema ni siquiera tenía una sede propia, y en los primeros años de la república los magistrados pasaban la mayor parte de su tiempo en posadas y de camino a otras paradas del «circuito» que recorrían.[117]Como resultado, había pocas expectativas de que los magistrados se mantuvieran en sus cargos. El primer juez presidente, John Jay, abandonó su puesto después de cinco años y medio para convertirse en gobernador del estado de Nueva York.[118]De hecho, los seis magistrados del primer Tribunal Supremo, nombrados por George Washington, desempeñaron su cargo una media de 8,3 años, en comparación de la media de 25,3 años en el caso de los magistrados que han abandonado la judicatura desde 1970.[119]

Los poderes del Tribunal Supremo eran bastante vagos. Al redactar la Constitución se quiso establecer la supremacía de la ley federal sobre la ley de los estados (algo que no constaba en los malhadados Artículos de la Confederación), pero la idea del control judicial de la legislación federal nunca fue resuelta en la convención, como tampoco fue incorporada de manera explícita en la Constitución.[120]No existían modelos previos de control judicial en los que basarse; los jueces de Inglaterra no tenían aquella autoridad. La propuesta de Madison de establecer un «Consejo de Revisión», compuesto por el presidente y por jueces federales para que velaran por la legislación del Congreso, fue rechazada porque los delegados temían que los magistrados intervinieran en el

proceso de redacción de leyes. En última instancia, parece ser que los artífices de la Constitución nunca alcanzaron un consenso en cuanto al veto judicial a la legislación federal, de modo que nunca se expresó en la carta magna.[121]

El control judicial surgió de manera gradual, no a partir de un concepto previo sino a través de la práctica de los tribunales durante la década de 1790 y los primeros años del siglo XIX. En la estela de la investidura de Thomas Jefferson, en marzo de 1801, el presidente saliente, John Adams —del partido federalista, la oposición—, estuvo hasta las nueve de la noche nombrando a nuevos jueces con quienes llenar las vacantes creadas por la Ley Judicial de 1801, una legislación aprobada por el Congreso saliente que aumentaba el número de jueces federales.[122]

Aquello constituía un ejemplo clásico de lo que hoy llamaríamos «llenar un tribunal» de afines. Cuando la nueva administración Jefferson se negó a proceder al nombramiento de un juez de paz federalista seleccionado por Adams, el juez presidente John Marshall, también federalista, resolvió la disputa. En el caso Marbury contra Madison, se adaptó a los deseos de la nueva administración y decidió no nombrar a William Marbury mientras que, con destreza, reivindicaba la autoridad del tribunal para decidir cuándo una ley excedía los límites de la Constitución. El control judicial, a partir de entonces, se arraigó gradualmente a lo largo del siglo XIX.

Como el control judicial, el obstruccionismo del Senado no está recogido en la Constitución, aunque muchos estadounidenses lo asocian al sistema constitucional de controles y contrapesos. El filibusterismo es una institución contramayoritaria clásica. Permite a una minoría de senadores (desde 1975, cuarenta de cien) impedir que una legislación se lleve a buen término, lo que implica que en la práctica se necesita una mayoría cualificada de 60 votos para aprobar la mayoría de las leyes.[123]El filibusterismo se suele presentar como un derecho minoritario esencial, constitucional, incluso.[124]Una vez Lyndon Johnson lo llamó «el manantial del que proceden todas nuestras libertades».[125]El senador de Texas Phil Gramm lo describió como «parte del tejido de la democracia de

Estados unidos».[126]Ambos se equivocaban.

Muchos de los autores de la Constitución, entre los que se encontraban Hamilton y Madison, se oponían sobremanera a las normas de mayoría cualificada en el Congreso. La primera encarnación de este organismo, que seguía los Artículos de la Confederación, funcionó con dichas normas y acabó siendo del todo disfuncional.[127]Después de su fracaso, tanto Hamilton como Madison adoptaron los principios del Gobierno de mayorías,[128]que Madison denominó más tarde «el principio vital del Gobierno republicano».[129]En *The Federalist Papers*, Madison rechazó explícitamente el uso de las reglas de mayoría cualificada al considerar que «el principio fundamental del Gobierno libre sería revocado. Ya no sería la mayoría quien asumiera el poder, sino que sería transferido a una minoría».[130]Hamilton, por su parte, argumentó en el número veintidós de *The Federalist* que un Gobierno de mayoría cualificada «subyugaría el juicio de un número más grande de personas a otro menor».[131]Siguiendo dichas normas, observó:

> Podemos descansar satisfechos al saber que todo está a salvo, porque no es probable que se haga algo indebido; sin embargo, olvidamos cuánto bien puede impedir y cuánto mal puede producir mediante el poder de entorpecer que se haga lo que conviene hacer, y el de dejar que todo siga el mismo curso; una serie de injusticias que se pueden producir durante períodos concretos.[132]

Exceptuando la ratificación de tratados y la exclusión de oficiales recusados, la Convención de Filadelfia rechazó todas las propuestas de normas de mayoría cualificada en la legislación ordinaria del Congreso.[133]

En origen, el Senado de Estados Unidos no contaba con el filibusterismo. Al carecer de esa norma, adoptó la llamada «moción de la pregunta previa», que permitía que una mayoría simple de senadores votara para poner fin a un debate.[134]Rara vez se utilizaba; no obstante, en 1806, por recomendación del vicepresidente Aaron Burr, el Senado la eliminó.[135]Aunque no disponemos de muchos registros históricos, el razonamiento de

Burr parece ser que apenas se utilizaba (John Quincy Adams observa en sus memorias que solo fue empleada una vez durante los cuatro años anteriores a su aprobación), y que cuando se hacía era principalmente con el propósito de *evitar* el debate sobre una cuestión particular.[136]No existen pruebas de que Burr u otra persona desease que el cambio en la normativa protegiera a los partidos minoritarios, o que asegurara algún tipo de «derecho» a debatir sin un límite.[137]Como dice la académica del Congreso Sarah Binder, las mayorías del Senado dejaron de tener medios para dictaminar la conclusión de un debate —lo que obligaba a proseguir con la votación—, «por error».[138]

Durante varias décadas, aquello no tuvo importancia. No existieron instancias de obstruccionismo organizado hasta la década de 1830 (o según algunas fuentes, hasta 1841), y la práctica era tan infrecuente que ni siquiera tuvo nombre hasta los años cincuenta del siglo XIX.[139]En las décadas de 1840 y 1850, sin embargo, los senadores del Sur dirigidos por John C. Calhoun empezaron a plantear que el debate sin límite —equivalente *de facto* a un veto por parte de una minoría— constituía un derecho minoritario constitucional.[140]De todos modos, los senadores generalmente se abstenían de servirse de él. El filibusterismo solo se utilizó con éxito veinte veces entre 1806 y 1917: en menos de dos ocasiones por década.[141]

El uso del obstruccionismo aumentó a finales del siglo XIX: en los años que condujeron a la Primera Guerra Mundial, se utilizó contra un anteproyecto de ley para armar los barcos mercantes estadounidenses ante la amenaza de ataques por parte de submarinos alemanes.[142]Esto convenció al presidente Wilson y a los líderes del Senado de que debía crearse algún tipo de mecanismo para concluir los debates. Así pues, en 1917, el Senado aprobó la norma 22, según la cual el voto de dos tercios del Senado podía cerrar una discusión (una práctica conocida como *cloture*) y forzar un voto sobre la ley que se estuviera discutiendo. Aunque muchos senadores apoyaban un reglamento de clausura por mayoría simple (que habría restaurado el sistema del Senado original), la norma de los dos tercios salió adelante.[143]

El Senado estaba ahora gobernado por la que era, en efecto, una mayoría cualificada. A pesar de ello, una minoría consistente en una tercera parte de la Cámara Alta podía impedir que la legislación se tradujera en voto (en 1975 se modificó subiendo el umbral a dos quintas partes). Este poder de veto a manos de una minoría se utilizó para bloquear leyes en contra del linchamiento en 1922, 1937 y 1940 (aunque estas contaran con un apoyo social del 70 por ciento), además de otras que abolían el impuesto electoral en 1942, 1944 y 1946 (a pesar de su respaldo público, superior al 60 por ciento).[144]De todos modos, el filibusterismo no se aplicó durante la mayor parte del siglo XX. Esto se debía a que ponerlo en práctica requería de mucho esfuerzo. Los senadores debían estar presentes y de pie en el hemiciclo —mientras hablaban sin cesar— para prolongar la obstrucción del debate.[145]Sin embargo, con las reformas de los años setenta, a los senadores les bastaba con señalar a los líderes del partido, hacer un gesto con el que indicaban que tenían la intención de dar un discurso obstruccionista, o bien, llamar por teléfono u, hoy en día, escribir un correo electrónico, para poner en marcha la norma de la mayoría cualificada.[146]

Como aplicar el obstruccionismo no acarreaba consecuencias, esta práctica, que rara vez solía emplearse, pasó a ser rutinaria.[147]Su uso se disparó a finales del siglo XX y principios del XXI, hasta el punto de que en la actualidad «está ampliamente aceptado que la legislación, sea cual sea su importancia, requiera de, por lo menos, 60 votos para ser aprobada».[148]Dicho de otro modo, el filibusterismo se convirtió en lo que, en efecto, era el control por mayoría cualificada de toda la legislación del Senado.

Fue un cambio dramático. Antes de finales del siglo XX, existía un veto de la minoría, pero raramente se utilizaba. Entonces empezó a emplearse casi siempre. Gregory Koger lo llama una «revolución silenciosa».[149]No se tomó la decisión colectiva de adoptar un control por mayoría cualificada en el Senado. «Sencillamente ocurrió, y lo hizo con tal sigilo que apenas nos dimos cuenta.»

Aunque los defensores del filibusterismo lo enmarcan en las

tradiciones fundacionales de Estados Unidos, en realidad surgió de manera fortuita, y apenas se usó durante la mayor parte de la historia del país.

Desde la escuela primaria se nos ha explicado que la Constitución es un documento sagrado, de los que se consultan tras una vitrina de museo. Imaginamos que nuestras instituciones fundacionales fueron parte de un gran diseño, un programa elaborado con cuidado para crear una república funcional. Este relato oculta el historial de resoluciones, concesiones y compromisos no acordados la primera vez que se plantearon. También une las instituciones que mejoran la democracia con aquellas que son innecesarias o incluso antidemocráticas. Cuando tratamos nuestras instituciones fundacionales como un conjunto fijo y coherente de controles y contrapesos, ponemos en el mismo saco a las reglas que protegen las libertades civiles y aseguran igualdad de condiciones y a aquellas que otorgan la victoria en las elecciones y en las batallas legislativas a minorías privilegiadas que pertenecen a un partido. Las primeras son necesarias para la democracia; las demás son opuestas a ella.

Los estudios de opinión demuestran que una mayoría de los estadounidenses defienden valores que son principalmente inclusivos, y que están a favor de los principios de una democracia liberal y multirracial. Sin embargo, nuestras instituciones frustran la voluntad de la mayoría. Como dijo un importante observador político hace casi tres cuartos de siglo: «La mayoría estadounidense es un manso perro ovejero con una correa que se usaría para atar a un león».[150]No son mayorías desatadas las que nos amenazan hoy día. Es en *las mayorías encadenadas* donde se halla el problema.

6

El Gobierno de una minoría

En febrero de 1909, los terratenientes rurales de toda Alemania se dirigieron a la capital, Berlín, para acudir a la Semana Agraria, la reunión anual de la mayor asociación agrícola del país.[1]Se congregaron, en una impresionante carpa de circo con capacidad para cuatro mil personas, los titanes del campo alemán (conocidos a veces como «los señores del pan») para debatir su futuro político. A pesar de que la convención iba dedicada a los peligros del libre comercio y del socialismo, un aristócrata, el barón Franz von Bodelschwingh, proclamó entre vítores ante el público:

> Caballeros, sé que en ciertos lugares hay gente que no osa criticar el judaísmo o declararse detractora de esta religión. Es una flaqueza de nuestros tiempos no querer llamar a las cosas por su nombre.[2]

Del mismo modo que muchos de los grandes hacendados germánicos, el barón Von Bodelschwingh temía el declive de la cultura «cristiana» en el medio rural, así como el auge de los «periódicos judíos» en las ciudades, que crecían rápidamente. Luego, sin embargo, pasó a ocuparse de la cuestión en que se centraba su discurso: la recomposición de los límites de los distritos electorales en las elecciones parlamentarias:

> Querría hacer hincapié en pronunciarme contra una modificación de las fronteras de las circunscripciones que reducirá la influencia del campo. También me gustaría añadir que, bajo mi punto de vista, cualquier parlamentario de los partidos que se acercan a nuestra posición, pero que han salido en defensa incondicional de redibujar los distritos electorales, no debería recibir nuestro apoyo ni lo vamos a contactar.

El vivo interés del aristócrata teutón por un tema tan específico como pueden ser las líneas divisorias de las circunscripciones electorales surgía de una inquietud: sabía que las fuerzas conservadoras que predominaban en el medio rural ya nadaban a contracorriente de la historia. Con la industrialización de Alemania a finales del siglo XIX, sus ciudades fueron expandiéndose a un ritmo de vértigo. El empleo, cada vez más, se concentraba en los centros urbanos, y las inmobiliarias empezaron a engullir los terrenos agrícolas en la periferia de las poblaciones, construyendo manzanas y manzanas de edificios de apartamentos y viviendas burguesas. Las grandes llanuras y tierras arables, especialmente en el este, estaban en proceso de vaciamiento. En las ciudades, que estaban en auge, urgía el surgimiento de una cultura más liberal y cosmopolita. Y, junto con un número creciente de obreros que habitaban ahora en las urbes, también aumentaba el apoyo a la izquierda política. El Partido Socialdemócrata, de la clase trabajadora, hizo su fulgurante aparición reuniendo más votos que cualquier otro partido en las parlamentarias de 1893, así como en el resto de las elecciones hasta el final de la Primera Guerra Mundial.

Sin embargo, la capacidad de los socialdemócratas para ganar poder y ejercitarlo a escala nacional se veía limitado por las instituciones políticas del país. La Constitución imperial, ideada el año 1871, equipaba a los conservadores con verdadero armamento procesal que lograba, en efecto, torcer el poder popular. El conservador monarca tenía la potestad de nombrar gabinetes, fuera lo que fuera lo que los ciudadanos votaran. Una Cámara Alta elegida indirectamente, el Bundesrat, se encontraba dominada por las élites, y la mayoría del poder del sistema federal alemán se hallaba en los estados, que carecían en gran medida de un sistema democrático.

Como consecuencia, el Parlamento nacional —el Reichstag— era la institución más democrática del país. En 1871, antes del *boom* urbanístico alemán, se realizó un trazado sorprendentemente justo de los distritos parlamentarios: eran iguales en tamaño (un diputado por cada 100.000 residentes) y, además, todos los

varones tenían derecho al voto. Sin embargo, como reconoció en 1909 el barón Von Bodelschwingh, el reciente éxodo en masa de los votantes de la campiña a la ciudad benefició en gran medida a sus aliados conservadores. Si estos mantenían los límites entre distritos creados en 1871, era porque su partido estaba cada vez más sobrerrepresentado. Mientras que cada vez más votantes obreros se mudaban a un pequeño número de atestados distritos urbanos —todos ellos con un único representante parlamentario—, para ganar la misma cantidad de escaños, los socialdemócratas necesitaban superar un umbral cada vez mayor de votos. Dicho de otra manera, que existieran distritos electorales fijos, en tiempos de una urbanización a gran escala, distorsionó la política con un sesgo antiurbano. Los distritos rurales contenían cada vez menos votantes, pero conservaban la misma representación en el Parlamento; ello otorgaba a los conservadores del medio rural un peso político sobredimensionado. Era una forma de lo que los politólogos Jacob Hacker y Paul Pierson llaman «contramayoritarismo sigiloso».[3]

En torno a 1912, en el clásico distrito rural y conservador de Heiligenbeil-Preussische Eylau, bastaron apenas ocho mil votantes para lograr un escaño en el Parlamento. En el típico distrito minero e industrial de Bochum-Gelsenkirchen-Hattingen, en cambio, se requerían unos 60.000 votos para obtener un escaño parlamentario.[4]Las consecuencias eran devastadoras para la izquierda política: en 1907, los socialdemócratas fueron quienes contaron con más papeletas, con un 29 por ciento del voto nacional, pero consiguieron tan solo 43 escaños, situándose así en un lejano cuarto puesto.[5]A su vez, el Partido Conservador logró solamente un 9 por ciento del sufragio del país, pero se le otorgaron 60 escaños. El sistema electoral se inclinaba a favor de los conservadores, lo que, en la práctica, fijó el minoritarismo o regla de la minoría, hasta que el sistema político imperial colapsó tras la Primera Guerra Mundial.

Cuando las minorías partidistas capturan las instituciones contramayoritarias pueden permitir al bando perdedor de la historia retener el poder. Durante años, los conservadores de

Alemania mantuvieron su dominio a pesar de perder las elecciones. Adoptaron políticas a las que se oponía gran parte de la población y vetaron medidas que la mayoría apoyaba.

Una cosa es que las minorías frustren o derroten durante un tiempo a las mayorías en peleas políticas puntuales. Viene de serie en el toma y daca habitual de la política democrática. Sin embargo, otra cosa es que una minoría partidista derrote o imponga *continuamente* medidas a las mayorías o, peor todavía, que se sirva del sistema para consolidar sus ventajas. Cuando esto ocurre, hablamos de un Gobierno controlado por una minoría, y no de una democracia.

Algo parecido ocurre en los Estados Unidos de hoy en día. Como en el caso de los conservadores europeos del siglo XIX, el Partido Republicano recibe una superioridad de oportunidades consistente que permanece ahí, congelada en el tiempo, a pesar de que hayan tenido lugar cambios sociales de dimensiones colosales. Se supone que la democracia es un juego de números: el partido con más votos se lleva la victoria. Sin embargo, en el Estados Unidos de la actualidad, los partidos que se hacen con mayorías electorales a veces no tienen la posibilidad de gobernar y, en ocasiones, ni siquiera vencen.

El sistema estadounidense siempre ha contenido instituciones que dan poder a minorías a expensas de las mayorías. No obstante, en el siglo XXI el contramayoritarismo ha llegado a encarnarse en un molde *partidista*, es decir, que se beneficia habitualmente a un partido a expensas de otro en la política nacional.

Los fundadores jamás tuvieron la intención de crear un sistema gobernado por las minorías de un partido; ni siquiera contaban con que fueran a surgir organizaciones políticas. Se imaginaban un mundo en el que serían las élites locales, ajenas a la afiliación de grupos particulares, las que ofrecerían estadistas responsables en pro del bien común. Como hemos visto, los beneficiarios originales del contramayoritarismo inherente a la Constitución estadounidense fueron los estados pequeños o

escasamente poblados, los mismos que en la Convención de Filadelfia negociaron un conjunto de prerrogativas incorporadas al sistema.

Ahora bien, dos cosas cambiaron con el tiempo. Por un lado, mientras el país se expandía y la población de Estados Unidos aumentaba, la asimetría entre los estados muy poblados y los poco ocupados crecía sin parar. En 1790, un votante en Delaware (el estado con menos habitantes) tenía unas trece veces más influencia en el Senado que un elector del estado con más población, Virginia.[6]En comparación, en el año 2000, un votante de Wyoming tenía casi setenta veces más influencia en el Senado estadounidense que uno de California.

A su vez, tuvo lugar otro cambio: Estados Unidos se urbanizó. En la época de su fundación, era primordialmente tierra de poblaciones pequeñas, grandes extensiones agrícolas con pocos habitantes y bosques. Todos los estados —grandes y pequeños— eran rurales. Sin embargo, con la industrialización del país durante el siglo XIX, se produjo una desbandada hacia las zonas urbanas en busca de empleo. En el año 1920, el censo de Estados Unidos anunció con gran algarabía que, por primera vez en su historia, había más estadounidenses viviendo en ciudades que en el campo.[7]

El momento de auge de las urbes alteró la política sustancialmente. Hacia 1920, los estados más poblados estaban también entre los más urbanizados (por ejemplo, Nueva York, Illinois o Pensilvania), mientras que los menos ocupados eran los de carácter más rural (Wyoming, Nevada y Vermont). Lo que empezó como solo un sesgo a favor de los estados pequeños se convirtió en favoritismo hacia los más rurales. Esto implicaba que las jurisdicciones agrarias se encontraban ahora sobrerrepresentadas en tres de las instituciones políticas más importantes a nivel nacional: el Senado, el Colegio Electoral y —debido a que los presidentes nombran a los magistrados y el Senado los confirma— el Tribunal Supremo.[8]

Incluso si contamos con que el sistema constitucional estadounidense fue más favorable a los intereses rurales durante la mayor parte del siglo XX, vemos que no seguía un sesgo claro a

favor de un solo partido político. Si esto sucedía era porque durante casi todo el siglo XX ambos partidos tuvieron unas bases tanto urbanas *como* rurales. Los votantes rurales del Noreste y el Medio Oeste eran mayoritariamente demócratas. Este partido tenía más fuerza en la mayoría de las ciudades del Noreste, pero muchas ciudades del Oeste eran plazas fuertes de los republicanos. Ya que ambos tenían facciones urbanas y rurales, la sobrerrepresentación del campo no se traducía en un privilegio consistente de un bando particular.[9]

Todo ello ha cambiado en el siglo XXI. Con el surgimiento de la economía posindustrial del conocimiento, los centros urbanos se han convertido en motores del dinamismo económico y de empleos de calidad, mientras que las zonas rurales y los antiguos centros de producción fabril se han estancado.[10]Al mismo tiempo, la inmigración ha incrementado la diversidad étnica y cultural de muchas de estas bulliciosas ciudades.[11]Como demostró el politólogo Jonathan Rodden, esta evolución en la geografía económica y política ha tenido consecuencias para las sociedades occidentales. Los partidos a la izquierda del centro —el Partido Laborista en Gran Bretaña, los socialdemócratas y los verdes en Alemania o los demócratas en Estados Unidos— se han ido convirtiendo cada vez más en la opción predilecta del votante urbano. Este suele ser menos religioso, más cosmopolita y tolerante con la diversidad étnica, mientras que los partidos que tienden a la derecha —o, a menudo, a la extrema derecha— representan a los votantes de las ciudades de provincias y del medio rural. Estos, en cambio, habitualmente son más conservadores en las cuestiones sociales y están menos a favor de la inmigración y las diferencias étnicas.[12]

En Estados Unidos, este cambio se vio exacerbado por la transformación del sistema de partidos, que se centraba en cuestiones raciales. Antes del movimiento por los derechos civiles, los votantes rurales del Sur optaban sobre todo por el Partido Demócrata. En otros lugares, se acercaban más a los republicanos. Tras la revolución de los derechos civiles, el Sur rural (blanco) transitó gradualmente hacia el ideario republicano.

Así pues, a día de hoy los republicanos son predominantemente un partido de las regiones de escasa población, mientras que los demócratas tienen más presencia en las ciudades. Como resultado, el favoritismo de la Constitución hacia los estados pequeños, que se convirtió en un sesgo *rural* en el siglo XX, ha pasado a convertirse en un *sesgo partidista* en el siglo XXI. En la actualidad vivimos nuestra propia forma de «contramayoritarismo sigiloso».[13]

Estados Unidos corre el riesgo de adentrarse en una forma de gobierno en manos de la minoría: una situación inusual y antidemocrática en la que, a pesar de conseguir menos votos que sus rivales, un solo partido mantiene el control sobre las palancas importantes del poder.

Para entender cómo funciona, imaginemos un partido de baloncesto. En el básquet profesional estadounidense los equipos consiguen un punto por canasta lanzada en tiro libre, dos por encestar desde la zona de tiro y tres por jugada detrás de la línea designada. Ahora imaginemos un partido de baloncesto en el que este reglamento solo se aplique a un equipo (llamémoslo Equipo Normal), mientras que el otro (el Equipo Extra) recibe *cuatro* puntos por cada canasta que encesta más allá de la línea de tres puntos. Puede que a ratos siga siendo un partido competitivo con resultados inciertos. Si el Equipo Extra ganara, por poner, treinta puntos, sin siquiera probar de encestar tiros de cuatro puntos, vencería limpia y justamente. En algunos casos, el Equipo Normal podría imponerse, ganando el partido con, tal vez, veinte puntos, *a pesar* de la regla de los cuatro puntos. Sin embargo, en un juego reñido, las cosas se complicarían. Pensemos en un partido en el que ambos equipos hacen el mismo número de tiros libres y canastas de dos puntos, pero donde el Equipo Normal encesta diez veces tras la línea demarcada, mientras que el Equipo Extra lo hace seis veces. Si seguimos el reglamento de la vida real, el Equipo Normal ganaría con una distancia de seis puntos, pero con estas nuevas normas, el Equipo Extra se llevaría la victoria por dos puntos. El

perdedor se convierte en vencedor. Insistimos en que estas reglas no tienen por qué determinar los resultados: el Equipo Extra puede jugar tan bien que no necesite una ventaja incorporada de serie para ganar; o puede que el Equipo Normal haga muy buen trabajo, a pesar del favoritismo por el Equipo Extra. En situaciones reñidas, no obstante, el Equipo Extra vencerá más a menudo de lo que normalmente debería.

El sistema político de Estados Unidos sigue cada vez más esta lógica. La cartografía de la división entre partidos, que coincide con la división urbana-rural, amenaza con convertir algunas de las instituciones más importantes en pilares del minoritarismo.

Una de sus bases es el Colegio Electoral, que distorsiona el voto popular de dos formas. Por un lado, casi todos los estados (con la excepción de Maine y Nebraska) reparten los votos al Colegio Electoral siguiendo un método llamado «el ganador se lo lleva todo» (también conocido como *first-past-the-post*).[14]Esto implica que, si un candidato gana un estado por un estrecho margen del 50,1 por ciento, contra un 49,9, el que obtenga más puntuación recibirá el 100 por cien de las papeletas. Esta desproporcionalidad genera complicaciones al agregarse los votos de los estados al Colegio Electoral, porque permite que el perdedor del sufragio popular se lleve la victoria.

Nos referimos, por ejemplo, al modo en que las elecciones de 2016 se desarrollaron en los estados de Wisconsin (10 votos electorales), Míchigan (16), Pensilvania (20) y Nueva York (29). Donald Trump ganó en Wisconsin, Míchigan y Pensilvania por un pequeño margen (23.000, 11.000 y 54.000 votos, respectivamente), lo que le permitió hacerse con 46 de los votos de aquellos estados. Hillary Clinton ganó en Nueva York por 1,7 millones de papeletas, con sus correspondientes 27 votos. Sumando las papeletas en esos cuatro estados, Clinton ganó el sufragio por 1,6 millones de votos, pero Trump ganó el del Colegio Electoral en esos estados por 46 a 29. El perdedor ganó.

La lógica de «el ganador se lo lleva todo» como sistema del Colegio Electoral puede beneficiar a los candidatos que pierden de ambos partidos. De hecho, en los años sesenta eran los

republicanos conservadores quienes lo consideraban injusto. El senador republicano Karl Mundt, de Dakota del Sur, propuso una enmienda constitucional para reformar el Colegio Electoral, que según él daba «poder dictatorial» a unas cuantas grandes urbes y a un puñado de estados conocidos como «estados decisivos».[15]

Con todo, la segunda distorsión que contempla el Colegio Electoral, el sesgo a favor de los estados pequeños, claramente beneficia a los republicanos. Recordemos que el número de electores de las presidenciales asignados a cada estado es igual al tamaño de su delegación en el Congreso: la cantidad de representantes en la cámara más su número de senadores. Ya que el Senado estadounidense sobrerrepresenta en gran medida los estados menos poblados, el Colegio Electoral tiene un discreto sesgo de unos 20 votos entre sus 538 escaños, lo que otorga a los republicanos una pequeña pero potencialmente decisiva ventaja.[16]El año 2000, por ejemplo, el sesgo favorable a los estados menores añadió unos 18 votos estimados al recuento electoral total de George W. Bush. Puesto que Bush derrotó a Al Gore con una diferencia de apenas cinco votos electorales, estas 18 papeletas fueron de suma importancia, y convirtieron al perdedor en el presidente electo.[17]

Un método con el que los analistas miden la ventaja actual del Partido Republicano en el Colegio Electoral consiste en identificar el estado en el que se produce el punto de inflexión durante las elecciones nacionales.[18]En otras palabras: la región en la que se emite el voto decisivo número 270 al candidato ganador. Si catalogamos los estados de mayor margen prodemócrata (Vermont) a mayor margen prorrepublicano (Wyoming) en las presidenciales de 2020, Wisconsin fue la región en la que se produjo la inflexión. Así pues, esperábamos que este sistema nos ayudara a rastrear el escrutinio del voto popular, que Biden ganó por 4,4 puntos. Sin embargo, obtuvo Wisconsin por solo 0,6 décimas, una diferencia de casi cuatro con el Partido Republicano. Este es el sesgo del Colegio Electoral: Biden necesitaba ganar el voto popular por unos cuatro puntos para ser elegido presidente. Como en el partido de básquet, una ventaja de tres puntos de

Biden habría resultado en una victoria de Trump.

La consecuencia directa de todo esto es que las presidenciales estadounidenses no han sido muy democráticas en el siglo XXI. Entre 1992 y 2020, el Partido Republicano perdió el voto popular en todas las elecciones, excepto la de 2004. En otras palabras, solo obtuvieron más votos que los demócratas una vez durante un lapso de casi tres décadas. Aun así, los candidatos republicanos ganaron la presidencia *tres veces* durante ese período, lo que permitió que el partido ocupara el cargo durante doce de esos veintiocho años.

Un segundo pilar de la regla de la minoría —incluso más marcadamente sesgada a favor de un partido— es el Senado. Los estados más despoblados y que representan menos del 20 por ciento de los habitantes del país pueden producir una mayoría en la Cámara Alta.[19]A su vez, los que representan al 11 por ciento de la población pueden emitir votos suficientes para obstruir la legislación mediante el filibusterismo.[20]

El problema se ha complicado con el sesgo partidista. La preponderancia del Partido Republicano en estados de baja población le permite controlar el Senado sin ganar mayorías populares a nivel nacional. Los senadores se eligen para ocupar cargos escalonados de seis años, con un tercio de la cámara sujeta a elecciones cada dos. Lo que esto quiere decir es que hacen falta tres elecciones en un ciclo de seis años para renovar por completo la Cámara Alta. Aunque los republicanos ganaron el voto popular nacional al Senado en algunas elecciones (por ejemplo, en 2002, 2010 y 2014), los demócratas obtuvieron una mayoría general en la cámara *en todos los ciclos de seis años desde 1996 a 2002*.[21]Incluso así, los republicanos controlaron el Senado durante la mayor parte de ese período.[22]De modo que, la mayoría de las veces, el partido con menos votos controlaba el Senado.

¿Cuáles son las dimensiones del sesgo prorrepublicano del Senado? Pensemos en las elecciones de 2020. Basándonos en la lógica del estado crucial de la que hablábamos, hay una diferencia de cinco puntos entre los resultados en las presidenciales de 2020 en el estado medio (el que tiene una mayoría en la Cámara Alta) y el voto presidencial a escala nacional de 2020. Esto implica que el

sesgo partidista del Senado era tal que los demócratas habrían tenido que ganar el voto popular a esta cámara en todo el país si querían controlarla.[23]Durante las últimas décadas, el tamaño del sesgo prorrepublicano ha variado de una elección a otra, de dos puntos como muy bajo, a un máximo de casi seis. Sin embargo, hay algo que ha sido constante: el Partido Republicano lleva décadas gozando de ventaja en el Senado.[24]

Podemos verlo de otro modo: en ningún momento del siglo XXI los republicanos del Senado han sido la voz de la mayoría. Si nos basamos en las poblaciones de los estados, desde 1999 los demócratas de la cámara siempre han representado a más estadounidenses.[25]En los comicios de 2016, por ejemplo, los republicanos ganaron en el Senado por 52 escaños. Sin embargo, sus senadores apenas representaban a un 45 por ciento de los ciudadanos.[26]En 2018, el Partido Republicano ganó con una mayoría de 53 escaños, pero, de nuevo, sus senadores representaban solamente a una minoría (48 por ciento) de la ciudadanía.

Tras las elecciones de 2020, en las que el Senado quedó casi dividido a la par, los cincuenta senadores demócratas representaban a un 55 por ciento de los estadounidenses: 41,5 millones más que los cincuenta republicanos.[27]Este patrón prosiguió en 2022: el Partido Republicano siguió obteniendo más escaños en el Senado (49) que los que le corresponderían por votos (el 42 por ciento).[28]De modo que alcanzar la suma de cincuenta senadores requiere considerablemente menos esfuerzo a los republicanos que a los demócratas. Según un analista, «la composición de la coalición republicana a día de hoy es tan idónea para ganar las elecciones de estados poco poblados que requeriría de negligencia y percances a una escala casi cómica para que el partido conservador no pudiera hacerse con el control».[29]

El Tribunal Supremo constituye un tercer pilar del Gobierno de la minoría. Su sesgo partidista es indirecto, pero aun así tiene consecuencias. Dada la naturaleza del Colegio Electoral y del Senado, los magistrados del tribunal pueden ser nombrados por presidentes que hayan perdido el voto popular y ser aprobados por

mayorías en el Senado que representen solamente a una minoría de estadounidenses. Además, dada la ventaja republicana en el Colegio Electoral y en el Senado, los magistrados conservadores tienen todas las cartas para resultar elegidos.

Este ha sido sin duda el caso durante el siglo XXI. Cuatro de los nueve magistrados actuales del tribunal —Clarence Thomas, Neil Gorsuch, Brett Kavanaugh y Amy Coney Barrett— fueron designados por una mayoría en el Senado que obtuvo una minoría del voto popular en las elecciones a la cámara y que representaba a menos de la mitad de la población del país.[30]Por otro lado, tres de ellos —Gorsuch, Kavanaugh y Coney Barrett— también fueron nombrados por un presidente que perdió las elecciones.[31]Si el baremo fueran las mayorías en las presidenciales y las votaciones al Senado, entonces, tres —o posiblemente cuatro— de los jueces más conservadores de la Corte Suprema no ocuparían su puesto. Lo más plausible es que tres de estos escaños pertenecerían a magistrados demócratas.

Gracias a la creciente divergencia entre las mayorías electorales y la composición del Tribunal Supremo, los estadounidenses tienen una corte que cada vez está más en conflicto con la opinión pública, a veces de forma flagrante. Los estudiosos de la Corte Suprema argumentan que, históricamente, los magistrados solían modular sus veredictos para evitar alejarse en exceso de la voluntad popular.[32]Parece ser que ya no es el caso. Según las últimas investigaciones, existe una brecha creciente entre los fallos del Supremo y la opinión pública mayoritaria de Estados Unidos.[33]Esta tendencia no es accidental: la mayoría conservadora del tribunal fue impuesta por una minoría partidista.

Un cuarto pilar del minoritarismo, y que no se encuentra escrito en la Constitución, es un sistema electoral que *fabrica* mayorías artificiales y que a veces permite que los partidos que han ganado menos votos controlen las legislaturas.[34]Casi todas las elecciones al Congreso y a la legislatura estatal utilizan el método de mayoría simple *first-past-the-post* (o «el ganador se lo lleva todo»). Los estados se dividen en distritos o circunscripciones electorales con un legislador elegido en cada uno de ellos. El

candidato que ocupa el primer puesto de cada votación gana el escaño, y todos sus rivales pierden. El resultado es el mismo, no importa si la disputa es de un 50,1 por ciento contra un 49,9, o si se traduce en una avalancha del 80 por ciento contra un 20 por ciento. Recordemos que, en el siglo XXI, los votantes del Partido Demócrata se concentran en el ámbito metropolitano, mientras que los republicanos se multiplican en las ciudades de provincias y en los suburbios, con una implantación distribuida por el país de modo más regular.[35]Como resultado, es más probable que los demócratas «tiren sus votos a la basura» al acumularse sus mayorías en distritos urbanos, mientras que pierden en los rurales. Esta distribución «ineficaz» de los votantes, combinada con distritos de un solo representante, permiten ganar mayorías legislativas al partido con menos votos.

Donde resulta más visible este problema es en las legislaturas de los estados. Consideradas a menudo como el corazón de la democracia de Estados Unidos, las legislaturas estatales son a veces descritas como los entes más «cercanos al pueblo» y, por ende, los más simbólicos de la voluntad popular. El magistrado del Tribunal Supremo Earl Warren las llamaba «la fuente de donde brota el Gobierno representativo», mientras que el magistrado Neil Gorsuch pregonaba que son la auténtica «representación del pueblo».[36]Sin embargo, en realidad las legislaturas de los estados son proclives a la tendencia minoritarista.[37]

Para ver cómo funciona, podemos echar un vistazo a Pensilvania: un estado que es un gran campo de batalla y donde los demócratas, en el siglo XXI, han ganado con regularidad mayorías populares a escala estatal, aunque los republicanos suelen quedarse al cargo de la legislatura.[38]Desde el año 2000, los demócratas han vencido en cinco de las seis elecciones al Gobierno estatal y en cuatro de las cinco carreras a la presidencia. A menudo también han ganado la mayor parte del voto para la legislatura del estado, pero no siempre se ha traducido en una mayoría de escaños. En 2018, por ejemplo, los demócratas ganaron con un 55 por ciento de los votos en las legislativas estatales, pero los republicanos conservaron de 110 a 93 escaños en la cámara estatal.

Si comparamos tres distritos típicos en las elecciones de 2018, veremos cómo ocurre lo que acabamos de explicar. Primero, consideremos el 70.º Distrito Legislativo de Pensilvania: una región densamente poblada, con un 45 por ciento de ciudadanos no blancos en las cercanías de Filadelfia, donde el legislador demócrata Matt Bradford, un fiscal que solía trabajar con el sindicato industrial United Steelworkers (Trabajadores de la Siderurgia Unidos), ganó por goleada los comicios de 2018 con 16.055 votos frente a los 7.112 de su rival republicano. Hablemos, por contraste, del cercano Distrito 71.º, el de Luisiana, con un 84 por ciento de blancos, poco poblado y donde el candidato republicano Jim Rigby, antiguo jefe de policía del Departamento de Ferndale, logró imponerse con dificultades pero derrotó a su contrincante demócrata por 11.615 votos contra 10.661. Observemos también el Distrito 144.º, al sureste de Pensilvania: una circunscripción principalmente rural, y donde el republicano Todd Polinchock, un piloto naval retirado, ganó por poco a su rival demócrata: 15.457 contra 14.867. Si sumamos los votos de las tres circunscripciones, los demócratas ganaron por un margen de 41.583 a 34.181. Sin embargo, los republicanos obtuvieron dos de los tres escaños. Este es el patrón que se repitió en toda Pensilvania en 2018 y que ocurre de manera habitual en todos los estados del país.[39]Los demócratas a menudo ganan una mayoría del voto estatal, pero como sus votantes se encuentran amontonados en distritos principalmente demócratas y los conservadores ganan con menos margen, los republicanos pueden ganar mayorías legislativas a la vez que consiguen menos votos.

Aunque el ordenamiento geográfico juega un papel claro en este asunto, muchas legislaturas estatales también reordenan intencionalmente a sus votantes cambiando las circunscripciones, de modo que el partido que está en el poder salga favorecido.[40]Después de que una vez por década se pongan al día todos los censos, se requiere a los estados que vuelvan a trazar las fronteras entre circunscripciones electorales para mantener las instituciones actualizadas respecto a los cambios poblacionales. Desde el fallo del Tribunal Supremo en el caso Baker contra Carr

en 1962 y en el de Reynolds contra Sims en 1964, los distritos legislativos también deben tener dimensiones equivalentes en cuanto a la población. Sin embargo, no tienen por qué adquirir formas parecidas. Las legislaturas estatales pueden modelarlos de modos muy irregulares, redibujando las líneas divisorias para situar a los votantes del partido rival en un número menor de distritos y esparciendo el resto por otras zonas, así diluyen la voz del partido rival. De este modo, este ganará en unos pocos distritos con grandes mayorías, pero perderá muchos más distritos como resultado.

Esto se conoce como *gerrymandering* (o «manipulación de las elecciones»), y es tan antiguo como la mismísima república. Ambos grandes partidos lo han practicado. Sin embargo, dos cosas han cambiado a principios del siglo XXI. La primera es que la creciente concentración de votantes demócratas en las ciudades ha provocado que servirse del *gerrymandering* les resulte más sencillo a los republicanos. Es decir, el ordenamiento geográfico les ha facilitado gran parte del trabajo, ya que de entrada están a la cabeza de la competición.[41] En segundo lugar, la polarización y la radicalización del Partido Republicano, en particular después del acceso a la presidencia de Obama en 2008, han incrementado el juego de la redistribución de fronteras electorales.[42] Así pues, el rediseño de los distritos, que había sido un ejercicio burocrático de baja intensidad, se ha convertido en una iniciativa con buen financiamiento, coordinada en todo el país, con alta tecnología y carente de cualquier tipo de escrúpulos.

De hecho, en 2010 el Partido Republicano inició una estrategia nacional de *gerrymandering* conocida como Redistricting Majority Project (Proyecto Mayoritario de Redistribución de Distritos) (REDMAP, por sus siglas en inglés).[43] Financiado por acaudalados donantes republicanos, el REDMAP era un plan nacional coordinado para lograr el control de las legislaturas de los estados y redibujar las circunscripciones a favor del Partido Republicano.[44] Siguiendo una estrategia no muy distinta de la de Viktor Orbán tras su aplastante victoria parlamentaria de 2010 en Hungría, los conservadores usaron sus demoledores resultados en

los comicios de mitad de mandato para ganar el control del proceso de distribución en numerosos estados disputados, desde Wisconsin y Míchigan hasta Virginia o Carolina del Norte. Como en Hungría, la estrategia valió la pena. En Wisconsin, después de que los republicanos aplicaran esta forma de manipulación de manera agresiva para cambiar los distritos electorales en 2011, los demócratas ganaron el voto popular para la Asamblea Estatal en 2012 (un 50 contra un 49 por ciento), pero los republicanos siguieron controlando sin preocupaciones la cámara, con 60 de 99 escaños. El representante local en la Asamblea del Estado, Andy Jorgensen, describió aquellas elecciones, deformadas por el *gerrymandering*, como una «manera corrupta de alcanzar el poder sin haberlo ganado. Como un episodio de *Los Soprano*».[45]El Gobierno de la minoría siguió en la legislatura de Wisconsin durante el resto de la década. En 2018, los demócratas ganaron el 53 por ciento del voto en la Asamblea Estatal, comparado con el 45 por ciento de los republicanos. Aun así, los conservadores lograron una ventaja de 63 a 36 en la cámara del estado.[46]Estos también obtuvieron el control de legislaturas en Míchigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Virginia a pesar de haber perdido la votación popular.

El ordenamiento geográfico y la manipulación electoral han provocado lo que un analista denominó «mayorías fabricadas».[47]Entre 1968 y 2016, hubo 121 casos en las legislaturas estatales en que el partido que recibió menos votos ganó de todos modos una mayoría de escaños en la cámara estatal, y hubo 146 ocasiones en que el partido que perdió se hizo con el control de los Senados estatales.[48]Mientras que en el pasado ambos partidos se aprovechaban ocasionalmente de las mayorías fabricadas, hoy en día, gracias a la división urbana-rural, los republicanos casi siempre son quienes se benefician de ella.[49]

Actualmente los cronistas de la política describen con frecuencia a nuestro sistema nacional como un modelo estancado entre dos partidos que obtienen resultados similares. Tanto académicos como

gurús opinan que una importante explicación de los males de la democracia estadounidense —como pueden ser la polarización y el estancamiento— es un grado inusual de «paridad» entre partidos.[50]Los resultados de las presidenciales se deciden por márgenes muy estrechos; el Senado de Estados Unidos está dividido en partes idénticas. Sin embargo, las opiniones de este tipo ocultan que esta igualdad entre partidos es *fabricada* por nuestras instituciones. Los resultados del Colegio Electoral, en efecto, se resuelven por un ínfimo margen, y en el reparto de escaños de ambos partidos en el Senado sucede algo muy parecido. No obstante, si nos concentramos en los electores, veremos una menor paridad: el Partido Demócrata, como ya hemos observado, ha ganado en voto popular todas las presidenciales excepto una desde los años ochenta y en cada ciclo de seis años en el Senado desde los noventa. Eso puede ser todo excepto paridad. La paridad en Washington surge solamente después de que los votos sean aprobados a través de los cauces distorsionadores de las instituciones.

Estados Unidos todavía no ha sucumbido a la regla de la minoría. Las mayorías electorales totales todavía logran prevalecer en muchos ámbitos, como pueden ser la Cámara de Representantes, las elecciones de los gobernadores u otros comicios de ámbito estatal. Sin embargo, los casos de aplicación de la regla de la minoría son cada vez más frecuentes.

Todo ello tiene consecuencias reales. Imaginemos a una persona nacida en 1980 en Estados Unidos y que votó por primera vez en 1998 o en el 2000. En toda su vida adulta, los demócratas consiguieron la victoria en las elecciones para el Senado celebradas cada seis años y en todas las presidenciales, excepto una, y aunque fue eso lo que sucedió, durante la mayor parte de su vida hubo presidentes republicanos y un Senado y un Tribunal Supremo dominados por el Partido Republicano. ¿Cuánta fe debería tener en esta democracia?

Si la pujanza de la regla de la minoría es decisiva, no es *solamente*

porque permite que ganen quienes han perdido. También tiene insidiosos efectos sobre políticas que afectan a las vidas de la gente. La opinión pública nunca se traduce a la perfección en forma de estrategias. Los ciudadanos tienden a ser volubles y cambiantes a la hora de juzgar las medidas políticas, y lo que opinan no siempre es el factor por el que deciden a quién votar.[51]Además, los grupos de interés organizados (a menudo con mucha financiación) ejercen una influencia considerable sobre las políticas y la legislación, con frecuencia de maneras que se apartan de la opinión pública mayoritaria.[52]No obstante, las instituciones también son importantes, y cuanto mayor sea la sobrerrepresentación de las minorías de partido en las instituciones políticas, tanto más probable será que la opinión mayoritaria se vea frustrada o ignorada. Si las decisiones acerca de temas polémicos son tomadas por senadores o magistrados que están «fuera del alcance de las mayorías», entonces no deberíamos sorprendernos cuando las medidas políticas están desincronizadas con la visión mayoritaria.

Un ejemplo claro de esto es el aborto. El fallo del Tribunal Supremo de 2022 en el caso Dobbs contra Jackson eliminó el derecho protegido por la Constitución a abortar, dejando el asunto en manos del Congreso y de las legislaturas estatales. En su dictamen por mayoría, el juez Samuel Alito escribió que ya era hora de «acatar la Constitución y devolver la cuestión del aborto a los representantes elegidos por el pueblo».[53]En su reafirmación del fallo, el juez Brett Kavanaugh argumentó que la decisión restauraba «la autoridad popular para tratar el tema de la interrupción voluntaria del embarazo a través del proceso de autogobierno democrático».[54]Sin embargo, las instituciones contramayoritarias han desvinculado el punto de vista de «los representantes electos del pueblo» del del propio pueblo.

Un estudio de 2022 de la Monmouth University (Universidad de Monmouth) demostraba que solo un 37 por ciento de los estadounidenses estaban de acuerdo con la decisión de derogar el dictamen del caso Roe contra Wade, que asentó las bases para proteger a aquellas mujeres que quisieran abortar. De modo

parecido, una encuesta realizada en mayo de 2022 por la consultoría Gallup indicaba que el 55 por ciento de los estadounidenses se consideran a favor del «derecho a decidir», mientras que solo un 39 se identifican como «provida».[55]Según el Pew Research Center, el 61 por ciento de adultos del país afirman que el aborto debería ser legal en todos o en casi todos los casos, mientras que solamente un 37 por ciento creen que debería ser ilegal en todos o en la mayoría de los casos.[56]A pesar del amplio apoyo mayoritario al derecho al aborto, las instituciones contramayoritarias han echado por la borda los intentos de los demócratas en el Congreso por ratificar el resultado del caso Roe contra Wade, la *Women's Health Protection Act* (Ley de Protección de la Salud de la Mujer), que debería haber impedido que los estados restringieran el derecho al aborto, fue aprobada en la cámara, pero ya había muerto una vez llegó al Senado, donde quedó muy lejos del umbral de 60 votos que se requiere para detener el obstruccionismo.[57]

Así es como la ley del aborto se ha convertido en una cuestión de los estados. Trece de ellos tienen las llamadas *trigger laws* ('leyes gatillo'), diseñadas para confirmar automáticamente la prohibición total o parcial del aborto después de la derogación de la *Women's Health Protection Act*.[58]Según el Guttmacher Institute, es plausible que 13 estados más autoricen ilegalizar la interrupción del embarazo tras el fallo del caso Dobbs contra Jackson. Varias de estas prohibiciones surgieron de legislaturas que habían sido objeto de tácticas de *gerrymandering*, y que se impusieron a la opinión pública en el contexto estatal. Los politólogos Jacob Grumbach y Christopher Warshaw han analizado datos de encuestas realizadas en los entes estatales para determinar el apoyo a la ley del aborto.[59]Mientras que al menos en 40 estados la mayoría del apoyo es para el aborto legal, solo en 10 existen mayorías claramente antiabortistas. Esto significa que hasta 16 estados podrían aprobar leyes restrictivas a las que se opone la mayoría de la población. Según Grumbach y Warshaw: «Este desequilibrio solo existe en una dirección. No existen estados donde la ciudadanía apoye prohibir el aborto, pero cuyo Gobierno no esté a favor de hacerlo».[60]

Pensemos en el caso de Ohio como ejemplo. Grumbach y Warshaw comprobaron que solo un 55 por ciento de sus habitantes apoyan ilegalizar el aborto. Sin embargo, cuando se derogó la ley, Ohio se convirtió en el epicentro de una de las normas más restrictivas contra la interrupción del embarazo en todo el país.[61]La llamada *Heartbeat Bill*[62](que entró en funcionamiento después del fallo del caso Dobbs contra Jackson, pero que luego fue suspendida tras el recurso a los tribunales) prohíbe los abortos cuando se puede detectar el latido del corazón de un feto; normalmente este empieza durante la sexta semana del embarazo.[63]La ley no contempla excepciones por violación ni incesto. De acuerdo con un estudio de 2019, solo el 14 por ciento de los ciudadanos de Ohio apoyan prohibir el aborto en casos de violación o de incesto.[64]Existen, por supuesto, algunos estados (como Virginia Occidental o Arkansas) donde las mayorías sí se oponen al aborto legal. Las restrictivas leyes de estas regiones, por lo tanto, se traducen en una política sobre el aborto más en línea con la opinión mayoritaria. Sin embargo, en general, Grumbach comenta que «después del caso Dobbs y de las leyes que ha provocado, 14 millones menos de estadounidenses estarán sujetos a la política abortista de su preferencia».[65]

Existe una brecha incluso mayor entre la opinión pública y la política en la cuestión del control de las armas. Una serie de tiroteos masivos en escuelas durante las últimas décadas —como los de Columbine (1999), Sandy Hook (2012), Parkland (2018) y Uvalde (2022)— han generado un apoyo público generalizado a leyes más estrictas sobre las armas. Según las encuestas llevadas a cabo por el medio *Morning Consult/Politico* tras el tiroteo multitudinario de Uvalde, en Texas, el 65 por ciento de los estadounidenses apoyan leyes más estrictas para controlar las armas, mientras que solo el 29 por ciento se oponen a ellas.[66]También ha surgido un amplio respaldo público a las políticas de seguridad para las armas. De los estudios de Gallup y del Pew Research Center también se deduce que más del 60 por ciento apoya una ley que prohíba la fabricación, venta y posesión de armas semiautomáticas o de asalto y más del 80 por ciento

apoya la obligatoriedad universal de verificar los antecedentes penales para poder comprarlas. Sin embargo, las legislaciones de este tipo han fracasado constantemente en el Senado.[67]Esto se produce, en parte, porque la Cámara Alta sobrerrepresenta de manera exagerada a quienes apoyan las armas: los 20 estados con las mayores tasas de propietarios de armamento contienen apenas un tercio de la población de los veinte con la menor tasa de armas.[68]Sin embargo, todos los estados están igualmente representados en el Senado. En conjunto con el filibusterismo, esta sobrerrepresentación ha convertido a la cámara en la tumba de la legislación de control armamentístico.

Tras la masacre de Sandy Hook, los padres de las víctimas hicieron campaña para aprobar leyes que universalizaran el control de antecedentes penales antes de la compra de armas.[69]Lo lograron en la Cámara de Representantes, que en 2012 aprobó un anteproyecto de ley para las verificaciones universales de los antecedentes. Convenció a cincuenta y cinco senadores. No obstante, como es de esperar, no bastó, y el obstruccionismo se encargó de dar muerte a la ley. Los cuarenta y cinco senadores que se opusieron al anteproyecto representaban a un 38 por ciento de estadounidenses.[70]En 2015, 2019 y 2021, la Cámara Baja aprobó leyes parecidas para la revisión de antecedentes, pero las tres fueron liquidadas en el Senado.[71]Luego, en julio de 2022, el Congreso aprobó una ley que prohibía ciertas armas semiautomáticas. Un estudio de Fox News de junio de aquel año reveló que el 63 por ciento de la población nacional apoyaba su prohibición.[72]Sin embargo, como los defensores de la ley no pudieron reunir los 60 votos que se necesitan para superar el filibusterismo al que la sometieron, nunca fue aprobada por la Cámara Alta.[73]

Si nos fijamos en las medidas sobre la tenencia de armas que han aplicado estados concretos, comprobaremos que también se hace caso omiso de la opinión pública. En Ohio, un estudio de 2018 demostró que existe una gran mayoría que apoya controlar las armas. Más del 60 por ciento de los habitantes apoya que se prohíban las armas semiautomáticas y los cargadores de alta

capacidad, y más del 70 por ciento está a favor de un período de espera obligado antes de comprarlas. Más del 75 por ciento está en contra de armar a los profesores. Aun así, la legislatura estatal, que dominaban los republicanos, siguió otro camino.[74]Con tal de no aprobar leyes de control, se dio el visto bueno a un anteproyecto que permitía llevar pistolas ocultas sin contar con un permiso, como ya sucedía en Texas, Tennessee y Montana. Lo llevaron a cabo, aunque solamente parecía bien a un 20 por ciento del país. Más adelante, tras el tiroteo en Uvalde, en 2022, Ohio optó por la vía rápida y aprobó dotar de armamento a los profesores.[75]

En palabras del columnista del *New York Times* Jamelle Bouie: «Pocos son los estadounidenses que desean la permisividad legal que existe a día de hoy sobre la cuestión de las armas. Pero los que sí están de acuerdo han sido captados por el Partido Republicano, y se aprovechan de sus ventajas institucionales para acabar con su control y propagar hasta las instancias constitucionales un punto de vista expansivo e idiosincrático sobre el derecho a poseer armamento».[76]

Las instituciones contramayoritarias de Estados Unidos obstaculizan del mismo modo las iniciativas que buscan reducir la pobreza y la desigualdad, incluso cuando existen mayorías sólidas que las apoyan.[77]Un ejemplo es el problema de la congelación de los salarios. En la época del New Deal se estableció por primera vez un sueldo mínimo por mandato federal (de 25 céntimos la hora).[78]Siguió en aumento durante tres décadas y llegó a su máximo tras las enmiendas de 1966 a la *Fair Labor Standards Act* (Ley de Condiciones Laborales Justas) (un hito del presidente Lyndon Johnson y de su programa legislativo llamado «Guerra contra la Pobreza»), que a partir de 1968 estableció un precio mínimo por hora de 1,60 dólares (lo que en 2020 equivalía a 20 dólares).[79]El efecto sobre las rentas de la clase obrera fue drástico. Durante los sesenta y setenta, el salario de una persona trabajadora a tiempo completo que ganaba el sueldo mínimo bastaba para mantener a una familia de tres por encima del umbral de la pobreza establecido a nivel nacional.[80]

Desde 1968, sin embargo, el Gobierno federal no ha logrado

ajustar de manera regular el salario mínimo para adaptarse a la inflación, y el sueldo real que ganan las personas con el nivel económico más bajo se ha visto severamente deteriorado. Entre 1968 y 2006, el valor del salario mínimo ha bajado un 45 por ciento.[81] En 2020, los trabajadores que ganaban el mínimo pactado a nivel estatal tenían una tercera parte menos de dinero que gastar en comida y alquiler que cincuenta años atrás.[82] Hoy en día, un hogar de tres personas que viven con un sueldo mínimo se encontrará muy por debajo del umbral de la pobreza.[83]

Durante décadas, los estadounidenses han dado un apoyo mayoritario a incrementar el salario mínimo. Sin embargo, apenas se ha movido un ápice. Desde su último incremento (a 7,25 dólares la hora), en julio de 2009, los esfuerzos por subirlo han sido rechazados una y otra vez en el Congreso.[84] En 2014, un anteproyecto de ley para incrementar el sueldo mínimo a 10,10 dólares —una medida que, según las encuestas, apoyaba dos tercios de ciudadanos— obtuvo solo 54 de los 60 votos que se necesitaban para progresar en el Senado.[85] La *Raise the Wage Act* (Ley de Incremento del Salario), que habría aumentado el mínimo en todo el país a 15 dólares por hora, consiguió la aprobación de la Cámara de Representantes en 2019. La Oficina de Presupuesto del Congreso (CBO, por sus siglas en inglés) estimaba que la ley aumentaría las ganancias de 27 millones de trabajadores en el país y sacaría de la pobreza a 1,3 millones de hogares.[86] En una encuesta realizada a votantes por la consultoría The Hill-HarrisX, el 81 por ciento expresaron que apoyarían un incremento general del salario mínimo, mientras que un 55 por ciento estaban de acuerdo con un mínimo de 15 dólares la hora. Con todo, el Senado se negó a hacer realidad esta ley.[87]

El intento más reciente de aumentarlo llegó en 2021. El Plan de Rescate Estadounidense de ese año (el proyecto legal de estímulo económico ante la covid-19) incluía en principio una provisión del salario mínimo de 15 dólares la hora. Según una encuesta del Pew Research Center, el 62 por ciento de los estadounidenses estaban de acuerdo con la iniciativa.[88] Otro estudio de CBS News, simultáneamente, preveía un 71 por ciento de

apoyo a un sueldo mínimo más alto.[89]Pero ni el apoyo popular ni la mayoría del Partido Demócrata en el Senado bastaron para garantizar que saliera adelante. Cuando la Cámara Alta dictaminó que el aumento no era una medida presupuestaria que pudiera aprobarse sin la reconciliación (el procedimiento especial del Senado para anular el filibusterismo en el caso de ciertas leyes de gastos), pareció evidente que el salario mínimo de 15 dólares la hora moriría en el Senado.[90]

La imposibilidad de solucionar el congelamiento salarial durante los últimos cincuenta años ha hecho que Estados Unidos sea una excepción en términos de pobreza y desigualdad.[91]Los politólogos Lane Kenworthy y Jonas Pontusson analizaron diez democracias ricas, incluyendo Estados Unidos, cuyos hogares han experimentado una creciente desigualdad en los ingresos durante esta entrada al siglo XXI. En nueve de estos diez países, los Gobiernos han reaccionado con medidas de redistribución más agresivas. El de Estados Unidos ha sido el único que no lo ha hecho.[92]

Los académicos han relacionado el auge del populismo de derecha radical en Estados Unidos con esta negativa permanente cuando se trata de atajar problemas como los salarios estancados o el aumento de la desigualdad.[93]Las instituciones contramayoritarias no son el único motivo por el que la democracia estadounidense no ha sabido responder a las necesidades de los votantes de clase obrera y clase media; unos sindicatos debilitados, unido a la expansiva influencia de grandes intereses corporativos son también factores importantes.[94]Sin embargo, las normas que permiten que las minorías legislativas ignoren de manera rutinaria la voluntad de la mayoría también son parte del problema.

La amenaza a la democracia va más allá del boicot a la opinión pública. Existe el riesgo hoy en día de que las instituciones contramayoritarias de Estados Unidos refuercen o incluso lleguen a normalizar la regla de la minoría.[95]

A menudo pensamos en el sistema democrático estadounidense como una estructura que se corrige a sí misma. Se supone que la presión competitiva ejercida por las elecciones, además de los controles y contrapesos, limitan y, en última instancia, revierten los movimientos autoritarios.

Pero este no es siempre el caso. En manos de un partido antidemocrático, las instituciones que se habían diseñado para proteger a las minorías pueden reforzar e incluso *fortalecer* el autoritarismo.

Una posibilidad es que los organismos contramayoritarios refuercen el extremismo autoritario al blindar contra la presión competitiva a aquellos partidos que representan minorías. Los partidos minoritarios pueden servirse de ventajas contramayoritarias para desobedecer las leyes de la gravedad política y aferrarse al poder a la vez que solo interpelan a una estrecha base extremista. Cuando esto sucede, la naturaleza autocorrectora del mercado electoral desaparece.

El día después del 6 de enero de 2021, el ataque al Capitolio, el Comité Nacional Republicano celebró su tradicional asamblea invernal de cuatro días en un salón de baile adornado con candelabros en el *resort* Ritz-Carlton de la isla Amelia (Florida), situado junto al océano.[96]Si debía haber una ocasión para que los republicanos reflexionaran sobre su futuro, ahí estaba. Estados Unidos acababa de vivir un ataque sin precedentes a la democracia, y el presidente había jugado un papel clave en él. No solamente eso, sino que el Partido Republicano, bajo la dirección de Trump, había fracasado en las urnas. Con él, solamente ha habido tres presidentes que no hayan sido reelegidos en los últimos ochenta y ocho años. Lo que es más, el partido había perdido el control de la Cámara Baja y del Senado. Era una *tabula rasa*. En realidad, Trump era el primer presidente en perder el Congreso, el Senado y la presidencia tras un primer mandato desde tiempos de Herbert Hoover.

En el mundo de la política electoral, la derrota normalmente tiene un coste. Con ella vienen recriminaciones internas, reputaciones manchadas, liderazgos debilitados y, a veces, el fin de

carreras políticas. Nada de ello parecía ser el caso en isla Amelia aquel enero de 2021. Como se leyó en *The New York Times*, parecía que los dirigentes republicanos «vivieran en un universo paralelo».[97]Mientras Trump se encaminaba a una segunda destitución y a una posible investigación criminal, la asamblea de presidentes estatales y los miembros del comité del Partido Republicano lo bañaron en adulaciones.[98]Ni repensaron sus estrategias ni modificaron su campaña. La presidenta del RNC, Ronna McDaniel, la candidata favorita de Trump, fue reelegida por unanimidad. En su discurso, McDaniel ni siquiera mencionó la derrota del presidente.[99]Dicho de otro modo, los republicanos reaccionaron al devastador revés electoral redoblando su apuesta por el trumpismo. David Bossie, miembro del comité por Maryland, afirmó: «No se tiene por qué echar a todo el mundo cuando en lo fundamental nada está yendo mal».[100]

«En esta sala se está negando la realidad», comentó el miembro del comité por Nueva Jersey, Bill Palatucci, uno de los pocos asistentes que se mostró públicamente preocupado acerca del daño que había infligido Trump a la «marca» republicana. Era una voz solitaria en isla Amelia. Sus correligionarios de partido defendían casi con unanimidad al presidente derrotado, insistiendo, como el miembro por Alabama, Paul Reynolds, en que Trump y sus seguidores los «convertían en un partido mejor».

Durante los comicios de medio mandato, en 2022, el Partido Republicano, dominado por Trump, nombró a candidatos que negaban el resultado de las elecciones para competir por el Congreso en todo el país, y de nuevo obtuvieron malos resultados. Después de tres votaciones decepcionantes, en 2018, 2020 y 2022, algunos de los líderes republicanos empezaron a admitir que el extremismo trumpista costaba votos al partido. Aun así, la formación no cambió de ruta. Ronna McDaniel, aliada de Trump, fue reelegida en enero de 2023; sus únicos competidores eran también pro-Trump y negacionistas de los resultados de los comicios. Los republicanos en el Congreso tampoco decidieron romper con Trump. Después del nombramiento de Kevin McCarthy como presidente de la Cámara de Representantes en enero de

2023, declaró que quería «dar las gracias en especial al presidente Trump. No creo que nadie deba dudar de su influencia. Ha estado conmigo desde el principio».[101]Los líderes republicanos en el Congreso no hicieron ningún esfuerzo para aislar o alejar a los extremistas. Los representantes Marjorie Taylor Greene y Paul Gosar, a quienes habían expulsado por su retórica violenta, fueron readmitidos en el comité.[102]Así que, aunque algunos políticos republicanos empezaron, con dudas, a considerar un futuro sin Trump en 2023, mostraron escaso interés en repensar el programa del partido o en romper con la base extremista del trumpismo.

Es difícil imaginar una conducta parecida en un país que no tiene instituciones excesivamente contramayoritarias. La aversión a optar por vías moderadas, incluso tras varias decepciones electorales, solo puede comprenderse a la luz de que las mayorías fabricadas en el Senado y en el Colegio Electoral siguieron siendo factibles y tentadoras.

Es habitual que los partidos políticos cambien de senda cuando pierden elecciones. En este sentido, se parecen a las empresas. Si una compañía tiene pérdidas trimestrales repetidamente, decide reflexionar sobre sí misma, desarrolla una nueva estrategia, e incluso puede llegar a despedir al director general. De modo comparable, después de que el Partido Demócrata perdiera tres presidenciales seguidas en 1980, 1984 y 1988, una nueva generación de políticos demócratas, incluyendo al gobernador de Arkansas, Bill Clinton, inició un proceso de examen de conciencia política. Fundaron nuevos *think tanks* (como el Consejo de Liderazgo Demócrata) y animaron a los líderes del partido a que repensaran los elementos clave de su campaña y estrategia. Los demócratas movieron ficha y se trasladaron al centro político para ganar las dos siguientes elecciones a la presidencia. El Partido Laborista británico realizó una transformación parecida tras pasar la década de los ochenta y buena parte de los noventa en un páramo político.

Durante más de dos siglos, la competencia se considerado una especie de elixir mágico. Sus teóricos y practicantes citan a menudo la fórmula del filósofo John Stuart Mill para derrotar las

ideologías antidemocráticas. En los famosos términos de Mill, es la «colisión de opiniones adversas» lo que permite que la verdad triunfe sobre la mentira.[103]James Madison, de modo parecido, argumentó en el número diez de *The Federalist Papers* que «si una facción representa a una minoría, el principio republicano ofrece socorro, permitiendo que la mayoría derrote a las opiniones amenazadoras con el voto recurrente».[104]La democracia, así pues, debería rectificarse a sí misma: la competencia electoral crea un mecanismo de retroalimentación. Este premia a los partidos receptivos hacia los votantes y castiga a los que no lo son. Los que pierden se ven abocados a moderarse y a ampliar su interés para volver a ganar en un futuro.

Sin embargo, hay una traba: los ajustes electorales que estimulan la sobrerrepresentación de ciertos territorios o grupos, permitiendo a los partidos ganar elecciones *sin lograr la mayoría de los votos*, debilitan el incentivo a adaptarse. Sin la presión de la competencia para ampliar su atractivo, los partidos pueden retraerse y radicalizarse.

Eso es lo que le ha ocurrido al Partido Republicano a principios del siglo XXI. El sesgo rural de las instituciones estadounidenses ha permitido que los conservadores logren la presidencia y controlen el Senado (así como, llegado el momento, el Tribunal Supremo) incluso tras haber perdido el voto nacional popular una y otra vez. Los republicanos se han convertido en los beneficiarios de una especie de «proteccionismo constitucional», con organismos que diluyen el aliciente para ser mejor que el otro. El ala conservadora ha gozado de una ventaja inicial en las elecciones nacionales que, en parte, los ha protegido de la presión de competir.

Esta muleta electoral que les ofrecen las instituciones pone en peligro la democracia al reforzar el extremismo republicano, ya que estos pueden lograr poder y ejercerlo *sin establecer mayorías electorales nacionales*, además de carecer del incentivo habitual para adaptarse a los cambios fundamentales de la sociedad. Si se pueden ganar continuamente los cargos más importantes del país sin interpelar a más gente, ¿por qué habría que hacerlo? Los

políticos republicanos han caído así en una vorágine de autorrefuerzo: sus bases conservadoras los empujan al extremismo, y la protección electoral que ofrecen las instituciones contramayoritarias ha ido debilitando su acicate para resistir esta presión.

La democracia estadounidense solamente sobrevivirá con un Partido Republicano que pueda conseguir mayorías nacionales; uno que compita a cambio de votos en las ciudades y entre los ciudadanos más jóvenes y no blancos. Solo cuando los republicanos puedan ganar elecciones nacionales de forma legítima se calmará el miedo a la democracia multirracial de sus dirigentes. Únicamente entonces podemos esperar que abandonen el extremismo violento y se valgan de las reglas democráticas, ganen o pierdan. Para que todo eso ocurra, los republicanos deben convertirse en un partido multiétnico de verdad. Así es como nuestras instituciones han debilitado el aliciente entre los conservadores para buscar otras vías, y es un problema grave. Mientras el Partido Republicano siga aferrándose al poder sin ampliar su público más allá de sus bases cristianas, blancas y radicalizadas, seguirá siendo proclive al tipo de extremismo que amenaza nuestra democracia hoy.

Las instituciones contramayoritarias no se limitan a reforzar el radicalismo autoritario, sino que también lo consolidan. Lo hacen al otorgar poder a una minoría de partido, que lo utiliza para asentar su autoridad en los organismos políticos. En política, el poder engendra poder.[105]Entre 2016 y 2020, un presidente que perdió el voto popular se valió de la mayoría fabricada de su formación en el Senado para resituar al Tribunal Supremo sustancialmente a la derecha. Con el tribunal de su lado, la regla de las minorías se puede afianzar cada vez más.

De hecho, ya ha empezado a suceder: la Corte Suprema ha actuado para reafirmar la regla de las minorías en legislaturas estatales en las que se había abusado de la práctica del *gerrymandering*. Los mapas electorales de Wisconsin, cuyo descarado trazado de los distritos ha demostrado ser uno de los casos de manipulación más extremos de la historia estadounidense,

fueron revocados por una corte federal en 2016.[106]En 2018, no obstante, el Tribunal Supremo —con Neil Gorsuch a bordo— revirtió el fallo y permitió a los distritos manipulados seguir tal y como estaban (en efecto, esquivaron una decisión judicial alegando razones de procedimiento). Un año más tarde, una vez jubilado Anthony Kennedy y reemplazado por Brett Kavanaugh, una mayoría en el tribunal de cinco contra cuatro declaró (en el caso Rucho contra Common Cause) que las cortes federales no tienen la autoridad para dictar sentencia en casos de manipulación electoral llevada a cabo por los partidos en los estados. Como se expresaba en el dictamen por mayoría del juez y presidente de la Corte Suprema, John Roberts, «las acusaciones de manipulación partidista presentan cuestiones políticas que no son competencia de los tribunales federales».[107]Un Tribunal Supremo contramayoritario, con miembros electos por un Senado, asimismo, contramayoritario, hizo su parte para apuntalar la regla de las minorías en los estados. Podría empeorar. Cada vez menos capaces de lograr la victoria del voto popular para la presidencia, a algunos republicanos se les han ocurrido ciertos planes radicales con los que subvertir el proceso electoral. Uno de ellos se vale de una teoría legal, hasta ahora marginal, conocida como la «doctrina de las legislaturas estatales independientes». Los artículos I y II de la Constitución declaran: «Cada estado determinará, tal y como el poder legislativo disponga, un número determinado de electores». Tradicionalmente, dicha cláusula se ha interpretado en referencia al proceso legislativo general de cada estado, que incluye las constituciones estatales, los tribunales supremos, los vetos de los gobernadores y los referéndums de la ciudadanía.[108]Sin embargo, con una lectura poco ortodoxa de la ley, algunos conservadores han aducido que el artículo II otorga a los Gobiernos de los estados el poder exclusivo para establecer el reglamento electoral. Así pues, de acuerdo a la doctrina de las legislaturas estatales independientes, según Richard Hasen, los Gobiernos poseen la «potestad prácticamente ilimitada sobre el reglamento con el que llevar a cabo las elecciones presidenciales y al Congreso; aunque eso implique violar la propia Constitución del estado e ignorar su

interpretación por parte de la Corte Suprema del mismo».[109]

Como hemos visto, los republicanos controlaban varios Gobiernos clave —entre otros, los de Míchigan, Carolina del Norte, Pensilvania y Wisconsin— en la década de 2010, a pesar de no conseguir el voto popular en esos estados. Bajo la reinterpretación constitucional que propone esta doctrina, estas legislaturas estatales, en potencia, podían entrar en intrépidos juegos de poder, que incluían otorgarse el derecho a determinar unilateralmente los ganadores de los comicios o elegir a los votantes.

La idea según la cual los Gobiernos estatales, y no los electores, son quienes deben elegir al presidente de Estados Unidos puede parecer grotesca, y es evidentemente antidemocrática. De hecho, hace mucho tiempo que esta doctrina ha sido rechazada y considerada marginal respecto a las corrientes principales. Pero algunas de sus variantes han recibido el visto bueno por escrito de los magistrados del Tribunal Supremo Alito, Gorsuch, Thomas y Kavanaugh.[110]La juez Coney Barrett podría ser la siguiente.

Si las legislaturas estatales, que a su vez son gobernadas por minorías partidistas, acaban por elegir la presidencia del país, Estados Unidos habrá caído del todo en la regla de la minoría.

Aunque un escenario como este sigue siendo improbable, está claro que las instituciones excesivamente contramayoritarias de Estados Unidos nos han hecho vulnerables a situaciones antidemocráticas en que las minorías electorales se imponen a las mayorías de Gobierno. En otras palabras, en lugar de poner freno a poderes autoritarios, nuestros organismos políticos han empezado a aumentarlo.

La última década ha resultado aleccionadora: Estados Unidos es un país especialmente susceptible a las crisis democráticas e incluso al retroceso. Muchas sociedades occidentales, desde el Reino Unido hasta Francia o Alemania, pasando por los Países Bajos y toda Escandinavia, han vivido una involución contra la creciente diversidad en el siglo XXI.[111]Aun así, sus democracias gozan de relativa salud. ¿Cómo hemos llegado hasta aquí?

7

Estados Unidos: un caso aparte

Durante la primavera de 1814, veinticinco años después de que se ratificara la Constitución de Estados Unidos, un grupo de 112 hombres noruegos —funcionarios, abogados, oficiales del ejército, empresarios destacados, teólogos, e incluso un marinero— se reunieron en Eidsvoll, una población rural a poco más de sesenta kilómetros al norte de Oslo. En el transcurso de cinco semanas, mientras se reunían en la casa señorial del empresario Carsten Anker, dichos hombres debatieron y redactaron la que a día de hoy es la *segunda* Constitución escrita más antigua del mundo. Como los fundadores de Estados Unidos, los líderes de la independencia de Noruega se encontraban en una situación de alta precariedad. Noruega formó parte del reino de Dinamarca durante más de cuatrocientos años, pero tras la derrota danesa en las guerras napoleónicas, los poderes victoriosos, encabezados por Gran Bretaña, decidieron transferir el territorio a Suecia.[1]Esto produjo una oleada nacionalista en Noruega. Poco dispuestos a ser moneda de cambio «como si fueran ganado», tal y como expresó un observador de la época, los noruegos reivindicaron su independencia.[2]Así fue como eligieron a la asamblea constitucional de 112 hombres convocada en Eidsvoll.

Inspirados por los ideales de la Ilustración y la promesa de obtener el autogobierno, los fundadores de Noruega tomaban la experiencia de Estados Unidos como modelo.[3]Al fin y al cabo, los estadounidenses ya habían hecho lo que los noruegos pretendían: declararse independientes de una potencia extranjera. La prensa noruega se había hecho eco del experimento estadounidense por todo el país, presentando a George Washington y a Benjamin

Franklin como héroes.[4] Aunque los periódicos no siempre informaban correctamente (describían al presidente de Estados Unidos como un «monarca», dijeron que Washington había sido «nombrado dictador del país durante cuatro años» y se referían al vicepresidente como «virrey»),[5] muchos de los hombres reunidos en Eidsvoll estaban bastante familiarizados con el funcionamiento del sistema estadounidense.[6] Christian Magnus Falsen, destacado defensor de la independencia que tuvo un papel importante en el proceso de la redacción de la Constitución, llegó a bautizar a su hijo como «George Benjamin», por Washington y Franklin.[7] Además Falsen estaba profundamente influido por Madison y Jefferson, y más adelante declaró que algunas partes de la carta magna noruega se basaban «casi exclusivamente» en el modelo estadounidense.[8] Tras la aprobación de la Constitución en mayo de 1814, Noruega declaró la independencia.[9] Pero no duró. El ejército sueco invadió el país en julio, obligando a los noruegos a «unirse» a Suecia. Sin embargo, se les permitió mantener la nueva Constitución y su sistema político. La ley fundamental de 1814 gobernó Noruega durante el siguiente período de semindependencia y después de conseguir la plena independencia en 1905. Hoy en día sigue vigente.

Aunque quienes idearon la Constitución noruega se inspiraron en el proceso fundacional de Estados Unidos, su creación inicial poco tenía de revolucionario. Noruega siguió siendo una monarquía hereditaria, y los reyes mantuvieron su derecho a nombrar Gobiernos y controlar la legislación (aunque sus vetos podían ser anulados en el Parlamento).[10] Los miembros del Congreso (Storting)[11] eran elegidos indirectamente por colegios electorales regionales y el voto estaba limitado a hombres que cumplieran con ciertos requisitos en cuanto a las propiedades.[12] Las élites urbanas también lograron una cierta ventaja inherente en el Storting. En 1814, Noruega era un país en gran medida rural: un 90 por ciento del electorado vivía en el campo.[13] Muchos campesinos eran propietarios de tierras y, por ende, se les permitía votar; las élites adineradas de las ciudades temían ser avasalladas por la mayoría rural. Como dice un politólogo noruego, la élite

veía a la gente del campo como una «bomba de relojería en potencia».[14]Así pues, la Constitución instauró una ratio de dos escaños contra uno en el Parlamento, lo que provocó que las ciudades resultaran sobrerrepresentadas de forma dramática, ya que en realidad había una proporción de diez habitantes rurales por cada urbanita. Esta era la llamada «cláusula campesina».[15]La regla de la mayoría se vio diluida incluso más por el sistema bicameral, puesto que la Cámara Baja del Parlamento era la que elegía la Cámara Alta, conocida como Lagting.[16]Finalmente el artículo 2 de la Constitución de 1814 estableció la «religión evangélica-luterana» como la «religión oficial del Estado» y requería que por lo menos la mitad de los ministros fueran miembros de la Iglesia.[17]

Así pues, la carta magna noruega de 1814, como la estadounidense de 1789, incluía varias características antidemocráticas. De hecho, la Noruega de principios del siglo XIX era considerablemente menos democrática que Estados Unidos. No obstante, con el devenir de los siguientes dos siglos, Noruega ha llevado a cabo una serie de reformas democráticas de gran calado; todas ellas sobre la Constitución original. La soberanía del Parlamento fue fijada a finales del siglo XIX, y el país escandinavo se convirtió en una genuina monarquía constitucional.[18]Una reforma de la ley fundamental en 1905 eliminó los colegios electorales regionales y estableció elecciones directas para el Storting. Las restricciones del voto sobre la base de la propiedad privada fueron eliminadas en 1898, y el sufragio universal (masculino y femenino) se instauró en 1913.

A partir de ese mismo año, Noruega se convirtió en una democracia. Sin embargo, seguía existiendo una importante medida contramayoritaria: la cláusula campesina. Hacia mediados del siglo XX, la urbanización ya había revertido el reparto desigual que provocaba dicha cláusula. Con la mitad de la población viviendo en ciudades, la ratio fija de dos escaños por cada uno que distinguía el ámbito rural del urbano cada vez sobrerrepresentaba más a los votantes *del campo*. Del mismo modo en que ocurría en el Senado estadounidense. Así pues, la cláusula campesina

amenazaba la regla de las mayorías al inflar el poder político de las zonas menos pobladas, para beneficio de los partidos conservadores. Sin embargo, a diferencia de Estados Unidos, las grandes formaciones políticas negociaron una reforma constitucional que eliminó la cláusula en 1952.[19] Noruega avanzó unos cuantos pasos más hacia la regla de la mayoría al reducir la edad de voto a los dieciocho años en 1918, y eliminó la Cámara Alta de su Parlamento en 2009.[20]

Pero su democratización no se detuvo ahí. Con el cambio de normas en la sociedad noruega y en el mundo a finales del siglo XX y a inicios del XXI, los derechos constitucionales y democráticos se expandieron de nuevas formas. Las minorías indígenas, por ejemplo, consiguieron nuevas protecciones.[21]A finales de los setenta, el Gobierno noruego ultimaba una enorme planta hidroeléctrica en un río que habría sumergido un pueblo sami y sus tierras de pastoreo de renos. Esto provocó una gran campaña de protestas —que incluía manifestaciones y huelgas de hambre— entre los activistas samis, a quienes apoyaban los ecologistas y los pescadores locales.[22]En 1981, catorce mujeres samis ocuparon el despacho del primer ministro, sacudiendo la política del país y situando sus derechos con firmeza en la agenda política.[23]Una enmienda constitucional de 1988 garantizó la protección de la lengua y la cultura de los samis.[24]

Los derechos siguieron ampliándose durante el siguiente cuarto de siglo. Una enmienda constitucional de 1992 garantizaba a los noruegos el derecho a disfrutar de un medio ambiente salubre.[25]En 2012, la Constitución fue enmendada de nuevo, esta vez para abolir el Estado confesional en Noruega y garantizar la igualdad de derechos para «todas las comunidades religiosas y filosóficas».[26]Más tarde, en 2014, adoptó un conjunto de protecciones de derechos humanos y sociales a gran escala que incluían la garantía de «respeto a la dignidad humana» de los niños, el derecho a la educación y a la subsistencia (mediante el trabajo o, en el caso de aquellos que no se pudieran mantener a sí mismos, con ayuda gubernamental).[27]En total, la Constitución noruega acogió 316 enmiendas entre 1814 y 2014.[28]

Dos siglos de reforma han transformado Noruega en uno de los países más democráticos de la tierra. En el Global Freedom Index (Índice de Libertad Global) de Freedom House (con una escala del 0 al 100), la mayoría de las democracias consolidadas recibieron una puntuación de más de 90 en 2022. Varios países, como Canadá, Dinamarca, Nueva Zelanda y Uruguay fueron puntuados por encima de 95. Solamente tres recibieron una calificación perfecta de 100: Finlandia, Suecia y Dinamarca. Freedom House da notas a los países según veinticinco dimensiones específicas de la democracia. Noruega recibe un resultado perfecto en todas ellas.

La historia de la transformación de Noruega es impresionante, aunque no inusual. Otros sistemas políticos europeos también surgieron en condiciones no democráticas, con diversas instituciones que mantenían a las mayorías bajo control. Gran parte de estos países, como Noruega, eran gobernados por una monarquía. Con pocas excepciones, solo se permitía votar a los varones con propiedades. El sufragio era habitualmente indirecto: los ciudadanos no votaban a candidatos sino a «eminencias» locales —funcionarios, sacerdotes, pastores protestantes, terratenientes o propietarios de fábricas— que a su vez seleccionaban a miembros del Parlamento. En el caso de Latinoamérica, donde los líderes fundadores usaron el modelo de la Constitución estadounidense tras conseguir la independencia a principios del siglo XIX, todos los presidentes se elegían indirectamente, a través de colegios electorales o legislaturas, antes de 1840.[29]

Además, aquellos primitivos sistemas electorales eran tendenciosos a favor de los grandes hacendados. Las ciudades —donde se encontraban las crecientes clases obreras de Europa— a menudo estaban enormemente infrarrepresentadas en el Parlamento, si las comparamos con los distritos rurales. En los infames *rotten boroughs* ('burgos podridos')[30]del Reino Unido, a veces un par de docenas de votantes tenían un representante propio.

En la mayoría de los países había también controles *legislativos* importantes de las mayorías populares, que incluían entes no democráticos con el poder de vetar la legislación. En Gran Bretaña, la Cámara de los Lores, un organismo no elegido compuesto por pares y miembros hereditarios, tenía la autoridad de obstruir cualquier ley que no tuviera que ver con los impuestos. Tras su independencia en 1867, Canadá también estableció un Senado compuesto por cargos nombrados. La mayoría de los sistemas políticos europeos del siglo XIX poseían Cámaras Altas semejantes, compuestas por miembros que heredaban el cargo y personas nombradas por la Corona y la Iglesia.[31]

Las instituciones políticas, en todas partes, ofrecían de este modo una protección excesiva a los intereses minoritarios. Un ejemplo extremo se puede hallar en el Parlamento (Sejm) de Polonia en el siglo XVIII, en el que todos y cada uno de los diputados en un organismo de doscientos miembros disponía de *veto individual sobre cualquier propuesta de ley*. Según un analista del derecho, el filósofo político suizo Jean-Jacques Rousseau veía en el *liberum veto* de Polonia (en castellano, «me opongo libremente») una «tiranía de la minoría de uno».[32]Los defensores del sistema lo describían como un «privilegio de nuestra libertad». No obstante, provocó que la vida política se detuviera en un punto muerto. Entre 1720 y 1764, más de la mitad de las sesiones parlamentarias de Polonia fueron suspendidas por vetos individuales o por el filibusterismo antes de que se pudiera tomar una decisión.[33]Incapaz de llevar a cabo funciones gubernamentales o de obtener financiación para su defensa, Polonia cayó presa de intervenciones militares de sus vecinas, Rusia, Prusia y Austria, cuyos ejércitos desmembraron el territorio, borraron literalmente al país del mapa durante más de un siglo. (La disfuncionalidad del *liberum veto* no pasó por alto a los fundadores de Estados Unidos, incluyendo a Alexander Hamilton, quien mencionó Polonia como un ejemplo del «veneno» que significaba «otorgar a una minoría una negativa sobre la mayoría».)[34]

Aunque otros países se abstuvieron del *liberum veto*, los Estados de toda Europa carecían de normativas con las que detener

el debate parlamentario, lo que permitía que pequeñas facciones legislativas hundieran de manera rutinaria a las mayorías. Este comportamiento propio del obstruccionismo llegó a convertirse en una práctica tan generalizada en Europa, que el teórico del derecho alemán Georg Jellinek advirtió en 1904 que «la obstrucción parlamentaria ya no es un mero intermedio en la historia de un Parlamento o de otro. Se ha convertido en un fenómeno internacional que, de modo amenazante, cuestiona el futuro del gobierno parlamentario en su totalidad».[35]

Así pues, por todo Occidente, los primeros sistemas políticos convertían las elecciones y a los parlamentos en algo que las mayorías populares no podían contemplar, afianzando con ello no solamente derechos minoritarios, sino una categórica regla de la minoría. En aquel mundo de monarquías y aristocracias, la Constitución fundacional de Estados Unidos, a pesar de sus características contramayoritarias, destacaba por ser en comparación más democrática.

En el decurso del siglo XX, sin embargo, la mayoría de los países que a día de hoy son considerados democracias desmantelaron sus instituciones contramayoritarias más flagrantes y emprendieron medidas para conferir poderes a las mayorías. En primer lugar, eliminaron las restricciones al sufragio. El voto universal masculino apareció primero en la Tercera República francesa, en la década de 1870. Nueva Zelanda, Australia y Finlandia fueron pioneros en aprobar el sufragio femenino a finales del siglo XIX y principios del XX. Hacia 1920, prácticamente todos los adultos, hombres y mujeres, podían votar en la mayor parte de Europa occidental, Australia y Nueva Zelanda (Bélgica, Francia y Suiza tardaron más en permitir votar a las mujeres).

Las elecciones indirectas también desaparecieron.[36]Hacia el final del siglo XIX, Francia y los Países Bajos ya habían eliminado los poderosos consejos locales que anteriormente se dedicaban a la selección de miembros del Parlamento; Noruega, Prusia y Suecia hicieron lo propio en los primeros años del siglo XX.[37]A finales de los años cincuenta, Francia experimentó con la creación de un colegio electoral durante unas únicas elecciones presidenciales,

pero luego lo suprimió.[38]Este tipo de instituciones también fueron desapareciendo poco a poco en Latinoamérica. Colombia eliminó su colegio electoral en 1910, Chile lo hizo en 1925 y Paraguay en 1943. Brasil constituyó el suyo en 1964, bajo el Gobierno militar, pero lo reemplazó por las elecciones presidenciales directas en 1988. Argentina, el último país latinoamericano con presidenciales indirectas, se deshizo de este organismo en 1994.[39]

La mayoría de las democracias europeas también reformaron sus sistemas electorales, es decir: la normativa que rige cómo traducir los votos en representación. Con la llegada del siglo XX, los países de toda la Europa continental y Escandinavia abandonaron los sistemas de mayoría simple, empezando por Bélgica en 1899, Finlandia en 1906 y Suecia en 1907, para luego extenderse por toda Europa.[40]Coaliciones de partidos de todo el espectro político presionaron para que hubiera una representación proporcional en múltiples circunscripciones (lo que significa que varios parlamentarios se eligen desde un solo distrito) para equiparar el número de escaños en el Parlamento con la proporción del voto popular. Con estas nuevas reglas, los partidos que ganasen, por ejemplo, un 40 por ciento de los votos podían aspirar a conseguir un 40 por ciento de los escaños.[41]Esto, según demuestra el politólogo Arend Lijphart, contribuye a asegurar que las mayorías electorales se traduzcan en mayorías de gobierno. Hacia la Segunda Guerra Mundial, casi todos los sistemas democráticos de la Europa continental utilizaban alguna variante de la representación proporcional, y hoy en día el 80 por ciento de las democracias con más de un millón de habitantes lo hacen.[42]

Se domesticaron las Cámaras Altas no regidas por el sistema democrático, o bien se eliminaron, empezando por la Cámara de los Lores británica a principios del siglo XX. Gran Bretaña vivió un terremoto político en 1906 cuando el Partido Liberal arrasó en las elecciones y desplazó a los conservadores (los *tories*), que gobernaban hacía más de una década.[43]El nuevo Gobierno, bajo mando liberal, inició nuevas y ambiciosas políticas sociales que se pagarían con impuestos progresivos sobre la riqueza de herederos y terratenientes. Viéndose duplicados en número por los liberales, los

conservadores entraron en pánico. La Cámara de los Lores, que estaba dominada por los pares de tendencia conservadora que heredaban el cargo, se dirigió al rescate de los *tories*. La Cámara Alta, no electa, se entrometió de lleno en la política y vetó el importantísimo proyecto de ley de impuestos de 1909.

Por convención, la Cámara de los Lores podía vetar parte de la legislación, pero no las propuestas de ley sobre impuestos (las disputas sobre tributos desencadenaron la Guerra Civil inglesa de la década de 1640).[44]El Parlamento, aun así, rechazó el ambicioso proyecto presupuestario, decisión que rompió con todo precedente.

Los lores justificaron su inusual decisión reivindicando a su cámara como el «perro guardián de la Constitución».[45]El ministro liberal de Hacienda, David Lloyd George, principal autor de la propuesta presupuestaria, rechazó tal idea y calificó a la Cámara de los Lores de organismo plutocrático: «no un perro guardián», sino más bien el «caniche» del líder del Partido Conservador.[46]En un discurso dirigido a una multitud exultante en el East End de Londres, el mordaz Lloyd George puso en ridículo a los aristócratas que heredaban sus escaños en el Parlamento llamándolos «quinientos hombres del montón escogidos al azar en la cola del paro», y se preguntaba por qué deberían poder «invalidar el criterio deliberado por millones».[47]

Ante una crisis constitucional, los liberales confeccionaron la Ley del Parlamento (*Parliament Act*), que despojaba a la Cámara de los Lores de la potestad de votar permanentemente *cualquier ley*.[48]Se habían trazado los frentes del combate. Si la cámara perdía su derecho a veto, advertían sus miembros conservadores, lo que seguiría iba a ser un apocalipsis político. No solo temían los impuestos. Les preocupaban otras cuestiones planteadas en el programa político de la mayoría liberal, que incluían el plan de garantizar a la Irlanda católica más autonomía, algo que los conservadores veían esencialmente como una afrenta a la visión tradicional (protestante) del destino nacional británico. Lord Lansdowne, un miembro conservador de los lores, predijo que aprobar la *Parliament Act* llevaría a:

> medidas que producirán un daño irreparable a nuestras instituciones más preciadas. La Corona no está a salvo, la Constitución no está a salvo, la Unión no está a salvo, la Iglesia no está a salvo, nuestras libertades políticas no están a salvo. Literalmente, ninguna institución, por venerada y respetada que sea en este país, estará más allá del alcance de esta mayoría.[49]

En último término, el proyecto de ley no solamente se aprobó en la Cámara de los Comunes sino también en la de los lores. Hizo falta jugar un poco duro. Los lores se convencieron solo después de que el Gobierno liberal, apoyado por el rey, amenazara a la cámara designando a cientos de nuevos pares liberales si no transigía. Con la aprobación de la ley, la Cámara de los Lores perdió su capacidad de bloquear las leyes introducidas por la electa Cámara de los Comunes (aunque sí podía retrasarlas). Una de las más poderosas instituciones contramayoritarias de Gran Bretaña se vio sustancialmente debilitada.[50]Más que conducir a un apocalipsis político, las reformas allanaron el camino para la construcción de una democracia más plena e inclusiva durante el transcurso del siglo XX.

Otras varias democracias emergentes abolieron sus Cámaras Altas aristocráticas tras la Segunda Guerra Mundial.[51]Nueva Zelanda eliminó su Consejo Legislativo, parecido a la Cámara de los Lores, en 1950. Dinamarca abolió su Cámara Alta decimonónica (Landsting) en 1953 mediante un referéndum. Suecia hizo lo mismo en 1970. Tras el paso al siglo XXI, dos tercios de los parlamentos mundiales eran unicamerales. El resultado no fue —como advertían con frecuencia los defensores de las Cámaras Altas— el caos y la disfuncionalidad política. Nueva Zelanda, Dinamarca y Suecia pasaron a convertirse en tres de los países más democráticos y estables del mundo.

Otro modo de democratizar las Cámaras Altas que históricamente no han sido democráticas es hacerlas más representativas. Este fue el camino seguido por Alemania y Austria. En Alemania, tras la Segunda Guerra Mundial, este proceso fue especialmente llamativo porque los alemanes reescribieron su Constitución y reconstruyeron su democracia bajo la atenta mirada

de las fuerzas de ocupación estadounidenses. En agosto de 1948, los expertos constitucionalistas alemanes se reunieron en el lugar donde se erigía un monasterio agustino medieval (Herrenchiemsee), en el sureste de Baviera, para empezar a redactar una Constitución democrática.[52]Uno de los propósitos de los autores de la nueva carta magna era modernizar la segunda cámara decimonónica del país (el Bundesrat), que históricamente se había compuesto de funcionarios adscritos a ella.[53]

La intensa convención de dos semanas que se celebró entonces tuvo como resultado una ley fundamental casi completa, excepto en lo referente a esta segunda cámara. Quienes la concibieron todavía no habían acordado su estructura. Al mes siguiente, cuando los líderes de los partidos se congregaron en el Consejo Parlamentario de Bonn bajo la presidencia del futuro canciller Konrad Adenauer, tuvieron varias opciones en consideración.[54]A pesar del papel descomunal que jugaron las fuerzas de ocupación estadounidenses, los redactores de la Constitución de Alemania rechazaron el modelo del Senado estadounidense con representación igualitaria para los estados federales germanos.[55]En su lugar, su representación en el Bundesrat se basaría en la cantidad de población de los estados. Así pues, la segunda cámara federal alemana siguió existiendo, pero ganó en representatividad. Hoy en día, cada estado pequeño del país manda tres representantes al Bundesrat, los estados medios cuatro y los grandes destinan seis. Con esta estructura, los constitucionalistas de la posguerra combinaron principios del federalismo y la democracia para Alemania.

Asimismo, la mayoría de las democracias del siglo XX llevaron a cabo pasos para limitar la obstrucción de las legislaturas por parte de una minoría, así crearon un procedimiento —conocido como *cloture* ('clausura')— que permite a las mayorías simples cerrar un debate parlamentario. El término *cloture* se originó al principio de la Tercera República francesa.[56]En la década de 1870, el Gobierno provisional de Adolphe Thiers afrontaba retos abrumadores. Francia acababa de perder la guerra contra Prusia y el nuevo Gobierno republicano tuvo que enfrentarse a la Comuna

de París, una entidad revolucionaria situada a su izquierda, además de a las fuerzas de la derecha que buscaban restaurar la monarquía. El nuevo Gobierno tenía que demostrar su capacidad de dirigir con eficacia. Sin embargo, la Asamblea Nacional era célebre por sus debates maratonianos y la incapacidad de acción ante cuestiones apremiantes. Con la presión de Thiers, la Asamblea ideó una moción de clausura que permitía a una mayoría parlamentaria refrendar mediante el voto un debate que prometiera ser inacabable.

Gran Bretaña efectuó reformas parecidas. En 1881, el primer ministro liberal, William Gladstone, impulsó un «reglamento de clausura» que permitía a una mayoría de los diputados concluir un debate y que el Parlamento procediera a votar. La cámara australiana adoptó una normativa similar en 1905. En Canadá, las minorías de la oposición en el Parlamento habían usado el filibusterismo para frustrar varios proyectos de ley importantes, incluyendo uno que había presentado el primer ministro conservador, Robert Borden, en 1912.[57]La *Naval Aid Bill* (Ley de Ayuda Naval), que pretendía hacer frente al auge del poder marítimo alemán con el fortalecimiento de la armada canadiense, fue obstruida por los liberales en la oposición durante cinco meses. El debate, que a veces se alargaba hasta pasada la medianoche, afectó físicamente al primer ministro, quien empezó a sufrir flemones tan graves que tenía que salir al hemiciclo con el «cuello envuelto en vendajes». Aquel suplicio, que Borden describió como «el más extenuante y singular que ha tenido lugar en la historia parlamentaria canadiense», llevó al Gobierno a desarrollar un reglamento de clausura —que permitía a una mayoría simple concluir el debate— en abril de 1913.[58]

La tendencia de eliminar el obstruccionismo y otras normas de mayoría cualificada ha seguido durante los últimos años. El Parlamento de Finlandia tuvo durante gran parte del siglo XX un reglamento con el que retrasar leyes, según el cual una minoría de un tercio de los diputados podía votar para posponer la legislación hasta después de las siguientes elecciones. La norma fue abolida en 1992.[59]Dinamarca todavía dispone de una regla según la cual una

minoría de un tercio parlamentario puede convocar un referéndum sobre la legislación no relativa a la cuestión financiera, y si el 30 por ciento de la población adulta vota en contra (un umbral muy alto, teniendo en cuenta la concurrencia de votantes) se bloquea. Sin embargo, no se ha utilizado desde 1963.[60]

El Parlamento de Islandia (Althingi) practica desde hace mucho un filibusterismo a la antigua, que consiste en no parar de hablar. El secretario general del Althingi, Helgi Bernódusson, lo describió como una costumbre «profundamente arraigada en la cultura política islandesa».[61]Cada año, los medios designaban el título de «rey de los discursos en el Althingi» al miembro del Parlamento que hubiera pronunciado los alegatos más largos. Ganar el cargo era «contemplado como un honor».[62]Los intentos de restringir el obstruccionismo a principios del siglo XXI han encontrado una considerable resistencia, porque se han entendido como una amenaza a la «libertad de expresión» de los parlamentarios.[63]En 2016, Bernódusson declaró: «No existen indicios de que sea posible detener el filibusterismo en el Althingi. El presidente tiene las manos atadas por el reglamento y los miembros del Parlamento tienen que mantener su voluntad. El Althingi seguirá utilizando esta táctica de forma habitual».[64]Tres años más tarde, sin embargo, después de ciento cincuenta horas de obstruccionismo para paralizar una ley sobre la energía de la Unión Europea, el Parlamento impuso nuevos límites a los discursos y a las réplicas, frenando esta práctica.[65]

Como parte de este amplio patrón reformista, hay un ámbito en el que muchas democracias sí tomaron una senda más contramayoritaria: el control judicial. Antes de la Segunda Guerra Mundial, la revisión judicial existía solamente en unos pocos países aparte de Estados Unidos. Sin embargo, desde 1945, la mayoría de las democracias la han adoptado en alguna de sus variantes. En algunos Estados, como Austria, Alemania, Italia, Portugal o España, instauraron nuevos Tribunales Constitucionales para que ejercieran de «guardianes» de la Constitución. En otros países, que incluyen Brasil, Dinamarca, la India, Israel o Japón, se asignó a los Tribunales Supremos existentes ese papel. Un estudio reciente de

31 democracias consolidadas reveló que 21 de ellas poseen hoy en día algún tipo de control judicial.[66]

Recordemos que la revisión judicial puede ser una fuente de contramayoritarismo intergeneracional. Otras democracias, además de Estados Unidos, han atenuado este problema reemplazando los cargos vitalicios por límites a los mandatos o una edad de jubilación obligatoria para los magistrados de las altas cortes. Por ejemplo, Canadá adoptó la obligación de retirarse a los setenta y cinco años para todos los jueces del Tribunal Supremo en 1927.[67]Se aplicó como respuesta a dos magistrados muy mayores que se negaban a jubilarse: uno de ellos entró en una disputa por la cuantía de su pensión y permaneció callado durante las deliberaciones del tribunal, y al otro, el primer ministro Mackenzie King lo describió en su diario como «senil».

De modo similar, Australia estableció que la edad de jubilación debía ser a los setenta para los jueces del Tribunal Supremo en 1977, después de que el mandato de cuarenta y seis años del juez Edward McTiernan llegara a un patético final.[68]McTiernan había sido nombrado por el tribunal en 1930, y en los años setenta la voz del octogenario «resultaba difícil de entender a los letrados». En 1976, McTiernan se rompió la cadera tras aplastar a un grillo con un periódico enrollado en el hotel Windsor de Melbourne. En lo que parecía ser un guiño para que tomara la iniciativa de retirarse, el juez presidente se negó a instalar una rampa de acceso para sillas de ruedas en el edificio del Tribunal Supremo, aduciendo que era por los costes.[69]McTiernan se jubiló, y cuando el Parlamento reanudó la cuestión de la edad de jubilación, la oposición resultó «prácticamente inexistente».[70]Los parlamentarios alegaron que una edad obligatoria de retiro ayudaría a «actualizar las cortes» e introduciría a jueces que fueran «más cercanos a la población» y que tuvieran «valores de hoy».[71]

Todas las democracias que han incluido el control judicial desde 1945 también han fijado una fecha de jubilación o límites a los mandatos de los magistrados de las altas cortes, así han atajado el problema de los jueces que se mantienen en su cargo durante

largos mandatos y que comprometen a las generaciones futuras.

En suma, el siglo XX marcó el inicio de la era democrática moderna: una etapa en que se arrancaron muchas de las cadenas institucionales que impusieron las mayorías populares diseñadas por monarquías y aristocracias predemocráticas. Las democracias de todo el mundo abolieron o debilitaron sus organismos más escandalosamente contramayoritarios. Los partidarios conservadores de estas instituciones advirtieron con ansia de la inestabilidad, el caos o la tiranía que estaban por llegar. Pero rara vez ha ocurrido desde la Segunda Guerra Mundial. De hecho, algunos países como Canadá, Dinamarca, Finlandia, Francia, Alemania, Nueva Zelanda, Noruega o el Reino Unido consiguieron mucha más estabilidad y democracia de la que tenían en un inicio. Eliminar el contramayoritarismo contribuyó a que naciera la democracia moderna.

Estados Unidos tampoco era inmune a estas tendencias, y en el siglo XX dio pasos importantes hacia una regla de la mayoría. La Decimonovena Enmienda (ratificada en 1920) amplió los derechos de sufragio para las mujeres y la *Snyder Act* (ley Snyder) de 1924 otorgó la ciudadanía y el derecho al voto a los nativos americanos. Sin embargo, no fue hasta la *Voting Rights Act* de 1965 que Estados Unidos alcanzó los estándares mínimos para el sufragio universal.

En parte, Estados Unidos democratizó su Cámara Alta. El Senado que, como provocación, ha llegado a ser calificado como «la Cámara de los Lores estadounidense», se elegía indirectamente antes de 1913.[72]La Constitución dotaba a las legislaturas estatales, y no a los votantes, de la autoridad para seleccionar quienes representarían a su estado en el Senado de Estados Unidos. Así pues, la ratificación de la Decimoséptima Enmienda, en 1913, que estipulaba la elección popular directa de los senadores, fue un paso importante en la democratización del país.

Las elecciones legislativas pasaron a ser mucho más justas en los años sesenta con la eliminación de la versión estadounidense de los «burgos podridos». Anteriormente las circunscripciones

electorales del ámbito rural comprendían muchos menos habitantes que las urbanas y suburbanas. Por ejemplo, al condado de Lowndes (en Alabama), con apenas 15.000 habitantes, se le adscribía la misma cantidad de senadores estatales que al de Jefferson, con más de 600.000 residentes.[73]Este patrón se repetía por todo el país y resultaba en una sobrerrepresentación rural enorme en las legislaturas.[74]En 1960, los condados rurales contenían el 23 por ciento de la población, pero en ellos se elegían el 52 por ciento de los escaños de las legislaturas estatales.[75]En cambio, en las regiones urbanas y suburbanas vivía dos tercios de la población nacional, pero en ellas se elegía tan solo un tercio de los escaños.[76]Durante largo tiempo, tanto en los comicios estatales como en los del Congreso nacional, las minorías rurales gobernaron a las mayorías urbanas. En 1956, cuando la legislatura de Virginia votó cerrar las escuelas antes que integrarlas tras el fallo del caso Brown contra la Junta de Educación de 1954, los veintiún senadores del estado que votaron a favor de su cierre representaban a menos habitantes que los diecisiete que aprobaban la integración étnica.[77]Este sesgo a favor del mundo rural inclinaba la balanza partidista en muchos estados, permitiendo que los partidos que representaban a minorías electorales dominasen las legislaturas estatales.[78]

Entre 1962 y 1964, una serie de resoluciones del Tribunal Supremo garantizaron que las mayorías electorales tuvieran representación en el Congreso y en las legislaturas de los estados. Al implantar el principio de «una persona, un voto», estos fallos judiciales requerían que todos los distritos legislativos estadounidenses tuvieran más o menos la misma población. En opinión de los politólogos Stephen Ansolabehere y James Snyder, las consecuencias de estas sentencias fueron «inmediatas, completas y asombrosas».[79]Prácticamente de la noche a la mañana, 17 estados acabaron con las mayorías rurales artificiales.[80]La igualación del poder en las elecciones supuso un paso importantísimo para garantizar una apariencia de Gobierno mayoritario en la Cámara de Representantes y en las legislaturas estatales.

La traca final de las reformas constitucionales llegó en los años sesenta y a principios de los setenta. La Vigesimotercera Enmienda (ratificada en 1961) otorgó a los residentes de Washington D. C. el derecho a votar en las elecciones presidenciales, la Vigesimocuarta Enmienda (1964) prohibió de una vez por todas los impuestos electorales y la Vigesimosexta Enmienda (1971) redujo la edad de votación de los veintiún a los dieciocho años.

Aunque las reformas del siglo XX hicieron que Estados Unidos se convirtiera en un Estado mucho más democrático, no se llegó tan lejos como en otros países. Un ejemplo es el Colegio Electoral. Mientras que cualquier otra democracia presidencial del mundo eliminó las elecciones indirectas durante el siglo XX, en Estados Unidos el Colegio Electoral permaneció incólume. Hubo cientos de intentos de reformarlo o abolirlo, pero todos ellos acabaron en nada.[81]

Estados Unidos también mantuvo un sistema electoral basado en la mayoría simple, aunque este provocó situaciones en las que se impuso la regla de la minoría, especialmente en las legislaturas estatales. Los Estados Unidos siguieron siendo, junto con Canadá y el Reino Unido, las únicas democracias ricas de Occidente que no adoptaron reglas de proporcionalidad en el sufragio durante el siglo XX.[82]

El Senado estadounidense, con su mal reparto representativo, también siguió intacto. Los fallos judiciales de 1962 a 1964 del Tribunal Supremo que instauraban el principio de «una persona, un voto» en la Cámara de Representantes no eran aplicables a la Cámara Alta. Por lo tanto, los «burgos podridos» del país siguieron existiendo a nivel estatal.

En el Senado, Estados Unidos también mantuvo el veto de la minoría. En la misma línea que Francia, Gran Bretaña o Canadá, la ausencia de una regla de clausura condujo a un gran incremento de las tácticas obstruccionistas a partir del siglo XIX, y, al igual que en Canadá, el problema del filibusterismo se volvió especialmente apremiante ante las amenazas navales de Alemania en los momentos previos a la Primera Guerra Mundial. Sin embargo,

Canadá —como Francia o Gran Bretaña— añadió una norma de clausura mayoritaria del 50 por ciento, mientras que el Senado estadounidense adoptó una regla insalvable que requería de una mayoría cualificada de sesenta y siete votos. Esta normativa se modificó de dos tercios a tres quintos en 1975, pero siguió siendo contramayoritaria. Estados Unidos, así pues, entró en el siglo XXI con un «Senado de los sesenta votos».[83]

En último lugar, a diferencia de cualquier otra democracia consolidada, Estados Unidos no estableció límites a los mandatos ni una edad de jubilación obligatoria para los magistrados del Tribunal Supremo. Hoy en día, en la práctica los jueces de este tribunal prestan sus servicios de por vida. La normativa de los estados resulta totalmente distinta: de los 50 estados, 46 imponían límites al mandato de sus Tribunales Supremos. Otros tres adoptaron una edad de jubilación obligatoria. Únicamente Rhode Island mantiene los cargos vitalicios para sus magistrados del Supremo estatal. Pero entre las democracias de todo el mundo, Estados Unidos, como Rhode Island, va a lo suyo.

Antaño en la vanguardia de la democracia y un modelo para otras naciones, Estados Unidos se ha convertido hoy en un país rezagado en lo democrático. La pervivencia de nuestras instituciones predemocráticas, mientras que otros países han desmantelado las suyas, nos señala como una democracia excepcionalmente contramayoritaria en el amanecer del siglo XXI. Tengamos en cuenta lo siguiente:

- Estados Unidos es la única democracia presidencial en el mundo en la que el presidente se elige a través de un Colegio Electoral, en lugar de ser escogido directamente por los votantes. Solo aquí es posible que un presidente salga «elegido contra la mayoría expresada en las urnas».[84]
- Estados Unidos es una de las pocas democracias que mantiene una legislatura bicameral con una Cámara Alta poderosa. Incluso es una de las escasas democracias en las

que un Senado con mucha fuerza se reparte la representación de manera muy desproporcionada a causa de la «representación igualitaria de estados desiguales» (tan solo Argentina y Brasil son peores).[85] Y lo más importante: es la única democracia mundial con un Senado mal proporcionado y un veto en poder de la minoría legislativa (del filibusterismo).[86] En ninguna otra democracia las minorías frustran los deseos de las mayorías de manera tan habitual y permanente.
- Estados Unidos es una de las pocas democracias consolidadas (junto a Canadá, la India, Jamaica y el Reino Unido) con reglamentos electorales basados en el *first-past-the-post* («el ganador se lo lleva todo») que consienten que la pluralidad del sufragio sea tergiversada en forma de mayorías legislativas y, en algunos casos, permiten que los partidos que consiguen menos votos ganen.
- Estados Unidos es el único sistema democrático en el mundo en que los magistrados del Tribunal Supremo mantienen el cargo de por vida. Todas las demás democracias consolidadas establecen un límite a su mandato, una edad obligatoria a la que jubilarse, o ambos.
- De entre todas las democracias del mundo, la Constitución estadounidense es la más difícil de modificar, ya que requiere de mayorías cualificadas en dos cámaras legislativas, además de la aprobación de tres cuartas partes de los estados.[87]

Estados Unidos es un caso aparte, y actualmente es más vulnerable al Gobierno de la minoría que el resto de las democracias consolidadas. ¿Cómo nos aventajaron el resto de los sistemas democráticos? ¿Cómo pudo un país como Noruega transformarse de una monarquía decimonónica a un sistema que, se use el criterio que se quiera, es hoy *más* democrático que el de Estados Unidos?

La respuesta simple es que la Constitución noruega es más fácil de modificar. En Noruega, una enmienda constitucional

requiere el apoyo de una mayoría cualificada de dos tercios en dos parlamentos elegidos sucesivamente, pero no hay punto de comparación con la extraordinaria dificultad del proceso de ratificación estadounidense a nivel estatal. Según Tom Ginsburg y James Melton, la relativa flexibilidad de la Constitución ha permitido a los noruegos «actualizar el texto formal de modo que conserve su modernidad».[88]

Los estadounidenses no tienen tanta suerte. Como hemos observado antes, su Constitución es la más difícil de enmendar del mundo democrático.[89]Entre las 31 democracias analizadas por Donald Lutz en su estudio comparativo de los procesos de enmienda constitucional, Estados Unidos se encuentra en la cima del Index of Difficulty (Índice de Dificultad), y sobrepasa ampliamente a Australia y Suiza.[90]Las enmiendas constitucionales no solo requieren la aprobación de mayorías de dos tercios tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado, sino que deben ser ratificadas por tres cuartas partes de los estados. Por este motivo, Estados Unidos tiene una de las ratios de cambio constitucional más bajas del mundo.[91]Según el Senado estadounidense, ha habido 11.848 intentos de enmendar la Constitución.[92]Sin embargo, solamente 27 han salido adelante. La carta magna ha recibido enmiendas solo en once ocasiones desde la Reconstrucción; la última en 1992: hace más de tres décadas.

Las consecuencias han sido importantes. Pensemos en el futuro del Colegio Electoral. Una vez más, Estados Unidos es la única democracia que cuenta con esta institución. No hay otra disposición constitucional que haya sido objeto de tantas iniciativas para reformarla. Según un recuento, ha habido más de setecientos intentos de abolir o modificar el Colegio Electoral en los últimos doscientos veinticinco años.[93]La mayor ofensiva del siglo XX se trató de acometer en los sesenta y setenta. Aquel fue un período en que se llevaron a cabo tres elecciones presidenciales con resultados con un margen muy ajustado (1960, 1968 y 1976), en las que el ganador del voto popular perdió por muy poco el Colegio Electoral. Tras los comicios de 1960, el senador de Tennessee, Estes Kefauver, presidente del Subcomité de Enmiendas

Constitucionales de la Comisión Judicial del Senado, pidió la eliminación del Colegio Electoral y comparó su supervivencia con una «partida de ruleta rusa».[94]Tras la muerte de Kefauver en 1963, su sucesor como presidente del subcomité fue el senador por Indiana, Birch Bayh. El presidente de la Comisión Judicial del Senado, James Eastland, llevaba tiempo planeando desmontar aquel subcomité, que se usaba muy poco, pero Bayh lo persuadió para mantenerlo y le ofreció financiarlo él mismo. Sin embargo, incluso Bayh reconoció que aquella subcomisión era: «Un cementerio. Por el amor de Dios, ¿cada cuánto se tiene la ocasión de enmendar la Constitución?».[95]

Sin embargo, después de la muerte del presidente Kennedy, Bayh asumió la responsabilidad de aprobar la Vigesimoquinta Enmienda, que esclarecía el protocolo que debían seguir si el presidente fallecía o se veía incapacitado en el ejercicio de su cargo. Bayh inicialmente era escéptico acerca de reformar el Colegio Electoral, pero con las transformaciones democráticas que sacudieron el país a mediados de los sesenta, se lo pensó dos veces, y en 1966 propuso una enmienda constitucional que reemplazaba este organismo por las elecciones presidenciales directas.[96]

Los estadounidenses le daban su visto bueno. Una encuesta de Gallup en 1966 reveló que el 63 por ciento apoyaban la abolición del Colegio Electoral.[97]Aquel mismo año, la Cámara de Comercio de Estados Unidos sondeó a sus miembros y estimó que nueve de cada diez estaban a favor de la reforma.[98]En 1967, la prestigiosa American Bar Association (Colegio de Abogados de Estados Unidos) sumó su aval y tildó al Colegio Electoral de «arcaico, antidemocrático, complicado, ambiguo, indirecto y peligroso».[99]

La reforma de Bayh vino refrendada por las elecciones de 1968, en las que los buenos resultados del partido independiente de George Wallace casi apaciguaron la contienda en la Cámara de Representantes.[100]Un cambio electoral de solamente setenta y ocho votos en Illinois y Misuri le habría costado a Nixon la mayoría en el Colegio Electoral y habría dejado el resultado en manos de la Cámara de Representantes, donde los demócratas tenían mayoría. Los resultados alertaron a los líderes de ambos partidos, quienes

empezaron a aceptar la propuesta de Bayh.

Llegado 1969, el movimiento para abolir el Colegio Electoral «parecía imparable».[101]El recién elegido presidente, Richard Nixon, apoyaba la iniciativa.[102]También lo hacían el líder de la mayoría demócrata en el Senado, Mike Mansfield; el líder de la minoría republicana, Everett Dirksen; el de la minoría en la Cámara Baja, Gerald Ford; además de políticos clave como Walter Mondale, Howard Baker y George H. W. Bush. La reforma constitucional estaba respaldada por el mundo de los negocios (la Cámara de Comercio de Estados Unidos) y la unión de sindicatos de la American Federation of Labor and Congress of Industrial Organizations (Congreso de Organizaciones Industriales), por la American Bar Association y la League of Women Voters (Liga de Mujeres Votantes). Como observó el representante republicano William McCulloch:

> Se ha convertido en una circunstancia de la vida en Estados Unidos que un ciudadano siempre deba estar a la espera de la muerte, los impuestos y la reforma del Colegio Electoral. Tal vez, al fin, le ha llegado su momento a la idea de cambiar esta institución.[103]

En septiembre de 1969, la Cámara de Representantes aprobó la propuesta de abolir el Colegio Electoral por 338 contra 70 votos: muchos más que la mayoría de dos tercios necesaria para enmendar la Constitución. Justo cuando iba a debatirse la propuesta en el Senado, una encuesta de Gallup mostró que el 81 por ciento de los estadounidenses estaban a favor de la reforma.[104]Un estudio del *New York Times* sobre las legislaturas estatales informaba de que treinta de ellas estaban dispuestas a aprobar la enmienda, otras seis estaban indecisas y seis se oponían ligeramente (se necesitaban 38 estados para la ratificación).[105]La abolición parecía muy alcanzable.

Sin embargo, como tantas veces en el pasado, el Senado acabó con la reforma.[106]Y como en tantos intentos anteriores de reforma, la oposición llegó del Sur. El senador de Alabama, James Allen, declaró: «El Colegio Electoral es una de las pocas salvaguardas

políticas que le quedan al Sur. Mantengámoslo».[107]El veterano segregacionista Strom Thurmond prometió obstruir la propuesta de ley mediante el filibusterismo, mientras que el presidente de la Comisión Judicial del Senado, James Eastland, también segregacionista, la hizo «dar vueltas hasta llegar a la Comisión Judicial», maniobra que la retrasó casi un año.[108]Cuando finalmente se aplicó la regla de *cloture* el 17 de septiembre de 1970, 54 senadores votaron para acabar con el debate; eran mayoría, pero les faltaba mucho para llegar a los dos tercios requeridos para acabar con la maniobra de filibusterismo. Cuando una segunda votación de clausura tuvo lugar doce días después, 53 senadores la aprobaron.[109]La ley murió antes de poder ser sometida a votación.

Bayh no desistió. Volvió a insistir en su proyecto de reformar el Colegio Electoral en 1971, 1973, 1975 y 1977.[110]En 1977, tras otras elecciones reñidas, la propuesta consiguió cierto impulso.[111]El presidente Jimmy Carter apoyó la iniciativa, y según el resultado de una encuesta Gallup el 75 por ciento de los estadounidenses también la respaldaban. De todos modos, la propuesta fue retrasada y sometida al obstruccionismo del Senado. Cuando al fin se celebró una votación de clausura en 1979, logró solo 51 votos.[112]Más adelante, *The New York Times* informó de que quienes apoyaban la reforma del Colegio Electoral «admitían en privado que difícilmente podrían revitalizar el proyecto a menos que un presidente fuera elegido con una minoría del voto popular o que el país se encontrara ante un abismo por el que no hubiese más remedio que disolver la institución».[113]Finalmente, resultó que eran demasiado optimistas. A principios del siglo XXI han salido elegidos dos presidentes con una minoría en las votaciones y, aun así, el Colegio Electoral sigue existiendo.

Otro intento serio de reformar la Constitución pero que tampoco llegó a buen término tuvo lugar en la década de los setenta, con la *Equal Rights Amendment* (Enmienda de Igualdad de Derechos). Esta, como las reformas entonces recientes de Noruega, habría consagrado la igualdad de derechos para las mujeres. La ERA fue desarrollada y presentada en el Congreso por el National

Woman's Party (Partido Nacional de la Mujer) en 1923.[114]Tras esa vez trataron de exponerla cada año en la Cámara Baja, pero durante décadas estuvo enterrada en la Comisión Judicial de la institución. La ERA se encaminaba a su punto álgido en los sesenta, y en 1970, la representante Martha Griffiths logró sacar la ley de la comisión y consiguió que se votara.[115]En octubre de 1971, el Congreso aprobó la ERA por 354 votos contra 23. A continuación se votó en el Senado, donde en marzo de 1972 fue aceptada por 84 votos contra 8.[116]Hawái ratificó la ley el mismo día que se aprobó en la Cámara Alta y Delaware, Nebraska, Nuevo Hampshire, Idaho e Iowa hicieron lo propio en el transcurso de los dos días siguientes. A principios de 1973, 30 de los 38 estados que se precisaban habían avalado la ERA.[117]

Las condiciones parecían propicias para su ratificación. Los presidentes Nixon, Ford y Carter estaban a favor de esta ley, y tanto los demócratas como los republicanos le dieron apoyo en 1972 y 1976.[118]La opinión pública estaba fuertemente posicionada a favor de su aprobación. Una encuesta de Gallup en 1974 reveló que un 74 por ciento apoyaba la ERA y, en los sondeos de los setenta, en general había el doble de votos a favor de la ratificación.[119]

Aun así el proceso se encalló. Cinco estados más aprobaron la ley después de 1973, hasta un total de 35 —tres menos de los que se necesitaban para ratificarla— en 1977. Sin embargo, aunque el Congreso extendió la fecha tope para su aceptación hasta 1982, ningún estado más la quiso respaldar. Diez de las quince regiones que no la firmaron pertenecían al Sur. Cuatro décadas más tarde, los sondeos demuestran que casi tres de cada cuatro estadounidenses apoyan la ERA.[120]Sin embargo, las perspectivas de que se ratifique siguen siendo mínimas.

Nuestra Constitución, contramayoritaria en exceso, no se contenta con ser una curiosidad histórica. Pone en peligro nuestra democracia cuando protege y le da alas a una minoría de un partido. Sin embargo, esta carta magna es casi imposible de reformar. Nos vemos atrapados, al parecer, por nuestras instituciones. ¿Acaso no hay salida?

8

Democratizar nuestra democracia

James Bryce, observador británico de la vida política estadounidense que viajó por todo el país a finales del siglo XIX, mientras investigaba para su influyente libro en dos volúmenes, *La República norteamericana*, advirtió que en cualquier lugar al que iba de Estados Unidos, sus ciudadanos le preguntaban, no sin cierto orgullo: «¿Qué opina de nuestras instituciones?». Bryce, historiador formado en Oxford que iba a convertirse en embajador británico en el país, señaló:

> Las instituciones de Estados Unidos son consideradas por sus habitantes, y reconocidas por los extranjeros, como una cuestión de mayor interés general que las de las no menos famosas naciones del Viejo Mundo. Son un nuevo tipo de organismos. Representan un experimento del gobierno de las multitudes, probado a una escala vasta y sin precedentes, y cuyos resultados nos interesa examinar a todos.[1]

Hoy en día, Estados Unidos se encuentra inmerso en otro —e igualmente ambicioso— experimento: la construcción de una democracia multirracial amplia. De nuevo, el mundo nos observa con atención.

Los anteriores intentos de establecer una democracia de esta naturaleza en el país han fracasado. No obstante, a diferencia de períodos más antiguos, el experimento de hoy cuenta con el apoyo de la mayor parte de los estadounidenses. Solo en el siglo XXI se ha logrado que una mayoría sólida se adhiera a los principios de la diversidad y de la igualdad entre etnias.

Sin embargo, esta mayoría por sí sola no basta para salvar la democracia, porque en Estados Unidos las mayorías no gobiernan

realmente. No es solo que los pasos que se han dado hacia una política más inclusiva hayan ocasionado una reacción feroz por parte de una minoría autoritaria, sino que nuestras instituciones han potenciado la fuerza de ese pequeño grupo. Puede que la aguda crisis constitucional producida por la presidencia de Trump ya haya pasado, pero en lugar de considerar esos cuatro años como una excepción, deberíamos entenderlos como una advertencia. Las condiciones que llevaron a Trump a la presidencia —un partido radicalizado y fortalecido por una Constitución predemocrática— siguen siendo las mismas.

Nos encontramos ante una encrucijada: o Estados Unidos será una democracia multirracial, o no será una democracia en absoluto.

Ante nosotros tenemos estas dos sendas. Las vivencias de otros países, además de nuestra propia historia, nos ofrecen cierta guía. No somos la primera generación que se ha encarado con el surgimiento de movimientos políticos que asaltan la democracia desde dentro. En el pasado, las democracias han hecho frente a este tipo de amenazas de varias maneras concretas.

Una estrategia, concebida en los días más oscuros de la Europa de los años treinta, es la de encauzar a todas las fuerzas de talante democrático en una amplia coalición con la que aislar y derrotar a los extremistas contrarios a la democracia. Ante el fantasma de una oleada global de fascismo, muchas de las nuevas democracias de Europa se encontraron a punto del colapso entre las dos guerras mundiales. En algunos países, los políticos convencionales respondieron dejando a un lado sus intensas diferencias ideológicas y crearon grandes coaliciones de izquierda y derecha para defender la democracia. Las crisis graves requieren de una extraordinaria cooperación; los dirigentes de países rivales descubrieron que necesitaban olvidar por un tiempo sus fines políticos y organizar un frente común a favor de la democracia, fuese en tiempos de elecciones o cuando ya gobernaban. En Finlandia, a principios de los años treinta, los socialdemócratas, de

izquierdas, se unieron a los partidos de centro y centroderecha en un amplio Frente de Legalidad con el que enfrentarse a la organización fascista Movimiento Lapua (*Lapuanliike* en finlandés).[2]En Bélgica, el centroizquierda que encarnaba el Partido Laborista unió fuerzas con el conservador Partido Católico y el centrista Partido Liberal en un Gobierno de unidad inclinado a la derecha para derrotar al Parti Rexiste, de ideología fascista.[3]Ambos casos muestran cómo las coaliciones de partidos prodemocráticos lograron mantener fuera del poder a las fuerzas extremistas (hasta que los nazis invadieron Bélgica en 1940).

Algunos políticos estadounidenses usaron esta estrategia de contención durante la presidencia de Trump. Los conservadores de toda la vida que fundaron organizaciones dentro del movimiento Never Trump (Trump Jamás) como Republicans for the Rule of Law (Republicanos por el Estado de Derecho), Republican Voters Against Trump (Votantes Republicanos contra Trump) o The Lincoln Project (Proyecto Lincoln) cooperaron con los demócratas —un partido al que se habían opuesto durante toda su carrera política— para ganar las elecciones a los republicanos liderados por Trump. De modo parecido, los representantes Liz Cheney y Adam Kinzinger —ambos republicanos conservadores— pusieron en juego sus carreras políticas al cooperar con los demócratas en el Comité Selecto de la Cámara Baja para la Investigación del Asalto del 6 de enero contra el Capitolio de Estados Unidos. Así debería funcionar la contención.

También se emplearon este tipo de estrategias en las legislaturas de los estados. En Ohio y Pensilvania, tras las elecciones de mitad de mandato de 2022, los demócratas se alinearon con republicanos más moderados para vencer a la facción más extremista del partido en la presidencia de la cámara del estado. En Pensilvania, una alianza de demócratas y republicanos eligió a un demócrata moderado,[4]y en Ohio, a un republicano convencional, para dejar fuera del poder a quienes renegaban de los resultados de las elecciones.[5]

Este tipo de alianzas entre partidos e incluso, si cabe, las candidaturas compartidas, pueden resultar cruciales en 2024 si el

Partido Republicano insiste en mantener su deriva extremista.

En cualquier caso, la contención no es más que una estrategia a corto plazo. La democracia, en el fondo, se basa en la competición, de modo que provocarle un cortocircuito durante demasiado tiempo puede resultar contraproducente. Quizá las fuerzas progresistas y las conservadoras decidan unirse de manera temporal por la defensa de la democracia, pero en último término los votantes deben tener la potestad de elegir entre ellas. En efecto, desde Europa llegan indicios de que, si las «grandes coaliciones» continúan en vigor durante largos períodos, los votantes acaban por considerarlas colusorias, excluyentes e ilegítimas.[6]Un exceso de cooperación entre partidos grandes puede dar verosimilitud a la denuncia de los populistas según la cual el poder establecido conspira contra ellos.[7]De modo que, aunque la contención ayude a mantener a las fuerzas antidemocráticas lejos del poder, no las debilita necesariamente. Incluso puede llegar a fortalecerlas.

Una segunda estrategia para enfrentarse a los autoritarios —conocida como «democracia militante» o «defensiva»— también apareció por vez primera en la traumática Europa de los años treinta.[8]La idea es que la autoridad gubernamental y la ley se pueden usar con el objetivo de *excluir y procesar de forma agresiva* a las fuerzas antidemocráticas. La estrategia fue implantada por primera vez en la Alemania Occidental tras la Segunda Guerra Mundial. Al haber vivido el ascenso de Hitler, los redactores de la Constitución tras el conflicto no querían que su Gobierno democrático se encontrara indefenso ante amenazas autoritarias internas.[9]Así pues, diseñaron una constitución que permitía la *prohibición y restricción* de discursos, grupos y partidos insurrectos o «anticonstitucionales». Utilizada en raras ocasiones para investigar a partidos extremistas de izquierda y derecha (la última vez, en 2021), la mera existencia de esta potestad de investigar a grupos que asalten el «orden democrático» probablemente tiene un efecto disuasorio sobre las fuerzas extremistas. El modelo se ha expandido por buena parte de Europa.[10]

En principio puede parecer que la democracia militante no encaja con la tradición libertaria estadounidense, pero la

Constitución de Estados Unidos también posee herramientas con las que combatir el extremismo antidemocrático.[11]Como nos recuerdan los estudiosos del derecho constitucional, el artículo 3 de la Decimocuarta Enmienda se adoptó para prohibir, explícitamente, que los «insurrectos» se hicieran con cargos públicos tras la Guerra Civil. Aunque no es habitual usarla para este fin, la Decimocuarta Enmienda supone un potente instrumento para defender la democracia de enemigos internos.

Estados Unidos jamás había llevado a juicio a un expresidente antes del año 2023, aunque numerosas democracias consolidadas —de Japón a Corea del Sur, Israel o Italia— sí lo han hecho y sus sistemas políticos no se han visto comprometidos por ello. De hecho, en el caso de presidentes o primeros ministros que han cometido delitos graves, es fundamental que la democracia demuestre que nadie está por encima de la legalidad. Los estadounidenses están muy de acuerdo con la idea de que todo el peso de la ley debe caer contra quienes asaltan violentamente la democracia. Una encuesta del Pew Research Center en 2021 concluyó que el 87 por ciento de los ciudadanos del país creía que es importante enjuiciar a los sublevados del 6 de enero de 2021, y el 69 por ciento que es «muy importante que se haga».[12]

Cabe decir que del mismo modo que ocurre con la contención, la estrategia de la exclusión conlleva sus peligros. En primer lugar, se trata de un instrumento del que se puede abusar con facilidad. La historia de Estados Unidos está repleta de ejemplos de este exceso: las *Alien and Sedition Acts* (Leyes de Extranjería y Sedición) de 1798; el encarcelamiento del líder socialista Eugene Debs; las redadas de Palmer de 1919 y 1920; las infames cazas de brujas del senador Joseph McCarthy y del Comité de Actividades Antiestadounidenses de la Cámara de Representantes; y la vigilancia permanente, enjuiciamiento e incluso asesinato de líderes y activistas afroamericanos. La idea de la democracia militante se utilizó también para justificar el prohibicionismo antidemocrático sobre los partidos de izquierda en gran parte de Latinoamérica durante la Guerra Fría.[13]De este modo, aunque usar la ley en todas sus facetas contra extremistas antidemocráticos y

violentos puede ser crucial para defender la democracia, el riesgo omnipresente de que haya criterios politizados y de extralimitarse requiere que la democracia militante se utilice con extraordinaria cautela y moderación.

Formar amplias coaliciones por la defensa de la democracia y el riguroso empleo del derecho contra los extremistas puede ser una estrategia indispensable ante amenazas autoritarias inminentes. No obstante, son tácticas cortoplacistas: herramientas imperfectas para combatir un peligroso incendio. No son soluciones a largo plazo. Así pues, debemos considerar también pasos más fundamentales con los que apuntalar la democracia estadounidense.

En este punto regresamos a un principio básico que James Madison y otros inspiraron: el mejor modo de sobreponerse a las minorías extremistas es en una competición electoral. Madison creía que la necesidad de lograr mayorías populares con seguridad controlaría las tendencias políticas más «siniestras». Sin embargo, su fórmula requiere que las mayorías ciudadanas imperen de verdad en las elecciones. Para que esto suceda, Estados Unidos debe transformar sus instituciones. La reformista americana de principios de siglo XX Jane Addams escribió una vez: «La cura para los males de la democracia es más democracia».[14]

Estamos de acuerdo. Las instituciones de Estados Unidos, excesivamente contramayoritarias, refuerzan el extremismo, confieren poderes a minorías autoritarias y amenazan con la regla de la minoría. Para superar estos inconvenientes, debemos redoblar la apuesta por la democracia. Ello implica desmantelar ámbitos de protección indebida a minorías y dar poder a las mayorías en todos los niveles de Gobierno; implica acabar con el proteccionismo constitucional y desplegar una auténtica competencia política; implica alinear mejor el equilibrio de poder político con las preferencias de los votantes e implica obligar a nuestros políticos a ser más receptivos y responsables ante la mayoría ciudadana. En suma, debemos democratizar nuestra democracia, llevando a cabo

reformas constitucionales y electorales que están pendientes hace mucho tiempo y que lograrían, como mínimo, que Estados Unidos esté en consonancia con otras democracias consolidadas.

Los estadounidenses a menudo sienten escepticismo ante propuestas radicales de cambio, y con razón. Reformar es difícil, especialmente en un sistema político con demasiada vetocracia y partidos altamente polarizados. Pero la transformación nunca se podrá llevar a cabo si ni siquiera se llega a plantear, por lo que invitamos a los lectores a que, por un instante, dejen de lado el *cómo* inducir a cambios —luego nos pondremos con ello— y que tengan en cuenta tres grandes ámbitos que conviene modificar.[15]

SALVAGUARDAR EL DERECHO AL VOTO

El derecho al voto es un elemento central en cualquier definición moderna de democracia. En los sistemas democráticos representativos, los ciudadanos eligen a sus líderes. Estos solo pueden escogerse democráticamente si todas las personas pueden votar. De modo que, si ejercer este derecho es caro o dificultoso para algunos —si tienen que hacer cola durante horas o recorrer largas distancias para acudir a las urnas—, las elecciones no pueden ser democráticas del todo.

En la mayoría de los sistemas democráticos, esto no constituye un problema. En una democracia, *se supone que la gente vota*. De modo que la mayoría de las sociedades democráticas garantizan a los ciudadanos un derecho al sufragio constitucional (o por lo menos, regulado por ley) que facilita tanto como puede que la gente asista a los comicios. En algunos países (Australia, Bélgica, Brasil, Costa Rica, Uruguay) votar es obligatorio; se considera un deber cívico, como pagar impuestos. En casi todas las democracias, la inscripción electoral es automática. Una vez los ciudadanos llegan a los dieciocho, sus nombres se añaden al censo, y así facilitan la participación. La mayor parte de las democracias de Europa y Latinoamérica programan sus comicios en fin de semana, normalmente en domingo, para que el trabajo no sea una

molestia o un impedimento. En la mayoría de los sistemas democráticos consolidados, la asistencia a las urnas puede llegar al 80 por ciento. No hay que ser un genio para entenderlo: si los Gobiernos simplifican la inscripción y el voto a los ciudadanos, la mayoría lo hará.

Para asombro de muchos, en Estados Unidos no existe un «derecho al voto» constitucional, ni siquiera legal.[16]La Segunda Enmienda afirmaba el derecho de los estadounidenses a portar armas, pero la Constitución no reconoce en ninguna de sus partes el derecho al sufragio. Enmiendas posteriores especificaron que el voto no podía ser denegado sobre la base de la raza (Decimoquinta Enmienda) o al sexo (Decimonovena Enmienda), pero la ley fundamental nunca ha afirmado explícitamente el derecho de los estadounidenses a ejercer el voto. De modo parecido, aunque hay muchas leyes federales que protegen el sufragio, ningún estatuto federal garantiza el derecho de los ciudadanos adultos a acudir a las urnas. A diferencia de la mayoría de las democracias consolidadas, Estados Unidos tiene un largo historial de Gobiernos que han disuadido de votar y han llegado a impedirlo. Incluso hoy en día, Estados Unidos es también uno de los pocos países de la tierra (Belice y Burundi son los otros dos) en que la responsabilidad de inscribirse como votante pertenece por completo a los ciudadanos individuales.[17]

Votar en Estados Unidos debería ser tan sencillo como lo es en las democracias de Europa y de otros sitios. Para que así fuera deberíamos hacer lo siguiente:

1. Aprobar una enmienda constitucional que establezca el derecho a votar de todos los ciudadanos y que resulte una base sólida para llevar a litigio las restricciones al voto.[18]
2. Establecer una inscripción automática donde todas las personas queden registradas al cumplir dieciocho años. Iría acompañada de la distribución automática de un carné de identificación electoral nacional para toda la

ciudadanía. Las molestias del proceso de inscripción no deberían desanimar a nadie a ejercer este derecho.

3. Ampliar la votación anticipada y facilitar opciones de voto por correo para los ciudadanos de todos los estados. Debería simplificarse el proceso de emisión del voto.
4. Establecer el día de las elecciones un domingo o un festivo nacional, de modo que las responsabilidades laborales no frenen a los estadounidenses de ir a votar.
5. Restaurar el derecho al sufragio (sin multas ni tasas adicionales) para todos los exconvictos que hayan cumplido su condena.
6. Recuperar las protecciones al derecho al voto a nivel nacional. Siguiendo la estela de la *Voting Rights Act* de 1965, partes de la cual fueron eliminadas por el Tribunal Supremo en 2013, deberíamos restablecer la supervisión federal del reglamento y la administración electorales. Esto solo podría aplicarse en estados y localidades con violación del derecho al sufragio a sus espaldas; sería interesante seguir el modelo de la *Voting Rights Act*, o para garantizar la igualdad en todas las jurisdicciones, aplicar el sistema de la *Lodge Bill* (ley Lodge) de 1980.
7. Reemplazar el sistema actual de administración electoral controlada por un partido por uno en el que los estados y las administraciones locales estén en manos de funcionarios profesionales, ajenos al partidismo. Contribuiría a la imparcialidad en la puesta al día de los censos, en el acceso a los locales electorales y en el proceso de recuento de papeletas. Casi todas las demás democracias consolidadas, de Francia y Alemania a Brasil, Costa Rica, Japón o Sudáfrica disponen de mediadores ajenos a los partidos

que vigilan las elecciones.

VELAR POR QUE EL RESULTADO DE LAS ELECCIONES REFLEJE LA PREFERENCIA DE LA MAYORÍA

Quienes obtienen más votos deberían ganar las elecciones. La teoría democrática no contiene nada que justifique que quienes pierden en unos comicios consigan la victoria. El filósofo y político John Stuart Mill escribió que la democracia debería «otorgar los poderes de gobierno a la mayoría numérica en todos los casos».[19]Por desgracia, en las elecciones presidenciales, en las del Senado y en algunas legislativas de los estados, con frecuencia esto no pasa. Se pueden llevar a cabo varios pasos para asegurarnos de que quienes ganen mayorías electorales gobiernen realmente:

8. Abolir el Colegio Electoral y reemplazarlo por el voto popular nacional. Ninguna otra democracia presidencial permite que el perdedor de los comicios asuma la victoria en unas elecciones presidenciales. No hace tanto, en 1970, se aprobó una enmienda constitucional al respecto.
9. Reformar la Cámara Alta de modo que el número de senadores elegidos en cada estado sea más proporcional respecto a la población de dicha región (como en Alemania). California y Texas deberían poder elegir a más senadores que Vermont o Wyoming. Debido a que el artículo V de la Constitución estadounidense estipula que «a ningún estado se le puede despojar, sin su consentimiento, de la igualdad en las elecciones para elegir al Senado» (una forma de *liberum veto*), entendemos que los impedimentos para llevar a término este cambio legislativo son enormes. No obstante, como la

estructura de la Cámara Alta subvierte de tal manera los principios básicos de la democracia, lo que acarrea grandes consecuencias, cualquier lista de reformas democráticas importantes debe incluir esta medida.

10. Reemplazar el reglamento electoral de mayoría simple (*first-past-the-post*) y las circunscripciones de un solo miembro para la Cámara de Representantes. Sustituir asimismo el funcionamiento de las legislaturas estatales por un sistema de representación proporcional con el cual los votantes elijan a múltiples representantes en distritos electorales más grandes y con el que los partidos reciban un número de escaños proporcional al porcentaje de votos que hayan conseguido.[20]Esto requeriría derogar la *Uniform Congressional Districts Act* (Ley de Distritos Electorales Uniformes), que impone que las circunscripciones tengan un solo candidato a las elecciones de la cámara. Al asegurarnos de que la distribución de escaños en el Congreso refleja de modo más fiel la manera en la que han votado los estadounidenses, un sistema de representación proporcional impediría el problema de los «mayorías fabricadas», por las que los partidos que ganan menos votos en unas elecciones se hacen con una mayoría de escaños.[21]Como escribió el politólogo Lee Drutman, un sistema de representación proporcional «trata a todos los votantes de manera igualitaria, vivan donde vivan, y trata a todos los partidos del mismo modo, sin importar donde residan sus votantes».[22]
11. Eliminar la práctica de *gerrymandering* o manipulación electoral partidista mediante la creación de comités independientes de delimitación de circunscripciones electorales, como los que existen en California,

Colorado y Míchigan.

12. Poner al día la *Apportionment Act* (Ley de Reparto) de 1929, que fijaba en 435 los miembros de la Cámara de Representantes, y volver al concepto original de cámara que se expanda a la par que la población. En la actualidad, la proporción de votantes respecto a la de representantes es casi *cinco* veces mayor que la de cualquier democracia europea.[23]Aumentar el tamaño del Congreso acercaría a los diputados a la población y, si la estructura actual del Senado y el Colegio Electoral siguen vigentes, mitigaría el sesgo de este último a favor de los estados pequeños.

OTORGAR PODER A LAS MAYORÍAS GOBERNANTES

Por último, los estadounidenses deben dar varios pasos para dar más poder a las mayorías legislativas mientras se debilitan las instituciones contramayoritarias legislativas y judiciales.

13. Abolir el filibusterismo en el Senado (una reforma que no requiere cambios legales ni constitucionales) para eliminar la capacidad de las minorías partidistas de frustrar a las mayorías de manera repetida y permanente. No hay ninguna otra democracia consolidada en la que se emplee tan a menudo el veto por parte de grupos minoritarios.
14. Establecer límites al tiempo en el cargo (doce o dieciocho años, tal vez) de los magistrados del Tribunal Supremo para regularizar el proceso de nombramiento, de modo que cada presidente tenga el mismo número de miembros elegidos por mandato. Una reforma de este tipo situaría a Estados Unidos al nivel del resto de las democracias importantes del

mundo y, además, impondría límites al contramayoritarismo intergeneracional de las cortes.

15. Facilitar las enmiendas a la Constitución eliminando el requisito de que tres cuartos de las legislaturas estatales ratifiquen cualquier propuesta. Requerir de mayorías cualificadas de dos tercios, tanto en la Cámara de Representantes como en el Senado para sacar adelante una enmienda constitucional, haría que Estados Unidos estuviera a la par con otras democracias consolidadas, incluso con sistemas federales como Alemania y la India, además de muchos de los estados del propio país.

Estas reformas tendrían un efecto sencillo a la vez que poderoso: permitirían que las mayorías ganaran poder y gobernaran. No solo ayudarían a mantener a raya la regla de las minorías, sino que también eliminarían el proteccionismo constitucional, y con ello suprimirían las dinámicas competitivas de la democracia. De manera relevante, las modificaciones obligarían a los republicanos a establecer coaliciones más amplias si tienen la intención de ganar. En los Estados Unidos de hoy en día, estas uniones entre partidos deberían ser necesariamente más diversas, lo que diluiría la influencia de las facciones más extremistas de los republicanos. Un Partido Republicano más diverso y capaz de ganar mayorías nacionales como corresponde podría representar una mala noticia para el Partido Demócrata, pero sería un muy buen anuncio para la democracia estadounidense.

Si bien las reformas que proponemos pueden parecer radicales, ya son vigentes en la mayoría de las democracias consolidadas, incluyendo algunas de las más efectivas como Dinamarca, Alemania, Finlandia, Nueva Zelanda, Noruega y Suecia. Simplificar el voto, acabar con el *gerrymandering*, sustituir el Colegio Electoral por el sufragio directo, eliminar el filibusterismo en la Cámara Alta, hacer más proporcional la

representación en dicha cámara, acabar con los mandatos vitalicios del Tribunal Supremo y conseguir que la reforma de la Constitución sea un poco más sencilla son cambios que nos pondrían al día con el resto del mundo.

Aun así, aunque estas propuestas tengan sentido *en teoría*, ¿no será que en la práctica adolecen de una gran falta de realismo? Considerando la naturaleza del sistema político estadounidense y el estado de sus políticas actuales, se podría esgrimir el argumento de que un empeño tan quijotesco por aprobar reformas tan difíciles de llevar a cabo no es más que una distracción contraproducente del trabajo cotidiano y paulatino de la política «real». En 1911, Joe Hill, el activista sindical y cantautor estadounidense nacido en Suecia, advertía a los obreros que tuvieran cuidado con las promesas idealistas de los buenistas cuando se enfrentaran a problemas concretos. La letra empieza así:

Salen predicadores con melenas al anochecer,
a intentarte explicar qué está mal y qué bien;
pero cuando les dices: «¿Y qué tal tener para comer?»
con su voz más dulce te van a responder:

Tiempo al tiempo, ya vas a comer,
en el glorioso país sobre el cielo;
trabaja y reza, vive de heno,
pasteles tendrás en el cielo al fallecer.

¿Son las reformas democráticas un brindis al sol? Sin duda los impedimentos para el cambio hoy en día son muchos: desde la que parece una oposición inamovible por parte de los republicanos a la dificultad sin parangón de enmendar la Constitución. Pueden parecer tan infranqueables que resulta tentador dejar listados como este a un lado y centrarnos en objetivos más factibles, como pueden ser ganar las próximas elecciones o idear leyes que sirvan para llegar a buen puerto. Siendo realistas en lo político, simpatizamos con este punto de vista. Las victorias electorales y el perfeccionamiento paulatino de las políticas son cruciales, tanto

para la mejora de la vida de la gente como para proteger la democracia.

Sin embargo, con esto no basta. Incluso si se da el caso de que muchas de nuestras propuestas son imposibles de adoptar a corto plazo, es esencial que los proyectos de reforma constitucional se conviertan en parte de un debate político más amplio que alcance la escala nacional. El arma más poderosa contra el cambio es el silencio. Cuando una idea es vista como imposible en los circuitos convencionales, cuando los políticos nunca la mencionan, cuando los directores de los periódicos la ignoran o los profesores no la explican en clase, cuando los estudiosos dejan de debatirla por miedo a ser vistos como ingenuos o desfasados —en definitiva, cuando una idea ambiciosa resulta «impensable»— la batalla está perdida. La no reforma se convierte en una profecía autocumplida.

Que un plan no sea tomado en serio a día de hoy no implica que no deba tenerse en cuenta, o que no vaya a ser considerado en un futuro. A principios del siglo XIX, la idea de acabar con la esclavitud se consideraba impensable en la mayor parte de Estados Unidos y los abolicionistas eran tachados de ilusos. Cuando el movimiento por el sufragio femenino nació en la década de 1840, ningún país del mundo permitía a las mujeres el derecho a votar. Incluso entrado el siglo XX, el estadounidense promedio consideraba absurda la idea de que las mujeres pudieran acudir a las urnas. Asimismo, durante décadas posteriores a la Guerra Civil, la lucha por la igualdad racial y los derechos civiles fue vista como algo impracticable, cuando no imposible. En todos estos casos, el punto de vista mayoritario cambió radicalmente poco a poco. Pero para que eso ocurra, alguien debe abrir un debate público.

Se está iniciando una discusión acerca de la reforma democrática. En 2020, la prestigiosa Academia Estadounidense de las Artes y las Ciencias emitió un informe titulado *Our Common Purpose* [Nuestro propósito común], que exponía un plan de reformas en muchos ámbitos para la democracia estadounidense.[24] Organizaciones como el Brennan Center for Justice (Centro Brennan para la Justicia), New America (Nueva América) y Protect Democracy (Protege la Democracia) han

presentado varias propuestas innovadoras para crear un sistema electoral más proporcional, acabar con el *gerrymandering*, incrementar los derechos de sufragio o mejorar la calidad de los comicios.[25]En 2021 la Casa Blanca formó una comisión presidencial sobre la reforma del Tribunal Supremo valiéndose de la pericia de magistrados jubilados, profesores de derecho y otros expertos para explorar perspectivas para la reforma institucional. Estos son pasos importantes. El cambio no se puede lograr si ni siquiera se plantea.[26]

El debate y las ideas no son estériles; proveen los fundamentos para una transformación.[27]Cuando a sir Ralf Dahrendorf, el eminente miembro liberal de la Cámara de los Lores nacido en Alemania, le preguntaron qué explicó el «gran salto» en la creación de organismos internacionales tras la Segunda Guerra Mundial, respondió:

> Si volvemos atrás y contemplamos el origen del orden en la posguerra, empezando por las Naciones Unidas, el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial, además de un montón de instituciones subsidiarias; si pensamos en el origen de todo aquello, encontraremos que la mayoría de las ideas ya se habían contemplado durante la guerra. Es de suma relevancia que cuando llegue el momento en que sea posible dar otro gran salto hacia adelante en la creación de nuevos entes, las ideas ya estén presentes.[28]

Cuando suceden cambios institucionales, los responsables a menudo citan al escritor francés Victor Hugo y aquella frase suya que dice: «Nada es más poderoso que una idea a la que le ha llegado el momento». Sin embargo, el momento de una idea solamente puede llegar si alguien la ha tenido en cuenta.

La reforma democrática seguirá siendo imposible, claro está, a menos que repensemos nuestra actitud hacia el cambio constitucional.[29]A diferencia de los ciudadanos de otras democracias consolidadas, los estadounidenses tienden a resistirse a la idea de que su ley fundamental tiene fallos o deficiencias que

deberían corregirse, o que puede que algunas partes no estén actualizadas. Como observa Aziz Rana, muchos se aferran a la Constitución con una «devoción casi religiosa».[30] Tratamos a quienes la redactaron como si nos hubieran dotado de poderes casi divinos o sobrenaturales y la entendemos como si fuera un documento sagrado, uno que es «básicamente perfecto».[31] En otras palabras, en nuestra sociedad subyace la premisa de que las instituciones fundamentales son, en efecto, las que mejor ejercen sus funciones, de toda la historia y en todos los contextos. La idea de que la carta magna no puede ser mejorada no se basa en pruebas empíricas ni en un debate serio. Más bien se trata de un acto de fe.

No es así como funcionan las instituciones. En sus inicios, ninguna Constitución es perfecta. Al fin y al cabo, son creaciones humanas. Recordemos que el Colegio Electoral era una solución improvisada y una segunda mejor opción que nunca funcionó como sus diseñadores imaginaban; o que Madison (como Hamilton) se oponía a la representación igualitaria de los estados en el Senado, pero perdió la votación en la Convención de Filadelfia. No hay nada sagrado en nuestras instituciones, e incluso las constituciones mejor diseñadas a veces requieren de una revisión, porque el mundo en que son vigentes ha cambiado; de manera drástica, a menudo. No hay ningún conjunto de reglas que sea la «mejor solución» por siempre y en todas las circunstancias. Las fronteras nacionales se modifican y la población aumenta. Nuevas tecnologías permiten que la gente pueda hacer cosas inimaginables para generaciones anteriores. Los principios fundamentales como la igualdad y la libertad pueden ser duraderos, pero las normas sociales evolucionan de un modo que nos impone cambiar cómo definimos estos principios.

John Roberts, más adelante presidente del Tribunal Supremo, lo reconoció cuando empezó a promover límites para los cargos de la judicatura en 1983, durante su etapa en el Consejo de la Casa Blanca, bajo el mandato del presidente Ronald Reagan:

> Los autores de la Constitución adoptaron los cargos vitalicios

> en una época en que, sencillamente, no se vivía tanto tiempo como hoy. Un juez protegido de los vaivenes habituales de la vida durante veinticinco o treinta años era entonces una rareza, pero hoy se está convirtiendo en algo común. Delimitar un mandato de, pongamos, quince años aseguraría que los jueces federales no pierdan todo el contacto con la realidad durante las décadas que pasen en una torre de marfil.[32]

En la actualidad también sabemos más acerca del funcionamiento del sistema democrático. Durante la fundación de Estados Unidos, todavía no se había inventado la propia noción de democracia representativa. No había presidentes electos ni democracias parlamentarias. La monarquía todavía era omnipresente. Sin embargo, en los 236 años desde la redacción de la Constitución de Estados Unidos, han surgido decenas de nuevas democracias. Muchas de ellas han producido innovaciones institucionales que han demostrado ser satisfactorias, desde la elección directa del presidente a sistemas electorales que se basan en la representación proporcional pasando por autoridades electorales nacionales de carácter independiente. Estas novedades se han producido durante el último siglo porque los líderes de las nuevas democracias las consideran mejoras.

Los cambios en el mundo que nos rodea no siempre requieren transformaciones constitucionales, pero a veces sí son necesarias. La idea de que ciertos organismos, inamovibles y sagrados, sean siempre los «mejores» se ve contrariada por años de investigación en ciencias sociales que demuestran que las instituciones que funcionan bien en un contexto pueden volverse inoperantes o incluso peligrosamente disfuncionales en otros.[33]

Los fundadores ya lo sabían. *No* se aferraron a la versión original de la Constitución. Reconocían las limitaciones de su creación y creían que las generaciones venideras las modificarían, y debían hacerlo. En 1787, poco después de la Convención de Filadelfia, George Washington escribió: «Los mayores amigos y mejores defensores de la Constitución no sostienen que esté libre de imperfecciones, sino que las han visto como inevitables».[34]Si surgían problemas a raíz de estos fallos, Washington advirtió: «El

remedio debe llegar a continuación». Escribió que el pueblo

> … puede, al tener la ventaja de la experiencia de su parte, decidir con la misma propiedad que nosotros acerca de los cambios y enmiendas que sean necesarias. No opino que estemos más inspirados, tengamos más sabiduría o poseamos más virtud que aquellos que llegarán después de nosotros.

Thomas Jefferson era especialmente crítico con quienes «contemplan las constituciones con beata reverencia y que las ven como el arca de la alianza: demasiado sagradas para tocarlas».[35]Bajo su punto de vista:

> Las leyes y las instituciones deben ir de la mano con el progreso de la mente humana. Podríamos pedirle a un hombre vestir el mismo abrigo que le iba a medida cuando era un muchacho, del mismo modo que podríamos exigir a la sociedad civilizada que permaneciera bajo el régimen de sus ancestros bárbaros.[36]

Las instituciones que no se adaptan pueden renquear durante años o incluso décadas para, finalmente, volverse escleróticas y socavar la legitimidad del sistema político. Esto es lo que sucede en los Estados Unidos del siglo XXI. En 1995, menos del 25 por ciento de los ciudadanos expresaban insatisfacción con su democracia. Este número se ha incrementado de forma dramática en los últimos años, llegando al 55 por ciento en el año 2020. Aunque la insatisfacción pública con el sistema democrático ha aumentado en todo el mundo, en Estados Unidos ha subido de forma más drástica que en otras democracias occidentales.[37]Según el Pew Research Center, solo un 41 por ciento de los estadounidenses aseguraban estar satisfechos con la democracia en 2021, en comparación con más de un 60 por ciento en Australia, Canadá, Alemania y los Países Bajos, y más de un 70 por ciento en Nueva Zelanda y Suecia.[38]Aunque puede que nuestro deseo sea el de creer que nuestra Constitución es «básicamente perfecta», las instituciones rígidas e inmovilistas son, de hecho, propensas a la putrefacción y, al cabo de un tiempo, fracasan.

La historia estadounidense atesora momentos inusuales pero significativos de progreso democrático. Durante la Reconstrucción, tres grandes enmiendas constitucionales (la Decimotercera, la Decimocuarta y la Decimoquinta), junto con una serie de nuevas leyes de amplio alcance, abrieron el sistema político (aunque fuera temporalmente) a los afroamericanos. Del mismo modo, entre 1913 y 1920, el país fue testigo de la aprobación de tres enmiendas democratizadoras: la Decimosexta, que autorizaba un impuesto directo sobre la renta; la Decimoséptima, que estableció el sufragio directo, y la Decimonovena, que convirtió en constitucional el sufragio femenino. Finalmente, un tercer período de importantes reformas democráticas e institucionales empezó con una serie de fallos del Tribunal Supremo (entre 1962 y 1964) que terminaron con una mala distribución en la Cámara de Representantes, seguida por la *Civil Rights Act* (Ley de Derechos Civiles) (1964) y la *Voting Rights Act* (Ley del Derecho al Voto) (1965). En efecto, buena parte de los aspectos de la democracia estadounidense contemporánea que valoramos fueron logro de esta serie de cambios constitucionales y legislativos, muchos de los cuales se solían considerar imposibles de conseguir.

¿Qué podemos aprender de estos episodios reformistas? Primero, el cambio no depende de la llegada de un solo líder transformador. Buena parte de los progresos de Estados Unidos hacia la inclusión política y económica se realizaron durante las presidencias de figuras que, en su momento, difícilmente eran vistas como reformistas: Woodrow Wilson, Franklin D. Roosevelt y Lyndon B. Johnson. Ninguno de ellos podía ser considerado un radical. De hecho, todos eran productos del viejo régimen que contribuirían a desmantelar. Wilson, por ejemplo, era un demócrata conservador sureño: nada que ver con el movimiento progresista de clase media que, con su apoyo, alentó las enmiendas Decimosexta, Decimoséptima y Decimonovena. (A decir verdad, Wilson se oponía al sufragio femenino al principio de su presidencia.)[39]Del mismo modo, Roosevelt era un aristócrata y, sin embargo, jugó un papel importante en el establecimiento de los

derechos sindicales y laborales básicos durante los años treinta. Finalmente, Lyndon Johnson se hizo un nombre como demócrata en el Sur ascendiendo al poder en el Senado estadounidense con el apoyo de segregacionistas influyentes como Richard Russell. A pesar de ello, durante los años sesenta, Johnson impulsó la aprobación de la *Civil Rights Act* y la *Voting Rights Act*.

Las transformaciones de estos dirigentes no ocurrieron por accidente ni tampoco de la noche a la mañana: necesitaron movimientos políticos sólidos. Un primer paso en esta dirección era situar la reforma en la agenda pública. En efecto, un factor crucial para el éxito de cualquier movimiento de transformación es la capacidad de sus defensores, organizadores, intelectuales públicos y creadores de opinión para reformular los términos del debate político y alterar gradualmente lo que otras personas perciben como deseable o posible. Los momentos más significativos de cambio democrático en la historia de Estados Unidos, de la Reconstrucción al sufragio femenino o los derechos civiles, fueron precedidos por años de incesante esfuerzo legal, político y de defensa pública.

Por ejemplo, la transformación del Partido Demócrata de paladín de las leyes Jim Crow a defensor de los derechos civiles no tuvo lugar de manera espontánea, fácil, ni rápida. En los años treinta,[40]mucho antes de que la igualdad racial se percibiera como una cuestión de interés nacional, los activistas de la National Association for the Advancement of Colored People (Asociación Nacional para el Progreso de la Gente de Color) (NAACP) y el Congress of Industrial Organizations (Congreso de Organizaciones Industriales) (CIO) empezaron a organizarse a favor de los derechos civiles en el seno del Partido Demócrata. Guiados por líderes sindicales como Sidney Hillman y John L. Lewis, el CIO presionó a los demócratas para que dieran su respaldo a leyes progresistas en el ámbito laboral pero también a propuestas relacionadas con los derechos civiles, como las leyes que penalizaban los linchamientos o abolían los impuestos electorales. *The CIO News*, el boletín del sindicato que se distribuía a escala nacional cada semana por todos los hogares de los afiliados, blancos y negros, incluía largos

artículos sobre temas relacionados con los derechos civiles (con títulos como: «El CIO ataca al filibusterismo ejercido contra la *Lynching Bill* [Ley contra los Linchamientos])» y reproducciones de conferencias de los líderes del sindicato junto a grupos afroamericanos.[41]Un historiador lo resume del siguiente modo: «Nunca antes los partidarios a favor de la lucha de los negros habían alcanzado a un público tan amplio».[42]

Sin embargo, elaborar un programa no es más que el principio. Las reformas democráticas también requieren de presión política continuada. Normalmente, quienes conducen los cambios significativos son los movimientos sociales sostenidos en el tiempo: amplias coaliciones de ciudadanos cuyo activismo modifica el debate y, llegado el momento, el equilibrio del poder político acerca del tema en cuestión.[43]Las acciones de los movimientos sociales —con una diversidad de métodos, incluyendo peticiones, charlas puerta a puerta, mítines, marchas, huelgas, piquetes, sentadas y boicots— pueden cambiar la opinión pública y alterar el relato de los medios.

En última instancia, los movimientos sociales pueden modificar los cálculos electorales de los políticos al crear una nueva base electoral que está a favor del cambio y desacreditar a los defensores del *statu quo*. En el caso del movimiento por los derechos civiles, la lucha en el aspecto legal fue dirigida por la NAACP, pero la campaña a pie de calle estuvo en manos de organizaciones como la Southern Christian Leadership Conference (Conferencia de Liderazgo Cristiano del Sur), basada en una enorme red de iglesias, y el Student Nonviolent Coordinating Committee (Comité Coordinador Estudiantil No Violento).[44]

Políticos como Wilson, Roosevelt y Johnson no se convirtieron en impulsores de cambios gracias a su propia iniciativa. Más bien, únicamente se adhirieron a reformas inclusivas cuando los movimientos sociales a gran escala alteraron sus cálculos políticos. El presidente Wilson se topó con la presión de los progresistas de clase media del Norte, muchos de los cuales habían apoyado a su rival, Theodore Roosevelt. Wilson solo pasó a «convertirse» a la causa del sufragio femenino durante su

presidencia tras ser presionado por las activistas en su estado natal, Nueva Jersey, donde la legislatura estatal inició un referéndum sobre la cuestión en 1915.[45]El presidente Franklin Roosevelt defendió los derechos de la clase trabajadora durante la Depresión y en medio de oleadas de agitación sindical que incluyeron la huelga y las sentadas con las que se paralizaron las plantas industriales de la General Motors en Flint (Míchigan) en 1936 y 1937. Por último, el presidente Johnson se adhirió por completo a la defensa de los derechos civiles en plena movilización intensiva por parte de los grupos a favor de estas causas, con acontecimientos con tanta repercusión como la Marcha de Washington de 1963 o la manifestación del Domingo Sangriento (*Bloody Sunday*) en Selma, en 1965.

Todos los períodos reformistas mencionados fueron producto de una larga y desgastante lucha. Todos y cada uno de los grandes movimientos de cambio necesitaron décadas y todos encontraron obstáculos en el camino. Los movimientos que quieren llegar a buen puerto deben aprender a hacer frente a reveses que incluyen derrotas electorales, divisiones internas, cambios inesperados de dirección y guerras divisorias en el extranjero.

Pensemos en el movimiento a favor del sufragio de las mujeres (blancas), que culminó en la Decimonovena Enmienda de 1920. No era un proyecto a corto plazo. Como expresó Carrie Chapman Catt, presidenta de la American Woman Suffrage Association (Asociación Americana por el Sufragio Femenino) y fundadora de la League of Women Voters (Liga de las Mujeres Votantes), además de la principal instigadora de la Decimonovena Enmienda: «Para el hombre de a pie, carente de imaginación», la Decimonovena Enmienda parecía «haber salido de la nada».[46]Por supuesto que no fue así. Era el reflejo del trabajo de más de dos generaciones de mujeres activistas. Como observó Catt:

> Quitar, en efecto, la palabra «varón» de la Constitución costó a las mujeres del país cincuenta y dos años de campaña sin fin. Durante este tiempo se han visto forzadas a llevar a cabo 56 campañas de referendos a electores hombres; 480 para instar a las legislaturas a presentar enmiendas al sufragio a los votantes; 47

> para reclamar a las convenciones estatales la introducción del sufragio femenino en las constituciones de los estados; 277 para persuadir a los partidos a nivel estatal de incluir normas en relación al sufragio femenino; 30 campañas para requerir a las convenciones presidenciales de los partidos que aportaran propuestas acerca del sufragio femenino en sus programas de partido y 19 campañas en 19 Congresos sucesivos. Cientos de mujeres ofrecieron las posibilidades acumuladas de su existencia, miles entregaron años de sus vidas, cientos de miles regalaron su constante interés y toda la ayuda que eran capaces de dar. Fue una cadena de acción continua, que no parecía acabar. Las jóvenes sufragistas que contribuían a forjar los últimos eslabones de aquella cadena no habían nacido cuando esta se inició. Las viejas sufragistas que forjaron los primeros eslabones ya habían muerto cuando terminó.[47]

El movimiento por el sufragio femenino exhibía las cicatrices de la derrota, las luchas internas e incluso un sentimiento de profunda traición, especialmente después de que la habilitación del voto femenino fuera apartada con la aprobación de la Decimoquinta Enmienda en 1870.[48]Para sobrevivir, el movimiento tuvo que rectificar su estrategia. Líderes como Elizabeth Cady Stanton y Susan B. Anthony trabajaron para desarrollar un «relato sobre el origen» del movimiento, destacando la importancia de la fundacional Convención de Seneca Falls de 1848.[49]Su influyente *History of Woman Suffrage* [Historia del Sufragio Femenino], escrita en varios volúmenes, empezó a publicarse en la década de 1880, y se redactó con el objetivo de otorgar coherencia al movimiento nacional ante la creciente fragmentación y caos.[50]

Otra cuestión a la que se enfrentaba el movimiento sufragista de las mujeres eran sus profundas raíces en el nativismo blanco de clase alta. Sin embargo, en torno a 1900, líderes como Catt empezaron a introducir un nuevo cambio. Ellas convirtieron un movimiento principalmente dominado por las élites de la clase alta en otro de índole más social. Hacían incursiones en el sindicalismo, que se implicaba con las inmigrantes recién llegadas, con las mujeres socialistas, el movimiento *settlement*[51]y los clubes de mujeres negras, argumentando que la concesión del voto femenino sanaría un sinnúmero de males sociales, desde el analfabetismo y la insalubridad hasta el trabajo infantil.[52]Catt mostró una astuta

«voluntad de moldear el mensaje del sufragio ante diferencias regionales y de grupos».[53]

La movilización también era crítica. Tras la fusión de la American Woman Suffrage Association y la National Woman Suffrage Association (Asociación Nacional por el Sufragio de la Mujer) en 1890, el movimiento se vio considerablemente reforzado. La afiliación de la nueva National American Woman Suffrage Association (Asociación Nacional Americana por el Sufragio de la Mujer) se disparó, multiplicándose por cinco —de 16.000 a 85.000— entre 1910 y 1920.[54]Al tomar estrategias de los movimientos sufragistas de Gran Bretaña y otros países, el movimiento en Estados Unidos adoptó un planteamiento más de base y fue «de distrito en distrito» para ganar el referéndum estatal de 1917 por el sufragio femenino en Nueva York. Campañas similares lo habían logrado en otros estados, como en California en 1911.[55]

Podemos aprender algo de esta experiencia: en su inicio, la reforma del sufragio se alcanzó, en muchos casos, a nivel estatal, lo que contribuyó a dar impulso a un cambio constitucional en el ámbito nacional.

Otras grandes reformas constitucionales también llevaron tiempo y un esfuerzo incesante. La Decimoséptima Enmienda, que establecía la elección directa de los senadores, vino precedida por décadas de iniciativas fallidas.[56]Hubo casi una docena de propuestas en el Congreso antes de 1872. La campaña a favor de las elecciones directas cobró ímpetu a finales del siglo XIX; veinticinco propuestas diferentes llegaron a la Cámara Baja solo entre 1891 y 1893. William Jennings Bryan y el Partido Populista pedían elecciones directas al Senado en su programa de 1892, lo que dio impulso a la cuestión.[57]La Cámara de Representantes aprobó la enmienda cinco veces entre 1892 y 1902, pero en cada ocasión el Senado se negó incluso a someterla a votación.[58]En 1906, William Randolph Hearst movilizó aún más la atención nacional cuando contrató al popular novelista David Graham Phillips para escribir un conjunto de artículos sensacionalistas titulados *The Treason of the Senate* [La traición del Senado]: una

serie en nueve partes publicada por la revista *Cosmopolitan* que mostraba la selección de los senadores en las legislaturas de los estados como un proceso corrupto dominado por los intereses particulares de los ricos.[59]En 1907, Oregón instauró un voto «consultivo» popular con el que orientar la elección de senadores de la legislatura. Hacia 1912, más de la mitad de los estados habían adoptado este apaño temporal.[60]Finalmente, en 1913, después de que hasta 29 estados hubieran adoptado el llamado Sistema Oregón, la Decimoséptima Enmienda fue ratificada.[61]De nuevo, las reformas empezaron a nivel estatal y, llegado el momento, lograron que aprobar una enmienda constitucional nacional fuera irremediable.

Lo que es necesario a día de hoy, pues, no es solamente un programa de reforma democrática, sino un *movimiento* a favor de esta modificación capaz de movilizar a ciudadanos diversos en una campaña sostenida a nivel nacional que encienda la imaginación y cambie los términos del debate público.

Puede que sea mucho pedir, pero este movimiento ya da sus primeros coletazos. El Black Lives Matter, nacido tras la absolución del asesino del adolescente negro Trayvon Martin, que no portaba armas en el momento de su muerte, movilizó a millones de estadounidenses a favor de un principio esencial de la democracia: un mismo trato ante la ley. El asesinato de George Floyd a manos de la policía, en 2020, dio lugar al mayor movimiento de protesta de la historia de Estados Unidos.[62]Entre 15 y 26 millones de estadounidenses —uno de cada diez adultos del país— salieron a la calle.[63]Hubo al menos 5.000 protestas —con una media de 140 al día— a principios de diciembre de 2020.[64]Estas alcanzaron todos los estados y más del 50 por ciento de los contados del país, extendiéndose incluso a poblaciones pequeñas.[65]Estaban encabezadas principalmente por jóvenes y llamaba la atención cuán multirraciales eran: más o menos la mitad de los manifestantes (54 por ciento) se identificaban como blancos.[66]A diferencia de la década de los sesenta, cuando las encuestas demostraban de manera habitual que la mayoría de los estadounidenses se oponían a las manifestaciones por los derechos

civiles, las protestas del Black Lives Matter consiguieron la aceptación de gran parte de los estadounidenses.[67]Casi tres cuartos de la ciudadanía simpatizaba con las manifestaciones durante el verano de 2020.[68]Aunque este apoyo ha ido a menos, un 55 por ciento de la población seguía apoyando la iniciativa Black Lives Matter en 2021.[69]

No se trataba solamente del Black Lives Matter. La presidencia de Trump engendró un enorme movimiento cívico en defensa de la democracia.[70]Nuevas organizaciones —muchas de ellas bipartidistas— aparecieron para defender los derechos civiles y electorales, además de para preservar el Estado de derecho, uniéndose a organizaciones veteranas como la American Civil Liberties Union (Unión Estadounidense por las Libertades Civiles) (ACLU, por sus siglas en inglés), la League of Women Voters y la NAACP. Por primera vez, muchos medios inauguraron secciones donde se tomaba el pulso a la democracia durante la cobertura de la política del día a día. Decenas de nuevas organizaciones nacionales dedicadas a la salvaguarda del sistema democrático surgieron tras las elecciones de 2016.[71]Una organización de mucho peso, Protect Democracy, fue creada en 2016 para «impedir el declive de la democracia hacia una forma más autoritaria de gobierno».[72]Esta misma organización interpuso demandas, apeló a la *Freedom of Information Act* (Ley de Libertad de Información), contribuyó a elaborar legislación e incluso desarrolló un nuevo programa, VoteShield (Escudo de Voto), con el objetivo de impedir purgas injustificadas del censo electoral.[73]

Otro grupo prodemocracia, Black Voters Matter, fue fundado por iniciativa de LaTosha Brown. Brown había nacido en Selma (Alabama) pocos años después del Domingo Sangriento y la aprobación de la *Voting Rights Act*. De niña, había visto cómo su abuela se arreglaba con sus mejores galas y sacaba el bolso de vestir para ir al colegio electoral. Brown acompañaba a su abuela y sentía que cumplía con lo que tocaba hacer. «No sabía qué era votar —dice Brown—, pero sí sabía que era algo bastante especial.»[74]De modo que cuando los parlamentarios de todo el país empezaron a purgar los censos, a cerrar los locales electorales y a

aprobar leyes que complicaban el voto a las minorías y a los ciudadanos con pocos ingresos, Brown sintió la necesidad de actuar.

En 2016, Brown y Cliff Albright crearon el Black Voters Matter Fund (Fondo de los Votantes Negros Importan), que apoyaba iniciativas comunitarias —especialmente en el Sur— para combatir el cierre de los puntos de votación, educar a los ciudadanos acerca de los nuevos requisitos de inscripción y voto y movilizar a los votantes.[75]Para 2020, el Black Voters Matter Fund prestaba apoyo a más de 600 grupos en 12 estados. Asimismo, organizaba caravanas de autocares que giraban por el Sur, centrándose especialmente en las comunidades rurales, donde las leyes de supresión del voto tienden a surtir mayor efecto.[76]La gira *We Got Power* (Tenemos poder), de 2020, visitó 15 estados y se puso en contacto con más de diez millones de votantes.[77]

Los electores jóvenes también se unieron a la lucha por una democracia multirracial durante los años de Trump. La generación Z es la más diversa de la historia estadounidense. También es la más preocupada por el estado de la política y, de lejos, la más comprometida con los principios de la democracia multirracial. Según una encuesta de 2022 realizada por el Harvard Institute of Politics, dos tercios de los votantes potenciales entre los dieciocho y los veintinueve creen que la democracia estadounidense está «en peligro» o que ha «fracasado».[78]Con resultados similares, las encuestas del Pew Research Center revelan que dos tercios de los ciudadanos con edades comprendidas entre los dieciocho y los veintinueve años apoyaban el movimiento Black Lives Matter en 2021.[79]Los más jóvenes son más propensos que las generaciones de sus mayores a apoyar la inmigración y preferir diversidad en los barrios. Esta es la generación que afianzará la democracia multirracial en Estados Unidos.[80]

Históricamente, la gente más joven no suele votar. Solo un 39 por ciento de los electores de dieciocho a veintinueve años acudieron a las urnas en las elecciones de 2016, en contraste con el 70 por ciento de los mayores de sesenta. Como los votantes mayores son considerablemente más conservadores en cuestiones

raciales y más pro-Trump que los votantes de menos edad, esta asistencia a los colegios electorales ha tenido consecuencias trascendentales para la democracia.[81]Sin embargo, algo cambió durante la presidencia de Trump. La gente joven —en especial, la generación Z— se empezó a movilizar. Tras el asesinato masivo de 2018 en un instituto de Parkland (Florida) los estudiantes supervivientes organizaron la Marcha por Nuestras Vidas (*March for Our Lives*) de 2018. Más de dos millones de jóvenes se unieron a manifestaciones en 387 de los 435 distritos electorales del país.[82]

Aunque la Marcha por Nuestras Vidas tenía como tema central la lucha contra las armas, sus organizadores impulsaron un movimiento más amplio para inscribir y movilizar a nuevos votantes, así como estimular el nacimiento de una generación de activistas prodemocracia.[83]Santiago Mayer, un inmigrante de México de diecisiete años, estaba en el instituto cuando fundó Voters of Tomorrow (Votantes del Mañana), un grupo que tiene como objetivo contactar a los jóvenes y animarlos a votar.[84]Durante el ciclo electoral de 2020, Voters of Tomorrow inauguraron la campaña *Prom at the Polls* (Baile de graduación en las urnas), en que los estudiantes de último año —quienes no pudieron disfrutar de la tradición a causa de la pandemia— se presentaron en los locales electorales con los atuendos propios de un baile de graduación.[85]

Black Lives Matter y Gen-Z for Change (Generación Z por el Cambio) son de izquierdas, pero su defensa de la democracia estadounidense es una iniciativa que englobaba a ambos partidos. Incluía a grupos más a la derecha del centro como R Street (Calle R), Stand Up Republic (En Pie por la República), Republican Voters Against Trump (Votantes Republicanos contra Trump) y Republicans for the Rule of Law (Republicanos por las Leyes), así como a conservadores de base. Sharlee Mullins Glenn se crio en una pequeña comunidad campesina de mormones en el noreste de Utah.[86]Esta comunidad era profundamente conservadora; su familia incluso eran miembros de la ultraderechista John Birch Society (Sociedad John Birch).[87]Glenn siempre había sido republicana, pero en 2016 empezó a «preocuparse cuando un

hombre que centraba su candidatura en una campaña del miedo —a los inmigrantes, musulmanes, refugiados y a otros— de manera inexplicable se convirtió, no solo en el candidato del partido al que había pertenecido toda mi vida, sino también en el presidente».[88]

Así pues, en enero de 2017, poco después de la investidura de Trump, Glenn creó un grupo apartidista en Facebook llamado Mormon Women for Ethical Government (Mujeres Mormonas por el Gobierno Ético) (MWEG, por sus siglas en inglés). En 2018, el grupo ya tenía seis mil miembros y secciones en prácticamente todos los estados.[89]La organización inscribió a decenas de miles de votantes, trabajó por defender el derecho al voto y los de los inmigrantes, fue a los tribunales para oponerse a la manipulación electoral en Utah y presionó a sus representantes —en particular, a los senadores de este estado, Mike Lee y Mitt Romney— para que impugnaran y condenaran a Donald Trump por su «abuso de poder». También presionó para que se aprobaran leyes que protegieran el derecho al sufragio y apuntalaran los guardarraíles electorales.[90]Según la afiliada de Idaho Cindy Wilson, las participantes del MWEG pretendían «hacer ruido para interceder contra el extremismo».[91]Dicho en palabras que pronunció la propia Glenn en 2020: «Creemos que Jesús iba en serio cuando dijo que debemos amar al prójimo, es decir, a todo el mundo, como deja claro la parábola del buen samaritano».[92]Aunque el MWEG tiene un punto de vista conservador acerca de cuestiones como el aborto y el matrimonio entre personas del mismo sexo, les une su compromiso con la democracia multirracial.[93]

Si hay algo que hayamos aprendido de los movimientos por la democracia, pasados y presentes, es que la transformación democrática no ocurre sin más. Requiere que se haga realidad.

Para reformar la democracia estadounidense es necesario que rindamos cuentas con nuestro pasado no tan democrático. Si estamos verdaderamente comprometidos con nuestro sistema democrático, debemos afrontar no solo los logros sino también los fracasos. En el transcurso de la historia de Estados Unidos, los

reformadores han admirado nuestra Constitución a la vez que reconocían sus fallos y se esforzaban por corregirlos. Al mismo tiempo amaban a su país, trabajaban con la voluntad de hacerlo mejor, más justo y más democrático. Decir que no podemos admirar a Estados Unidos y a la vez enfrentarnos a su pasado es una falsa alternativa. El presidente alemán, Frank-Walter Steinmeier, retrató de modo conmovedor la necesidad de un patriotismo lúcido cuando habló sobre la trágica historia de su nación en un discurso en 2020:

> El rabino Nachman dijo una vez: «Ningún corazón es tan íntegro como un corazón roto». El pasado de nuestro país es un pasado fracturado, con la responsabilidad por el asesinato de millones y el sufrimiento de millones. Nos sigue rompiendo el corazón hasta el día de hoy. Por eso digo que esta patria solo puede amarse con el corazón roto.[94]

Amar Estados Unidos con el corazón roto implica reconocer que nuestro país no ha sabido estar a la altura de los ideales democráticos que proclama; su fracaso, durante demasiado tiempo, a la hora de brindar libertad y justicia para todos. Implica comprometernos a hacer realidad estos ideales, construyendo una democracia inclusiva y multirracial que todos los ciudadanos puedan hacer suya.

Terminamos nuestro libro *Cómo mueren las democracias* —escrito durante las primeras andanzas del presidente Trump— contextualizando ese momento en la cronología histórica estadounidense. Recordábamos a los lectores que aquella no era la primera vez que la historia llamaba a los estadounidenses a ponerse en pie por los ideales democráticos. Durante la Guerra Civil, en la confrontación contra el fascismo y el totalitarismo de los años treinta y cuarenta, y en el movimiento por los derechos civiles de las décadas de los cincuenta y los sesenta, los ciudadanos se levantaron para conservar y hacer prosperar la democracia. Conocemos bien el relato: durante la Segunda Guerra Mundial, los

ciudadanos, presos de la angustia, compraron bonos de guerra, sembraron jardines de la victoria[95]y tuvieron que mandar a sus seres queridos a situaciones de peligro. En la era de los derechos civiles, la ciudadanía se unía a las marchas, boicots y campañas de inscripción de votantes; a menudo bajo la amenaza de palizas, la cárcel o incluso la muerte.

La historia volvió a llamar a nuestras puertas en 2016, y los estadounidenses estuvieron a la altura. Los grupos activistas se reunieron, se organizaron y se manifestaron; los clubs de lectura se dedicaron concienciar a sus conciudadanos; grupos bipartidistas de activistas formaron asociaciones cívicas para resistir la deriva hacia el autoritarismo; las campañas para invitar a la gente a acudir a las urnas llegaron a nuevos votantes; los profesionales —médicos, científicos, abogados, periodistas, funcionarios y miembros del ejército— se pusieron en pie en nombre de la ética pública y ante la corrupción; los ciudadanos se ofrecieron para ayudar en los aeropuertos y en la frontera sur para defender a refugiados indefensos. Además, tras el asesinato de George Floyd, una sección transversal y multirracial de estadounidenses se dispuso, a pesar del riesgo que presentaba la covid-19, a organizar el mayor movimiento de protesta que nuestro país haya visto jamás.

Los estadounidenses entraban a formar parte de una tradición democrática vibrante, y los efectos de estas victorias para la democracia retumbaron más allá de nuestras fronteras, como un modelo a seguir para activistas del mundo entero.

Que nuestro sistema constitucional haya sobrevivido a cuatro años de presidencia de Trump es una prueba de que la amenaza no era en realidad tan grave, y que afirmar que la democracia está en peligro había sido —y sigue siendo— una exageración. Se trata de una equivocación tremenda. Aquellos estadounidenses que temían por la continuidad de la democracia se unieron para defenderla y, precisamente porque lo hicieron, logró sobrevivir.

Es comprensible que los estadounidenses se sientan abrumados tras los últimos siete años. Defender la democracia es un trabajo extenuante. Movilizar a la gente para que vote, a pesar de los obstáculos a su alrededor, unas elecciones tras otras, es

agotador hasta para el activista más comprometido.

Con Trump fuera de la Casa Blanca (por el momento), es tentador concluir —o incluso *esperar*— que podemos descansar en paz; que nuestra democracia ha recuperado el equilibrio.

En 1888, el director y fundador de la revista *The Atlantic*, James Russell Lowell, volvía la vista atrás, hacia la Guerra Civil. Le preocupaba el modo en que los estadounidenses recordaban la que había sido una vivencia cercana a la muerte de su propia democracia. Escribió:

> Una vez que nuestra Constitución empezó a funcionar más o menos, parecía que hubiéramos inventado una máquina que tiraría por sí sola; esto engendró una fe en nuestra fortuna que ni siquiera la mismísima Guerra Civil fue capaz de desmontar, quizá lo hizo tan solo durante un instante. Somos una nación que ha encontrado petróleo, pero que también cree que el pozo no se va a secar jamás. Esta confianza en la suerte, junto con la aceptación de intereses materiales generados por oportunidades que no tenían parangón, nos ha hecho descuidar nuestros deberes políticos.[96]

Justo cuando Lowell se preocupaba de que los estadounidenses confiasen demasiado en que la Constitución era «una máquina que funcionaría sola», la Decimocuarta y la Decimoquinta Enmiendas se encontraban en el desguace. Con la Guerra Civil muy lejos del espejo retrovisor, los estadounidenses blancos hacían la vista gorda ante el establecimiento de un régimen parecido al *apartheid* en el Sur, que envenenaría nuestro sistema de gobierno durante generaciones y que mancillaría nuestra identidad nacional hasta el día de hoy.

No repitamos el error de apartarnos de la vida política por mero agotamiento. Las fuerzas prodemocráticas lograron importantes victorias en 2020 y 2022, pero los factores responsables del reciente retroceso de Estados Unidos —una minoría radicalizada de un partido y las instituciones que la protegen y le dan alas— prosiguen. Nuestra democracia continúa sin un anclaje firme. La historia vuelve a llamarnos.

Defender la democracia no es el trabajo de unos pocos héroes altruistas. Luchar por ella significa luchar por nosotros mismos.

Pensemos de nuevo en las escenas del 5 y 6 de enero con las que empieza este libro. ¿Cuál es el tipo de sociedad en el que queremos vivir? Pensemos en los millones de estadounidenses —jóvenes y viejos, religiosos y laicos, de todos los colores que podamos imaginar— que salieron a la calle en nombre de la justicia en verano de 2020. Los jóvenes que se manifestaron aquel verano podrían haberle dado la espalda al sistema, pero, en lugar de hacerlo, fueron a las urnas. Una nueva generación de estadounidenses se puso en pie para defender nuestra imperfecta democracia. No obstante, también nos mostraron la imagen de un sistema político mejor: una democracia para todos.

Ahora que la generación de los derechos civiles pasa a la historia, la labor de construir una verdadera democracia multirracial nos corresponde a nosotros. Seremos los responsables ante las generaciones del mañana.

Agradecimientos

Somos muy afortunados. Mientras nos dedicábamos a escribir este libro, hemos sacado enorme provecho de la generosidad, apoyo y consejos de amigos, estudiantes y compañeros.

No podríamos haberlo escrito sin la colaboración de un grupo de extraordinarios ayudantes de investigación. Muchas gracias a Oliver Adler, Florian Bochert, Joyce Chen, Nourhan Elsayed, Addie Esposito, Daniel Lowery, Dorothy Manevich, Sarah Mohamed, Andrew O'Donohue, Connor Phillips, Emilie Segura, Elizabeth Thom, Aaron Watanabe y Michael Waxman por su duro trabajo. Agradecimientos en particular para Ethan Jasny, cuyas contribuciones se perciben en todo el libro, y a Manuel Meléndez, que coordinó la investigación sobre las instituciones comparativas y nos hizo comentarios valiosísimos acerca de todo el manuscrito.

Agradecemos al personal del Harvard University's Center for European Studies (Centro de Estudios Europeos de la Universidad Harvard) y al David Rockefeller Center for Latin American Studies (Centro David Rockefeller de Estudios Latinoamericanos), como también al Wissenschaftszentrum Berlin por su generoso respaldo (y paciencia).

Hemos sacado provecho de nuestras conversaciones con numerosos colaboradores, que incluyen a Danielle Allen, Ian Bassin, Sheri Berman, Jamelle Bouie, Dan Carpenter, Larry Diamond, Lee Drutman, Peter Hall, Richard Hasen, Gretchen Helmke, Torben Iversen, Michael Klarman, Mary Lewis, Rob Mickey, Paul Pierson, Richard Pildes, Michael Podhorzer, Theda Skocpol, Dan Slater, Todd Washburn, Lucan Ahmad Way, además de los compañeros y amigos de Daniel en el Wissenschaftszentrum Berlin.

Estamos también agradecidos a Bernard Fraga, Jennifer

Hochschild, Hakeem Jefferson, Evan Lieberman, Jamila Michener, Rob Mickey y Vesla Weaver por su generosidad al pasar medio día instruyéndonos sobre el concepto de «democracia multirracial».

Varios compañeros han dedicado su tiempo a leer y comentar partes o la totalidad del manuscrito. Las respuestas de Ian Bassin, Larry Diamond, Lee Drutman, Patrice Higonnet, Michael Klarman, Mary Lewis, James Loxton, Suzanne Mettler, Rob Mickey, Chris Millington y Ben Radersdorf han hecho que esta sea, de lejos, una obra mucho mejor.

Expresamos nuestro agradecimiento, de nuevo, a Amanda Cook, nuestra extraordinariamente mordaz editora en Crown. Amanda siempre ha tenido más claro cómo sería el libro que nosotros mismos y, de algún modo, casi logró conducirnos hasta lo que tenía en mente. Amanda, apreciamos tu confianza en nosotros, tu paciencia y tu inquebrantable compromiso con este proyecto. También damos las gracias al resto del equipo de Crown, incluyendo a Katie Berry, Mark Birkey, Gillian Blake, Julie Cepler, David Drake, Melissa Esner, Dyana Messina, Annsley Rosner y Penny Simon.

Estamos profundamente agradecidos con Katherine Flynn, Sarah Khalil y con la agencia Kneerim & Williams por estar ahí siempre.

Hemos vivido dos enormes pérdidas durante la redacción de este libro. Nuestra extraordinaria agente, Jill Kneerim, falleció en 2022. Es imposible recalcar lo suficiente el impacto de su apoyo, sus conocimientos y sus lecciones de escritura. Ninguno de nuestros libros habría sido posible sin ella. Jill, te echamos terriblemente de menos.

Finalmente, el padre de Daniel, David Ziblatt, falleció en 2022. Fue el primer editor de Daniel. Su impronta en su pensamiento y en las cuestiones que aborda este libro es inmensa: se le echa en falta a diario.

Dedicamos este libro a Jill y a David.

Notas

1. Es decir, desde el año 1877. (Todas las notas a pie de página son del traductor.)

2. Véase Steve Peoples, Bill Barrow y Russ Bynum, «Warnock Makes History with Senate Win as Dems near Majority», Associated Press, 5 de enero de 2021.

3. Véase Rachel Epstein, «LaTosha Brown Says a New South Is Rising», *Marie Claire*, 27 de noviembre de 2021.

4. Sobre el modo en que otras sociedades se han ocupado de situaciones en que las minorías étnicas constituyen colectivamente una mayoría de la población, véase Justin Gest, *Majority Minority*, Oxford University Press, Oxford, 2022.

5. Un término más adecuado podría ser el de «democracia multiétnica», porque el concepto no solamente conlleva diferencias entre razas sino también entre grupos étnicos (como los latinos y los judíos) que no tienen una base racial. Dada la centralidad histórica de la raza en Estados Unidos, no obstante, y dado que el término «democracia multirracial» se emplea con más frecuencia en los debates políticos de Estados Unidos, utilizaremos el término «democracia multirracial».

6. Un estudio de las elecciones de 2018 reveló que, de media, los votantes latinos y negros esperaban un 46 y un 45 por ciento más de tiempo antes de votar, respectivamente, que los votantes blancos. Véase Hannah Klain *et al.*, «Waiting to Vote: Racial Disparities in Election Day Experiences», Brennan Center for Justice, junio de 2020. Véase también Daniel Garisto, «Smartphone Data Show Voters in Black Neighbourhoods Wait Longer», *Scientific American*, 1 de octubre de 2019.

7. Véase Vann R. Newkirk II, «Voter Suppression Is Warping Democracy», *Atlantic*, 17 de julio de 2018.

8. Véase Lynne Peeples, «What the Data Say About Police Shootings», *Nature*, 4 de septiembre de 2019.

9. Véase «Report to the United Nations on Racial Disparities in the U. S. Criminal Justice System», Sentencing Project, 19 de abril de 2018; Glenn R. Schmitt *et al.*, «Demographic Differences in Sentencing: An Update to the 2012 Booker Report», U. S. Sentencing Commission, noviembre de 2017; E. Anne Carson y William J. Sabol, «Prisoners in 2011», U. S. Department of Justice Bureau of Justice Statistics, diciembre de 2012.

10. Justin Hanford, «The First Ammendment Freedom of Assembly as a Racial Project», *Yale Law Journal*, 127, 2018.

11. William H. Frey, *Diversity Explosion: How New Racial Demographics Are Remaking America*, Brookings Institution Press, Washington, D. C, 2018.

12. Hochschild, Weaver y Burch, *Creating a New Racial Order*, p. 24.

13. Véase Mohamed Younis, «Americans Want More, Not Less, Immigration for First Time», Gallup, 1 de julio; «Voters' Attitudes About Race and Gender Are Even More Divided Than in 2016», Pew Research Center, 10 de septiembre de 2020; Hannah Fingerhut, «Most Americans Express Positive View of Country's Growing Racial and Ethnic Diversity», Pew Research Center, 14 de junio de 2018; Juliana Menasce Horowitz, «Americans See Advantages and Challenges in Country's Growing Racial and Ethnic Diversity», Pew Research Center, 8 de mayo de 2019; «General Social Survey (GSS)», NORC at the University of Chicago.

14. Durante los últimos cinco años, se han escrito varios libros importantes sobre los desafíos a los que se enfrenta la democracia estadounidense, incluyendo Theda Skoepol y Caroline Tervo (eds.), *Upending American Politics: Polarizing Parties, Ideological Elites and Citizen Activists from the Tea Party to the Anti-Trump Resistance*, Oxford University Press, Nueva York, 2020; Suzanne Mettler y Robert C. Lieberman, *Four Threats: The Recurring Crises of American Democracy*, St Martin's Press, Nueva York, 2020; Robert C. Lieberman, Suzanne Mettler y Kenneth M. Roberts (eds.), *Democratic Resilience: Can the United States Withstand Rising Polarization?*, Cambridge University Press, Cambridge (Reino Unido), 2022.

15. Adam Przeworski y Fernando Limongi, «Modernization: Theories and Facts», *World Politics*, 49, 1997, p. 165.

16. Rafaela Dancygier, *Dilemmas of Inclusion: Muslims in Europe*, Cambridge University Press, Cambridge (Reino Unido), 2017.

17. Dominik Hangartner *et al.*, «Does Exposure to the Refugee Crisis Make Natives More Hostile?», *American Political Science Review*, 113, n.º 2, pp. 442-455, 2019; Pippa Norris y Ronald Inglehart, *Cultural Backlash: Trump, Brexit, and Authoritarian Populism*, Cambridge University Press, Nueva York, 2019.

18. Tarik Abou-Chadi y Simon Hix, «Brahmin Left Versus Merchant Right? Education, Class, Multiparty Competition, and Redistribution in Western Europe», *British Journal of Sociology*, 72, n.º 1, pp. 79-92, 2021; J. Lawrence Broz, Jeffry Frieden y Stephen Weymouth, «Populism in Place: The Economic Geography of the Globalization Backlash», International Organization, 75, n.º 2, pp. 464-494, 2021; Larry Bartels, *Democracy Erodes from the Top: Leaders, Citizens, and the Challenge of Populism in Europe*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2023, p. 166.

19. Para una discusión excelente acerca de algunos de estos fallos, véase Sanford Levinson, *Our Undemocratic Constitution: Where the Constitution Goes Wrong (and How We the People Can Correct It)*, Oxford University Press, Oxford, 2008.

20. Escila y Caribdis son dos monstruos marinos de la mitología griega que viven en orillas opuestas de un canal de agua estrecho. Tan angosto que los marineros que tratan de esquivar a Caribdis terminan por pasar muy cerca de la Escila.

1. Gustavo Beliz, *CGT: El otro poder*, Planeta, Buenos Aires, 1988, p. 74.

2. Mario Wainfeld, entrevista con Levitsky, 22 de diciembre de 2021.

3. Véase «A 38 años del retorno de la democracia: La asunción de Raúl Alfonsín», *La Voz*, 10 de diciembre de 2021.

4. Véase Rogelio Alaniz, «Las elecciones del 30 de octubre de 1983», *El Litoral*, 29 de octubre de 2014.

5. Véase «Raúl Alfonsín exige a los militares argentinos el traspaso inmediato del poder», *El País*, 1 de noviembre de 1983.

6. Mario Wainfeld, entrevista con Levitsky, 22 de diciembre de 2021.

7. Audio de la conferencia de prensa de Ítalo Luder y Raúl Alfonsín, Radio Universidad Nacional de La Plata, 1 de noviembre de 1983, <sedici.unlp.edu.ar/bitstream/handle/10915/34284/Audio_de_Luder_y_Alfons%C3%Adn__04_19_.mp3.?sequence=1&isAllowed=y>.

8. Adam Przeworski, *Democracy and the Market*, Cambridge University Press, Nueva York, 1991, p. 10.

9. Sean Wilentz, *The Rise of American Democracy: Jefferson to Lincoln*, W. W. Norton, Nueva York, 2005, p. 94.

10. Seymour Martin Lipset, *The First New Nation: The United States in Historical and Comparative Perspective*, W. W. Norton, Nueva York, 1979, p. 44.

11. Véase Joanne B. Freeman, «Corruption and Compromise in the Election of 1800: The Process of Politics on the National Stage», en *The Revolution of 1800: Democracy, Race and the New Republic*, James Horn, Jan Ellen Lewis y Peter S. Onuf (eds.), University of Virginia Press, Charlottesville, 2002, pp. 87-120.

12. Richard Hofstadter, *The Idea of a Party System: The Rise of Legitimate Opposition in the United States, 1780-1840*, University of Virginia Press, Berkeley, 2002, pp. 87-120.

13. La frase «salto a lo desconocido» es de Adam Przeworski, «Acquiring the Habit of Changing Governments Through Elections», *Comparative Political Studies*, 48, n.º 1, 2015, p. 102.

14. Lipset, *First New Nation*, pp. 38-39.

15. Wilentz, *Rise of American Democracy*, pp. 49-62.

16. Hofstadter, *Idea of a Party System*, pp. 123-124.

17. James MacGregor Burns, *The Vineyard of Liberty*, Knopf, Nueva York,1982, pp. 125-126.

18. James Sharp, *American Politics in the Early Republic: The New Nation in Crisis*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 1993, p. 322n1.

19. *Ibid.*, p. 242; Douglas Egerton, *Gabriel's Rebellion: The Virginia Slave Conspiracies of 1800 and 1802*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1993, pp. 114-115. El hecho de que dos franceses estuvieran directamente implicados en la rebelión de Gabriel no ayudó (Egerton, *Gabriel's Rebellion*, p. 45).

20. Gabriel Prosser fue un herrero de Virginia que intentó llevar a cabo una enorme revuelta movilizando a más de mil esclavizados, posiblemente bajo el influjo de testigos de primera mano de la Revolución haitiana, entonces en curso. Aunque fue acallada antes de realizarse y las autoridades del estado condenaron a muerte a sus organizadores, de haber sido exitosa podría haber tenido una gran repercusión. Por otro lado, como Prosser ordenó no matar a cuáqueros, metodistas o franceses, se sospechó que la revuelta era parte de una conjura mayor.

21. Citado en Sharp, *American Politics in the Early Republic*, p. 214.

22. John Murrin *et al.*, *Liberty, Equality, Power: A History of the American People*, Harcourt Brace, Nueva York, 1996, p. 292.

23. Sharp, *American Politics in the Early Republic*, p. 250.

24. *Ibid.*, p. 219.

25. *The Political Writings of Alexander Hamilton*, Carson Halloway y Bradford Wilson (eds.), Cambridge, Cambridge University Press (Reino Unido), 2017, vol. 2, p. 417.

26. Recordemos que el presidente y el vicepresidente de Estados Unidos no se eligen directamente, sino a través de votos a candidatos del Colegio Electoral. Cuando existe una mayoría, es la Cámara de Representantes quien elige al presidente, mientras que el Senado se encarga de escoger al vicepresidente.

27. John Ferling, *Adams vs. Jefferson: The Tumultuous Election of 1800*, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 177.

28. Sharp, *American Politics in the Early Republic*, p. 266.

29. Susan Dunn, *Jefferson’s Second Revolution: The Election Crisis of 1800 and the Triumph of Republicanism*, Houghton Mifflin, Boston, 2004, p. 196.

30. James E. Lewis, «What I to Become of Our Government? The Revolutionary Potential of the Election of 1800», en Horn, Lewis y Onuf, *Revolution of 1800*, p. 14. Los federalistas estaban divididos acerca de la conveniencia de esta estrategia. Adams no la veía como más peligrosa que una presidencia de Jefferson o de Burr (Dunn, *Jefferson's Second Revolution*, p. 205). En cambio, Hamilton describía «el juego de impedir unas elecciones» como algo «de lo más peligroso e indecoroso» (Dunn, *Jefferson's Second Revolution*, p. 197).

31. Sharp, *American Politics in the Early Republic*, p. 266.

32. Ferling, *Adams vs. Jefferson*, p. 182.

33. *Ibid.*

34. Dunn, *Jefferson's Second Revolution*, pp. 212-213.

35. Bayard a Richard Bassett, 16 de febrero de 1801, en *Papers of James Bayard, 1796-1815*, Elizabeth Donnan (ed.), American Historical Association, Washington, D. C., 1913, pp. 126-127. Jefferson más adelante atribuyó también la connivencia federalista a la probabilidad «de que la usurpación de una legislatura contaría con la resistencia de las armas». Jefferson a Madison, 18 de febrero de 1801, citado en Lewis, «What Is to Become of Our Government?», p. 20.

36. Dunn, *Jefferson's Second Revolution*, p. 228.

37. *Ibid.*, pp. 227-228.

38. Dunn, *Jefferson’s Second Revolution*, p. 226.

39. Hofstadter, *Idea of a Party System*, p. 142.

40. *Ibid.*, 137.

41. Freeman, «Corruption and Compromise in the Election of 1800», pp. 109-110; Véase también el debate en Ferling, *Adams vs. Jefferson*, p. 194.

42. Hofstadter, *Idea of a Party System*, p. 163.

43. *Ibid.*, pp. 142-143.

44. Dunn, *Jefferson’s Second Revolution*, p. 226.

45. Véase Henri Tajfel, «Experiments in Intergroup Discrimination», *Scientific American*, 223, n.º 5, 1970, pp. 96-102; James Sidanius y Felicia Pratto, *Social Dominance: An Intergroup Theory of Social Hierarchy and Oppression*, Cambridge University Press, Nueva York, 1999; Noam Gidron y Peter A. Hall, «The Politics of Social Status: Economic and Cultural Roots of the Populist Right», *British Journal of Psychology*, 68, n.º S1, 2017, pp. 57-84; Diana C. Mutz, «Status Threat, Not Economic Hardship, Explains the 2016 Presidential Vote», *PNAS*, 115, n.º 19, 2018.

46. Barbara Ehrenreich, *Fear of Falling: The Inner Life of the Middle Class*, Pantheon, Nueva York, 1989.

47. Stenographische Berichte, Haus der Abgeordneten 77 Sitzung, 21 Legislative Period, 20 de mayo de 1912.

48. Citado en Daniel Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy*, Cambridge University Press, Cambridge (Reino Unido), 2017, p. 40.

49. Surin Maisrikrod, «Thailand 1992: Repression and the Return of Democracy», *Southeast Asian Affairs*, 1993, pp. 333-338.

50. Véase, por ejemplo, James Fallows, *Looking at the Sun: The Rise of the New East Asian Economic and Political System*, Pantheon Books, Nueva York, 1994.

51. Para un análisis en detalle del trasfondo demográfico del movimiento, realizado por la Asia Foundation, véase Duncan McCargo, «Thailand in 2014: The Trouble with Magic Swords», *Southeast Asian Affairs*, 2015, pp. 335-358.

52. Véase Andrew R. C. Marshall, «High Society Hits the Streets as Prominent Thais Join Protests», Reuters, 13 de diciembre de 2013.

53. Abhisit Vejjajiva, entrevista con Ziblatt, 13 de enero de 2022.

54. Véase Suttinee Yuvejwattana y Anuchit Nguyen, «Thai Opposition to Petition Court to Annul Weekend Vote», Bloomberg, 4 de febrero de 2014.

55. Véase Thomas Fuller, «Protesters Disrupt Thai Voting, Forcing Additional Elections», *The New York Times*, 2 de febrero de 2014; véase también Kocha Olarn, Pamela Boykoff y Jethro Mullen, «After Disrupting Thailand Elections, Protesters Plead More Demonstrations», CNN, 3 de febrero de 2014.

56. Olarn, Boykoff y Mullen, «After Disrupting Thailand Elections, Protesters Plede More Demonstrations».

57. Marshall, «High Society Hits the Streets as Prominent Thais Join Protests».

58. Thomas Fuller, «Thailand’s Military Stages Coup, Thwarting Populist Movement», *The New York Times*, 22 de mayo de 2014.

59. Kaweewit Kaewjinda, «Thailand’s Oldest Party Will Join Coup Leader’s Coalition», Associated Press, 5 de junio de 2019.

60. Suchit Bunbongkarn, «Thailand's November 1996 Election and Its Impact on Democratic Consolidation», *Democratization*, 4, n.º 2, 1997.

61. Duncan McCargo, «Thaksin and the Resurgence of Violence in the Thai South: Network Monarchy Strikes Back?», *Critical Asian Studies*, 38, n.º 1, 2006; Dan Rivers, «Ousted Thai PM Thaksin Guilty of Corruption», CNN, 21 de octubre de 2008.

62. Kevin Hewison, «Crafting Thailand's New Social Contract», *Pacific Review*, 17, n.º 4, 2004; Michael Montesano, «Thailand in 2001: Learning to Live with Thaksin», *Asia Survey*, 42, n.º 1, 2002, p. 91.

63. David Hughes y Songkramchai Leethongdee, «Universal Coverage in the Land of Smiles: Lessons from Thailand's 30 Baht Health Reforms», *Health Affairs*, 26, n.º 4, 2007, pp. 999-1008.

64. Véase Thomas Fuller, «Thaksin Can Rely on Thai Villagers», *The New York Times*, 5 de marzo de 2006; Thanasak Jenmana, «Overcome Inequality, Political Inestability, and the Thai Democracy Struggle» (tesis de máster, Paris School of Economics, 2018).

65. Jenmana, «Overcome Inequality, Political Inestability, and the Thai Democracy Struggle».

66. McCargo, «Thaksin and the Resurgence of Violence in the Thai South».

67. Véase Thomas Fuller, «Thai Beer Loses Esteem After Heiress's Remarks», CNBC, 13 de enero de 2014.

68. Véase Marshall, «High Society Hits the Streets as Prominent Thais Join Protests».

69. Asia Foundation, *Profile of the “Bangkok Shutdown” Protestors: A Survey of Anti-Government PDRC Demonstrators in Bangkok*, enero de 2014, p. 18.

70. Véase Marc Saxer, «Middle Class Rage Threatens Democracy», *New Mandala*, 21 de enero de 2014.

71. Véase Peter Shadbolt, «Thailand Elections: Politics of Crisis», CNN, 2 de febrero de 2014.

72. Véase Petra Desatova, «What Happened to Thailand’s Democrat Party?», *Thai Data Points*, 4 de diciembre de 2019; Punchada Sirivunnabood, «Thailand’s Democrat Party. The Gloomy Light at the End of the Tunnel», *Diplomat*, 24 de mayo de 2022; Joshua Kurlantzick, «Thailand’s Coup, One Year On», Council on Foreign Relations, 26 de mayo de 2015.

1. Para una comparativa entre los acontecimientos del 6 de febrero de 1934 en Francia y los del 6 de enero de 2021 en Estados Unidos, véase John Ganz, «Feb 6 1934/Jan 6 2021: What Do the Two Events Really Have in Common?», *Unpopular Front*, 15 de julio de 2021, <johnganz.substack.com/p/feb-6-1934jan-6-2021>; véase también Baptiste Roger-Lacan, «Le 6 février de Donald Trump», *Le Grand Continent*, 7 de junio de 2021.

2. William Irvine, *French Conservatism in Crisis: The Republican Federation of France in the 1930s*, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1979, p. 105.

3. Véase, por ejemplo, Brian Jenkins y Chris Millington, *France and Fascism: February 1934 and the Dynamics of Political Crisis*, Routledge, Londres, 2015, pp. 52, 89-90.

4. René Rémond, *The Right Wing in France: From 1815 to de Gaulle*, 1969, University of Pennsylvania Press Filadelfia, 2016, p. 283.

5. Las ligas derechistas a menudo tenían detrás apoyo financiero procedente de poderosos intereses económicos, como Ernest Mercier (un magnate de los trusts eléctrico y del petróleo). Véase William L. Shrirer, *The Collapse of the Third Republic: An Inquiry into the Fall of France in 1940*, Simon and Schuster, Nueva York, 1969, pp. 200, 202-203.

6. La descripción que sigue se basa en el testimonio de primera mano de William L. Shrirer. Véase *ibid.*, pp. 213-220.

7. *Ibid.*, p. 210.

8. *Ibid.*, p. 215.

9. *Ibid.*

10. *The Guardian*, 7 de febrero de 1934.

11. Shirer, *Collapse of the Third Republic*, p. 216.

12. Julian Jackson, *France: The Dark Years, 1940-1944*, Oxford University Press, Oxford, 2001, p. 72.

13. Shirer, *Collapse of the Third Republic*, p. 954n16, 226.

14. La cooperación allanó el camino a la formación del Gobierno izquierdista del Frente Popular (1936-38). Julian Jackson, *The Popular Front in France: Defending Democracy, 1934-1938*, Cambridge University Press, Cambridge, 1988.

15. Irvine, *French Conservatism in Crisis*, p. 100.

16. *Ibid.*, pp. 107-108.

17. *Ibid.*, p. 123.

18. Max Beloff, «The Sixth of February», en *The Decline of the Third Republic*, James Joll (ed.), Chatto and Windus, Londres, 1959, p. 11; véase también Jenkins y Millington, *France and Fascism*, p. 88.

19. Citado en Jenkins y Millington, *France and Fascism*, p. 88.

20. *Ibid.*, p. 179.

21. *Ibid.*, p. 126-148.

22. *Ibid.*, p. 130; véase también Kevin Passmore, *The Right in France: From the Third Republic to Vichy*, Oxford University Press, Oxford, 2013, pp. 295-296.

23. Irvine, *French Conservatism in Crisis*, pp. 117-118; Jenkins y Millington, *France and Fascism*, p. 132.

24. Véanse detalles en Jenkins y Millington, *France and Fascism*, pp. 131-133.

25. Irvine, *French Conservatism in Crisis*, p. 118.

26. Jenkins y Millington, *France and Fascism*, p. 88.

27. Irvine, *French Conservatism in Crisis*, pp. 116-117.

28. *Rapport général: Evénements du 6 février 1934 procès verbaux de la commission*, p. 2820.

29. *Ibid.*, pp. 2861-2862.

30. *Ibid.*, pp. 2839-2840.

31. Juan Linz, *The Breakdown of Democratic Regimes*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1978.

32. Para una discusión más elaborada acerca de la importancia de perder en democracia, véase Jan Werner-Müller, *Democracy Rules*, Farrar, Straus and Giroux, Nueva York, 2021, pp. 58-64.

33. Linz, *Breakdown of Democratic Regimes*.

34. *Ibid.*, p. 38.

35. *Ibid.*

36. Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy*, p. 344.

37. Gabriel Jackson, *The Spanish Republic and the Civil War, 1931-1939*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 1965, pp. 148-169; Stanley G. Payne, *Spain's First Democracy: The Second Republic, 1931-1936*, University of Wisconsin Press, Madison, 1993.

38. Acción hostil orquestada por sus propios autores de manera que no parezcan los responsables.

39. Este argumento se basa en Linz, *Breakdown of Democratic Regimes*, p. 37.

40. Jackson, *Spanish Republic and the Civil War*, pp. 148-169; Payne, *Spain's First Democracy*.

41. Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy*, pp. 347-353.

42. Javier Tusell, *Spain: From Dictatorship to Democracy*, Wiley-Blackwell, Oxford, 2011, pp. 294-295.

43. *Ibid.*, p. 311.

44. Javier Cercas, *Anatomía de un instante*, Mondadori, Barcelona, 2009, pp. 276, 337, 371.

45. *Ibid.*, pp. 144-146.

46. Tusell, *Spain*, p. 309; Cercas, *Anatomía de un instante*, p. 324. Para una relación detallada del golpe, véase Cercas, *Anatomía de un instante*.

47. Cercas, *Anatomía de un instante*, p. 169.

48. *Ibid.*, pp. 271, 325.

49. *Ibid.*, pp. 161, 168-169, 283-284.

50. *Ibid.*, pp. 30, 180.

51. *Ibid.*, pp. 176-177.

52. *Ibid.*, p. 183.

53. *Ibid.*, p. 160.

54. Cemlyn Jones, «King Orders Army to Crush Coup», *The Guardian*, 23 de febrero de 1981. Para una relación detallada del golpe, véase Cercas, *Anatomía de un instante*.

55. Cemlyn Jones, «King Orders Army to Crush Coup».

56. Véase «La manifestación más grande de la historia de España desfiló ayer por las calles de Madrid», *El País*, 27 de febrero de 1981.

57. *Ibid.*

58. Cercas, *Anatomía de un instante*, p. 419.

59. Renauld Meltz, *Pierre Laval: Un mystère français*, Perrin, París, 2018, p. 494.

60. Carmen Callil, *Bad Faith: A Forgotten History of Family, Fatherland and Vicy France*, Vintage Press, Nueva York, 2006, pp. 106-118.

61. Robert Paxton, *Vichy France: Old Guard and New Order, 1940-1944*, Columbia University Press, Nueva York, 1972, p. 249. Véase también Stanley Hoffmann, «The Vichy Circle of French Conservatives», en *Decline or Renewal? France since the 1930s*, Viking Press, Nueva York, 1960, pp. 3-25.

62. Sheri Berman, *Democracy and Dictatorship in Europe: From the Ancien Régime to the Present Day*, Oxford University Press, Nueva York, 2019, p. 181.

63. *Ibid.*

64. Véase Philip Nord, *France 1940: Defending the Republic*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 2015, pp. 150-151.

65. Larry Tye, *Demagogue: The Life and Long Shadow of Senator Joe McCarthy*, Houghton Mifflin Harcourt, Boston, 2020, pp. 457-459.

66. Nuestro título se basa en el de Hannah Arendt, *Eichmann in Jerusalem: A Report on the Banality of Evil*, 1963; Penguin, Londres, 2006.

67. El término «tácticas constitucionales duras» (*constitutional hardball*) fue acuñado por el académico constitucionalista Mark Tushnet. Véase Mark Tushnet, «Constitutional Hardball», *John Marshall Law Review*, 37, 2004, pp. 523-524; Véase también Steven Levintsky y Daniel Ziblatt, *Cómo mueren las democracias*, Ariel, Barcelona, 2018.

68. Los estudiosos han usado el término «legalismo autocrático» de un modo parecido. Véase Javier Corrales, «Autocratic Legalism in Venezuela», *Journal of Democracy*, 26, n.º 2, abril de 2015, pp. 37-51; Kim Lane Scheppele, «Autocratic Legalism», *University of Chicago Law Review*, 85, n.º 2, art. 2, 2018.

69. Lee Epstein y Jeffrey Segal, *Advice and Consent: The Politics of Judicial Appointments*, Oxford University Press, Nueva York, 2005.

70. *Ibid.*, pp. 107-114.

71. Abraham García Chávarry, «Tres maneras de conceptualizar la figura de permanente incapacidad moral del presidente de la República como causal de vacancia en el cargo», IDEHPUCP, 17 de noviembre de 2020.

72. Véase Diego Salazar, «¿Cuántas vidas le quedan al presidente Pedro Castillo?», *The Washington Post*, 8 de diciembre de 2021.

73. Véase *ibid.*

74. Véase Ian MacKinnon, «Court Rules That Prime Minister Must Resign over Cookery Show», *The Guardian*, 9 de septiembre de 2008.

75. Véase «Thai Leader Order to Quit over Cooking Show», MSNBC, 8 de septiembre de 2008.

76. Gyan Prakash, *Emergency Chronicles: Indira Gandhi and Democracy's Turning Point*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2019, pp. 92-108.

77. Christophe Jaffrelot y Pratinay Anil, *India’s First Dictatorship: The Emergency, 1975-77*, Oxford University Press, Oxford, 1999, pp. 233-264.

78. Granville Austin, *Working a Democratic Constituion: A History of the Indian Experience*, Oxford University Press, Nueva Delhi, 1999, p. 214; Jaffrelot y Anil, *India's First Dictatorship*, pp. 6-7.

79. Prakash, *Emergency Chronicles*, pp. 158-159.

80. *Ibid.*, pp. 160-161; Jaffrelot y Anil, *India’s First Dictatorship*, pp. 4-5.

81. Austin, *Working a Democratic Constitution*, p. 304; Jaffrelot y Anil, *India's First Dictatorship*, p. 14.

82. Jaffrelot y Anil, *India's First Dictatorship*, p. 15; Austin, *Working a Democratic Constitution*, p. 305.

83. Prakash, *Emergency Chronicles*, p. 9; Jaffrelot y Anil, *India’s First Dictatorship*, pp. 15-16.

84. Jaffrelot y Anil, *India's First Dictatorship*, p. 15.

85. *Ibid.*, pp. 15-16.

86. Prakash, *Emergency Chronicles*, p. 166.

87. *Ibid.*, pp. 166, 307; Jaffrelot y Anil, *India's First Dictatorship*, pp. 2-3.

88. Jaffrelot y Anil, *India's First Dictatorship*, pp. 12, 28-98; Prakash, *Emergency Chronicles*.

89. Prakash, *Emergency Chronicles*, pp. 180-183.

90. *Ibid.*, p. 10.

91. Daniel Brinks, Steven Levitsky y María Victoria Murillo, *Understanding Institutional Weakenes: Power and Design in Latin American Institutions*, Cambridge University Press, Nueva York, 2019.

92. Alena V. Ledeneva, *How Russia Really Works: The Informal Practices That Shaped Post-Soviet Politics and Business*, Cornell University Press, Ithaca (Nueva York), 2014.

93. David E. Hoffman, *The Oligarchs: Wealth and Power in the New Russia*, Public Affairs, Nueva York, 2011.

94. Marshall I. Goldman, *Petrostate: Putin, Power and the New Russia*, Oxford University Press, Oxford, 208, pp. 102-103.

95. *Ibid.*, pp. 113-116.

96. *Ibid.*, pp. 105, 116.

97. Este conocido neologismo es un juego de palabras con las palabras *warfare* (‘guerra’) y *law*, referente a la ‘ley’ o el ‘derecho’. Se refiere al uso interesado de ciertas leyes, o una interpretación jurídica sui géneris, contra personas o intereses.

98. Esta definición afina un término ampliamente utilizado para caracterizar el uso de instituciones legales contra oponentes políticos.

99. Véase «Zambia: Elections and Human Rights in the Third Republic», *Human Rights Watch*, 8, n.º 4 (A), diciembre de 1996.

100. Véase *ibid.*

101. Véase Joe Chilaizya, «Zambia-Politics: Kaunda’s Comeback Finally Over», Inter Press Service News Agency, 16 de mayo de 1996.

102. Véase Paul Lendvai, *Orbán: Europe's New Strongman*, Oxford University Press, Oxford, 2017.

103. *Ibid.*, p. 149.

104. András Bozóki y Eszter Simon, «Two Faces of Hungary: From Democratization to Democratic Backsliding», en *Central and Southeast European Politics since 1989*, Sabrina P. Ramet y Christine M. Rassenstab (eds.), 2.ª ed., Cambridge University Press, Cambridge (R. U.), 2019, p. 229.

105. Lendvai, *Orbán*, p. 103.

106. Miklós Bánkuti, Gábor Halmai y Kim Lane Scheppele, «Hungar's Illiberal Turn: Disabling the Constitution», *Journal of Democracy*, 23, n.º 3, julio de 2012, p. 139.

107. *Ibid.*, p. 140.

108. Paul Lendvai, *Hungary: Between Democracy and Authoritarianism*, Columbia University Press, Nueva York, 2012, p. 222.

109. «Wrong Direction on Rights: Assessing the Impact of Hungary's New Constitution and Laws», Human Rights Watch, 16 de mayo de 2013. Véase también Lendvai, *Orbán*, p. 104.

110. «Wrong Direction on Rights».

111. Bozóki y Simon, «Two Faces of Hungary», p. 231.

112. Citado en Lendvai, *Orbán*, pp. 158-163.

113. Bozóki y Simon, «Two Faces of Hungary», p. 231.

114. Lendvai, *Orbán*, p. 220; Bozóki y Simon, «Two Faces of Hungary», p. 231.

115. Lendvai, *Hungary*, pp. 219-220.

116. Lendvai, *Orbán*, pp. 158-163.

117. *Ibid.*, pp. 161-162; Bozóki y Simon, «Two Faces of Hungary», p. 231.

118. «Hungary: Media Law Endangers Press Freedom: Problematic Legislation Part of Wider Concern About Country's Rights Record», Human Rights Watch, 7 de enero de 2011. Véase también Lendvai, *Hungary*, p. 218; U. S. Department of State, «Hungary 2013 Human Rights Report».

119. Bánkuti, Halmai y Scheppele, «Hungary's Illiberal Turn», p. 140; Lendvai, *Orbán*, p. 115; U. S. Department of State, «Hungary 2013 Human Rights Report», p. 25; «Hungary: Media Law Endangers Press Freedom».

120. U. S. Department of State, «Hungary 2011 Human Rights Report»; U. S. Department of State, «Hungary 2012 Human Rights Report»; U. S. Department of State, «Hungary 2013 Human Rights Report».

121. Véase Attila Mong, «Hungary's Klubrádió Owner András Arató on ow the Station Is Responding to the Loss of It Broadcast License», Committee to Protect Journalists, 9 de noviembre de 2021.

122. Véase *ibid.*

123. Zack Beauchamp, «It Happened There: How Democracy Died in Hungary», *Vox*, 13 de septiembre de 2018.

124. Lendvai, *Orbán*, p. 119.

125. Bánkuti, Halmai y Scheppele: «Hungary’s Illiberal Turn», p. 140.

126. *Ibid.*; Bozóki y Simon, «Teo Faces of Hungary», p. 229.

127. Lendvai, *Orbán*, pp. 129-130; véase también Dylan Difford, «How Do Elections Work in Hungary?», Electoral Reform Society, 1 de abril de 2022.

128. Grupo de expertos cuya función es investigar sobre asuntos políticos, económicos y sociales y que se caracterizan por no ser afines a ninguna ideología.

129. Lendvai, *Orbán*, pp. 129-130.

130. Citado en Lendvai, *Hungary*, p. 226.

131. Bozóki y Simon, «Two Faces of Hungary», p. 230.

132. *Ibid.*

133. Lendvai, *Orbán*, p. 128.

134. Bozóki y Simon, «Two Faces of Hungary», p. 230.

135. Lendvai, *Orbán*, p. 91.

136. Citado en Lendvai, *Hungary*, p. 221.

1. Sobre la transformación de la industria algodonera durante este período, véase Sven Beckert, *Empire of Cotton: A New History of Global Capitalism*, Penguin, Londres, 2014, pp. 312-339.

2. Ronald Hartzer, «To Great and Useful Purpose: A History of the Wilmington, North Carolina District, U. S. Army Corps of Engineers (United States)» (tesis doctoral, Indiana University, 1987), p. 37.

3. John R. Killick, «The Transformation of Common Marketing in the Late Nineteenth Century: Alexander SPrunt and Son of Wilmington, NC, 1984-1958», *Business History Review*, 55, n.º 1, 1981, p. 55.

4. *Ibid.*, p. 145.

5. Comisión de los disturbios raciales de Wilmington en 1898, *1898 Wilmington Riot Report*, North Carolina Department of Cultural Resources, Raleigh, 2006, pp. 228-229.

6. *Ibid.*, p. 30.

7. *Ibid.*, p. 31.

8. Elizabeth Sanders, *Roots of Reform: Farmers, Workers, and the American State, 1877-1917,* University of Chicago Press, Chicago, 1999.

9. Steven Hahn, *A Nation Under our Feet: Black Political Struggles in the Rural South from Slavery to the Great Migration*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2003, pp. 436-438; Helen Edmonds, *The Negro and the Fusion Politics in North Carolina, 1894-1901*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1951.

10. Morgan Kousser, *The Shaping of Southern Politics: Suffrage Restriction and the Establishment of the One-Party South, 1880-1910*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 1974, p. 187.

11. Véase una explicación más detallada en Suzanne Mettler y Robert C. Lieberman, *Four Threats: The Recurring Crises of American Democracy*, St. Martin's Press, Nueva York, 2020, pp. 92-101.

12. Zucchino, *Wilmington’s Lie*, pp. 80, 65-82.

13. *Ibid.*, p. 146.

14. Comisión de los disturbios raciales de Wilmington en 1898, *Report*, pp. 66-67.

15. *Ibid.*, p. 33.

16. Zucchino, *Wilmington's Lie*, p. 137.

17. *Ibid.*, p. 148.

18. *Ibid.*, pp. 125-137.

19. En inglés, tanto el río como la región que le da nombre significan «cabo del miedo».

20. *Ibid.*, pp. 147, 149-150.

21. Comisión de los disturbios raciales de Wilmington en 1898, *Report*, pp. 79-80.

22. Mettler y Lieberman, *Four Threats*, pp. 93-95.

23. Zucchino, *Wilmington's Lie*, pp. 119-120.

24. Comisión de los disturbios raciales de Wilmington en 1898, *Report*, p. 92.

25. Zucchino, *Wilmington's Lie*, pp. 160-163.

26. Comisión de los disturbios raciales de Wilmington en 1898, *Report*, pp. 107-109.

27. Zucchino, *Wilmington's Lie*, pp. 189-219.

28. *Ibid.*, pp. 341-342.

29. Mettler y Lieberman, p. 94.

30. Zucchino, *Wimington’s Lie*, pp. 228-256.

31. Mettler y Lieberman, p. 94.

32. Richard M Valelly, *The Two Reconstructions: The Struggle for Black Enfranchisement*, University of Chicago Press, Chicago, 2004, p. 132; Zucchino, *Wilmington's Lie*, p. 159-160.

33. Kousser, *Shaping of of Southern Politics*, pp. 190-192, 239.

34. Zucchino, *Wilmington's Lie*, p. 330; Kent Redding, *Making Race, Making Power: North Carolina's Road to Disfranchisement*, University of Illinois Press, Urbana, 2003, p. 37.

35. Zucchino, *Wilmington's Lie*, p. 330.

36. Véase Eric Foner, *Reconstruction: America's Unfinished Revolution, 1863-1877*, Harper & Row, Nueva York, 1988; W. E. B. Du Bois, *Black Reconstruction in America: An Essay Toward a History of the Part Which Black Folk Played in the Attempt to Reconstruct Democracy in America, 1860-1880*, 1935; Free Press, Nueva York, 1998.

37. Eric Foner, *The Second Founding: How the Civil War and Reconstruction Remade the Constitution*, Norton, Nueva York, 2019, p. 7; Foner, *Reconstruction*, p. 278.

38. Foner, *Second Founding*, pp. 68-78.

39. Citado en *ibid.*, p. 112.

40. Xi Wang, *The Trial of Democracy: Black Suffrage and Northern Republicans, 1860-1910*, University of Georgia Press, Athens, 2012, pp. 36-37.

41. Rayford W. Logan, *The Betrayal of the Negro, from Rutherford B. Hayes to Woodrow Wilson*, Hachette Books, Nueva York, 1967, p. 107.

42. Citado en Foner, *Second Founding*, p. 33.

43. *Ibid.*, p. 86.

44. *Ibid.*, p. 107.

45. J. Morgan Kousser, *Color-blind Injustice: Minority Voting Rights and the Undoing of the Second Reconstruction*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1999, p. 39.

46. Kenneth Stampp, *The Era of Reconstruction, 1865-1877*, Vintage Books, Nueva York, 1965, p. 83.

47. Entre otros se encontraban Henry Wilson de Massachusetts, Benjamin Wade de Ohio y Zachariah Chandler de Míchigan, además de los representantes George Boutwell de Massachusetts y George Julian de Indiana. Véase *ibid.*, pp. 83-84.

48. Foner, *Reconstruction*, pp. 230-231.

49. James Morone, *Hellfire Nation: The Politics of Sin in American History*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 2003, pp. 123-114; Daniel Carpenter, *Democracy by Petition: Popular Politics in Transformation, 1790-1870*, Cambridge (Massachusetts), Harvard University Press, 2021, pp. 75-76.

50. *Congressional Globe*, 6 de febrero de 1866, p. 687.

51. *Ibid.*

52. Sandra Gustafson, *Imagining Deliberative Democracy in the Early American Republic*, University of Chicago Press, Chicago, 2011, p. 125.

53. Marilyn Richardson, *Maria W. Stewart: America's First Black Woman Political Writer*, Indiana University Press, Bloomington, 1987, p. xiii; Valerie C. Cooper, *Word, Like Fire: Maria Stewart, the Bible, and the Rights of African Americans*, University of Virginia Press, Charlottesville, 2011, p. 1.

54. Stephen Kantrowitz, *More than Freedom: Fighting for Black Citizenship in a White Republic, 1829-1889*, Penguin, Nueva York, 2012, p. 28.

55. Pauline Maier, *American Scripture: Making the Declaration of Independence*, Vintage, Nueva York, 1997, p. 129.

56. Kantrowitz, *More than Freedom*, pp. 52, 109, 130-131.

57. Foner, *Second Founding*, p. 98.

58. *Ibid.*, p. 101.

59. Valelly, *Two Reconstructions*, p. 3.

60. *Ibid.*, p. 33.

61. *Ibid.*, p. 122; Foner, *Reconstruction*, p. 294.

62. Du Bois, *Black Reconstruction in America*, p. 371.

63. *Ibid.*, p. 372; Foner, *Reconstruction*, p. 318.

64. Du Bois, *Black Reconstruction in America*, pp. 404, 444; Foner, *Reconstruction*, p. 354; Valelly, *Two Reconstructions*, p. 3.

65. Du Bois, *Black Reconstruction in America*, pp. 469-470; Foner, *Reconstruction*, p. 354.

66. Foner, *Reconstruction*, pp. 356-363.

67. Trevon D. Logan, «Do Black Politicians Matter? Evidence from Reconstruction», *Journal of Economic History*, 80, n.º 1, 2020, p. 2; Eric Foner, *Freedom's Lawmakers: A Directory of Black Officeholders During Reconstruction*, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1996.

68. Robert Mickey, *Paths Out of Dixie: The Democratization of Authoritarian Enclaves in America's Deep South, 1944-1972*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2015, p. 38; Foner, *Reconstruction*, p. 355.

69. Citado en Hahn, *Nation Under Our Feet*, p. 243.

70. Zucchino, *Wilmington's Lie*, p. 307.

71. Hahn, *Nation Under Our Feet*, p. 237.

72. Véase Michael Perman, *Struggle for Mastery: Disenfranchisement in the South*, 1888-1908, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2001, pp. 22-27; Zucchino, *Wimington's Lie*.

73. Glenda Elizabeth Gilmore, *Gender and Jim Crow*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2019; Jane Dailey, *White Fright: The Sexual Panic at the Heart of America’s Racist History*, Basic Books, Nueva York, 2020.

74. Gilmore, *Gender and Jim Crow*, p. 83.

75. Citado en Earl Black y Merle Black, *The Rise of Southern Republicans*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2002, p. 44.

76. Citado en Perman, *Struggle for Mastery*, p. 23.

77. Allen W. Trelease, *White Terror: The Ku Klux Klan Conspiracy and Southern Reconstruction*, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 1971.

78. Citado en Jamelle Bouie, «Why I Keep Coming Back to Reconstruction», *The New York Times*, 25 de octubre de 2002.

79. Logan, *Betrayal of the Negro*, p. 10.

80. Equal Justice Initiative, «Reconstruction in America», Montgomery (Alabama), 2020; Foner, *Reconstruction*, pp. 425-428.

81. Foner, *Reconstruction*, pp. 242-243.

82. Du Bois, *Black Reconstruction in America; Wang, Trial of Democracy*, pp. 79-83; Foner, *Reconstruction*, p. 342.

83. Du Bois, *Black Reconstruction in America*, p. 474; Equal Justice Initiative, «Reconstruction in America»; Foner, *Reconstruction*, p. 342.

84. Foner, *Reconstruction*, p. 343.

85. Richard Abbott, «The Republican Party Press in Reconstruction Georgia, 1867-1874», *Journal of Southern History*, 61, n.º 4, noviembre de 1995, p. 758.

86. Foner, *Reconstruction*, p. 454-459.

87. Wang, *Trial of Democracy*, pp. 78-92; Foner, *Reconstruction*, pp. 454-459.

88. Foner, *Reconstruction*, pp. 454-455.

89. Wang, *Trial of Democracy*, pp. 93-102.

90. Foner, *Reconstruction*, pp. 458-459.

91. James McPherson, «War and Peace in the Post-Civil War South», en *The Making of Peace: Rulers, States, and the Aftermath of War*, Williamson Murray y Jim Lacey (eds.), Cambridge University Press, Cambridge (R. U.), 2009, p. 168.

92. Wang, *Trial of Democracy*, pp. 102-105; Foner, *Reconstruction*, pp. 497-499.

93. Foner, *Reconstruction*, pp. 523-531.

94. «The Era of Moral Politics», *The New York Times*, 30 de diciembre de 1874; Foner, *Reconstruction*, pp. 523-531.

95. Foner, *Reconstruction*, p. 559.

96. Foner, *Reconstruction*, p. 562.

97. *Ibid.*, pp. 574-575; Du Bois, *Black Reconstruction in America*, pp. 687-689.

98. Foner, *Reconstruction*, pp. 574-575.

99. Mickey, *Paths Out of Dixie*, p. 39.

100. Logan, *Betrayal of the Negro*, p. 10; Valelly, *Two Reconstructions*, p. 47.

101. Equal Justice Initiative, «Reconstruction in America».

102. Sobre este punto y los problemas de la llamada «tesis del *fait accompli*», véase Valelly, *Two Reconstructions*, p. 186n14.

103. Du Bois, *Black Reconstruction in America*, pp. 597-598.

104. Kousser, *Colorblind Injustice*, p. 20; Valelly, *Two Reconstructions*, p. 52.

105. C. Vann Woodward, *The Strange Career of Jim Crow*, Oxford University Press, Oxford, 2002; pp. 57-65; Kousser, *Shaping of Southern Politics*.

106. Kousser, *Shaping of Southern Politics*, pp. 27-28.

107. *Ibid.*, pp. 36-42.

108. Woodward, *Strange Career of Jim Crow*, p. 61-64, 79; Kousser, *Shaping of Southern Politics*.

109. Perman, *Struggle for Mastery*, pp. 22-27; Woodward, *Strange Career of Jim Crow*, p. 79.

110. Kousser, *Shaping of Southern Politics*, p. 37.

111. Citado en *ibid.*, p. 145.

112. Perman, *Struggle for Mastery*; Kousser, *Shaping of Southern Politics*.

113. Véase Kousser, *Shaping of Southern Politics*; Perman, *Struggle for Mastery*.

114. Citado en Foner, *Reconstruction*, p. 590.

115. Perman, *Struggle for Mastery*, p. 12.

116. Michael J. Klarman, *From Jim Crow to Civil Rights: The Supreme Court and the Struggle for Racial Equality*, Oxford University Press, Oxford, 2004, p. 33.

117. V. O. Key, *Southern Politics in State and Nation*, Vintage Books, Nueva York, 1949, p. 531.

118. El voto secreto fue usado por primera vez en Australia durante la década de 1850.

119. Kousser, *Shaping of Southern Politics*, pp. 110-114, 239; Perman, *Struggle for Mastery*, p. 54.

120. Citado en Perman, *Struggle for Mastery*, p. 20.

121. Alexander Keyssar, *The Right to Vote: The Contested History of Democracy in the United States*, Basic Books, Nueva York, 2000, cap. 5.

122. Kousser, *Shaping of Southern Politics*, pp. 139-145; Perman, *Struggle for Mastery*, pp. 70-90.

123. Kousser, *Shaping of Southern Politics*, p. 239.

124. *Ibid.*, p. 134.

125. Keyssar, *Right to Vote*, pp. 89-90, 111-113.

126. Kousser, *Shaping of Southern Politics*, p. 239.

127. *Ibid.*

128. Citado en Perman, *Struggle for Mastery*, p. 58.

129. David Bateman, *Disenfranchising Democracy: Constructing the Electorate in the United States, the United Kingdom, and France*, Cambridge University Press, Cambridge (R. U.), 2018, p. 25.

130. Klarman, *From Jim Crow to Civil Rights*, p. 34; Valelly, *Two Reconstructions*, pp. 104-105.

131. R. Volney Riser, *Defying Disenfranchisement: Black Voting Rights Activism in the Jim Crow South, 1890-1908*, Louisiana State University Press, Baton Rouge, 2010.

132. Richard Pildes, «Democracy, Anti-democracy, and the Canon», *Constitutional Commentary*, 17, 2000, p. 297.

133. Véase Brian Lyman, «The Journey of Jackson Giles», *Montgomery Advertiser*, 7 de febrero de 2022.

134. John Hope Franklin y Evelyn Brooks Higginbotham, *From Slavery to Freedom: A History of African Americans*, 9.ª ed., McGraw-Hill, Nueva York, 2001, p. 268.

135. Citado en Pildes, «Democracy, Anti-democracy and the Canon», p. 302.

136. Louis Menand, *The Metaphysical Club: A Story of Ideas in America*, Farrar, Straus and Giroux, Nueva York, 2001, p. 4.

137. Klarman, *From Jim Crow to Civil Rights*, p. 38.

138. Pildes, «Democracy, Antidemocracy and the Canon», p. 306. Sobre los casos de derechos civiles, véase Wang, *Trial of Democracy*, pp. 212-213.

139. Samuel Brenner, «Airbrushed out of the Constituional Canon: The Evolving Understanding of Giles v. Harris, 1903-1925», *Michigan Law Review*, 107, n.º 5, 2009, p. 862; véase también Valelly, *Two Reconstructions*, pp. 112-120.

140. Valelly, *Two Reconstructions*, p. 131; Wang, *Trial of Democracy*, p. 254.

141. David W. Blight, *Frederick Douglass: The Prophet of Freedom*, Simon & Schuster, Nueva York, 2018, p. 254.

142. Wang, *Trial of Democracy*, p. 224.

143. Citado en Richard Valelly, «Partisan Entrepreneurship and Policy Windows: George Frisbie Hoar and the 1890 Federal Election Bill», en *Formative Acts: American Politics in the Making*, Stephen Skowronek y Matthew Glassman (eds.), University of Pennsylvania Press, Filadelfia, 2007, p. 126.

144. Keyssar, *Right to Vote*, p. 109.

145. Kousser, *Shaping of Southern Politics*, pp. 29-30.

146. Wang, *Trial of Democracy*, pp. 236-237.

147. Gregory Wawro y Eric Schickler, *Filibuster: Obstruction and Lawmaking in the U. S. Senate*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2013, pp. 76-78.

148. *Reminiscences of Senator William M. Stewart*, George Rothwell Brown (ed.), Neale, Nueva York, 1908, pp. 297-298.

149. Wawro y Schickler, *Filibuster*, pp. 82-83.

150. Wang, *Trial of Democracy*, p. 248.

151. *Ibid.*

152. Wawro y Schickler, *Filibuster*, p. 76-87.

153. Wang, *Trial of Democracy*, p. 249.

154. Kent Redding y David James, «Estimating Levels and Modeling Determinants of Black and White Voter Turnout in the South, 1880-1912», *Historical Methods*, 34, n.º 4, 2001, p. 148.

155. Valley, *Two Reconstructions*, p. 128.

156. Citado en Kousser, *Shaping of Southern Politics*, p. 209.

157. Mickey, *Paths Out of Dixie*, pp. 35-61.

158. *Ibid.*

159. Du Bois, *Black Reconstruction in America*, p. 30.

1. Véase Lyndon B. Johnson, «Address Before a Joint Session of the Congress», American Presidency Project, UC Santa Barbara, 27 de noviembre de 1963.

2. Geoffrey M. Kabaservice, *Rule and Ruin: The Downfall of Moderation and the Destruction of the Republican Party, from Eisenhower to the Tea Party*, Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 100.

3. Julian Zelizer, *The Fierce Urgency of Now: Lyndon Johnson, Congress, and the Battle for the Great Society*, Penguin Press, Nueva York, 2012, p. 100.

4. Byron C. Hulsey, *Everett Dirksen and His Presidents: How a Senate Giant Shaped American Politics*, University Press of Kansas, Lawrence, 2000, p. 201.

5. Los conservadores del Partido Republicano ya han intentado debilitar la *Voting Rights Act* con anterioridad. En 1970, por ejemplo, la administración Nixon intentó, sin éxito, desmantelar el artículo 5, una pieza clave de esta ley. Véase Ari Berman, *Give Us the Ballot: The Modern Struggle for Voting Rights in America*, Farrar Straus and Giroux, Nueva York, 2015.

6. «Walking Away. The Republican Party and Democracy», *The Economist*, 1 de enero de 2022.

7. Glenn Thrush, «“We’re Not a Democracy”, Says Mike Lee, a Republican Senator. That’s a Good Thing, He Adds», *The New York Times*, 8 de octubre de 2020.

8. Anna Luhrmann *et al.*, «New Global Data on Political Parties: V-Party», V-Dem Institute Briefing Paper n.º 9, 26 de octubre de 2020, pp. 1-2.

9. *Ibid.*, p. 1.

10. Algunas obras importantes sobre esta cuestión incluyen Daniel Schlozman, *When Movements Anchor Parties: Electoral Alignments in American History*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2015; E. J. Dionne, *Why the Right Went Wrong: Conservatism — from Goldwater to Trump and Beyond*, Simon & Schuster, Nueva York, 2016; Theda Skocpol y Vanessa Williamson, *The Tea Party and the Remaking of Republican Conservativism*, Oxford University Press, Nueva York, 2016; Sam Rosenfeld, *The Polarizers: Postwar Architects of Our Partisan Era*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2017; Jacob Hacker y Paul Pierson, *Let Them Eat Tweets: How the Right Rules in an Age of Extreme Inequality*, W. W. Norton, Nueva York, 2020.

11. Véase Lewis L. Gould, *The Republicans: A History of the Grand Old Party*, Oxford University Press, Oxford, 2014; Heather Cox Richardson, *To Make Men Free: A History of the Republican Party*, Basic Books, Nueva York, 2014.

12. James L. Sundquist, *Dynamics of the Party System: Alignment and Realignment of Political Parties in the United States*, ed. rev., Brookings Institution, Washington, D. C., 1983, pp. 214-226.

13. Black y Black, *Rise of Southern Republicans*, p. 15.

14. Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy*, pp. 33-37; Hacker y Pierson, *Let Them Eat Tweets*, p. 21.

15. Eric Schickler, *Racial Realignment: The Transformation of American Liberalism, 1932–1965*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2016, pp. 252-253; Boris Heersink y Jeffrey A. Jenkins, *Republican Party Politics and the American South, 1865-1968*, Cambridge University Press, Cambridge (R. U.), 2020, pp. 163-176; Sam Rosenfeld, *The Polarizers: Postwar Architects of Our Partisan Era*, University of Chicago Press, Chicago, 2017, pp. 70-89.

16. Black y Black, *Rise of Southern Republicans*, p. 57.

17. Schickler, *Racial Realignment*, pp. 104-118; Tali Mendelberg, *The Race Card: Campaign Strategy, Implicit Messages, and the Norm of Equality*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2001, pp. 67-70.

18. Schickler, *Racial Realignment*, pp. 81-97; Philip A. Klinkner, *The Unsteady March: The Rise and Decline of Racial Equality in America*, con Rogers M. Smith, University of Chicago Press, Chicago, 1999, pp. 207-234.

19. Black y Black, *Rise of Southern Republicans*, pp. 45-46.

20. Citado en *ibid.*, p. 32.

21. Schickler, *Racial Realignment*, pp. 213-218.

22. *Ibid.*, pp. 248-249.

23. Joseph Lowndes, *From the New Deal to the New Right: Race and the Southern Origins of Modern Conservatism*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 2008, pp. 48-49, 60-64; Schickler, *Racial Realignment*, pp. 248-253.

24. Tras el fin de la segregación, se tuvo que desplegar tropas en más de una ocasión para aplicar las nuevas leyes. En varias partes de este libro se habla de «integración» o «desegregación», palabras con las que se designaba la implantación del nuevo *statu quo* mixto en las escuelas, por ejemplo.

25. Schickler, *Racial Realignment*, pp. 253-270; Heersink y Jenkins, *Republican Party Politics and the American South*, pp. 177-178; Lowndes, *From the New Deal to the New Right*, pp. 52-61; Mickey, *Paths Out of Dixie*, pp. 180-189.

26. Robert Novak, *The Agony of the G. O. P. 1964*, Macmillan, Nueva York, 1965, p. 179.

27. Angie Maxwell y Todd G. Shields, *The Long Southern Strategy: How Chasing White Voters in the South Changed American Politics*, Oxford University Press, Nueva York, 2019, p. 8.

28. Schickler, *Racial Realignment*, pp. 237-238.

29. Sundquist, *Dynamics of the Party System*, p. 290.

30. Kabaservice, *Rule and Ruin*, pp. 98-113; Heersink y Jenkins, *Republican Party Politics and the American South*, p. 182; John H. Kessel, *The Goldwater Coalition: Republican Strategies in 1964*, The Bobbs-Merrill Company, Nueva York, 1968, pp. 195-196.

31. Edward G. Carmines y James A. Stimson, *Issue Evolution: Race and the Transformation of American Politics*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 1989, pp. 38-39, 164-166; Donald R. Kinder y Lynn M. Sanders, *Divided by Color: Racial Politics and Democratic Ideals*, University of Chicago Press, Chicago, 1996, pp. 206-207.

32. Stuart Stevens, *It Was All a Lie: How the Republican Party Became Donald Trump*, Alfred A. Knopf, Nueva York, 2020, p. 12.

33. Klinkner, *Unsteady March*, p. 275.

34. Kinder y Sanders, *Divided by Color*, pp. 20-23, 33.

35. *Ibid.*, pp. 101-103; Klinkner, *Unsteady March*, pp. 280-281.

36. Kinder y Sanders, *Divided by Color*, pp. 101-103; Sundquist, *Dynamics of the Party System*, pp. 382-387; Klinkner, *Unsteady March*, p. 280.

37. Black y Black, *Rise of Southern Republicans*, p. 205; Kevin Phillips, *The Emerging Republican Majority*, Arlington House, New Rochelle (Nueva York), 1969.

38. Sundquist, *Dynamics of the Party System*, pp. 364-365.

39. Citado en Kabaservice, *Rule and Ruin*, p. 274.

40. Mendelberg, *Race Card*, pp. 95-98.

41. Phillips, *Emerging Republican Majority*, p. 227.

42. Lowndes, *From the New Deal to the New Right*, p. 137.

43. Carmines y Stimson, *Issue Evolution*, p. 54; Black y Black, *Rise of Southern Republicans*, pp. 215-216.

44. Rick Perlstein, *Reaganland: America's Right Turn, 1976-1980*, Simon & Schuster, Nueva York, 2020, p. 830.

45. Robert P. Jones, *The End of White Christian America*, Simon & Schuster, Nueva York, 2016, p. 88; véase también Maxwell y Shields, *Long Southern Strategy*, caps. 7-9.

46. Véase Daniel K. Williams, *God's Own Party: The Making of the Christian Right*, Oxford University Press, Oxford, 2010; Frances Fitzgerald, *The Evangelicals: The Struggle to Shape America*, Simon & Schuster, Nueva York, 2017.

47. Daniel Schlozman, *When Movements Anchor Parties: Electoral Alignments in American History*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2015, pp. 77-107; Williams, *God's Own Party*, pp. 171-179.

48. Schlozman, *When Movements Anchor Parties*, pp. 87-88.

49. *Ibid.*, pp. 90-101; Jones, *End of White Christian America*, p. 171; Fitzgerald, *Evangelicals*, pp. 303-305.

50. Williams, *God’s Own Party*, pp. 188-194.

51. Williams, *God's Own Party*, pp. 189-190; Kabaservice, *Rule and Ruin*, p. 361; Maxwell y Shields, *Long Southern Strategy*, pp. 291-292.

52. Black y Black, *Rise of Southern Republicans*, pp. 205-240.

53. *Ibid.*, pp. 217-219; Williams, *God's Own Party*, p. 206.

54. Black y Black, *Rise of Southern Republicans*, p. 206; también en Sundquist, *Dynamics of the Party System*, p. 417.

55. Black y Black, *Rise of Southern Republicans*, pp. 268-368; David Lublin, *The Republican South: Democratization and Partisan Change*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2004, pp. 33-41.

56. Alan Abramowitz, *The Great Alignment: Race, Party Transformation, and the Rise of Donald Trump*, New Haven (Connecticut), Yale University Press, 2018, pp. 130-131.

57. Extraído de Kinder y Sanders, *Divided by Color*, p. 106.

58. Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy*, pp. 174-175.

59. Véase William H. Frey, *The Diversity Explosion: How New Racial Demographics Are Remaking America*, Brookings Institution Press, Washington, D. C., 2018.

60. Datos del censo de Estados Unidos de 2020.

61. Tara Bahrampour y Ted Mellnik, «Census Data Shows Widening Diversity: Number of White People Falls for First Time», *The Washington Post*, 12 de agosto de 2021.

62. Frey, *Diversity Explosion*, pp. 168-177, 184-189.

63. Véase Ted Mellnik y Andrew Van Dam, «How Mixed-Race Neighborhoods Quietly Became the Norm in the U. S.», *The Washington Post*, 4 de noviembre de 2022.

64. Frey, *Diversity Explosion*, pp. 193-211.

65. Robert P. Jones y Daniel Cox, «America's Changing Religious Identity: Findings from the 2016 American Values Atlas», Washington, D. C., Public Religion Research Institute, 18 de septiembre de 2017.

66. Véase Katherine Schaeffer, «Racial, Ethnic Diversity Increases Yet Again with the 117th Congress», Pew Research Center, 28 de enero de 2021.

67. Véase *ibid.*

68. Hochschild, Weaver y Burch, *Creating a New Racial Order*.

69. Younis, «Americans Want More, Not Less, Immigration for First Time».

70. Véase *ibid.*; «Voters' Attitudes About Race and Gender Are Even More Divided Than in 2016»; Fingerhut, «Most Americans Express Positive Views of Country's Growing Racial and Ethnic Diversity»; Horowitz, «Americans See Advantages and Challenges in Country's Growing Racial and Ethnic Diversity».

71. Emily Badger, «28 Percent of Whites Say They Favor a Law Allowing Homeowners to Discriminate», *The Washington Post*, 9 de julio de 2015; «General Social Survey (GSS)», NORC, University of Chicago.

72. «Race Relations», Gallup.

73. Véase John Sides, «White Christian America Is Dying», *The Washington Post*, 15 de agosto de 2016; Public Religion Research Institute, American Values Atlas, 2014.

74. Frey, *Diversity Explosion*, pp. 31-32, 254. En 2018, Pew reveló que el 52 por ciento de los millennials estaban de acuerdo con que la discriminación es «el principal motivo por el que la población negra no sale adelante hoy en día», en contraste con el 36 por ciento de los *baby boomers* o un 28 por ciento entre la llamada generación silenciosa. Casi un 80 por ciento de *millennials* creían que la inmigración hace fuerte al país, en comparación con un 47 por ciento de la generación silenciosa. Véase «The Generation Gap in American Politics», Pew Research Center, 1 de marzo de 2018.

75. Véase «Generation Gap in American Politics».

76. Hochschild, Weaver y Burch, *Creating a New Racial Order*, p. 173.

77. Véase «Voting Rights Restoration», Brennan Center for Justice.

78. Jones, *End of White Christian America*, pp. 107-108.

79. *Ibid.*, p. 106; Jones y Cox, «America's Changing Religious Identity», p. 18.

80. Stevens, *It Was All a Lie*, p. 32.

81. Manuel Pastor, *State of Resistance: What California's Dizzying Descent and Remarkable Resurgence Mean for America's Future*, New Press, Nueva York, 2018, p. 37; Soraya Sarhaddi Nelson y Richard O'Reilly, «Minorities Become Majority in State, Census Officials Say», *Los Angeles Times*, 30 de agosto de 2000.

82. «A Summary Analysis of the 1994 General Election», *California Opinion Index*, enero de 1995; Daniel Martinez HoSang, *Racial Propositions: Ballot Initiatives and the Making of Postwar California*, University of California Press, Berkeley, 2010, p. 197.

83. HoSang, *Racial Propositions*, pp. 161, 173-177.

84. «Summary Analysis of the 1994 General Election».

85. HoSang, *Racial Propositions*, pp. 196-197; «Summary Analysis of the 1994 General Election».

86. HoSang, *Racial Propositions*, pp. 212-228, 231-241.

87. Nelson y O'Reilly, «Minorities Become Majority in State, Census Officials Say»; Jill Cowan, «Census Confirms Hispanic Residents Are Now the Biggest Ethnic Group in California», *The New York Times*, 12 de agosto de 2021; «California Voter and Party Profiles», Public Policy Institute of California Fact Sheet, septiembre de 2021. Véase también Pastor, *State of Resistance*, pp. 3, 7.

88. Pastor, *State of Resistance*, p. 129.

89. Jeremy W. Peters, *Insurgency: How Republicans Lost Their Party and Got Everything They Ever Wanted*, Crown, Nueva York, 2022, p. 140.

90. *Ibid.*

91. Véase Rosalind S. Helderman y Jon Cohen, «As Republican Convention Emphasizes Diversity, Racial Incidents Intrude», *The Washington Post*, 29 de agosto de 2012.

92. Stevens, *It Was All a Lie*, p. 174.

93. Elyse Siegel, «Michael Steele: For Decades GOP Pursued ‘Southern Strategy’ That Alienated Minorities», *HuffPost*, 25 de mayo de 2011; Steele, entrevista con los autores, 13 de diciembre de 2021.

94. Shushannah Walshe, «RNC Completes ‘Autopsy’ on 2012 Loss, Calls for Inclusion Not Policy Change», ABC News, 18 de marzo de 2013.

95. Comité Nacional Republicano, «Growth and Opportunity Project», 4 de marzo de 2013.

96. *Ibid.*, pp. 7-8.

97. *Ibid.*, p. 8.

98. *Ibid.*, p. 5.

99. *Ibid.*, pp. 5-8.

100. Tova Wang, *The Politics of Voter Suppression: Defending and Expanding Americans' Right to Vote*, Cornell University Press, Ithaca (Nueva York), 2012; Berman, *Give Us the Ballot*; Carol Anderson, *One Person, No Vote: How Voter Suppression Is Destroying Our Democracy*, Bloomsbury, Nueva York, 2018.

101. Véase «Dissecting the 2008 Electorate: Most Diverse in U. S. History: Overview», Pew Research Center, 30 de abril de 2009; «Dissecting the 2008 Electorate: Most Diverse in U. S. History: Voter Turnout Rates», Pew Research Center, 30 de abril de 2009. Sobre la «coalición de los ascendientes», véase Ronald Brownstein y National Journal, «Analysis: Obama Gambles with Whites», *Atlantic*, 29 de junio de 2012.

102. Berman, *Give Us the Ballot*, p. 22.

103. Anderson, *One Person, No Vote*, pp. 62-63; Berman, *Give Us the Ballot*, pp. 10, 260; Wendy R. Weiser, «Voter Suppression: How Bad? (Pretty Bad)», Brennan Center for Justice, 1 de octubre de 2014.

104. Benjamin Highton, «Voter Identification Laws and Turnout in the United States», *Annual Review of Political Science*, 20, 2017, pp. 151-158.

105. *Ibid.*, p. 153.

106. Lorraine C. Minnite, *The Myth of Voter Fraud*, Cornell University Press, Ithaca (Nueva York), 2011; Richard L. Hasen, *The Voting Wars: From Florida 2020 to the Next Election Meltdown*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 2012, pp. 52-62; Justin Levitt, «The Truth About Voter Fraud», Brennan Center for Justice, 2007.

107. Hasen, *Voting Wars*, pp. 52-53; Minnite, *Myth of Voter Fraud*, pp. 86-128.

108. Keesha Gaskins y Sundeep Iyer, «The Challenge of Obtaining Voter Identification», Brennan Center for Justice, julio de 2012.

109. *Ibid.*

110. Weiser, «Voter Suppression», p. 5; Berman, *Give Us the Ballot*, p. 266.

111. Wang, *Politics of Voter Suppression*, p. 3.

112. Anderson, *One Person, No Vote*, p. 118.

113. Wang, *Politics of Voter Suppression*, p. 2; Anderson, *One Person, No Vote*, p. 119.

114. Véase Michael Cooper y Jo Craven McGinty, «Florida's New Election Law Blunts Voter Drives», *The New York Times*, 27 de marzo de 2012.

115. Véase Abby Goodnough, «In a Break from the Past, Florida Will Let Felons Vote», *The New York Times*, 6 de abril de 2007; *Give Us the Ballot*, p. 263.

116. Anderson, *One Person, No Vote*, pp. 94, 118.

117. Berman, *Give Us the Ballot*, p. 291.

118. *Ibid.*; Anderson, *One Person, No Vote*, p. 68.

119. Berman, *Give Us the Ballot*, p. 295; Weiser, «Voter Suppression», p. 4.

120. Anderson, *One Person, No Vote*, p. 68.

121. Stevens, entrevista con los autores, 29 de abril de 2022.

122. Véase Michael Wines, «Some Republicans Acknowledge Leveraging Voter ID Laws for Political Gain», *The New York Times*, 16 de septiembre de 2016.

123. Wendy R. Weiser y Erik Opsal, «The State of Voting in 2014», Brennan Center for Justice, 17 de junio de 2014.

124. Véase Jason D. Mycoff, Michael W. Wager y David C. Wilson, «The Empirical Effects of Voter ID Laws: Present or Absent?», *PS: Political Science and Politics*, 42, n.º 1, enero de 2009, pp. 121-126; Highton, «Voter Identification Laws and Turnout in the United States», pp. 149-167; Nicholas A. Valentino y Fabian G. Neuner, «Why the Sky Didn't Fall: Mobilizing Anger in Reaction to Voter ID Laws», *Political Psychology*, 38, n.º 2, 2017, pp. 331-350; Justin Grimmer *et al.*, «Obstacles to Estimating Voter ID Laws' Effects on Turnout», *Journal of Politics*, 80, n.º 3, 2018, pp. 1045-1051; Justin Grimmer y Jesse Yoder, «The Durable Differential Deterrent Effects of Strict Photo Identification Laws», *Political Science Research and Methods*, 10, n.º 3, 2022, pp. 453-469.

125. Véase «Margarito Banned for One Year over 'Loaded' Gloves», *The Guardian*, 11 de febrero de 2009.

126. Véase Ashley Jardina, *White Identity Politics*, Cambridge University Press, Nueva York, 2019; Jones, *End of White Christian America*.

127. Lawrence D. Bobo, «Inequalities That Endure? Racial Ideology, American Politics, and the Peculiar Role of the Social Sciences», en *The Changing Terrain of Race and Ethnicity*, Maria Krysan y Amanda E. Lewis (eds.), Russell Sage Foundation, Nueva York, 2004; Hochschild, Weaver y Burch, *Creating a New Racial Order*.

128. Jardina, *White Identity Politics*, pp. 22, 35-36.

129. Joel Olson, «Whiteness and the Polarization of American Politics», *Political Research Quarterly*, 61, n.º 4, diciembre de 2008, p. 708.

130. Du Bois, *Black Reconstruction in America*, p. 700.

131. Hochschild, Weaver y Burch, *Creating a New Racial Order*; Jardina, *White Identity Politics*.

132. Olson, «Whiteness and the Polarization of American Politics», pp. 704-718; Justin Gest, *The New Minority: White Working Class Politics in an Age of Immigration and Inequality*, Oxford University Press, Nueva York, 2016; Arlie Russell Hochschild, *Strangers in Their Own Land: Anger and Mourning on the American Right*, New Press, Nueva York, 2018; Jardina, *White Identity Politics*.

133. Jones, *End of White Christian America*, p. 86.

134. Gest, *New Minority*, p. 16; Hochschild, *Strangers in Their Own Land*, pp. 137-139; Jardina, *White Identity Politics*, p. 153.

135. Olson, «Whiteness and the Polarization of American Politics»; Jardina, *White Identity Politics*, p. 153.

136. Gest, *New Minority*, p. 16; Hochschild, *Strangers in Their Own Land*, pp. 137-139; Rogers M. Smith y Desmond King, «White Protectionism in America», *Perspectives on Politics*, 19, n.º 2, junio de 2021, pp. 460-478.

137. Michael I. Norton y Samuel R. Sommers, «Whites See Racism as a Zero-Sum Game That They Are Now Losing», *Perspectives on Psychological Science*, 6, n.º 3, 2011, pp. 215-218; Alex Samuels y Neil Lewis Jr., «How White Victimhood Fuels Republican Politics», FiveThirtyEight, 21 de marzo de 2022.

138. Michael Tesler, *Post-racial or Most Racial? Race and Politics in the Obama Era*, University of Chicago Press, Chicago, 2016.

139. *Ibid.*, pp. 47-63.

140. *Ibid.*

141. Véase Philip S. Gorski y Samuel L. Perry, *The Flag and the Cross: White Christian Nationalism and the Threat to American Democracy*, Oxford University Press, Nueva York, 2022; Andrew L. Whitehead y Samuel L. Perry, *Taking America Back for God: Christian Nationalism in the United States*, Oxford University Press, Nueva York, 2020.

142. Véase Philip Gorski, «Christianity and Democracy After Trump», Political Theology Network, 18 de julio de 2018.

143. Whitehead y Perry, *Taking America Back for God*, p. 10; Gorski, «Christianity and Democracy After Trump».

144. Gorski y Perry, *The Flag and the Cross*, 10, pp. 84-85. De hecho, entre los cristianos evangélicos, los menos practicantes eran más proclives a apoyar a Donald Trump en 2016 que quienes atendían el culto frecuentemente. Véase Gorski, «Christianity and Democracy After Trump».

145. Véase Gorski, «Christianity and Democracy After Trump».

146. En cuanto a los orígenes del Tea Party, véase Theda Skocpol y Vanessa Williamson, *The Tea Party and the Remaking of Republican Conservatism*, Oxford University Press, Nueva York, 2012; Christopher Parker y Matt A. Barreto, *Change They Can't Believe In: The Tea Party and Reactionary Politics in America*, Princeton (Nueva Jersey), Princeton University Press, 2013.

147. Para leer estimaciones, véase Skocpol y Williamson, *Tea Party and the Remaking of American Conservatism*, p. 22; Parker y Barreto, *Change They Can't Believe In*, p. 242.

148. Skocpol y Williamson, *Tea Party and the Remaking of American Conservatism*, pp. 76-82; Parker y Barreto, *Change They Can't Believe In*; Rachel M. Blum, *How the Tea Party Captured the GOP: Insurgent Factions in American Politics*, University of Chicago Press, Chicago, 2020, pp. 95-97.

149. Skocpol y Williamson, *Tea Party and the Remaking of American Conservatism*, pp. 57-58, 69-72; Parker y Barreto, *Change They Can't Believe In*, pp. 165-72; Blum, *How the Tea Party Captured the GOP*, pp. 64-95.

150. Parker y Barreto, *Change They Can't Believe In*, p. 249. También pp. 3, 245, 257.

151. Citado en Jardina, *White Identity Politics*, p. 219.

152. Citado en *ibid.*

153. Maxwell y Shields, *Long Southern Strategy*; Abramowitz, *Great Alignment*.

154. Abramowitz, *Great Alignment*, pp. 130-131.

155. Lawrence R. Jacobs, *Democracy Under Fire: Donald Trump and the Breaking of American History*, Oxford University Press, Oxford, 2022, pp. 163-188.

156. Sam Rosenfeld y Daniel Schlozman, «The Hollow Parties», en *Can America Govern It self?*, Frances Lee y Nolan McCarty (eds.), Cambridge University Press, Cambridge (R. U.), 2019, pp. 120-151; Hacker y Pierson, *Let Them Eat Tweets*.

157. Tony Fabrizio, citado en Peters, *Insurgency*, p. 18.

158. *Ibid.*, pp. 143-144.

159. *Ibid.*

160. Véase Jon Cohen y Dan Balz, «Poll: Immigration a Quandary for Republicans», *The Washington Post*, 23 de julio de 2013.

161. Citado en Peters, *Insurgency*, p. 223.

162. Citado en *ibid.*, p. 224.

163. *Ibid.*, pp. 180-181.

164. *Ibid.*, pp. 256-261.

165. Jardina, *White Identity Politics*, p. 45.

166. *Ibid.*, pp. 230-245; Tahema Lopez Bunyasi, «The Role of Whiteness in the 2016 Presidential Primaries», *Perspectives on Politics*, 17, n.º 3, septiembre de 2019; Brenda Major, Alison Blodorn y Gregory Major Blascovich, «The Threat of Increasing Diversity: Why Many White Americans Support Trump in the 2016 Presidential Election», *Group Processes and Intergroup Relations*, 21, n.º 6, 2018, pp. 931-940; Mutz, «Status Threat, Not Economic Hardship, Explains the 2016 Presidential Vote»; Michael Tesler y John Sides, «How Political Science Helps Explain the Rise of Trump: The Role of White Identity and Grievances», *The Washington Post*, 3 de marzo de 2016.

167. Matthew Continetti en *The Ezra Klein Show*, «Donald Trump Didn’t Hijack the G. O. P. He Understood It», *The New York Times*, 6 de mayo de 2022.

168. See Nathaniel Rakich, «Congressional Republicans Left Office in Droves Under Trump. Just How Conservative Are Their Replacements?», FiveThirtyEight, 27 de abril de 2021.

169. Véase Larry Schack y Mick McWilliams, «Project Home Fire/ Center for Politics Research Reveals Outsized Role Immigration Plays in Fueling Our National Divide», *Sabato's Crystal Ball*, UVA Center for Politics, 7 de octubre de 2021.

170. Véase Hawes Spencer y Sheryl Gay Stolberg, «White Nationalists March on University of Virginia», *The New York Times*, 11 de agosto de 2017.

171. Véase Tim Arango, Nicholas Bogel-Burroughs y Katie Benner, «Minutes Before El Paso Killing, Hate-Filled Manifesto Appears Online», *The New York Times*, 3 de agosto de 2019; Alan Feuer, «How Buffalo Suspect's Racist Writings Reveal Links to Other Attacks», *The New York Times*, 16 de mayo de 2022.

172. Esta expresión hace referencia a la forma en que un proceso migratorio tiende a replicarse desde una zona de origen más o menos concreta a un lugar de destino. Se trata de un término sociológico descriptivo que perdió su neutralidad durante la campaña de Trump. Aunque no es lo mismo, en España se suele hablar (despectivamente) de un supuesto proceso similar, el llamado «efecto llamada».

173. Véase Ian Schwartz, «Laura Ingraham: Democrats Want to Replace American Voters with Newly Amnestied Citizens», RealClearPolitics, 17 de octubre de 2018.

174. Véase el interactivo *The New York Times’s Tucker Carlson Tonight*.

175. Citado en Jonathan Chair, «Yes, Tucker Carlson Shares Blame for the Buffalo Supermarket Attack. The White Nationalist's Allies Mount an Unconvincing Defense», *Intelligencer*, 16 de mayo de 2022.

176. Véase Daniel A. Cox, «After the Ballots Are Counted: Conspiracies, Political Violence, and American Exceptionalism: Findings from the January 2021 American Perspectives Survey», Survey Center on American Life, American Enterprise Institute, 11 de febrero de 2021.

177. Véase Alan Yuhas, «Trump Says He May Not Accept Result if Clinton Wins, in Reversal from Debate», *The Guardian*, 1 de octubre de 2016; Jeremy Diamond, «Donald Trump: 'I Will Totally Accept' Election Results 'if I Win'», CNN, 20 de octubre de 2016.

178. «Trump Claims Millions Voted Illegally in Presidential Poll», BBC, 28 de noviembre de 2016.

179. Mark Bowden y Matthew Teague, *The Steal*, Atlantic Monthly Press, Nueva York, 2022, pp. 2-3.

180. Bob Woodward y Robert Costa, *Peril*, Simon & Schuster, Nueva York, 2021, p. 131.

181. Bowden y Teague, *Steal*, p. 3; Kevin Liptak, «A List of the Times Trump Has Said He Won't Accept the Election Results or Leave Office if He Loses», CNN, 24 de septiembre de 2020.

182. Citado en Bowden y Teague, *Steal*, p. 82.

183. Woodward y Costa, *Peril*, pp. 144, 153, 288.

184. Para más detalles sobre esta campaña, véase Bowden y Teague, *Steal*; Woodward y Costa, *Peril*; y Jonathan Karl, *Betrayal: The Final Act of the Trump Show*, Dutton, Nueva York, 2021.

185. Bowden y Teague, *Steal*, pp. 202-203.

186. Citado en Woodward y Costa, *Peril*, pp. 151-152. Véase Betsy Woodruff Swan, «Read the Never-Issued Trump Order That Would Have Seized Voting Machines», *Politico*, 25 de enero de 2022; y Alan Feuer *et al.*, «Trump Had Role in Weighing Proposals to Seize Voting Machines», *The New York Times*, 31 de enero de 2022.

187. Karl, *Betrayal*, pp. 258, 266, 271; Woodward y Costa, *Peril*, pp. 230, 238-239.

188. Véase Katie Benner, «Justice Dept. Is Reviewing Role of Fake Trump Electors, Top Official Says», *The New York Times*, 25 de enero de 2022.

189. Jamie Gangel y Jeremy Herb, «Memo Shows Trump Lawyer's Six-Step Plan for Pence to Overturn the Election», CNN, 21 de septiembre de 2021; Karl, *Betrayal*, pp. 259-260; Woodward y Costa, *Peril*, pp. 209-212; Richard L. Hasen, «Identifying and Minimizing the Risk of Election Subversion and Stolen Elections in the Contemporary United States», *Harvard Law Review Forum*, 135, 2022, pp. 273-274.

190. Andrew Solender, «Just 25 Republicans in Congress Have Acknowledged Biden’s Win Since Electoral College Vote», *Forbes*, 17 de diciembre de 2020.

191. Véase «GOP Democracy Report Card», Republican Accountability, <accountability.gop/report-card/>.

192. Véase Karen Yourish, Larry Buchanan y Denise Lu, «The 147 Republicans Who Voted to Overturn Election Results», *The New York Times*, 7 de enero de 2021.

193. Véase Matthew Choi, «Georgia Elections Official Says Lindsey Graham Looked for Way to Exclude Some Legal Ballots», *Politico*, 16 de noviembre de 2020.

194. Aaron Blake, «The Big Disconnect Between Mike Lee's Words and His Actions», *The Washington Post*, 18 de abril de 2022.

195. Véase Michael Kranish, «Inside Ted Cruz's Last-Ditch Battle to Keep Trump in Power», *The Washington Post*, 28 de marzo de 2022.

196. Véase Nick Corasaniti, Karen Yourish y Keith Collins, «How Trump's 2020 Election Lies Have Gripped State Legislatures», *The New York Times*, 22 de mayo de 2022.

197. *Ibid.*

198. El papel tornasol es una herramienta que se usa en el ámbito de la química para medir el pH de una sustancia. En Estados Unidos se denomina «test de tornasol» (*litmus test*) al mecanismo que permite evaluar el nivel democrático de un candidato.

199. Zack Beauchamp, «The Big Lie Is the GOP’s One and Only Truth», *Vox*, 21 de mayo de 2021; Ashley Parker y Marianna Sotomayor, «For Republicans, Fealty to Trump’s Election Falsehood Becomes Defining Loyalty Test», *The Washington Post*, 2 de mayo de 2021.

200. Véase Michael Gerson, «The Threat of Violence Now Infuses GOP Politics. We Should All Be Afraid», *The Washington Post*, 20 de mayo de 2021.

201. Véase Luke Broadwater y Matthew Rosenberg, «Republican Ties to Extremist Groups Are Under Scrutiny», *The New York Times*, 10 de junio de 2021; Catie Edmondson, «Marjorie Taylor Greene's Controversies Are Piling Up. Republicans Are Quiet», *The New York Times*, 25 de mayo de 2021; Felicia Sonmez, «Rep. Paul Gosar Tweets Altered Anime Video Showing Him Killing Rep. Ocasio-Cortez and Attacking President Biden», *The Washington Post*, 8 de noviembre de 2021.

202. Craig Mauger y Beth Leblanc, «Trump Tweets ‘Liberate’ Michigan, Two Other States with Dem Governors», *Detroit News*, 17 de abril de 2020; Lois Beckett, «Armed Protesters Demonstrate Against COVID-19 Lockdown at Michigan Capitol», *The Guardian*, 30 de abril de 2020; Kathleen Gray, «In Michigan, a Dress Rehearsal for the Chaos at the Capitol on Wednesday», *The New York Times*, 9 de enero de 2021.

203. Véase Mauger y Leblanc, «Trump Tweets ‘Liberate’ Michigan, Two Other States with Dem Governors».

204. Katelyn Burns, «Armed Protesters Entered Michigan's State Capitol During Rally Against Stay-at-Home Order», *Vox*, 30 de abril de 2020; Beckett, «Armed Protesters Demonstrate Against COVID-19 Lockdown at Michigan Capitol».

205. Véase Emily Singer, «Republicans Encourage Violence Against Protesters amid Anti-racism Demonstrations», *American Independent*, 4 de septiembre de 2020.

206. Doha Madani, «Matt Gaetz Tweet on Hunting Antifa Hit with Warning from Twitter for Glorifying Violence», MSNBC, 2 de junio de 2020.

207. Véase David Smith, «Why Republicans Are Embracing Kyle Rittenhouse as Their Mascot», *The Guardian*, 27 de noviembre de 2021; John Fritze, Kevin Johnson y David Jackson, «Trump Defends Kyle Rittenhouse on Eve of Visit to Kenosha», *USA Today*, 31 de agosto de 2020.

208. Véase Smith, «Why Republicans Are Embracing Kyle Rittenhouse as Their Mascot».

209. Joan E. Greve, «St. Louis Couple Who Threatened Black Lives Matter Protesters Speak at RNC», *The Guardian*, 25 de agosto de 2020.

210. Véase Michael Wines, «Here Are the Threats Terrorizing Election Workers», *The New York Times*, 3 de diciembre de 2020; Linda So y Jason Szep, «U. S. Election Workers Get Little Help from Law Enforcement as Terror Threats Mount», Reuters, 8 de septiembre de 2021. Véase también Bowden y Teague, *Steal*.

211. «Local Election Officials Survey», Brennan Center for Justice, 22 de marzo de 2022, pp. 6, 19.

212. Véase Rich Kremer, «County Republican Parties Facing Scrutiny over Online Rhetoric in Wake of Insurrection», Wisconsin Public Radio, 12 de enero de 2021.

213. Véase Alana Wise, «DOD Took Hours to Approve National Guard Request During Capitol Riot, Commander Says», NPR, 3 de marzo de 2021.

214. Woodward y Costa, *Peril*, p. 256.

215. Karl, *Betrayal*, p. 339.

216. Libby Cathey, «Trump’s Attempts to Discredit Jan. 6 Committee Being Put to Test Thursday», ABC News, 9 de junio de 2022.

217. Véase Cristina Marcos, «GOP Efforts to Downplay Danger of Capitol Riot Increase», *Hill*, 21 de mayo de 2021.

218. Véase Allison Pecorin, «GOP Sen. Ron Johnson Says He Didn't Feel 'Threatened' by Capitol Marchers but May Have if BLM or Antifa Were Involved», ABC News, 13 de marzo de 2021.

219. Véase Eugene Scott, «White House Condemns Greene over Claim She Would Have 'Won' Jan. 6 Insurrection», *The Washington Post*, 12 de diciembre de 2022.

220. Véase Jonathan Weisman y Reid J. Epstein, «G. O. P. Declares Jan. 6 Attack 'Legitimate Political Discourse'», *The New York Times*, 4 de febrero de 2022.

221. Paul Waldman, «Elite Republicans Are Now Openly Encouraging Political Violence», *The Washington Post*, 20 de junio de 2022.

222. Véase Katie Glueck, Azi Paybarah y Leah Askarinam, «In More Than 100 G. O. P. Midterm Ads This Year: Guns, Guns, Guns», *The New York Times*, 27 de mayo de 2022.

223. Cristina Marcos, «Cheney in Defiant Floor Speech: Trump on ‘Crusade to Undermine Our Democracy’», *Hill*, 11 de mayo de 2021.

224. Véase John Eligon y Thomas Kaplan, «These Are the Republicans Who Supported Impeaching Trump», *The New York Times*, 17 de septiembre de 2021.

225. Jonathan Martin y Alexander Burns, *This Will Not Pass: Trump, Biden, and the Battle for America's Future*, Simon & Schuster, Nueva York, 2022, pp. 432-433; «Wyoming GOP Votes to Stop Recognizing Cheney as a Republican», Associated Press, 15 de noviembre de 2021.

226. Martin y Burns, *This Will Not Pass*, pp. 338-341, 217-218.

227. Karl, *Betrayal*, pp. 240-241; Martin y Burns, *This Will Not Pass*, p. 127.

228. Véase Alexander Burns y Jonathan Martin, «’I’ve Had It with This Guy’: G. O. P. Leaders Privately Blasted Trump After Jan. 6», *The New York Times*, 21 de abril de 2022; Martin y Burns, *This Will Not Pass*, pp. 222-223, 230-232.

229. Woodward y Costa, *Peril*, p. 342.

230. Véase Burns y Martin, «'I've Had It with This Guy'»; Martin y Burns, *This Will Not Pass*, pp. 222-223.

231. Véase Burns y Martin, «'I've Had It with This Guy'»; Martin y Burns, *This Will Not Pass*, pp. 218, 230-231.

232. Martin y Burns, *This Will Not Pass*, pp. 245-246.

233. Karl, *Betrayal*, pp. 331-333.

234. Véase Paul LeBlanc, «McConnell Says He'll 'Absolutely' Support Trump in 2024 if He's the GOP Nominee», CNN, 25 de febrero de 2021; y Carly Roman, «Kevin McCarthy: Trump Wants Me to Be Speaker», *The Washington Examiner*, 19 de junio de 2021.

235. Martin y Burns, *This Will Not Pass*, p. 361.

236. *Ibid.*, pp. 226, 244.

237. Karl, *Betrayal*, pp. 243-244.

238. Deborah L. Norden, *Military Rebellion in Argentina: Between Coups and Consolidation*, University of Nebraska Press, Lincoln, 1996, pp. 117-119.

239. *Ibid.*

240. *Ibid.*, pp. 136-137.

241. José Luis Manzano (exlíder peronista), entrevista con Levitsky, 19 de enero de 2022.

242. *Ibid.*

243. Mario Wainfeld (periodista y antiguo activista peronista), entrevista con Levitsky, 21 de diciembre de 2021.

244. *Ibid.*; Manzano, entrevista con Levitsky, 19 de enero de 2022.

245. *Ibid.*

246. Manzano, entrevista con Levitsky, 19 de enero de 2022.

247. Wainfeld, entrevista con Levitsky, 21 de diciembre de 2021.

248. *Ibid.*

249. Manzano, entrevista con Levitsky, 19 de enero de 2022.

250. *Ibid.*

251. Véase «GOP Democracy Report Card».

252. *Ibid.*

1. Zelizer, *Fierce Urgency of Now*, p. 209.



2. Se determinaba mediante una fórmula del artículo 4 de la *Voting Rights Act* (Ley de Derecho al Voto) (1965) si una jurisdicción requería de verificación previa.

3. Steven V. Roberts, «Voting Rights Act Renewed in Senate by Margin of 85-8», *The New York Times*, 19 de junio de 1982.

4. Carl Hulse, «By a Vote of 98-0, Senate Approves 25-Year Extension of Voting Rights Act», *The New York Times*, 21 de julio de 2006.

5. Drosenfeld, «July 20, 2006: Mitch McConnell Votes to Re-authorize the Voting Rights Act», C-SPAN, 28 de julio de 2020.

6. «Public Opinion on the Voting Rights Act», Roper Center for Public Opinion Research, 6 de agosto de 2015.

7. Vann R. Newkirk II, «How *Shelby County v. Holder* Broke America», *Atlantic*, 10 de julio de 2018.

8. Linda Greenhouse, *Justice on the Brink: A Requiem for the Supreme Court*, Random House, Nueva York, 2021, p. 13.

9. Véase Caterina Feder y Michael G. Miller, «Voter Purges After Shelby», *American Politics Research*,46, n.º 6, 2020, pp. 687-692; Matt Vasilogambros, «Polling Places Remain a Target Ahead of November Elections», Pew Charitable Trusts, 4 de septiembre de 2018.

10. Ari Berman, «Eight Years Ago, the Supreme Court Gutted the Voting Rights Act. Widespread Voter Suppression Resulted», *Mother Jones*, 25 de junio de 2021.

11. John Lewis *et al.*, «John Lewis and Others React to the Supreme Court’s Voting Rights Act Ruling», *The Washington Post*, 25 de junio de 2013.

12. Caitlin Oprysko, «House Passes Voting Rights Package Aimed at Restoring Protections», *Politico*, 6 de diciembre de 2019.

13. Marianne Levine, «McConnell Won’t Allow Vote on Election Reform Bill», *Politico*, 6 de marzo de 2019.

14. Luke Broadwater, «After Death of John Lewis, Democrats Renew Push for Voting Rights Law», *The New York Times*, 21 de julio de 2020.

15. «Read the Full Transcript of Obama’s Eulogy for John Lewis», *The New York Times*, 30 de julio de 2020.

16. Mike DeBonis, «Senate Republicans Block Debate on a Third Major Voting Rights Bill», *The Washington Post*, 3 de noviembre de 2021.

17. Grace Panetta, «What’s in the Major Voting Rights Bill That Senate Republicans Voted to Block», *Insider*, 20 de enero de 2022.

18. Adam Eichen y Kevin Rissmiller, «A Majority of Americans Support Fixing the Filibuster to Pass the Freedom to Vote: John R. Lewis Act», Data for Progress, 19 de enero de 2022.

19. «National Tracking Poll 2201029», Morning Consult y Politico, enero de 2022.

20. Nicholas Reimann, «Sinema Won't Support Eliminating Filibuster — Effectively Killing Democrats' Voting Rights Bill», *Forbes*, 13 de enero de 2022.

21. La frase «no hechas para la democracia» está extraída de Jamelle Bouie, «American Power, Prosperity, and Democracy» (conferencia, LaFollette Forum, University of Wisconsin–Madison, Madison, 4 de mayo de 2022).

22. Nate Silver, «The Senate's Rural Skew Makes It Very Hard for Democrats to Win the Supreme Court», FiveThirtyEight, 20 de septiembre de 2020.

23. Paul Starr, *Entrenchment: Wealth, Power, and the Constitution of Democratic Societies*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 2019, p. 118.

24. *West Virginia State Board of Education v. Barnette*, 319 U. S., 1943, pp. 624, 638.

25. *Ibid.*

26. Noah Feldman, *Scorpions: The Battles and Triumphs of FDR's Great Supreme Court Justices*, Hachette, Nueva York, 2010, p. 179.

27. *Ibid.*

28. *Ibid.*, p. 185.

29. *Barnette*, 319 U. S., p. 638.

30. Akhil Reed Amar, *The Bill of Rights: Creation and Reconstruction*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 2008; Ronald Dworkin, *Freedom's Law: The Moral Reading of the American Constitution*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1996; Richard Fallon, «The Core of an Uneasy Case for Judicial Review», *Harvard Law Review*, 121, n.º 7, mayo de 2008, p. 1700.

31. John Hart Ely, *Democracy and Distrust: A Theory of Judicial Review*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 1980; Robert Post y Reva Siegel, «Popular Constitutionalism, Departmentalism, and Judicial Supremacy», *California Law Review*, 92, 2004.

32. Starr, *Entrenchment*, p. 106.

33. Donald Lutz, «Toward a Theory of Constitutional Amendment», *American Political Science Review*, 88, n.º 2, junio de 1994, p. 363. Véase también Melissa Schwartzberg, *Counting the Many: The Origins and Limits of Supermajority Rule*, Cambridge University Press, Nueva York, 2014, pp. 187-188.

34. Isabel Kershner, «A Proposal to Overhaul the Judiciary Is Roiling Israel. What Is the Plan?», *The New York Times*, 14 de febrero de 2023.

35. Patrick Kingsley, «Netanyahu Surges Ahead with Judicial Overhaul, Prompting Fury in Israel», *The New York Times*, 12 de enero de 2023.

36. Uno de los analistas más importantes acerca de los métodos para equilibrar mayorías y derechos de las minorías en diferentes democracias es Arend Lijphart, *Patterns of Democracy: Government Forms and Performance in Thirty-six Countries*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 1999.

37. Véase Robert A. Dahl, *Democracy and Its Critics*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 1989, pp. 155-156.

38. Véase *ibid.*

39. En los sistemas presidenciales, esto implica que los candidatos que logren una mayoría relativa o absoluta deben ser quienes ganen; en las democracias parlamentarias, los Gobiernos tienen que disponer del apoyo (explícito o implícito) de partidos que representen una mayoría electoral.

40. Véase Schwartzberg, *Counting the Many*.

41. *Ibid.*, 142-144.

42. Véase Duncan McCargo, «Democratic Demolition in Thailand», *Journal of Democracy*, 30, n.º 4, octubre de 2019, pp. 119-133.

43. Pamela Constable y Arturo Valenzuela, *A Nation of Enemies: Chile Under Pinochet*, W. W. Norton, Nueva York, 1991, pp. 313-316.

44. Andrew Coan, «The Dead Hand Revisited», *Emory Law Journal*, 7, 2020.

45. John Locke, citado en Stephen Holmes, *Passions and Constraint: On the Theory of Liberal Democracy*, University of Chicago Press, Chicago, 1995, p. 140.

46. Holmes, *Passions and Constraint*, p. 140.

47. Jefferson a Madison, 6 de septiembre de 1789, citado en Zachary Elkins, Tom Ginsburg y James Melton, *The Endurance of National Constitutions*, Nueva York, Cambridge University Press, 2009, p. 1.

48. Elkins, Ginsburg y Melton, *Endurance of National Constitutions*, p. 1.

49. Citado en *ibid.*, p. 13.

50. Starr, *Entrenchment*, p. 106.

51. Michael Klarman, *The Framers' Coup: The Making of the United States Constitution*, Oxford University Press, Nueva York, 2016, p. 628.

52. *Ibid.*

53. Levinson, *Our Undemocratic Constitution*, p. 165.

54. James MacGregor Burns, *Packing the Court: The Rise of Judicial Power and the Coming Crisis of the Supreme Court*, Penguin Press, Nueva York, 2009, pp. 145-152.

55. Robert Dahl, *How Democratic Is the American Constitution?*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 2002, pp. 18-19.

56. Mickey, *Paths Out of Dixie*; Edward Gibson, *Boundary Control: Subnational Authoritarianism in Federal Democracies*, Cambridge University Press, Nueva York, 2013.

57. Elkins, Ginsburg y Melton, *Endurance of National Constitutions*, pp. 141-142; Steven L. Taylor *et al.*, *A Different Democracy: American Government in a Thirty-One-Country Perspective*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 2014, pp. 79-81.

58. Gordon Wood, *The Radicalism of the American Revolution*, Vintage Books, Nueva York, 1991.

59. Woody Holton, *Unruly Americans and the Origins of the Constitution*, Farrar, Straus and Giroux, Nueva York, 2007.

60. Klarman, *Framers' Coup*,, pp. 228, 244-245; Dahl, *How Democratic Is the American Constitution?*, p. 68.

61. Klarman, *Framers’ Coup*, pp. 243-244.

62. David Brian Robertson, *The Constitution and America’s Destiny*, Cambridge University Press, Nueva York, 2005, pp. 101-102.

63. Klarman, *Framers' Coup*, pp. 126-127.

64. Linda Colley, *The Gun, the Ship, and the Pen: Warfare, Constitutions, and the Making of the Modern World*, Liveright, Nueva York, 2021; Klarman, *Framers' Coup*.

65. Guillermo O'Donnell y Philippe C. Schmitter, *Transitions from Authoritarian Rule: Tentative Conclusions About Uncertain Democracies*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 1986.

66. Constable y Valenzuela, *Nation of Enemies*, pp. 311-313.

67. Timothy Sisk, *Democratization in South Africa: The Elusive Social Contract*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 1997.

68. David Waldstreicher, *Slavery's Constitution: From Revolution to Ratification*, Hill and Wang, Nueva York, 2009, pp. 57-104; Klarman, *Framers' Coup*.

69. Klarman, *Framers' Coup*, p. 264.

70. De los cincuenta y cinco delegados de la convención, veinticinco tenían esclavos. *Ibid.*, p. 263.

71. Klarman, *Framers' Coup*, p. 264.

72. Sean Wilentz, *No Property in Man: Slavery and Antislavery at the Nation's Founding*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2019, pp. 2, 5; Klarman, *Framers' Coup*, p. 272.

73. Wilentz, *No Property in Man*, p. 58.

74. *Ibid.*, p. 2.

75. Klarman, *Framers' Coup*, p. 287.

76. Véase Wilentz, *No Property in Man*, pp. 97-98.

77. Klarman, *Framers' Coup*, p. 264; Wilentz, *No Property in Man*, p. 3.

78. Wilentz, *No Property in Man*, pp. 4, 22.

79. Citado en Wilentz, *No Property in Man*, p. 64.

80. Jill Lepore, *These Truths: A History of the United States*, W. W. Norton, Nueva York, 2018, p. 125.

81. David A. Bateman, Ira Katznelson y John S. Lapinski, *Southern Nation: Congress and White Supremacy After Reconstruction*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2018, p. 8.

82. Wilentz, *No Property in Man*, p. 113.

83. Waldstreicher, *Slavery's Constitution*, p. 3.

84. Véase Hamilton, «Federalist n.º 22», en Alexander Hamilton, James Madison y John Jay, *The Federalist, with Letters of "Brutus"*, Terence Ball (ed.), Cambridge University Press, Cambridge (R. U.), 2003, pp. 100-101; Greg Weiner, *Madison's Metronome: The Constitution, Majority Rule, and the Tempo of American Politics*, University Press of Kansas, Lawrence, 2012, pp. 13-14.

85. Hamilton, citado en Dahl, *How Democratic Is the American Constitution?*, pp. 13-14.

86. Hamilton, «Federalist n.º 22», p. 100.

87. *Ibid.*, p. 101.

88. Weiner, *Madison’s Metronome*, p. 14; Klarman, *Framers’ Coup*, p. 185.

89. Klarman, *Framers' Coup*, p. 185.

90. Robertson, *Constitution and America's Destiny*, pp. 83-99.

91. Klarman, *Framers' Coup*, pp. 191-193.

92. *Ibid.*, p. 193.

93. *Ibid.*, p. 194.

94. Agradecemos al propio Michael Klarman (en una comunicación personal) que nos recordara este punto.

95. Dahl, *How Democratic Is the American Constitution?*, pp. 67, 74-76; Wegman, *Let the People Pick the President*, p. 58.

96. Keyssar, *Why Do We Still Have an Electoral College?*, p. 17.

97. *Ibid.*, p. 18; Dahl, *How Democratic Is the American Constitution?*, pp. 70-71.

98. Klarman, *Framers’ Coup*, p. 227.

99. Keyssar, *Why Do We Still Have an Electoral College?*, pp. 19-21.

100. *Ibid.*, p. 19.

101. Klarman, *Framers' Coup*, pp. 228, 244-245; Dahl, *How Democratic Is the American Constitution?*, p. 68.

102. Klarman, *Framers' Coup*, p. 228; Wegman, *Let the People Pick the President*, pp. 70-75.

103. Keyssar, *Why Do We Still Have an Electoral College?*, p. 21; Klarman, *Framers' Coup*, p. 228.

104. Akhil Reed Amar, «Actually the Electoral College Was a Pro-Slavery Play», *The New York Times*, 6 de abril de 2019.

105. Wegman, *Let the People Pick the President*, pp. 57-58.

106. Dahl, *How Democratic Is the American Constitution?*, pp. 74-75.

107. Klarman, *Framers’ Coup*, pp. 230-231.

108. Peter H. Wilson, *The Heart of Europe: A History of the Holy Roman Empire*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2016, pp. 305-307.

109. Josep M. Colomer y Iain McLean, «Electing Popes: Approval Balloting and Qualified-Majority Rule», *Journal of Interdisciplinary History*, 29, n.º 1, 1998, pp. 1-22.

110. Josep M. Colomer, «The Electoral College Is a Medieval Relic. Only the U. S. Still Has One», *The Washington Post*, 11 de diciembre de 2006.

111. Keyssar, *Why Do We Still Have an Electoral College?*, p. 24.

112. Klarman, *Framers' Coup*, p. 228; Wegman, *Let the People Pick the President*, pp. 69-70.

113. Klarman, *Framers' Coup*, p. 231.

114. Véase Dahl, *How Democratic Is the American Constitution?*, pp. 77-79.

115. Alexander Hamilton, «Federalist», n.º 68, p. 331.

116. Burns, *Packing the Court*, pp. 11-12. Véase también Edgar B. Herwick III, «Why Did the Framers Give Lifetime Tenure to Supreme Court Justices?», WGBH, 2 de octubre de 2018.

117. Burns, *Packing the Court*, pp. 7-8.

118. *Ibid.*, p. 8.

119. Tom Ginsburg, «Term Limits and Turnover on the U. S. Supreme Court: A Comparative View», Testimonio ante la Comisión Presidencial en el Tribunal Supremo, 20 de julio de 2021, p. 5.

120. Klarman, *Framers' Coup*, pp. 160-161.

121. Burns, *Packing the Court*, pp. 13-14.

122. Burns, *Vineyard of Liberty*, p. 188.

123. Para una discusión en detalle sobre los orígenes y la evolución del filibusterimso, véase Sarah A. Binder y Steven S. Smith, *Politics or Principle? Filibustering in the United States Senate*, Brookings Institution, Washington, D. C., 1997; Wawro y Schickler, *Filibuster*; y Gregory Koger, *Filibustering: A Political History of Obstruction in the House and Senate*, University of Chicago Press, Chicago, 2010.

124. Véase Binder y Smith, *Politics or Principle?*

125. Citado en Wawro y Schickler, *Filibuster*, p. 8.

126. Binder y Smith, *Politics or Principle?*, p. 11.

127. Koger, *Filibustering*, p. 40.

128. Un ejemplo del apoyo explícito de Madison a la regla de la mayoría como la característica definitoria del «republicanismo» se encuentra en su carta, incluida en *The Mind of the Founder: Sources of the Political Thought of James Madison*, Marvin Meyers (ed.), Bobbs-Merrill, Indianápolis, 1973, pp. 520-530. Véase también Weiner, Madison's Metronome.

129. Citado en Meyers, *Mind of the Founder*, p. 530.

130. Madison, citado en Weiner, *Madison’s Metronome*, p. 16.

131. Hamilton, «Federalist» n.º 22, p. 101.

132. *Ibid.*, p. 102.

133. Binder y Smith, *Politics or Principle?*, pp. 5, 20, 29-33; Adam Jentleson, *Kill Switch: The Rise of the Modern Senate and the Crippling of American Democracy*, Liveright, Nueva York, 2021, p. 27.

134. Binder y Smith, *Politics or Principle?*, p. 35.

135. *Ibid.*, pp. 35-37.

136. *Ibid.*, p. 38.

137. *Ibid.*; Wawro y Schickler, *Filibuster*, p. 14.

138. Citado en Jentleson, *Kill Switch*, p. 47.

139. Binder y Smith, *Politics or Principle?*, p. 39; Koger, *Filibustering*, pp. 62-63; Jentleson, *Kill Switch*, p. 50.

140. Binder y Smith, *Politics or Principle?*, pp. 55-58.

141. *Ibid.*, p. 60; Wawro y Schickler, *Filibuster*, pp. 42-54.

142. Binder y Smith, *Politics or Principle?*, p. 79; Jentleson, *Kill Switch*, pp. 64-65.

143. Binder y Smith, *Politics or Principle?*, p. 79.

144. Jentleson, *Kill Switch*, p. 67.

145. Koger, *Filibustering*, pp. 54-58.

146. *Ibid.*, pp. 179-180; Jentleson, *Kill Switch*, p. 212.

147. Koger, *Filibustering*, pp. 179-187; Wawro y Schickler, *Filibuster*, p. 180; Jentleson, *Kill Switch*, p. 212.

148. Wawro y Schickler, *Filibuster*, p. 259.

149. Koger, *Filibustering*, p. 3.

150. Louis Hartz, *The Liberal Tradition in America* (1952), Harcourt, Nueva York, 1991, p. 129.

1. «Die Junker gegen das Volk», *Vorwärts*, 23 de febrero de 1909, p. 1.

2. «Stenographischer Bericht über die 16 General-Versammlung des Bund der Landwirte», *Korrespondenz des Bundes der Landwirte*, 22 de febrero de 1909, p. 70.

3. Hacker y Pierson, *Let Them Eat Tweets*, pp. 172-173.

4. Stanley Suval, *Electoral Politics in Wilhelmine Germany*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 1985, p. 229.

5. George D. Crothers, *The German Elections of 1907*, Columbia University Press, Nueva York, 1941, p. 175.

6. . Dylan Matthews, «You Can't Understand What's Happened to the Senate Without These Two Graphs», *The Washington Post*, 18 de abril de 2013.

7. Margo Anderson, *The American Census: A Social History*, Yale University Press, New Haven (Connecticut), 2015, pp. 133-155.

8. De 1920 hasta los años sesenta, los intereses rurales adquirieron una influencia desproporcionada en la Cámara de Representantes estadounidense. Esta llegó a su fin con dos fallos del Tribunal Supremo de Estados Unidos (el caso Baker contra Carr en 1962 y el caso Reynolds contra Sims en 1964).

9. Stephen Ansolabehere y James M. Snyder, *The End of Inequality: One Person, One Vote and the Transformation of American Politics*, Norton, Nueva York, 2008, pp. 81-82.

10. Véase Jonathan Rodden, *Why Cities Lose*, Basic Books, Nueva York, 2019.

11. *Ibid.*

12. *Ibid.*

13. Suzanne Mettler y Trevor Brown, «The Growing Rural-Urban Political Divide and Democratic Vulnerability», *Annals of the American Academy of Political and Social Science*, 699, n.º 1, 2022, pp. 130-142; Rodden, *Why Cities Lose*.

14. *First-past-the-post* es un término que en español se traduce como «escrutinio mayoritario uninominal». Este es un sistema electoral en el que el votante puede elegir a un único candidato de entre los que se presentan y en el que gana aquel que recibe el mayor número de votos.

15. James MacGregor Burns, *The Deadlock of Democracy: Four-Party Politics in America*, Prentice-Hall, Englewood Cliffs (Nueva Jersey), 1963, pp. 295-296.

16. Nate Cohn, «The Electoral College’s Real Problem: It’s Biased Toward the Big Battlegrounds», *The New York Times*, 22 de marzo de 2019.

17. *Ibid.*

18. Laura Bronner y Nathaniel Rakich, «Advantage, GOP», FiveThirtyEight, 29 de abril de 2021.

19. Frances E. Lee y Bruce I. Oppenheimer, *Sizing Up the Senate: The Unequal Consequences of Equal Representation*, University of Chicago Press, Chicago, 1999, pp. 10-11.

20. Matthews, «You Can’t Understand What’s Happened to the Senate Without These Two Graphs».

21. Véase Stephen Wolf, «How Minority Rule Plagues Senate: Republicans Last Won More Support Than Democrats Two Decades Ago», *Daily Kos*, 23 de febrero de 2021.

22. Estos años se encuentran entre 1996-2001, 2003-2007 y 2015-2020. Los republicanos perdieron brevemente el control del Senado en 2001 cuando el senador de Vermont, James Jeffords, abandonó el partido, pero lo recuperaron en 2002.

23. Bronner y Rakich, «Advantage, GOP».

24. *Ibid.*



25. A cada estado que tiene un senador por partido se le asigna la mitad de su población.

26. Wolf, «How Minority Rule Plagues Senate».

27. Ian Millhiser, «America’s Anti-democratic Senate, in One Number», *Vox*, 6 de enero de 2021.

28. Datos de Stephen Wolf, basados en los resultados preliminares de las elecciones de 2022.

29. Alexander Burns, «Making the Senate Work for Democrats», *The New York Review of Books*, 19 de enero de 2023.

30. Philip Bump, «The Minoritarian Third of the Supreme Court», *The Washington Post*, 2 de diciembre de 2021.

31. *Ibid.*

32. Christopher J. Casillas, Peter K. Enns y Patrick C. Wohlfarth, «How Public Opinion Constrains the U. S. Supreme Court», *American Journal of Political Science*, 55, n.º 1, enero de 2011, pp. 74-88.

33. Stephen Jessee, Neil Malhotra y Maya Sen, «A Decade-Long Longitudinal Survey Shows That the Supreme Court Is Now Much More Conservative Than the Public», *Proceedings of the National Academy of Sciences*, 119, n.º 24, 202, e2120284119.

34. Miriam Seifter, «Countermajoritarian Legislatures», *Columbia Law Review*, 121, n.º 6, 2021, pp. 1733-1800; David Pepper, *Laboratories of Autocracy: A Wake-Up Call from Behind the Lines*, St. Helena Press, Cincinnati, 2021; Jacob Grumbach, *Laboratories Against Democracy: How National Parties Transformed State Politics*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2022. Véase también Christian R. Grose *et al.*, «The Worst Partisan Gerrymanders in U. S. State Legislatures», Schwarzenegger Institute for State and Global Policy, University of Southern California, 4 de septiembre de 2019, p. 2.

35. Rodden, *Why Cities Lose*.

36. Seifter, «Countermajoritarian Legislatures», pp. 1744-1745.

37. *Ibid.*

38. Véase Rodden, *Why Cities Lose*, pp. 131-148.

39. *Ibid.*

40. Richard H. Pildes *et al.*, «Brief of Political Geography Scholars as Amici Curiae in Support of Appellees», Counsel for Amici Curiae, 5 de septiembre de 2017.

41. Rodden, *Why Cities Lose*.

42. David Daley, *Ratf** ked: Why Your Vote Doesn't Count*, Liveright, Nueva York, 2017.

43. *Ibid.*

44. *Ibid.*; Grose *et al.*, «Worst Partisan Gerrymanders in U. S. State Legislatures», p. 1.

45. Daley, *Ratf** ked*, p. 139.

46. Grose *et al.*, «Worst Partisan Gerrymanders in U. S. State Legislatures», p. 3; Pepper, *Laboratories of Autocracy*, p. 104.

47. Seifter, «Countermajoritarian Legislatures», pp. 1762-1763.

48. *Ibid.*, pp. 1764-1765.

49. Grose *et al.*, «Worst Partisan Gerrymanders in U. S. State Legislatures».

50. Frances Lee, *Insecure Majorities: Congress and the Perpetual Campaign*, University of Chicago Press, Chicago, 2016; John Sides, Chris Tausanovich y Lynn Vavreck, *The Bitter End: The 2020 Presidential Campaign and the Challenge to American Democracy*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2022. También: «The Great Mystery of American Politics», *The Economist*, 5 de enero de 2023; y Ezra Klein, «Three Theories That Explain This Strange Moment», *The New York Times*, 12 de noviembre de 2022.

51. Véase Larry Bartels y Christopher Achen, *Democracy for Realists*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2017.

52. Benjamin I. Page y Martin Gilens, *Democracy in America? What Has Gone Wrong and What We Can Do About It*, University of Chicago Press, Chicago, 2020; Jacob S. Hacker y Paul Pierson, *Winner-Take-All Politics: How Washington Made the Rich Richer — and Turned Its Back on the Middle Class*, Simon & Schuster, Nueva York, 2010.

53. Wendy Brown, «Alito’s Dobbs Decision Will Further Degrade Democracy», *The Washington Post*, 27 de junio de 2022.

54. Jonathan Weisman y Jazmine Ulloa, «Supreme Court Throws Abortion to an Unlevel State Playing Field», *The New York Times*, 25 de junio de 2022.

55. «Abortion», Gallup, 2022.

56. «Public Opinion on Abortion», Pew Research Center, 2022.

57. Alexandra Hutzler, «House Passes Bills to Codify Roe, Protect Interstate Travel for Abortion», ABC News, 15 de julio de 2022; «Bill to Protect Abortion Rights Fails to Pass Senate», *Axios*, 11 de mayo de 2022.

58. Elizabeth Nash y Lauren Cross, «26 States Are Certain or Likely to Ban Abortion Without Roe: Here's Which Ones and Why», Guttmacher Institute, 28 de octubre de 2021.

59. Véase Jacob Grumbach y Christopher Warshaw, «In Many States with Antiabortion Laws, Majorities Favor Abortion Rights», *The Washington Post*, 25 de junio de 2022.

60. *Ibid.*

61. Jacob M. Grumbach, «The Supreme Court Just Rolled Democracy Back. You Can Measure How Much», *Politico*, 30 de junio de 2022.

62. «Latido del corazón» en inglés, en referencia a su presencia en un feto como factor para impedir llevar a cabo el aborto, del mismo modo que se ha visto o propuesto en otros países o comunidades autónomas españolas posteriormente.

63. Laura Hancock, «Federal Judge Allows Blocked ‘Heartbeat Bill’ to Take Effect, Banning Abortion Around Six Weeks in Ohio», Cleveland.com, 24 de junio de 2022.

64. Jane Mayer, «State Legislatures Are Torching Democracy», *The New Yorker*, 6 de agosto de 2022.

65. Grumbach, «Supreme Court Just Rolled Democracy Back».

66. Eli Yokley, «After Texas Shooting, Republican and Independent Voters Drive Increase in Support for Gun Control», Morning Consult, 26 de mayo de 2022.

67. Katherine Schaeffer, «Key Facts About Americans and Guns», Pew Research Center, 13 de septiembre de 2021; Frank Newport, «Analyzing Surveys on Banning Assault Weapons», Gallup, 14 de noviembre de 2019; «Guns», Gallup, 2022.

68. Ronald Brownstein, «The Real Reason America Doesn’t Have Gun Control», *Atlantic*, 25 de mayo de 2022.

69. Jentleson, *Kill Switch*, pp. 18-19.

70. *Ibid.*, p. 19.

71. Gabby Birenbaum, «The House Just Passed Universal Background Checks for Gun Sales — Again», *Vox*, 11 de marzo de 2021.

72. Mychael Schnell, «House Passes Bill to Ban Assault Weapons», *Hill*, 29 de julio de 2022.

73. Brianna Herlihy, «Key GOP Senator Says Schumer's Assault Weapons Ban 'No Longer on the Table'», Fox News, 7 de diciembre de 2022.

74. Shawn Salamone, «Baldwin Wallace CRI Poll Finds Broad Support for New Gun Laws in Ohio», Baldwin Wallace University, 22 de marzo de 2018.

75. Mayer, «State Legislatures Are Torching Democracy».

76. Jamelle Bouie, «It's Not Looking Too Good for Government of the People, by the People, and for the People», *The New York Times*, 27 de mayo de 2022.

77. Mads Andreas Elkjær y Torben Iversen, «The Democratic State and Redistribution: Whose Interests Are Served?», *American Political Science Review*, 117, n.º 2, 2022, p. 14.

78. Larry M. Bartels, *Unequal Democracy: The Political Economy of the New Gilded Age*, Russell Sage Foundation, Nueva York, 2008, p. 224.

79. Martha J. Bailey, John DiNardo y Bryan A. Stuart, «The Economic Impact of a High National Minimum Wage: Evidence from the 1966 Fair Labor Standards Act», *Journal of Labor Economics*, 39, n.º S2, 2021, p. S330.

80. Ralph E. Smith y Bruce Vavrichek, «The Minimum Wage: Its Relation to Incomes and Poverty», *Monthly Labor Review,* junio de 1987, pp. 26-27.

81. Bartels, *Unequal Democracy*, p. 226.

82. David Cooper, Elise Gould y Ben Zipperer, «Low-Wage Workers Are Suffering from a Decline in the Real Value of the Federal Minimum Wage», *Economic Policy Institute*, 27 de agosto de 2019, Figura A.

83. Scott A. Wolla, «Would Increasing the Minimum Wage Reduce Poverty?», *Page One Economics*, marzo de 2014.

84. Bartels, *Unequal Democracy*, pp. 230-231; véase también Martin Gilens, *Affluence and Influence: Economic Inequality and Political Power in America*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2012, p. 114.

85. Wesley Lowery, «Senate Republicans Block Minimum Wage Increase Bill», *The Washington Post*, 30 de abril de 2014.

86. Véase Alexa Fernández Campbell, «The $15 Minimum Wage Bill Has All but Died in the Senate», *Vox*, 16 de agosto de 2019.

87. Véase «Poll: Majority of Voters Support $15 Minimum Wage», *The Hill*, 24 de enero de 2019.

88. Amina Dunn, «Most Americans Support a $15 Federal Minimum Wage», Pew Research Center, 22 de abril de 2021.

89. Jennifer De Pinto. «Most Americans Favor a Higher Federal Minimum Wage — CBS News Poll», CBS News, 5 de septiembre de 2021.

90. Emily Cochrane, «Top Senate Official Disqualifies Minimum Wage from Stimulus Plan», *The New York Times*, 25 de febrero de 2021.

91. Véase Matthew Desmond, *Poverty, by America*, Crown, Nueva York, 2023; David Brady, *Rich Democracies, Poor People: How Politics Explains Poverty*, Oxford University Press, Oxford (R. U.), 2009; Jacob Hacker *et al.* (eds.), *The American Political Economy: Politics, Markets, and Power*, Cambridge University Press, Cambridge (R. U.), 2021.

92. Lane Kenworthy y Jonas Pontusson, «Rising Inequality and the Politics of Redistribution in Affluent Countries», *Perspectives on Politics*, 3, n.º 3, 2005, pp. 449-471.

93. Para un repaso a esta cuestión, véase Sheri Berman, «The Causes of Populism in the West», *Annual Review of Political Science*, 24, 2021, pp. 71-88.

94. Gilens, *Affluence and Influence; Brady, Rich Democracies*; Hacker y Pierson, *Winner-Take-All Politics*; Jonas Pontusson, «Unionization, Inequality, and Redistribution», *British Journal of Industrial Relations*, 51, n.º 4, 2013, pp. 797-825.

95. Starr, *Entrenchment*.

96. Jonathan Martin, «In Capital, a G. O. P. Crisis. At the R. N. C. Meeting, a Trump Celebration», *The New York Times*, 8 de enero de 2021.

97. *Ibid.*

98. *Ibid.*

99. *Ibid.*

100. *Ibid.*

101. Brittany Bernstein, «Kevin McCarthy Thanks Trump After Speakership Win: 'I Don't Think Anybody Should Doubt His Influence'», *National Review*, 7 de enero de 2023.

102. Leigh Ann Caldwell y Amy B. Wang, «Greene, Gosar Lost Committee Seats over Comments. Now, They’re Back», *The Washington Post*, 17 de enero de 2023.

103. John Stuart Mill, *On Liberty*, Ticknor and Fields, Boston, 1863, p. 102.

104. Hamilton, Madison y Jay, *The Federalist*, p. 43.

105. Paul Pierson, «Power and Path Dependence», en *Advances in Comparative-Historical Analysis*, James Mahoney y Kathleen Thelen (eds.), Cambridge University Press, Nueva York, 2015, pp. 124-146.

106. Bridgit Bowden y Shawn Johnson, «Wisconsin Republicans' Map Still Stands, but a Supreme Court Case Could Have Changed Everything», Wisconsin Public Radio, 20 de octubre de 2021.

107. Laurel White, «US Supreme Court Ruling Effectively Ends Wisconsin Gerrymandering Challenge», Wisconsin Public Radio, 27 de junio de 2019.

108. Ethan Herenstein y Thomas Wolf, «The ‘Independent State Legislature Theory,’ Explained», Brennan Center for Justice, 6 de junio de 2022.

109. Hasen, «Identifying and Minimizing the Risk of Election Subversion and Stolen Elections in the Contemporary United States», p. 287; J. Michael Luttig, «Opinion: The Republican Blueprint to Steal the 2024 Election», CNN, 27 de abril de 2022.

110. Luttig, «Republican Blueprint to Steal the 2024 Election»; Hasen, «Identifying and Minimizing the Risk of Election Subversion and Stolen Elections in the Contemporary United States», p. 286.

111. Véase Cas Mudde, *The Far Right Today*, Polity Press, Nueva York, 2019.

1. Håvard Friis Nilsen, «Republican Monarchy: The Neo-Roman Concept of Liberty and the Norwegian Constitution of 1814», *Modern Intellectual History*, 16, n.º 1, 2019, pp. 29-56.

2. Ruth Hemstad, *«Like a Herd of Cattle»: Parliamentary and Public Debates Regarding the Cession of Norway, 1813-1814*, Akademisk Publisering, Oslo, 2014.

3. Nilsen, «Republican Monarchy».

4. Ola Mestad, «The Impact of the US Constitution on the Norwegian Constitution and on Emigration to America», en *Norwegian-American Essays 2017*, Terje Mikael Hasle Joranger (ed.), Novus Press, Oslo, 2017.

5. *Ibid.*, p. 3.

6. Nilsen, «Republican Monarchy», p. 39.

7. George Athan Billias, *American Constitutionalism Heard Around the World, 1776-1989*, New York University Press, Nueva York, 2009, p. 144.

8. Mestad, «The Impact of the U. S. Constitution on the Norwegian Constitution and on Emigration to America», p. 36.

9. Nilsen, «Republican Monarchy».

10. Tom Ginsburg y James Melton, «Norway’s Enduring Constitution: Implications for Countries in Transition», International IDEA, Estocolmo, 2014.

11. «Storting» es el nombre que recibe el Parlamento noruego.

12. Bernt Aardal, «Electoral Systems in Norway», en *The Evolution of Electoral and Party Systems in the Nordic Countries*, Bernard Grofman y Arend Lijphart (eds.), Agathon Press, Nueva York, 2002, p. 174.

13. *Ibid.*, p. 178.

14. *Ibid.*, p. 175.

15. *Ibid.*, p. 178.

16. Eivind Smith, «The Rise and Fall of the Quasi-bicameral System of Norway (1814-2007)», en *Reforming Senates: Upper Legislative Houses in North Atlantic Small Powers, 1800-Present*, Nikolaj Bijleveld *et al.* (eds.), Routledge, Londres, 2021.

17. «Norway's Constitution of 1814 with Amendments Through 2004», *Comparative Constitutions Project*.

18. Ginsburg y Melton, «Norway's Enduring Constitution», pp. 13-14.

19. Aardal, «Electoral Systems in Norway», p. 193.

20. Smith, «Rise and Fall of the Quasi-bicameral System of Norway».

21. Ginsburg y Melton, «Norway's Enduring Constitution», p. 9.

22. Oystein Steinlien, «The Sami Law: A Change of Norwegian Government Policy Toward the Sami Minority?», *Canadian Journal of Native Studies*, 9, n.º 1, 1989, pp. 1-14.

23. Rauna Kuokkanen, *Restructuring Relations: Indigenous Self-Determination, Governance, and Gender*, Oxford University Press, Oxford, 2019, p. 80.

24. Ginsburg y Melton, «Norway's Enduring Constitution», p. 9.

25. *Ibid.*

26. «Norway's Constitution of 1814 with Amendments Through 2004».

27. Anine Kierulf, «Norway: Human Rights and Judicial Review Constitutionalized», *Blog of the International Journal of Constitutional Law*, 15 de junio de 2015.

28. Ginsburg y Melton, «Norway's Enduring Constitution», p. 7.

29. José A. Cheibub, Fernando Limongi y Adam Przeworski, «Electing Presidents: A Hidden Facet of Democratization», SSRN Electronic Journal, 2022.

30. Los *rotten boroughs* o ‘burgos podridos’ en castellano son circunscripciones electorales con muy poca población a las que el sistema electoral otorga un número muy elevado de diputados si lo comparamos con otras regiones con una cantidad de ciudadanos mucho mayor.

31. J. A. R. Marriott, *Second Chambers: An Inductive Study in Political Science*, Clarendon Press, Oxford, 1910, pp. 1, 240.

32. Richard Albert, «The Modern Liberum Veto», *Blog of International Journal of Constitutional Law*, 21 de febrero de 2013.

33. Nicholas C. Wheeler, «The Noble Enterprise of State Building: Reconsidering the Rise and Fall of the Modern State in Prussia and Poland», *Comparative Politics*, 44, n.º 1, 2011, p. 31.

34. Hamilton, «Federalist n.º 22», pp. 101-102.

35. Georg Jellinek, «Parliamentary Obstruction», *Political Science Quarterly*, 19, n.º 4, 1904, p. 579.

36. Véase Cheibub, Limongi y Przeworski, «Electing Presidents».

37. Daniele Caramani, *The Societies of Europe*, Macmillan, Londres, 2000, p. 58; el Senado francés, el menos relevante de los dos organismos parlamentarios de Francia, sigue siendo elegido indirectamente mediante jurados electorales.

38. Julian Jackson, *De Gaulle*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2018, p. 505.

39. Cheibub, Limongi y Przeworski, «Electing Presidents», p. 6.

40. Este pasaje se basa en Starr, *Entrenchment*, p. 109. Véase Jonathan Rodden, «Why Did Western Europe Adopt Proportional Representation? A Political Geography Explanation» (manuscrito inédito), Stanford University, 2010; Patrick Emmenegger y André Walter, «Disproportional Threat: Redistricting as an Alternative to Proportional Representation», *Journal of Politics*, 83, n.º 3, 2021, pp. 917-933; Lucas Leemann e Isabela Mares, «The Adoption of Proportional Representation», *Journal of Politics*, 76, n.º 2, 2014, pp. 461-478.

41. Arend Lijphart, *Thinking About Democracy: Power Sharing and Majority Rule in Theory and Practice*, Routledge, Londres, 2008, pp. 125-137.

42. Starr, *Entrenchment*, p. 109.

43. Cifras electorales de F. W. S. Craig, *Electoral Facts: 1885-1975*, Macmillan, Londres, 1976, p. 32.

44. Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy*, p. 146; Iain McLean, *What's Wrong with the British Constitution?*, Oxford University Press, Oxford, 2010, p. 9.

45. Corinne Comstock Weston, *The House of Lords and Ideological Politics: Lord Salisbury's Referendal Theory and the Conservative Party, 1846-1922*, American Philosophical Society, Filadelfia, 1995.

46. Roy Jenkins, *Mr. Balfour's Poodle: An Account of the Struggle Between the House of Lords and the Government of Mr. Asquith*, Heinemann, Londres, 1954.

47. Iain McLean y Jennifer Nou, «Why Should We Be Beggars with the Ballot in Our Hand? Veto Players and the Failure of Land Value Taxation in the United Kingdom, 1909-14», *British Journal of Political Science*, 36, n.º 4, 2006, p. 583.

48. Ziblatt, *Conservative Parties and the Birth of Democracy*, p. 147.

49. *The Parliamentary Debates* (informe oficial), Cámara de los Lores, 4 de julio de 1911, p. 101.

50. La siguiente gran reforma llegó casi un siglo más tarde, con el Gobierno del primer ministro Tony Blair. Sobre esta reforma posterior, véase Meg Russell, *The Contemporary House of Lords: Westminster Bicameralism Revived*, Oxford University Press, Oxford, 2013, p. 34.

51. Louis Massicotte, «Legislative Unicameralism: A Global Survey and a Few Case Studies», *Journal of Legislative Studies*, 7, n.º 1, 2002, p. 151.

52. Peter Bucher (ed.), *Der Verfassungskonvent auf Herrenchiemsee*, Boldt, Boppard, 1981.

53. Sobre los orígenes del Bundesrat en la Alemania imperial, véase Daniel Ziblatt, *Structuring the State: The Formation of Italy and Germany and the Puzzle of Federalism*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2006, p. 137.

54. Michael F. Feldkamp, *Der Parlamentarische Rat 1948-1949: Die Entstehung des Grundgesetzes*, Vandenhoeck & Ruprecht, Göttingen, 2019.

55. *Ibid.*, pp. 80-81.

56. Jon C. Morgan, «Cloture: Its Inception and Usage in the Alabama Senate», *Journal of the American Society of Legislative Clerks and Secretaries*, 17, n.º 1, 2011, pp. 15-34.

57. Robert Laird Borden, *Robert Laird Borden, His Memoirs*, McClelland and Stewart, Toronto, 1969, p. 195.

58. *Ibid.*, pp. 194-195.

59. Mikko Mattila, «From Qualified Majority to Simple Majority: The Effects of the 1992 Change in the Finnish Constitution», *Scandinavian Political Studies*, 20, n.º 4, 1997, p. 332.

60. Matt Qvortrup, *A Comparative Study of Referendums: Government by the People*, 2.ª ed., Manchester University Press, Manchester, 2005, p. 123.

61. Helgi Bernódusson, «Filibustering in the Althingi», comunicado del secretario general del Althingi, Asociación de Secretarios Generales de los Parlamentos, marzo de 2016.

62. *Ibid.*

63. *Ibid.*

64. *Ibid.*

65. Gréta Sigríður Einarsdóttir, «Parliament Operations Changed to Eliminate Filibusters», *Iceland Review*, 11 de septiembre de 2019.

66. Taylor *et al.*, *Different Democracy*, pp. 296-297.

67. James G. Snell y Frederick Vaughan, *The Supreme Court of Canada: History of the Institution*, Osgoode Society, Toronto, 1985, p. 126.

68. Michael Kirby, «Sir Edward McTiernan: A Centenary Reflection», *Federal Law Review*, 20, n.º 2, 1991, p. 180.

69. *Ibid.*

70. George Williams y David Hume, *People Power: The History and Future of the Referendum in Australia*, University of New South Wales Press, Sídney, 2010, p. 158.

71. Alysia Blackham, «Judges and Retirement Ages», *Melbourne University Law Review*, 39, 2016, pp. 752-753. Véase John F. Kowal y Wilfred U. Codrington III, *The People's Constitution: 200 Years, 27 Amendments, and the Promise of a More Perfect Union*, New Press, Nueva York, 2021.

72. Elaine K. Smith, «The Making of an American House of Lords: The U. S. Senate in the Constitutional Convention of 1787», *Studies in American Political Development*, 7, n.º 2, otoño de 1993, pp. 177-224; Kowal y Codrington, *People's Constitution*, pp. 135-140.

73. Wegman, *Let the People Pick the President*, p. 132.

74. Véase Ansolabehere y Snyder, *End of Inequality*.

75. *Ibid.*, p. 70.

76. *Ibid.*, p. 32.

77. Wegman, *Let the People Pick the President*, p. 132.

78. Ansolabehere y Snyder, *End of Inequality*, pp. 80, 30-31.

79. *Ibid.*, p. 9.

80. *Ibid.*, 188. Véase Kowal y Codrington, *People's Constitution*, pp. 183-215.

81. Keyssar, *Why Do We Still Have an Electoral College?*; Wegman, *Let the People Pick the President*, p. 20.

82. Binder y Smith, *Politics or Principle?*, p. 79; Jentleson, *Kill Switch*, pp. 64-65.

83. Koger, *Filibustering*, p. 5.

84. Cheibub, Limongi y Przeworski, «Electing Presidents», p. 23.

85. Taylor *et al.*, *Different Democracy*, pp. 99-114.

86. *Ibid.*, p. 225.

87. *Ibid.*, pp. 79-80; Lutz, «Toward a Theory of Constitutional Amendment», pp. 355-370.

88. Ginsburg y Melton, «Norway's Enduring Constitution», pp. 16-17.

89. Lutz, «Toward a Theory of Constitutional Amendment», p. 369.

90. *Ibid.*

91. *Ibid.*

92. «Measures Proposed to Amend the Constitution», Senado de Estados Unidos, 2023.

93. Wegman, *Let the People Pick the President*, p. 20.

94. Keyssar, *Why Do We Still Have the Electoral College?*, p. 207.

95. Wegman, *Let the People Pick the President*, p. 129.

96. *Ibid.*, pp. 144-145.

97. Keyssar, Why Do We Still Have the Electoral College?, p. 211.

98. Wegman, Let the People Pick the President, p. 147.

99. *Ibid.*, p. 148.

100. Keyssar, *Why Do We Still Have the Electoral College?*, pp. 216-217.

101. Wegman, *Let the People Pick the President*, p. 152.

102. Keyssar, *Why Do We Still Have the Electoral College?*, pp. 214-228, 240-241; Wegman, *Let the People Pick the President*, pp. 150-152.

103. Citado en Keyssar, *Why Do We Still Have the Electoral College?*, p. 217.

104. *Ibid.*, p. 227.

105. Wegman, *Let the People Pick the President*, p. 154.

106. Keyssar, *Why Do We Still Have the Electoral College?*, pp. 246-260.

107. Citado en *ibid.*, p. 259.

108. Wegman, *Let the People Pick the President*, pp. 155-159.

109. Citado en Keyssar, *Why Do We Still Have the Electoral College?*, pp. 244-245.

110. Wegman, *Let the People Pick the President*, p. 160.

111. Keyssar, *Why Do We Still Have the Electoral College?*, pp. 267-270.

112. *Ibid.*, pp. 298-302.

113. Citado en *ibid.*, p. 307.

114. Sobre el fracaso de la ERA, véase Jane Mansbridge, *Why We Lost the ERA*, University of Chicago Press, Chicago, 1986; Julie Suk, *We the Women: The Unstoppable Mothers of the Equal Rights Amendment*, Simon & Schuster, Nueva York, 2020.

115. Mansbridge, *Why We Lost the ERA*, pp. 9-10.

116. *Ibid.*, pp. 10-12.

117. *Ibid.*

118. Mark R. Daniels, Robert Darcy y Joseph W. Westphal, «The ERA Won — at Least in the Opinion Polls», *PS*, 15, n.º 4, otoño de 1982, p. 578.

119. *Ibid.*, p. 579.

120. «Three in Four Americans Support Equal Rights Amendment, Poll Shows», *The Guardian*, 24 de febrero de 2020. Acerca del estado actual de la ERA, véase Suk, *We the Women*.

1. James Bryce, *The American Commonwealth* (1888), Macmillan, Nueva York, 1896, vol. 1, p. 1.

2. Giovanni Capoccia, *Defending Democracy: Reactions to Extremism in Interwar Europe*, Johns Hopkins University Press, Baltimore, 2005, pp. 138-178.

3. *Ibid.*, pp. 108-137.

4. Campbell Robertson, «Surprise in Pennsylvania: Republicans Back a (Former?) Democrat for Speaker», *The New York Times*, 4 de enero de 2023.

5. Morgan Trau, «Statehouse 'Coup'— Ohio GOP Bitterly Divided by Deal with Democrats to Elect House Speaker», *Ohio Capital Journal*, 9 de enero de 2023.

6. David Fortunato, *The Cycle of Coalition*, Cambridge University Press, Cambridge (R. U.), 2021.

7. Wolfgang Münchau, «Europe’s Grand Coalitions Allow Extremes to Prosper», *Financial Times*, 1 de mayo de 2016.

8. Esta estrategia (*wehrahfte Demokratie*) originalmente se traducía como «democracia militante». Véase Karl Loewenstein, «Militant Democracy and Fundamental Rights, II», *American Political Science Review*, 31, n.º 4, 1937, pp. 638-658.

9. En la Constitución alemana, juntamente con otras provisiones (art. 18), véase especialmente el art. 21 (2).

10. Jan-Werner Müller, «Militant Democracy», en *The Oxford Handbook of Comparative Constitutional Law*, Michel Rosenfeld y András Sajó (eds.), Oxford University Press, Oxford, 2012, p. 1119.

11. Tom Ginsburg, Aziz Z. Huq y David Landau, «The Law of Democratic Disqualification», *California Law Review*, 111, 2023.

12. «Large Majority of the Public Views Prosecution of Capitol Rioters as ‘Very Important’», Pew Research Center, 18 de marzo de 2021.

13. Udi Greenberg, *The Weimar Century*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2015.

14. Jane Addams, *Democracy and Social Ethics*, Macmillan, Londres, 1905, pp. 11-12.

15. Las propuestas institucionales que siguen a continuación son, a grandes rasgos, similares a las recomendaciones de otros. Véase, en particular, Page y Gilens, *Democracy in America?*, pp. 210-235; Levinson, *Our Undemocratic Constitution*, pp. 167-180.

16. Para un debate excelente en torno a esta cuestión, véase Guy-Uriel E. Charles y Luis E. Fuentes-Rohwer, *Divided by Race: Voting Rights, Political Power, and Saving American Democracy*, Cambridge University Press, Nueva York, de pronta publicación. H. R. 4959, que se introdujo en la Cámara de Representantes en 2021 (pero no fue aprobada), fue diseñada para establecer un derecho propiamente legal al voto. Véase «H. R. 4959 — 117th Congress 2021-2022: Right to Vote Act», Congreso de Estados Unidos, 2022.

17. Véase Jennifer S. Rosenberg, «Expanding Democracy: Voter Registration Around the World», con Margaret Chen, Brennan Center for Justice, 2009, p. 2.

18. Véase Charles y Fuentes-Rohwer, *Divided by Race*.

19. John Stuart Mill, *On Liberty and Other Essays*, Oxford University Press, Oxford, 1998, p. 304.

20. Véase Grant Tudor y Beau Tremitiere, «Towards Proportional Representation for the U. S. House: Amending the Uniform Congressional Districts Act», Protect Democracy, febrero de 2023.

21. Debería señalarse que los sistemas de representación proporcional a menudo derivan en la creación de más partidos, y algunos estudiosos opinan que la combinación de sistemas presidenciales y de multipartidismo puede ser desestabilizadora. Recientemente, no obstante, algunos países como Brasil, Chile, Costa Rica y Uruguay han demostrado que el presidencialismo multipartidista puede funcionar. Véase Scott Mainwaring, «Presidentialism, Multipartism, and Democracy: The Difficult Combination», *Comparative Political Studies*, 26, n.º 2, julio de 1993, pp. 198-228.

22. Lee Drutman, *Breaking the Two-Party Doom Loop: The Case for Multiparty Democracy in America*, Oxford University Press, Nueva York, 2020, p. 246.

23. Lee Drutman *et al.*, *The Case for Enlarging the House of Representatives*, Cambridge (Massachusetts), American Academy of Arts and Sciences, 2021, p. 26; véase asimismo Danielle Allen, «The House Was Supposed to Grow with Population. It Didn't. Let's Fix That», *The Washington Post*, 28 de febrero de 2023.

24. *Our Common Purpose: Reinventing American Democracy for the 21st Century*, American Academy of Arts and Sciences, Cambridge (Massachusetts), 2020.

25. En el Center for American Progress, véase «Democracy Policy», Center for American Progress, s. f. Sobre las propuestas de Protect Democracy, véase «Shaping the Democracy of Tomorrow», Protect Democracy, s. f.

26. «Presidential Commission on the Supreme Court of the United States», Casa Blanca, 2021.

27. Véase Daniel Carpenter, «Agenda Democracy», *Annual Review of Political Science*, 26, 2023.

28. Harry Kreisler, «Conversation with Sir Ralf Dahrendorf», Institute of International Studies, UC Berkeley, s. f.

29. Para un ejemplo importante de los esfuerzsos de ampliar la imaginación histórica con el cambio constitucional de Estados Unidos en mente, véase el Amend Project de Jill Lepore, financiado por el NEH.

30. Aziz Rana, «Why Americans Worship the Constitution», *Public Seminar*, 11 de octubre de 2021; Aziz Rana, *The Constitutional Bind: Why a Broken Document Rules America*, University of Chicago Press, Chicago, 2023.

31. Levinson, *Our Undemocratic Constitution*, p. 20.

32. John G. Roberts, «Memorandum for Fred F. Fielding», Casa Blanca, 3 de octubre de 1983.

33. Douglass C. North, *Institutions, Institutional Change, and Economic Performance*, Cambridge University Press, Nueva York, 1990; Paul Pierson y Eric Schickler, «Polarization and the Fragility of the American Democratic Order» (manuscrito inédito, 2023).

34. George Washington a Bushrod Washington, 10 de noviembre de 1787.

35. Citado en Elkins, Ginsburg y Melton, *Endurance of National Constitutions*, p. 1.

36. Citado en *ibid.*, p. 16.

37. Yascha Mounk y Roberto Stefan Foa, «This Is How Democracy Dies», *Atlantic*, 29 de enero, 2020.

38. Katherine Schaeffer, «On July Fourth, How Americans See Their Country and Their Democracy», Pew Research Center, 30 de junio de 2022. Véase Kowal y Codrington, *People's Constitution*.

39. Christine A. Lunardini y Thomas J. Knock, «Woodrow Wilson and Woman Suffrage: A New Look», *Political Science Quarterly*, 95, n.º 4, 1980, pp. 655-671.

40. Schickler, *Racial Realignment*.

41. *Ibid.*, p. 59.

42. Harvard Sitkoff, *A New Deal for Blacks: The Emergence of Civil Rights as a National Issue*, 1978, Oxford University Press, Nueva York, 2009, p. 187, citado en Schickler, *Racial Realignment*, p. 59.

43. Otra explicación que hace hincapié en la importancia de los movimientos sociales para los cambios constitucionales es Page y Gilens, *Democracy in America?*, pp. 239-263.

44. Thomas J. Sugrue, *Sweet Land of Liberty: The Forgotten Struggle for Civil Rights in the North*, Random House, Nueva York, 2008.

45. Lunardini y Knock, «Woodrow Wilson and Woman Suffrage», p. 660.

46. Véase Dawn Langan Teele, *Forging the Franchise: The Political Origins of the Women's Vote*, Princeton University Press, Princeton (Nueva Jersey), 2018, pp. 100-101. Para la cita al completo, véase Carrie Chapman Catt y Nettie Rogers Shuler, *Woman Suffrage and Politics: The Inner Story of the Suffrage Movement*, Scribner's Sons, Nueva York, 1923, p. 3.

47. Catt y Shuler, *Woman Suffrage and Politics*, pp. 107-108.

48. Para un contexto más amplio, véase Corrine M. McConnaughy, *The Woman Suffrage Movement in America: A Reassessment*, Cambridge University Press, Cambridge (R. U.), 2013, pp. 170-171.

49. Lisa Tetrault, *The Myth of Seneca Falls: Memory and the Women's Suffrage Movement, 1848-1898*, University of North Carolina Press, Chapel Hill, 2014, p. 16.

50. *Ibid.*

51. Movimiento reformista procedente de ambientes adinerados que pretendía reducir la brecha existente entre ricos y pobres mediante la construcción de hogares (*settlements*) en barrios pobres. Estos serían atendidos por voluntarios. A la vez que se intentaba erradicar la pobreza, se quería compartir cultura y saberes entre miembros de diferentes clases sociales.

52. Suzanne M. Marilley, *Woman Suffrage and the Origins of Liberal Feminism in the United States, 1820-1920*, Harvard University Press, Cambridge (Massachusetts), 2013, pp. 188-189.

53. JoEllen Lind, «Dominance and Democracy: The Legacy of Woman Suffrage for the Voting Right», *U. C .L. A. Women's Law Journal*, 5, 1994, pp. 188-189.

54. Teele, *Forging the Franchise*, pp. 102-103; datos de Lee Ann Banaszak, *Why Movements Succeed or Fail: Opportunity, Culture, and the Struggle for Woman Suffrage*, Princeton University Press, 1996, Princeton (Nueva Jersey), p. 45.

55. Marilley, *Woman Suffrage and the Origins of Liberal Feminism in the United States*, p. 189.

56. Véase Kowal y Codrington, *People's Constitution*, pp. 135-140.

57. Herman Vandenburg Ames, *The Proposed Amendments to the Constitution of the United States During the First Century of Its History*, U. S. Government Printing Office, Washington, D. C., 1897, p. 2:61.

58. Kowal y Codrington, *People’s Constitution*, p. 137.

59. James Landers, *The Improbable First Century of "Cosmopolitan" Magazine,* University of Missouri Press, Columbia, 2010, pp. 131-146; Kowal y Codrington, *People's Constitution*, pp. 135-136.

60. Kowal y Codrington, *People's Constitution*, p. 137.

61. «Landmark Legislation: The Seventeenth Amendment to the Constitution», Senado de Estados Unidos, s. f.

62. Larry Buchanan, Quoctrung Bui y Jugal K. Patel, «Black Lives Matter May Be the Largest Movement in U. S. History», *The New York Times*, 3 de julio de 2020.

63. *Ibid.*

64. *Ibid.*; Lara Putnam, Jeremy Pressman y Erica Chenoweth, «Black Lives Matter Beyond America's Big Cities», *The Washington Post*, 8 de julio de 2020.

65. Lara Putnam, Jeremy Pressman y Erica Chenoweth, «Black Lives Matter Beyond America’s Big Cities».

66. Christopher Sebastian Parker, «An American Paradox: Progress or Regress? BLM, Race, and Black Politics», *Perspectives on Politics*, 20, n.º 4, diciembre de 2022, p. 1167.

67. *Ibid.*

68. Scott Clement y Dan Balz, «Big Majorities Support Protests over Floyd Killing and Say Police Need to Change, Poll Finds», *The Washington Post*, 9 de junio de 2020.

69. Juliana Menasce Horowitz, «Support for Black Lives Matter Declined After George Floyd Protests, but Has Remained Unchanged Since», Pew Research Center, 27 de septiembre de 2021.

70. David S. Meyer y Sidney Tarrow (eds.), *The Resistance: The Dawn of the Anti-Trump Opposition Movement*, Oxford University Press, Nueva York, 2018; Skocpol y Tervo, *Upending American Politics*.

71. Entre ellas se incluyen: Center for Secure and Modern Elections, American Oversight, Institute for Constitutional Advocacy and Protection, Voting Rights Lab, Protect Democracy, Unite America, Renew Democracy Initiative, Democracy Forward, States United Democracy Center, Keep Our Republic, Election Reformers Network, Democracy Docket, We the Action, Stand Up Republic y Stand Up America.

72. «Our Democracy Is in Danger», Protect Democracy, s. f.

73. Ian Bassin (director ejecutivo de Protect Democracy), entrevista con los autores, 3 de enero de 2023.

74. Leah Asmelash, «Why This Bus Tours the South to Get Disenfranchised Voters to the Polls», CNN, 2 de noviembre de 2020.

75. Andrea González-Ramírez, «LaTosha Brown Is Only Getting Started», Medium, 4 de diciembre de 2020.

76. Asmelash, «Why This Bus Tours the South to Get Disenfranchised Voters to the Polls».

77. Epstein, «LaTosha Brown Says a New South Is Rising».

78. «Harvard Youth Poll», Harvard Kennedy School Institute of Politics, 27 de octubre de 2022.

79. Horowitz, «Support for Black Lives Matter Declined After George Floyd Protests, but Has Remained Unchanged Since».

80. «Shifting Public Views on Legal Immigration into the U. S.», Pew Research Center, 28 de junio de 2018; Horowitz, «Americans See Advantages and Challenges in Country's Growing Racial and Ethnic Diversity».

81. Jen McAndrew y Robin Smyton, «Half of Young People Voted in 2020, Major Increase from 2016», *Tufts Now*, 29 de abril de 2021.

82. Ryan Sit, «More Than 2 Million in 90 Percent of Voting Districts Joined March for Our Lives Protests», *Newsweek*, 26 de marzo de 2018.

83. John Della Volpe, *Fight: How Gen Z Is Channeling Their Fear and Passion to Save America*, St. Martin's Press, Nueva York, 2021.

84. «Learn More About Us», Voters of Tomorrow, s. f.

85. Kayla Steinberg, «Prom at the Polls Encourages Younger Voters to Dress Up and Show Up», *Pittsburgh Jewish Chronicle*, 3 de noviembre de 2020.

86. Sharlee Mullins Glenn, «Why I Became an Activist Against Fear», *The New York Times*, 19 de febrero de 2020.

87. *Ibid.*

88. *Ibid.*

89. Jenna Alton, «Mormon Women Worldwide Lobby for Ethical Government», *Daily Universe*, 17 de abril de 2018.

90. Audrey Dutton, «They're Women. They're LDS. And They're Speaking Their Minds on Politics», *Idaho Press*, 2 de octubre de 2022; Bryan Schott, «State Lawyers Ask Utah Supreme Court to Step in After Judge Declines to Dismiss Gerrymandering Lawsuit», *Salt Lake Tribune*, 26 de noviembre de 2022; Wendy Dennehy y Erin Young, «Is the Filibuster the Best Tool to Protect Against Extremes? No. Do These Things Instead», *Salt Lake Tribune*, 8 de noviembre de 2021.

91. Dutton, «They’re Women».

92. Glenn, «Why I Became an Activist Against Fear».

93. Dutton, «They’re Women».

94. Der Bundespräsident, «75th Anniversary of the End of the 2nd World War», 8 de mayo de 2020.

95. Los «bonos de guerra» eran recursos financieros que los estados empleaban para financiar operaciones militares durante tiempos de guerra. Por otra parte, los «jardines de victoria» eran huertos que, por iniciativa individual, plantaban los ciudadanos en sus residencias privadas para abastecer con alimentos a la población en tiempos de la Primera y la Segunda Guerra Mundial.

96. James Russell Lowell, *Literary and Political Addresses*, Houghton, Mifflin and Company, Boston, 1890, p. 207.

La dictadura de la minoría.
Cómo revertir la deriva autoritaria y forjar una democracia para todos
Steven Levitsky, Daniel Ziblatt

Título original: *Tyranny of the Minority: Why American Democracy Reached the Breaking Point*

Av. Diagonal, 662-664, 08034 Barcelona (España)
www.ariel.es
www.planetadelibros.com

Primera edición en libro electrónico (epub): mayo de 2024

ISBN: 978-84-344-3780-7 (epub)

Conversión a libro electrónico: Realización Planeta



La encrucijada mundial

Baños, Pedro

9788434435520

608 Páginas

Si en sus anteriores libros Pedro Baños ofrecía un lúcido análisis de las relaciones de poder, esta nueva obra no solo describe con detalle las excepcionales circunstancias que se están dando en el presente y las que padeceremos en el futuro inmediato en nuestro mundo hiperconectado, sino que va mucho más allá y propone soluciones que sirvan a todas las personas, en cualquier país, convirtiéndose en un manual práctico imprescindible.

Las fórmulas del siglo pasado ya no son válidas. Hemos entrado de lleno en la era digital, una verdadera revolución industrial, económica y social cuyos efectos apenas empezamos a vislumbrar. Un mundo regido por la inteligencia artificial, con ordenadores cuánticos, sorprendentes avances en biotecnología y neurociencia, y en el que hasta los objetos más cotidianos estarán conectados a internet.

Habrá empleos novedosos, pero insuficientes. La población, cada vez más envejecida, ocupará ciudades abarrotadas en las que la soledad será la norma. Todo ello aderezado con una sociedad cada vez más polarizada, mientras sufrimos las consecuencias de un calentamiento global que parece imparable. Sin olvidar los movimientos migratorios masivos. Se recrudecerá la lucha entre las grandes potencias por controlar esta nueva realidad y los escasos recursos naturales. Por tanto, hay que trazar estrategias imaginativas y eficientes que satisfagan las necesidades y aspiraciones de las poblaciones, y especialmente de la juventud.

He aquí el enorme reto de este libro. El tiempo apremia, los problemas son urgentes y la incertidumbre máxima. El mañana ya está aquí, y el manual para superar la encrucijada mundial lo tienes en tus manos.



El amanecer de todo

Graeber, David

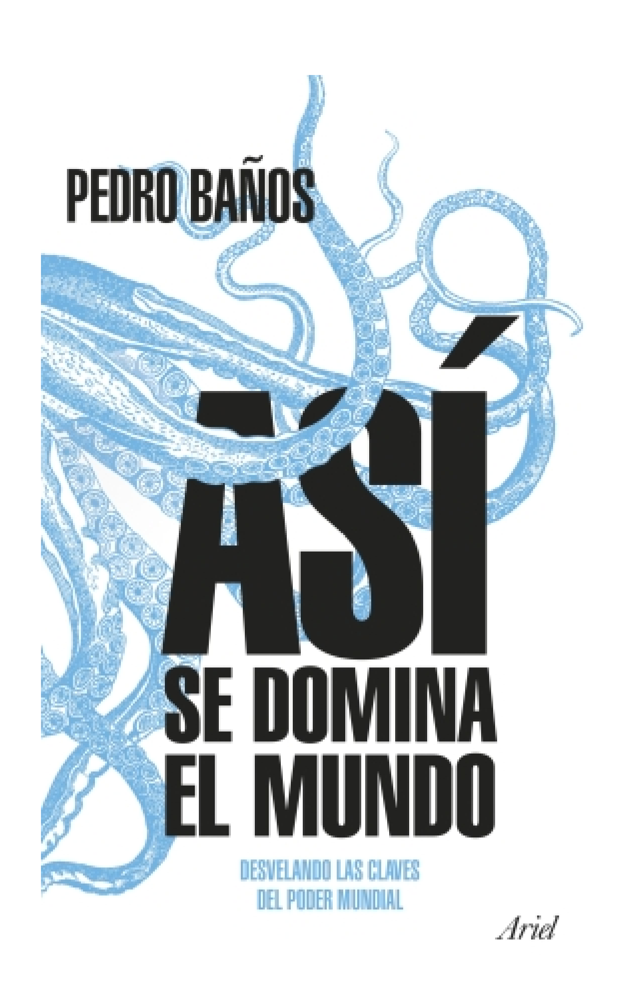
9788434435803

848 Páginas

Durante generaciones hemos visto a nuestros antepasados más remotos como seres primitivos, ingenuos y violentos. Se nos ha dicho que solo era posible alcanzar la civilización sacrificando libertades o domesticando nuestros instintos. En este ensayo, los reconocidos antropólogos David Graeber y David Wengrow demuestran que estas concepciones, que surgieron en el siglo xviii, fueron una reacción conservadora de la sociedad europea ante las críticas de los intelectuales indígenas y que no tienen un aval antropológico y arqueológico.

En el rastreo de esta falsa línea de pensamiento, este libro defiende que las comunidades de la prehistoria eran mucho más cambiantes de lo que se ha pensado; un planteamiento que desarticula los relatos fundacionales más arraigados, desde el desarrollo de las ciudades hasta los orígenes del Estado, la desigualdad o la democracia.

El amanecer de todo es una nueva historia de la humanidad, un texto combativo que transforma nuestra comprensión del pasado y abre camino para imaginar nuevas formas de organización social. Una obra monumental que cuestiona las ideas de pensadores como Jared Diamond, Francis Fukuyama y Yuval Noah Harari. Porque la suposición de que las sociedades se vuelven menos igualitarias y libres a medida que se hacen más complejas y «civilizadas» no es más que un mito.



Así se domina el mundo

Baños, Pedro

9788434427204
472 Páginas

Alianzas, manipulación, rivalidad, guerra psicológica… Mejor



Historia universal de las soluciones

Marina, José Antonio

9788434437609
336 Páginas

¿Cómo funciona la inteligencia humana cuando surge un problema? Un libro que nos descubre una metodología para la resolución de problemas.

La primera parte es una teoría de la inteligencia resuelta, es decir, de la que solventa los problemas y avanza con un dictamen. La ausencia de soluciones conduce a la «angustia» o a la «desesperanza». Esta teoría es una doctrina de la inteligencia optimista que permite elaborar una metodología para el tratamiento de los problemas, una heurística. Una parte de la psicología positiva piensa que el remedio para las situaciones difíciles es cambiar el estado emocional. Para la Teoría de la inteligencia resuelta la salida es solucionar propiamente el conflicto.

La segunda parte trata de la historia de las soluciones. Es, en realidad, una historia de las culturas, porque esta no es más que un conjunto de soluciones —buenas, malas y garrafales— a los problemas universales. Esto nos permite compararlas y elegir las mejores soluciones.

El crimen siempre nos ha generado una gran fascinación, tal vez porque nos cuesta comprender cómo el ser humano puede ser capaz de atravesar según qué límites. La palabra «asesinato» arroja en Google más de 36 millones de resultados, y «asesino en serie» supera los 3 millones. La criminología está más vigente que nunca tanto por el impacto del cine, las series de televisión y las novelas como por los crímenes reales que nos impactan casi a diario.
En este apasionante libro, la autora —criminóloga, abogada y gran comunicadora— nos invita a adentrarnos en el desconocido mundo de la criminología, la ciencia forense y la psicología criminal. ¿Cuáles son los métodos que siguen los profesionales de la investigación criminal? ¿Cómo se elabora un perfil criminológico completo? ¿Qué relación existe entre la biología y la conducta criminal? ¿Cuáles han sido los asesinos en serie que conforman la particular historia negra de España? ¿Qué lleva a algunas mujeres a enamorarse de los peores criminales? Y por encima de todas estas preguntas, tal vez la más importante y la que desconcierta, asusta y a la vez atrae a todos los amantes de la criminología: ¿por qué el ser humano mata?